

Debate y perspectivas

Cuadernos de Historia y Ciencias Sociales

Su «único derecho»: los esclavos y la ley

Coordinado por Alejandro de la Fuente



FUNDACION MAPFRE TAVERA

La Fundación MAPFRE TAVERA tiene como objetivo contribuir a la consolidación de la Comunidad Cultural Iberoamericana mediante el conocimiento de su memoria histórica, para lo que desarrolla un conjunto de actividades orientadas, principalmente, a la preservación y difusión del patrimonio documental y bibliográfico de los países iberoamericanos.

La Fundación MAPFRE TAVERA es una de las seis fundaciones que promueve el Sistema MAPFRE para el desarrollo de actividades de interés general en distintas áreas profesionales y culturales.

Debate y Perspectivas. Cuadernos de Historia y Ciencias Sociales

EDITA Y DIRIGE: Fundación MAPFRE TAVERA

COORDINACIÓN GENERAL: Luis Miguel García Mora

CONSEJO EDITORIAL: José Andrés-Gallego, Anunciada Colón de Carvajal, Ignacio González Casasnovas, Sylvia L. Hilton y Daniel Restrepo Manrique

REDACCIÓN: Fundación MAPFRE TAVERA

C/ Claudio Coello, 123 – 4º

28006 Madrid. España

Tel.: 34 915 815 130 / 915 819 596

Fax: 34 915 811 932

E-mail: debateperspectivas@tavera.com

Web: www.tavera.com

© Fundación MAPFRE TAVERA

ISSN: XXXXXXXX

Depósito Legal: XXXXXXXX

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa.

PORTADA: XX

Debate y Perspectivas. Cuadernos de Historia y Ciencias Sociales no comparte necesariamente las opiniones ni los contenidos firmados que el lector pueda encontrar en sus páginas.

Distribución y pedidos: Digibis, S.L.

Tel.: 34 915 812 001

Fax: 34 915 814 736

E-mail: digibis@digibis.com

Diseño editorial e impresión: Cyan, Proyectos y Producciones Editoriales, S.A.

C/ Fuencarral, 70 - 2º

28004 Madrid. España

Tel.: 91 532 05 04

Índice

| | |
|--|----|
| Presentación | x |
| • Su «único derecho»: los esclavos y la ley, <i>Alejandro de la Fuente</i> | x |
| • <i>Demandes de libertat</i> : demandas de esclavos en el medievo tardío valenciano, <i>Debra Blumenthal</i> | xx |
| • La esclavitud, la ley, y la reclamación de derechos en Cuba: Repensando el debate de Tannenbaum, <i>Alejandro de la Fuente</i> | xx |
| • Raza, esclavitud y libertad en Santo Domingo, <i>Richard Lee Turits</i> | xx |
| • La manumisión, el género y la ley en el Brasil del siglo XIX: el proceso legal de Liberata por su libertad, <i>Keila Grinberg</i> | xx |
| • Cimarronaje y represión esclavista. Cuba, 1800-1880, <i>Gabino La Rosa Corzo</i> | xx |
| • Notarios y esclavos en Cuba (siglo XIX), <i>Michael Zeuske; Orlando García Martínez</i> | xx |
| • Derechos y honra públicos: Louis Martinet, <i>Plessy contra Ferguson</i> y el acceso a la ley en Luisiana, 1888-1917, <i>Rebecca J. Scot</i> | xx |
| Epílogo. La esclavitud y la ley: algunas perspectivas y líneas de investigación. | |
| Debate y perspectivas, <i>Alejandro de la Fuente</i> | xx |
| Bibliografía | xx |
| Resúmenes | xx |
| Abstracts | xx |
| Presentación de los autores | xx |

Presentación

F^{alta}

Su «único derecho»: los esclavos y la ley

ALEJANDRO DE LA FUENTE*

En la noche del 15 de julio de 1846 ocho esclavos abandonaron el ingenio San Miguel y se encaminaron hacia el pueblo de Corral Falso en el partido de Macurijes, al este de la Habana. Una vez en el pueblo, los esclavos se dirigieron a la sede del tribunal local y «se presentaron reunidos» ante el capitán juez pedáneo local, don Javier de Echagüe, quien se hallaba en la capitanía en compañía de otros vecinos del lugar. El juez describió a los esclavos como un «pardo» José Feliciano criollo, y siete «morenos» todos africanos: José Rosario y Mariano, lucumí, Severino, Gabino y Matías, carabalí, y Alejandro y Diego, mina. Los esclavos se habían presentado «anunciándose en queja contra la administración» del

ingenio. Alegaban que «les tenían privados de los alimentos necesarios para mantenerse con vigor», que eran sometidos a «un trabajo enteramente excesivo», con «apenas un rato de reposo durante todo el día», que no les daban ropa adecuada y que no se les permitía ir a la enfermería en caso de necesidad¹.

Echagüe dispuso inmediatamente «levantar auto» en presencia de testigos «para proceder a averiguar lo cierto de estos relatos» e informar a las autoridades superiores «en referencia a lo ordenado en el reglamento de esclavos». Acto seguido mandó que los esclavos permanecieran esa noche bajo custodia en el cuartel para interrogarlos al día siguiente «con arreglo al auto de proceder».

* Los trabajos contenidos en este volumen fueron presentados en el taller «Slavery, Emancipation, Claims-Making, and the Law» realizado en la Universidad de Pittsburgh el 25 y el 26 de abril del 2003. Agradecemos el apoyo financiero y logístico ofrecido por el Centro de Estudios Latinoamericanos (CLAS) de la Universidad de Pittsburgh. Gracias especiales a Colleen McCafferty por su dedicación y apoyo. El taller fue financiado además por el Centro de Estudios Internacionales (UCIS) y el decano de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Pittsburgh, así como por el Social Science Research Council. Nuestros trabajos se beneficiaron considerablemente por los comentarios y sugerencias realizados por otros colegas que participaron en el taller: Carlos Aguirre, George Reid Andrews, Jerome Branche, Sharika Crawford, María E. Díaz, Gabrielle Gottlieb, Sherri Ann Harper, Martha S. Jones, Kristin Jonson, Sue Peabody, Lara Putnam, Hannah Rosen, Tamara Walker y Robert Whitney. Muchas gracias a Esther Pérez por su excelente traducción de los trabajos de Blumenthal, de la Fuente, Grinberg, Turits y Scott. Finalmente, muchas gracias a nuestro colega y amigo Luis M. García Mora por su apoyo a nuestra labor y por haber hecho este volumen posible. La introducción y las conclusiones fueron leídas y mejoradas por varios de los autores que participan en el volumen. Agradecemos también los comentarios de Jean Hebrard.

1. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Gobierno Superior Civil, leg. 944/33303: «Secretaría del Gobierno Superior Civil. Expediente sobre haberse presentado al Capitán de Macurijes ocho negros del ingenio San Miguel, 1846».

Sin embargo, el interrogatorio no se produjo. A la mañana siguiente, al revisar las regulaciones del reglamento de esclavos, el juez Echagüe encontró una circular expedida por el capitán general Jerónimo Valdés el 14 de noviembre de 1842 por la cual se prohibía a las justicias locales «introducirse en las fincas de campo ni en el manejo doméstico de la esclavitud ni en género alguno de pesquisa directa o indirecta». La circular ordenaba a los pedáneos que se limitaran a comunicar a las autoridades superiores cualquier infracción del reglamento de esclavos que detectaran en su jurisdicción. En consecuencia, el juez Echagüe «suspendió» el proceso y dio traslado del mismo al teniente gobernador de Cárdenas. Ese mismo día devolvió «con las amonestaciones del caso» los esclavos al administrador del ingenio, quien desmintió «todo lo supuesto por los dichos esclavos».

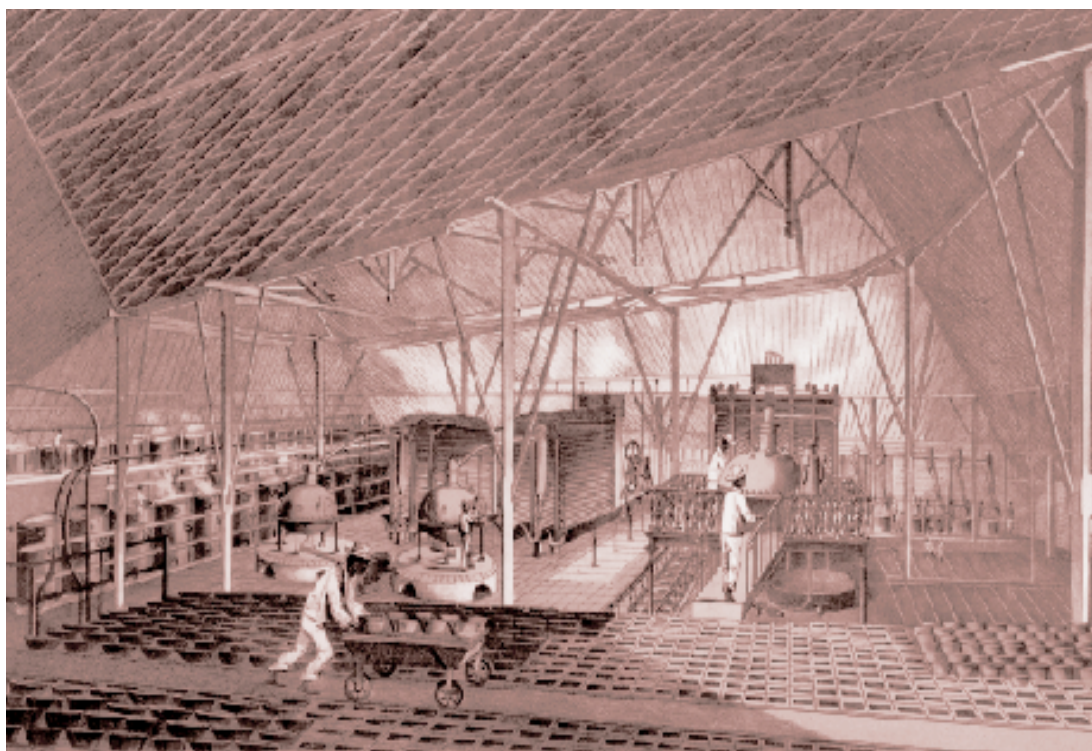
Pero el caso no concluyó ahí, pues el teniente gobernador de Cárdenas remitió las pesquisas iniciales del juez pedáneo de Macurijes al gobierno central en La Habana. Unos días más tarde, el alcalde mayor de La Habana devolvió el auto con su dictamen, ordenando al teniente gobernador de Cárdenas que procurase averiguar «por medios prudentes [...] sin formar [...] diligencia judicial [...] lo que haya de verdad en la materia». De esta forma el alcalde habanero ratificó la observancia de la circular de Valdés, pero al mismo tiempo autorizó cierta intervención oficial en el asunto para evitar «la continuación de los excesos y abusos que se han denunciado».

En cumplimiento de esta instrucción, el 24 de agosto de 1846 el teniente de gobernador de Cárdenas se presentó en el ingenio San Miguel acompañado por el capitán juez pedáneo, por el subdelegado de medicina y cirugía en el partido de Macurijes, y por dos

testigos, vecinos de fincas colindantes. La comitiva llegó al ingenio a las dos y media, demasiado tarde para presenciar la distribución del rancho entre los esclavos. «Me fue forzoso valerme de los que suplían y como estaba en mi idea evitar todo paso que impusiera a la negrada del motivo que allí me había llevado, evité cuanto me fue posible valerme de ella para penetrar o descubrir las verdades que se deseaban», explicó más tarde el funcionario. Pronto comprobó que las quejas de los esclavos no eran infundadas. En el detallado informe remitido al Gobernador, describió las condiciones de vida en el ingenio en estos términos:

«... Pasé al lugar que se denomina enfermería. Aquí, Señor Exmo. casi se niega la pluma a trazar el cuadro tan triste como inhumano que ante mi vista se presentó: apenas es creíble que un país donde se practica la religión cristiana exista tal exceso de crueldad y haya hombres capaces de cometerlos...

La pieza destinada para la curación de enfermos es un bohío de paja compuesto de una pequeña sala, que será de siete varas de largo y cinco de ancho y tres muy chicos cuartos que más merecerían el nombre de calabozos o de sepulcros donde en vida se entierran seres humanos. Todos los pavimentos son de tierra pisada [...] En medio de la primera pieza [...] trece o catorce negros que se decían enfermos [...] acostados en un pequeño entarimado desigual, movable y tan corto que apenas da lugar para un hombre de regular estatura; en el segundo de los cuartos [...] se encontraban las hembras que para el descanso tenían otro semejante entarimado y en el tercero una recién parida en estado de gravedad según la calificación del facultativo. Su lecho era una tabla de media vara de ancho poco mas o menos puesta sobre dos leños y una frazada tan puerca que ya no se podía adivinar su primitivo color y dos o tres pedazos de trapos en el mismo estado era todo lo que había para cubrir su cuerpo quizás ya invadido con el frío de la muerte. Presente el facultativo inquirí el alimento que se le daba a la enfermería y resultó ser galleta o tasajo o bacalao no obstante que la mayor parte de aquellos eran de úlceras, gonorreas y enfermedades



Ingenio La Ponina. Justo G. Cantero, Los ingenios (1857).

para las cuales según la opinión del médico subdelegado era lo peor que podría suministrárseles. A la de gravedad se me dijo que le daban caldo, lo que pedí para ver el que estaban preparando y no lo había cosa que me comprobó que no era cierto...

Después de esto hice que se abrieran las despensas para venir en conocimiento de lo que en ellas se guardaba [...] y pareciéndome conveniente recordar a V. E. [...] la lista de trescientos noventa y un negros, diré que solo hallé en ellas poco más de medio saco de arroz todo picado, dos cajas de bacalao que acababan de llegar y que abiertas se encontró estar medio podridas y tres cajas de las que se usan para embarcar azúcar llenas dos de ellas de galletas y la otra la mitad, en total corrupción, mohosas y hediondas [...] Acompañó a V. E. [...] unas muestras de esos alimentos que se suministraban a sanos y enfermos... es necesario que V.E. lo vea...»

El teniente gobernador explicó que había ordenado «que se tirara en paraje donde no

pudiera recogerse toda la galleta», ordenando al mismo tiempo al capitán del partido que, de acuerdo con el administrador y a costa del dueño de la unidad, «proveyeran a la finca de lo necesario para el mantenimiento». El funcionario dispuso asimismo que el capitán presenciara «el reparto de raciones» y que lo mantuviera informado «de cualquiera novedad».

Estas medidas, aseguraba el teniente gobernador, habían sido adoptadas solo de forma provisional, hasta que el gobernador dispusiera sobre el asunto. Y se habían ejecutado sin dar participación a los esclavos. El informe refleja claramente que las autoridades ponían gran cuidado en no cuestionar la autoridad de los dueños y administradores en presencia de los esclavos y que limitaban sus propias actuaciones ante el temor de perturbar el

orden social. El teniente gobernador lo dijo claramente:

«Mi narración y el orden de mis procedimientos convencerán a V. E. que en ello he tratado de evitar que haya motivo para que se formen imputaciones sobre que mis pasos puedan influir nunca en la subordinación de la negrada. Solo hice reunir esta para que el capitán de partido [...] me informase acerca de si estaban bien vestidos, como lo hizo diciéndome que sus esquivaciones se hallaban en regular estado, pero me abstuve de interrogar a los negros y aún de inspeccionarlos personalmente. Por el mismo pedáneo y por confesión del mismo administrador me pusieron también que a los ocho negros que ocurrieron en queja se les había dado dos boca abajo, cada uno, que dos de ellos estaban con grilletes dobles y los demás a solo un pie y respecto a este particular también creo de mi deber hacer manifiesto a V. E. que cuando esos infelices fueron devueltos a la finca se le prohibió al administrador que los castigase habiendo el pedáneo después llamado a los negros y en presencia de aquel para dejar repuesta su autoridad manifestándoles que les había servido de padrino y que por eso se les perdonaba el hecho de haber ocurrido en queja a la autoridad presentándoles como falta lo que no fue mas que el uso del único derecho que asiste al infeliz esclavo para remediar los males de un amo cruel y desmoralizado[...] Por providencia de momento y obrando siempre con la debida prudencia para mantener ignorante a la negrada de que se procedía por orden de la autoridad, previne al administrador con encargo al Pedáneo de vigilar su cumplimiento y darme cuenta que dejando solo pasar uno o dos días fuese quitando de dos en dos las dichas prisiones para que dentro de cinco o seis quedasen aquellos libres de ellas».

Este caso permite ilustrar las oportunidades que la historia legal ofrece para el estudio de las sociedades esclavistas en América Latina y para una mejor comprensión de las variadas experiencias de vida de los esclavos en la región. Al mismo tiempo, sin embargo, demuestra que un análisis basado en este tipo de fuentes presenta también dificultades y limitaciones importantes que requieren ser evaluadas cuidadosamente.

En primer lugar, el estudio de casos como el reseñado anteriormente permite algo que es muy poco frecuente en otras fuentes relativas a la esclavitud en las colonias: un acercamiento a las expresiones orales, y por lo tanto a la subjetividad, de los esclavos. La presencia y uso de los esclavos africanos y sus descendientes en las colonias generó una masa documental enorme compuesta por diarios y relatos de viaje, censos, padrones y recuentos demográficos de diverso tipo, papelería de carácter administrativo y fiscal, registros de contabilidad y libros de administración de unidades de producción. A esto hay que añadir miles de escrituras de compraventa, donación, hipoteca, permuta, manumisión y testamentos en los que los esclavos aparecían como un objeto —a veces, el objeto— de la operación. Los esclavos aparecen igualmente con frecuencia en los registros parroquiales, tanto en las antiguas colonias españolas como en Brasil.

A pesar de su diversidad, estas fuentes comparten un elemento común de gran importancia: en ellas el esclavo rara vez tiene una voz propia. No es que sea imposible capturar la individualidad y humanidad de los esclavos a partir de esos papeles. En las escrituras de compraventa, por ejemplo, los esclavos son cuidadosamente descritos a partir de variables como el sexo, la edad, el color y la procedencia o «nación». Además, aun en los casos en que eran vendidos como parte de un contingente mayor, como en el caso de dotaciones de ingenios azucareros o cafetales, los esclavos eran frecuentemente designados con un nombre, lo que facilita su identificación. En muchos casos, los dueños también hacían referencia a ciertas características personales, físicas (estatura, marcas, enfermedades) y de conducta (propensión a beber o a huir, irreverencia) que podían



Soldado y mulata. Víctor Patricio Landaluze. Museo de Bellas Artes, La Habana.

incidir en la determinación del precio final. El dueño señalaba igualmente si el esclavo era diestro en un oficio específico o tenía habilidades dignas de notar.

Estos atributos, desde el nombre hasta la descripción corporal y las referencias al color y «nación» u origen del esclavo, eran contruidos por el dueño y formaban parte de un lenguaje de dominación y poder que al decir de algunos autores contribuyó significativamente al sostenimiento de la esclavitud². Para muchos esclavos, particularmente para aquellos recién llegados del otro lado del Atlántico,

dichos atributos tenían un valor descriptivo limitado y es muy probable que algunos fueran simplemente incomprensibles³. Por ejemplo, es difícil imaginar que un esclavo describiera su propio cuerpo como «alma en boca, huesos en costal», expresión ocasionalmente utilizada por los vendedores para indicar que vendían al esclavo como estaba, sin garantizar su estado físico⁴. Y es seguro que muy pocos esclavos recién importados se sentirían aludidos cuando eran ofrecidos en el mercado como de nación cacheo o mina, denominaciones que aludían a las factorías esclavistas

-
2. Para una discusión de las relaciones entre esclavitud, lenguaje y poder, ver Steven EPSTEIN. *Speaking of slavery: color, ethnicity, and human bondage in Italy*. Ithaca: Cornell University Press, 2001.
 3. Este problema es estudiado, con gran cuidado, por James SWEET. *Recreating Africa: culture, kingship, and religion in the African-Portuguese World, 1441-1770*. Chapel Hill: UNC Press, 2003. Véase especialmente la discusión de cómo los esclavos africanos entendían el bautismo (p. 196-197).
 4. Véase la venta de los esclavos Juan, Catalina y María, todos angola, que Manuel de Abreu vende a Juan Recio en mayo de 1595. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Protocolos Notariales de La Habana, Escribanía Regueira, 1595, s/fol.

establecidas por los europeos en las costas de África desde el siglo XV. En cierta medida, estos atributos dicen más acerca de la mentalidad y aspiraciones de los amos, que de los esclavos como individuos con sus propios valores, sentimientos y objetivos.

En las fuentes generadas por procesos judiciales o administrativos como el del ingenio San Miguel, sin embargo, los esclavos no aparecen simplemente como bienes que son descritos más o menos minuciosamente para garantizar la buena fe del vendedor y la calidad de su mercancía. Los registros judiciales se caracterizan precisamente por el hecho de que en los mismos aparecen los esclavos como actores con sus propias aspiraciones, como sujetos que tienen su propia voz. Aunque en este caso el capitán pedáneo no procedió a tomarle declaración jurada a los esclavos, dado lo establecido por la mencionada circular de 1842, lo usual era que el funcionario a cargo del proceso requiriera una explicación detallada de los hechos. Obviamente, esta era la intención inicial de Echagüe. Por ejemplo, cuando en el propio Corral Falso se presentó el esclavo Pablo, criollo, de la dotación del ingenio Ventosinos, alegando haber sido castigado excesivamente, el juez pedáneo «procedió a iniciar el correspondiente procedimiento» recibiendo «juramento [...]

conforme a derecho» del esclavo de que su declaración se ajustaría a la verdad. El juez procedió entonces a interrogar al esclavo acerca de las circunstancias del caso: ¿Cuándo había salido del ingenio? ¿Por qué había sido castigado? ¿Eran comunes los castigos «excesivos» en la finca? ¿Recibían ropa y alimento adecuados los esclavos? Las respuestas de Pablo a éstas y otras preguntas formuladas por el juez local le permitían introducir su visión de los hechos en la esfera pública, ante un funcionario del gobierno colonial, y darle una permanencia y formalidad que solo podía conferir un documento oficial escrito⁵.

En consecuencia, este tipo de fuentes permite un acercamiento a los esclavos como individuos y como actores sociales que es difícil de lograr a través de otros documentos⁶. Pero se trata, desde luego, de un acercamiento problemático. Las «voces» de los esclavos aparecen en los documentos, pero mediadas por la actividad de los escribanos y notarios que daban fe de autenticidad a lo que en realidad era solo parcialmente auténtico. Las palabras de los esclavos no eran escritas por ellos mismos, sino por los escribanos encargados de recibir y dar forma legal y escrita a sus declaraciones. En su acepción original, «declaración» significaba «exposición, comentario, *interpretación* de lo

5. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Miscelánea de Expedientes, leg. 2851/J.: «Alcaldía Mayor de Colón, Sala Segunda de Justicia de la Real Audiencia Pretorial. Criminales por sevicia al negro Pablo del ingenio Caridad, 1865».

6. La recuperación de las voces de los esclavos es una de las preocupaciones centrales de los libros de Alessandro STELLA. *Histoires d'esclaves dans la péninsule Ibérique*. Paris: Editions de L'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2000 y de Ariela GROSS. *Double character: slavery and mastery in the antebellum southern courtroom*. Princeton: Princeton University Press, 2000. Fuentes similares han sido utilizadas con éxito para el estudio de otros grupos populares en América Latina y en especial en los estudios de género. Ver Steve STERN. *The secret history of gender: women, men, and power in late colonial Mexico*. Chapel Hill: UNC Press, 1995; Sueann CAULFIELD. *In defense of honor: sexual morality, modernity, and nation in early twentieth-century Brazil*. Durham: Duke University Press, 2000; Lara PUTNAM. *The company they kept: migrants and the politics of gender in Caribbean Costa Rica, 1870-1960*. Chapel Hill: UNC Press, 2002; Ann TWINAM. *Public lives, private secrets: gender, honor, sexuality, and illegitimacy in colonial Spanish America*. Stanford: Stanford University Press, 1999. Para una discusión acerca de las dificultades que implica recuperar la voz y la subjetividad de los llamados sujetos subalternos, ver Stephan PALMIÉ. *Wizards and scientists: explorations in Afro-Cuban modernity and tradition*. Durham: Duke University Press, 2002.



Soy humano y nada humano me es ajeno, grabado de Louis Masquelier en J.H. Bernadin de Saint-Pierre, *Voyage à l'Isle de France*, (1773).

que está oscuro o dificultoso de comprender⁷. El papel de los escribanos, procuradores y otros intermediarios legales no era transcribir literalmente lo que escuchaban de boca de los esclavos, muchos de los cuales habían nacido incluso en tierras africanas y aprendido el castellano ya de adultos, sino desentrañar lo que de otra forma sería difícil de comprender y expresarlo utilizando el lenguaje

jurídico de la época. No es de sorprender, pues, que el estudio de las complejas relaciones entre el lenguaje hablado y la escritura se haya convertido en uno de los temas de interés de la nueva historiografía legal de la esclavitud⁸.

El caso de los esclavos del ingenio San Miguel muestra no solo las virtudes y problemas de las fuentes legales para el estudio de la esclavitud, sino las complejas y ambiguas relaciones que se creaban entre los esclavos, dueños, administradores y funcionarios públicos cuando interactuaban con la ley. El primer paso en esta interacción era la decisión, por parte de un esclavo o un grupo de esclavos, de dirigirse a las autoridades para solicitar su intervención. Se trata de un proceso plagado de silencios, anterior al contacto entre el esclavo y las autoridades judiciales y que no aparece reflejado en las fuentes escritas. Es posible imaginar, sin embargo, que varios factores intervenían en la toma de decisión. Los esclavos tenían que calcular, ante todo, si su gestión podía tener alguna esperanza de éxito. En esto influirían sus percepciones sobre los jueces locales, sobre la disposición de los mismos a impartir justicia a los esclavos y sobre la posibilidad real de abandonar el ingenio o cualquier otro puesto de trabajo y de «presentarse» ante la autoridad antes de ser capturados. La decisión estaría mediada, además, por las nociones que los esclavos tuvieran acerca de la «justicia» —es decir, de los derechos y obligaciones recíprocos que tenían en sus relaciones con los dueños— y del papel de los

7. Diccionario de la lengua castellana. Madrid: Imprenta de la Real Academia Española, 1732. El subrayado es mío.

8. Ver en especial los trabajos de Rebecca Scout, Michael Zeuske y Orlando García Martínez en este volumen. Ver también Rebecca J. SCOTT; Michael ZEUSKE. «Property in Writing, Property on the Ground: Pigs, Horses, Land and Citizenship in the Aftermath of Slavery, Cuba, 1870-1909». *Comparative Studies in Society and History* (London). 44/4 (2002), p. 669-699. Sobre el contacto de los esclavos africanos con la escritura, ver James SWEET. *Recreating Africa...* [3], p. 186.

funcionarios y órganos estatales encargados de dispensarla. Aunque en teoría el vínculo amo-esclavo era de subordinación total, sin la mediación de prestaciones y obligaciones recíprocas, en la práctica los roles de los esclavos y sus dueños estaban socialmente justificados y condicionados por una serie de expectativas y principios acerca de sus deberes y funciones. Del esclavo se esperaba obediencia y sumisión, pero el amo debía cubrir sus necesidades mínimas en términos de alimento y vestido, o permitirle al menos que las cubriera por su cuenta. Algunos esclavos podían utilizar el incumplimiento de esos «deberes» para crear un derecho al invocar la protección e intervención de las autoridades judiciales.

Esto es lo que intentaron hacer los ocho esclavos del ingenio San Miguel cuando se presentaron ante el juez local en la noche del 15 de julio de 1846: transformar la obligación abstracta que los amos tenían de dar una alimentación, descanso, vestido y cuidados médicos adecuados a sus esclavos en un beneficio tangible y concreto. El proceder del juez pedáneo local, por su parte, tiene implicaciones importantes. Para empezar, las transcripciones del caso en ningún momento reflejan sorpresa, asombro, o confusión por parte del juez. Por el contrario, uno tiene la impresión de que estas reclamaciones eran relativamente frecuentes, sobre todo en las ciudades, y que cuando los funcionarios judiciales respondían a las mismas lo hacían de

una manera más o menos mecánica, dándoles un curso puramente burocrático. El que un esclavo o grupo de esclavos se «presentara» ante las autoridades recabando protección y ayuda no parece haber sido, pues, algo escandaloso, sino un procedimiento situado dentro de los límites de lo socialmente aceptable. En numerosos casos, sobre todo en las ciudades, las autoridades procedían a «depositar» al esclavo en alguna institución o en manos de alguna familia conocida, para de esa forma protegerlos de las posibles represalias de sus amos mientras durara el proceso⁹.

En segundo lugar, la codificación de ciertas obligaciones y derechos en la legislación positiva puede haber sido más importante que lo generalmente aceptado. No parece casual que, en el caso citado, una de las primeras acciones del juez Echagüe, una vez comenzado el auto declarando los motivos del proceso, fuera consultar la ley sustantiva sobre la materia: «los artículos contenidos en el bando gubernativo con el objeto de acomodar a sus disposiciones mi interrogatorio en este procedimiento». La referencia es al reglamento de esclavos anexo al Bando de Gobernación del capitán general de Cuba Jerónimo Valdés, que desde su promulgación en 1842 tenía la primacía legal en materia de esclavitud en la isla.¹⁰ Tampoco parece casual, por cierto, que los esclavos reclamaran beneficios que estaban regulados explícitamente en el mencionado reglamento¹¹. Y es probable, aunque imposible de demostrar, que los esclavos tuvieran

9. Ver, por ejemplo, ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Miscelánea de Expedientes, leg. 2794/Ap.: «Criminales contra don Juan Bautista Giquell por sevicia contra su esclava Francisca Izaguirre, 1860». En otro caso, el dueño es obligado a pagar por los gastos del depósito. Véase: ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Miscelánea de Expedientes, leg. 2857/2: «Diligencias formadas por la sevicia inferida a Josefa criolla, 1837».

10. El reglamento es analizado y reproducido en Fernando ORTIZ. Los negros esclavos. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1975, p. 339-343 y p. 439-452. Ver también Franklin KNIGHT. Slave Society in Cuba during the Nineteenth Century. Madison: Wisconsin University Press, 1970, p. 126-132.

11. En efecto, el reglamento regulaba cada uno de estos aspectos: alimentación (artículos 6 y 8), descanso (artículo 12), vestido (artículo 7), y cuidados médicos (artículos 27 y 28).

noticia de dichas regulaciones y de los límites que las mismas pretendían imponer a la autoridad de los amos.

Aunque muchos autores se refieren a la legislación en materia de esclavitud como un factor con un impacto social restringido, es preferible evitar generalizaciones en este tema y estudiar cada caso concreto en detalle. Lo mismo que cualquier intento de caracterizar *la* esclavitud está destinado a sucumbir ante la enorme variabilidad de la institución, las discusiones abstractas sobre el impacto y observancia de la ley tienen un valor limitado y deben ser verificadas empíricamente¹². Parece claro que numerosos esclavos tenían conocimiento de algunos de los derechos regulados en la legislación positiva y que dicho conocimiento formaba parte del arsenal cultural que utilizaban cotidianamente en sus relaciones con los amos, con otros miembros de la sociedad y con las autoridades. Esto no quiere decir que los esclavos, aun los mejor familiarizados con la cultura dominante, conocieran al detalle la letra de la ley. Pero sí sugiere que entre los mismos circulaban ideas de justicia y nociones jurídicas que estaban vinculadas, más o menos directamente, con lo regulado en la legislación positiva. Los miles

de casos de esclavos que, solo en La Habana durante el siglo XIX, se dirigen a las autoridades en busca de apoyo y protección o reclamando derechos de diversa índole, son ejemplo de ello¹³. En consecuencia parece difícil sostener, como lo ha hecho una estudiosa de la esclavitud en Brasil, que es una cuestión de «sentido común» el asumir que apenas ningún esclavo tendría la oportunidad de aprender lo que expresaban las leyes o de familiarizarse con su contenido¹⁴.

Lo mismo que no es posible hacer generalizaciones sobre el impacto social de la ley, parece igualmente arriesgado intentar generalizar sobre el papel del estado en las relaciones amo-esclavo o asumir que dicho papel estaba reducido a proteger los intereses de los esclavistas en un sentido estrecho. Si bien es cierto que el fin último del Estado era mantener y reproducir el orden social, también lo es que a veces para lograrlo las autoridades tenían que mediar entre los esclavos y sus dueños limitando el poder de los últimos¹⁵. El caso citado es, de nuevo, ilustrativo. Por una parte, la Circular del capitán general del 14 de noviembre de 1842 limitaba claramente la jurisdicción de las autoridades judiciales en Cuba en los casos relativos al

12. Véase mi contribución en este volumen para una discusión de esta literatura.

13. Es desde luego muy difícil ofrecer precisiones cuantitativas sobre la cantidad de esclavos que se dirigieron a las autoridades para reclamar su intervención. Pero un ejemplo aislado puede dar una idea acerca de la magnitud del fenómeno. El síndico segundo de la Habana en 1861 informó que 307 esclavos se habían presentado durante el año en la sindicatura pidiendo su intervención. No es posible establecer si se trata de un número extraordinario, pero no hay indicación alguna en el expediente de que lo sea. Ver: ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Gobierno Superior Civil, leg. 954/33747: «Expediente promovido por el Sr. Don José Morales Lemus síndico segundo en el bienio de 60 y 61».

14. Manuela CARNEIRO DA CUNHA. «Silences of the law: customary law and positive law on the manumission of slaves in 19th Century Brazil». *History and Anthropology* (Chur). 1 (1985), p. 433. Agradezco a Kevin Yelvington esta referencia bibliográfica. Una posición similar es adoptada por Kátia M. de QUEIRÓS MATTOSO. *To be a slave in Brazil, 1550-1888*. New Brunswick: Rutgers University Press, 1986, p. 158.

15. Durante décadas, éste ha sido uno de los temas centrales en los debates sobre la esclavitud y la ley en América Latina. Varias de los autores de este volumen se refieren al problema. Para una discusión sobre las tensiones entre los intereses de los amos, los de los esclavistas como clase, las nociones de paternalismo y la ley ver Mark TUSHNET. «New histories of the private law of slavery». *Cardozo Law Review* (New York). 18 (noviembre 1996), 301-07. Este artículo forma parte de un debate sobre el impacto de los nuevos estudios sobre la esclavitud en la historia legal de los Estados Unidos que contiene otros de interés para los temas discutidos en este volumen.



Castigo público. Johann Moritz Rugendas. *Voyage pittoresque dans le Brésil* (1835).

«manejo doméstico de la esclavitud». El Estado colonial, sin embargo, pedía ser informado sobre cualquier «infracción» que llegara al conocimiento de las justicias locales y se reservaba el derecho a «adoptar las disposiciones oportunas» en cada caso, como también prescribía la mencionada circular. Las actuaciones del teniente gobernador de Cárdenas reflejan estas contradicciones claramente. Durante su visita al ingenio, tuvo gran cuidado (al menos eso declaró) en que la dotación no conociera el propósito de su misión, para evitar de esa forma que los esclavos sintieran que tenían el derecho a emplazar a sus dueños. Al mismo tiempo, sin embargo, la intervención del Estado en el manejo y operación del ingenio San Miguel se concreta, gráficamente, en las disposiciones

que el teniente gobernador dio respecto a la adquisición de insumos para la despensa de la finca, respecto a la alimentación de los esclavos y finalmente al castigo que habían sufrido los esclavos que iniciaron el proceso.

Desde luego el ejemplo mismo de estos ocho esclavos demuestra que ni la ley ni los funcionarios del estado eran capaces de garantizar la protección física o el bienestar de los esclavos, aun en aquellos casos en que se interesaban por su suerte. Pero tampoco esta área está exenta de ambigüedades. Por una parte, los esfuerzos de los esclavos que se atrevieron a abandonar el ingenio y denunciar su situación ante las autoridades tuvieron cierto éxito. Las autoridades coloniales conocieron de su situación. Un funcionario del gobierno vino a inspeccionar el

ingenio. El administrador fue forzado a obtener provisiones. El rancho de los esclavos posiblemente mejoró y el juez pedáneo fue instruido de vigilar la cantidad y calidad de las raciones. Pero se trata, como mucho, de un éxito parcial. Los esclavos fueron devueltos al administrador del ingenio y castigados severamente, aunque para el teniente de gobernador no habían sino ejercido el «único derecho que asiste al infeliz esclavo» cuando eran maltratados por sus dueños y a pesar, también, de que el juez pedáneo había advertido al administrador que no tomara represalias contra los esclavos cuando fueron devueltos. El propio teniente gobernador informaba a las autoridades superiores que, en caso de procederse legalmente contra el dueño y administrador del ingenio, la integridad física de los esclavos podía estar en peligro.

Éstos son algunos de los temas que abordan los trabajos incluidos en el presente volumen. A diferencia de autores anteriores, que han puesto el énfasis en la letra de la ley, en sus disposiciones y omisiones, nuestros estudios tienen como denominador común el que toman a los esclavos y sus descendientes, sus acciones, éxitos y fracasos, como el punto de partida para la historia legal de la esclavitud. Era mediante el uso de reclamaciones y la presentación de demanda antes las autoridades que los esclavos y sus descendientes ejercieron y conquistaron ciertos «derechos». La ley constituía un camino de actuación social, pero era un camino que tenía que ser transitado para tener efectos concretos.

Por ejemplo, el estudio de Debra Blumenthal sobre demandas de libertad por parte de los esclavos en Valencia durante el siglo XV analiza las prácticas jurídicas de los esclavos a partir de 87 casos tramitados en las cortes municipales y reales de Valencia

entre 1450 y 1500. Estos casos, argumenta Blumenthal, sugieren que en la época de la conquista existía en España una compleja cultura jurídica que a la vez que ofrecía oportunidades para que esclavos emprendedores pudieran reclamar su libertad u otros beneficios, permitía a los dueños mantener el control sobre sus esclavos bajo un aura de justicia y legalidad. En mi contribución, que analiza el caso de Cuba, señalamos que esta cultura fue trasladada a las colonias españolas. Estimamos que durante el largo periodo pre-plantacionista de la esclavitud cubana (hasta fines del siglo XVIII), los esclavos en la isla accedieron a aquellas áreas de la vida social que aparecían reguladas en el derecho histórico castellano como «derechos» de los esclavos. Entre estas áreas estaba el acceso a los sacramentos católicos del bautismo y el matrimonio, a través de los cuales los esclavos entraban a formar parte de la comunidad religiosa y establecían —usualmente mediante la selección de padrinos y testigos— vínculos familiares y sociales con individuos de los grupos sociales dominantes. Los precedentes legales castellanos continuaban siendo utilizados por los tribunales en Cuba aún durante el siglo XIX, cuando la esclavitud de plantación se había extendido por parte de la isla, afectando a la composición racial de la población y a sus relaciones sociales. Numerosos esclavos utilizaron esas leyes para reclamar derechos de diversa índole y mejorar sus vidas. Aunque es difícil exagerar el impacto que la economía azucarera de plantación tuvo sobre la esclavitud, en el caso cubano la esclavitud de plantación tuvo que ser impuesta y en alguna medida reconciliada con las prácticas jurídicas tradicionales relativas a los esclavos.

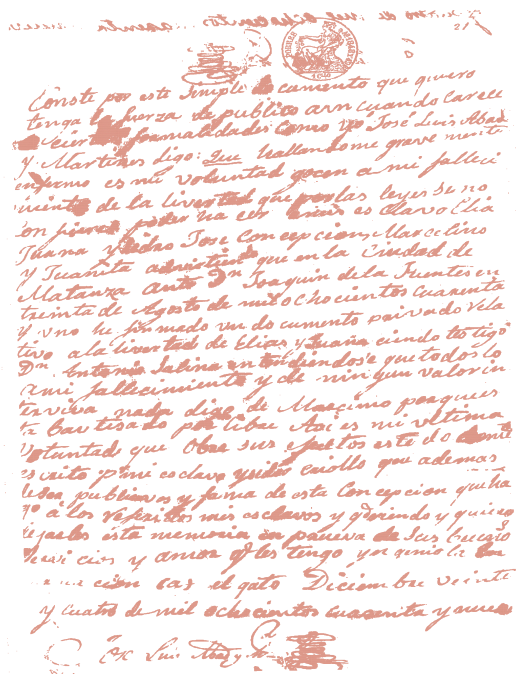
En cierta medida, algo similar ocurrió en Santo Domingo, según el estudio de Richard Turits «Raza, esclavitud y libertad en Santo

Domingo». A fines del siglo XVI, el colapso de la que fuera la primera colonia de plantación en el Caribe llevó a la creación de una sociedad predominantemente libre y de color. Durante los siglos XVII y XVIII, los esclavos crearon oportunidades para incrementar su autonomía, comprar su libertad o para simplemente escapar del control de los amos. En caso de conflicto los esclavos podían apelar a los tribunales, lo mismo que en Cuba o en Valencia. En el siglo XVIII, sin embargo, nuevos intereses impulsaron al Estado y a las elites locales a intentar la reintroducción de la economía de plantación en Santo Domingo. Turits estudia la creación del Código Negro Carolino de 1784 en este contexto, como parte de un esfuerzo por subordinar y controlar no solo a los esclavos, sino también al campesinado negro y mulato que habitaba «el monte» en la colonia. Estos esfuerzos, señala Turits, fueron en gran medida fallidos, pues la reintroducción de la economía de plantación en la isla tropezó con una población libre de color que era demasiado grande para ser excluida de la forma pretendida por los arquitectos del nuevo orden económico y social. De esta forma, la creación de un sector de población libre negra y mulata puede haber jugado un papel crucial —en el sentido de valladar— en el desarrollo de las sociedades de plantación en el Caribe hispano.

El acceso a la libertad constituye, precisamente, el tema fundamental del trabajo de Keila Grinberg sobre la manumisión en Brasil durante el siglo XIX. En este trabajo, Grinberg estudia el caso de Liberata, una esclava mulata en el sur de Brasil que concurrió a su párroco primero y al tribunal municipal después para demandar a su amo, con quien tuvo dos hijos. Grinberg coloca el estudio de este caso en un contexto más amplio, basado en el análisis de 380 procesos de reclamación

de libertad localizados por la autora en los papeles del Tribunal de Apelaciones de Rio de Janeiro entre 1808 y 1888. Lo mismo que en Valencia o Cuba, en muchos de los casos estudiados por Grinberg los esclavos apelantes tenían que movilizar redes de apoyo social para proveer la información requerida a los tribunales. Por ejemplo, aquellos que reclamaban haber sido sujetos injustamente a cautiverio tenían que fabricar una genealogía convincente con la participación de testigos, esclavos y libres.

La importancia de estas redes sociales es destacada por Rebecca Scott en su estudio sobre las reclamaciones legales de derechos públicos en Luisiana a fines del siglo XIX. Lo mismo que bajo la esclavitud, los antiguos esclavos y sus descendientes utilizaron la ley y las demandas legales para reclamar derechos que no solo estaban ligados a textos legales específicos, sino que reflejaban sus propias tradiciones e ideas sobre el honor y el reconocimiento social. Scott reexamina el tristemente famoso caso de Plessy contra Ferguson, por medio del cual el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazó la reclamación de Homère Plessy, un hombre descrito como «de color,» de poder viajar en el vagón de primera clase de un tren de Luisiana, al tiempo que declaraba legal un estatuto que ordenaba que blancos y negros viajaran en carros separados. Se trata, pues, de un caso crucial en el proceso de creación de la segregación racial en Norteamérica, un orden racial que como es notorio descansaba en un vasto andamiaje jurídico. En lugar de presentar a Plessy como un luchador visionario por los derechos civiles de los antiguos esclavos y sus descendientes, Scott analiza como esta reclamación estaba basada en una serie de costumbres, valores y redes sociales que son muy difíciles de reconstruir. Su estudio



El esclavo Isidro pide su libertad. Archivo Nacional de Cuba, Escribanías, Escribanía de Gobierno, leg. 362, nº. 17.

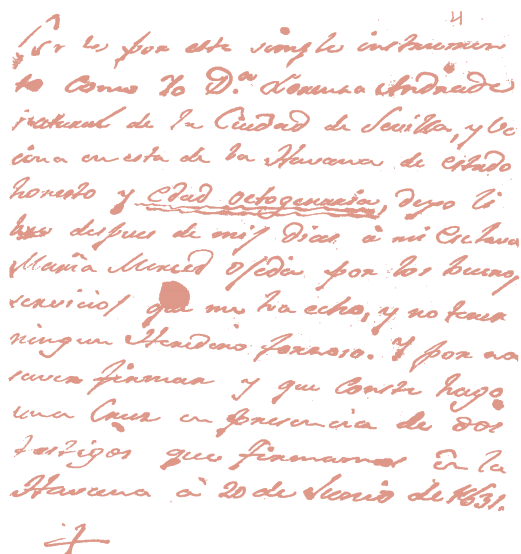
demuestra que la demanda de Plessy formaba parte de un movimiento mucho más amplio que buscaba establecer, por vías judiciales y extra-judiciales, el derecho legal de los afro-americanos a acceder a los espacios y servicios públicos en condiciones de igualdad.

Uno de los miembros más destacados y enigmáticos de las redes sociales estudiadas por Scott es Louis A. Martinet. Hijo él mismo de una mujer «de color», Martinet era un escribano o notario público cuya función era registrar o protocolizar las transacciones y reclamaciones de individuos cuyas actividades y aspiraciones pasaban de esa manera a formar

parte del dominio público. El objetivo mismo de los protocolos era conservar dichos acuerdos por escrito «para que en todo tiempo se hallen», como explicaba una definición utilizada en los siglos XVIII y XIX¹⁶. Como notario o escribano Martinet hacía las funciones de intermediario entre los individuos y el Estado, entre el orden público y el privado. Su rol era similar al de los escribanos y notarios del mundo ibérico. Como expresan Michael Zeuske y Orlando García Martínez en su trabajo, los notarios y escribanos «protocolizaban historias» y al hacerlo ayudaban a reproducir un sistema de dominación y a cubrirlo con un manto de formalidades y legalidad. La utilización repetitiva de formulas legales brindaba estabilidad al sistema y contribuía a perpetuar y recrear las diferencias sociales. Por ejemplo, Zeuske y García Martínez muestran como después de la abolición de la esclavitud en Cuba los notarios crearon sistemas de anotación que permitían identificar a los ex-esclavos sin mencionar explícitamente su origen social.

Sin embargo, la actividad de los notarios podía tener efectos liberadores. En el caso de los juicios por libertad, la existencia de una escritura debidamente protocolizada facilitaba la reclamación de los esclavos considerablemente. Los documentos privados podían ser invocados ante las autoridades judiciales, pero los mismos generaban invariablemente cuestiones de autenticidad, precisamente lo que los notarios se encargaban de suplir. Así, en 1850 siete esclavos entregaron al procurador síndico de Güines un documento firmado por su antiguo amo, el presbítero José Luis Abad y Martínez, capellán del ingenio

16. La expresión está tomada de la edición de 1737 del *Diccionario de la Lengua Castellana* de la Real Academia Española, pero la misma expresión continuaba siendo utilizada en las ediciones del siglo XIX



Por lo que este simple instrumen-
 to como lo D.^o Lorenzo Andradá
 tratant de la Ciudad de Sevilla, y be-
 cina en esta de la Habana de estado
 honrado y ~~español~~ español, deyo li-
 bre después de mis días a mi esclava
 María Merced Ojeda por los buenos
 servicios que me ha echo, y no fuese
 ningún español forzoso. Y por no
 raven fianmaa y que conste hago
 una Carta en presencia de dos
 testigos que fianmaen en la
 Habana a 20 de Junio de 1831.
 J

Carta de Libertad. Archivo Nacional de Cuba, Escribanía de Gobierno, leg. 745, nº. 4.

Encarnación, alias El Gato, en el que les confería la libertad después de su muerte. Obviamente Abad estaba consciente de las limitaciones de un documento privado: «Conste por este simple documento que quiero tenga la fuerza de público aun cuando carece de ciertas formalidades...». El documento no sólo carecía de formalidades, sino que fue escrito por uno de los esclavos beneficiados, Isidro criollo, dado que Abad se hallaba «gravemente enfermo»¹⁷.

En este caso, sin embargo, el documento privado funcionó. Los esclavos obtuvieron la libertad, pues el síndico procurador que los representó alegó que los deseos del presbítero

no eran «un negocio reservado sino público y que estaba en noticia de muchas personas que lo sabían». Es decir, el síndico pudo corroborar a través de varios testigos que lo expresado en la escritura producida por Abad por medio de uno de sus esclavos era su deseo y voluntad. Para otros esclavos, en cambio, la falta de un documento debidamente protocolizado podía representar un obstáculo insalvable. Ése fue el caso de Maria Merced Ojeda, quien reclamó su libertad en la Habana en 1832 tras el fallecimiento de su dueña, Lorenza Andrada. Ojeda presentó una nota manuscrita de su dueña, en la que claramente declaraba que «dejaba libre» a la esclava «después de mis días». Una de las razones esgrimidas contra la reclamación de la esclava se refería específicamente a la naturaleza del documento: «en atención a la poca o ninguna fuerza del documento privado e informal». Ojeda continuó siendo esclava¹⁸.

El estudio de Zeuske y García Martínez sobre el papel de los notarios y escribanos, como mediadores entre las esferas privada y pública, refuerza la tesis de que el Estado y la ley son elementos cruciales para entender y estudiar la esclavitud, particularmente en aquellas áreas, como las colonias ibéricas o Luisiana, cuyo sistema jurídico tenía raíces continentales. Desde luego la intervención del Estado no estaba dirigida principalmente a asistir a los esclavos, seguramente minoritarios, que intentaban obtener justicia en los órganos administrativos y judiciales, sino a mantener la esclavitud y a reprimir las diversas formas de resistencia y rebeldía esclava,

17. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Escribanías, Escribanía de Gobierno, leg. 362/17: «Incidente de intestado del Presbítero don José Luis Abad y Martínez promovido por el síndico de la villa de Güines, 1849».

18. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Escribanías, Escribanía de Gobierno, leg. 745/4: «El Señor Síndico Procurador General a nombre de la morena Maria de la Merced Ojeda, 1833».

como nos recuerda Gabino La Rosa Corzo en su «Cuba: resistencia esclava y represión esclavista, 1796-1868». En su estudio, La Rosa analiza el endurecimiento que sufrieron las regulaciones existentes para perseguir a los cimarrones en Cuba durante el siglo XIX, es decir, durante el periodo de florecimiento del modelo de plantación. La introducción masiva de africanos durante este periodo creó necesidades de control y policía que fueron satisfechas con la creación de nuevos instrumentos jurídicos de represión y con el probable incremento de los castigos extra-legales también. Sin embargo, La Rosa señala como aún en esta área existió cierta preocupación por observar las formas legales y por dotar al aparato represivo de un fundamento legal que garantizara su legitimidad y efectividad social.

Éste es un punto en el que todos los trabajos del volumen tienden a coincidir: en los casos estudiados el Estado y sus representantes jugaron un papel relativamente importante —quizás un papel mucho más importante que lo pensado hasta ahora— en la mediación de los conflictos entre amos y esclavos, pero al hacerlo contribuyeron a legitimar el sistema, cubriéndolo con un manto de legalidad.

Para los ocho esclavos que el 15 de julio de 1846 salieron del ingenio San Miguel para presentarse ante la justicia local, sin embargo, estas consideraciones hubieran resultado abstractas. Para ellos lo importante era que la situación en el ingenio se había vuelto tan intolerable, que era hora de hacer uso del «único derecho» que al decir del teniente gobernador de Cárdenas poseían: dirigirse a la autoridad para reclamar su propia noción de justicia.

Demandes de libertat: *demandas de esclavos en el medievo tardío valenciano*

DEBRA BLUMENTHAL

Al tiempo de la llegada de los españoles a América, la esclavitud era una institución conocida, incluso floreciente, en diversos puntos de la península Ibérica. La ciudad de Valencia era una de uno de esos puntos. Un puerto mediterráneo cercano a los territorios islámicos, en el siglo XV la ciudad contaba con una numerosa población esclava caracterizada por su diverso carácter étnico, cultural y religioso y por una población libre igualmente diversa que incluía mudéjares, cristianos y judíos¹.

La institución de la esclavitud en la ciudad y el reino de Valencia han sido estudiados por Vicenta Cortés Alonso y Vicente Graullera Sanz, pero es necesario analizar las

interacciones entre dueños y esclavos en el contexto de esta diversidad cultural, étnica y religiosa². Mientras los estudios mencionados concentran su atención en el proceso de captura e importación de esclavos, mi interés se centra en comprender lo que significaba ser un esclavo en la sociedad valenciana del cuatrocientos. Durante mi trabajo en los archivos de Valencia localicé diversas fuentes que permiten un acercamiento de este tipo. Especialmente útil ha sido un grupo de casos legales, civiles y criminales, que contienen valiosa información respecto a diversos aspectos de la vida de los esclavos y de su participación en la vida económica de la ciudad.

1. Mark D. MEYERSON. *The Muslims of Valencia in the age of Fernando and Isabel: between coexistence and crusade*. Berkeley: University of California Press, 1991; Jacqueline GUIRAL-HADZIOSSIF. *Valencia, puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1525)*. Valencia: Edicions Alfons el Magnànim, 1989; José HINOJOSA MONTALVO. «Piratas y corsarios en la Valencia de principios del siglo XV (1400-1499)». *Cuadernos de Historia* (Madrid). 5 (1975), p. 100-114; Jacqueline GUIRAL-HADZIOSSIF. «Course et piraterie à Valence de 1410 à 1430». *Anuario de Estudios Medievales* (Barcelona). X (1980), p. 759-765.
2. Vicenta CORTÉS ALONSO. *La esclavitud en Valencia durante el reinado de los Reyes Católicos (1479-1516)*. Valencia: Ayuntamiento de Valencia, 1964; Vicenta CORTÉS ALONSO. «Los pasajes de esclavos en Valencia en tiempos de Alfonso V». *Anuario de Estudios Medievales* (Barcelona). X (1980), p. 791-819; Vicenta CORTÉS ALONSO. «La conquista de las islas Canarias a través de las ventas de esclavos en Valencia». *Anuario de Estudios Atlánticos* (Madrid). 1 (1955), 479-547; Vicente GRAULLERA SANZ. *La esclavitud en Valencia en los siglos XVI y XVII*. Valencia: Instituto Valenciano de Estudios Históricos, 1978. Sobre la esclavitud en Valencia ver también P. E. H. HAIR. «Black African slaves at Valencia, 1482-1516: an onomastic inquiry». *History in Africa: a Journal of Method* (Waltham, Mass.). 7 (1980), p. 119-131; Mark D. MEYERSON. «Slavery and the social order: Mudejars and Christians in the kingdom of Valencia». *Medieval Encounters* (Nueva York). 1/1 (1995), p. 144-173; Mark D. MEYERSON. «Slavery and solidarity: Mudejars and foreign Muslim captives in the kingdom of Valencia». *Medieval Encounters* (Nueva York). 2/3 (1996), p. 286-343.



Sirviente negro, detalle de *El matrimonio de Cana*. Veronese, 1562. Museo Louvre.

De estos casos, los más interesantes son aquellos en que los esclavos aparecen como demandantes. Designados como *demandes de libertat*, en estos procesos los esclavos presentaban demandas legales por su libertad contra sus dueños. Uno de los hechos más sobresalientes de la esclavitud en Valencia es que era una institución minuciosamente regulada por diversos procedimientos legales. La violencia típica que la caracteriza aparece revestida por un lenguaje repleto de precisiones jurídicas. Y aunque la ley protegía los derechos de los dueños, algunos esclavos astutos lograban utilizar estos escrúpulos procesales y legales en beneficio propio.

Veamos un caso concreto. En un día de inicios del otoño de 1472, el comerciante valenciano Bernat Gilabert les ordenó a sus

dos esclavos —uno blanco, el otro negro— que lo acompañaran a la bodega para ayudarlo a trasegar su última vendimia de vi muntonech. Supuestamente, Nadal, el esclavo blanco, de repente hizo presa de él, lo arrojó al suelo y le propinó unos fuertes golpes. No contento con ese inaudito acto de violencia contra su amo, Nadal intentó después arrojarlo en la gran cuba de vino, lo que, argumentó Bernat, muy probablemente le habría causado la muerte, ya que, según uno de los testigos, la cuba estaba llena de vino hasta «una altura mayor que la de un hombre». Según la queja de Bernat y las declaraciones de varios testigos, de no haber acudido en su auxilio de inmediato el otro esclavo de Bernat, un negro llamado Joan, y varios testigos, Nadal habría tenido éxito en su «propósito



Los jurados de la ciudad de Valencia reciben de Fray Eiximent el *Regiment de la cosa pública*, s. XV.

deliberado» de matar a su amo ahogándolo en una cuba de vino³.

El incidente que acabamos de describir tuvo lugar sólo pocos meses después de que Bernat, en respuesta a las súplicas de «amigos y allegados», accediera en principio a concederle a Nadal su libertad. La *carta de libertat* en la que se le prometía a Nadal su manumisión había sido de naturaleza contractual, ya

que en ella Bernat concedía y Nadal «aceptaba y recibía» su libertad según ciertos términos aceptados «de mutuo acuerdo». Como la liberación de Nadal dependía de que sirviera «bien y diligentemente» a Bernat durante cinco años más⁴, éste sostenía que la rebelión de Nadal anulaba el contrato de manumisión⁵.

Lo notable de este caso, más allá de que un esclavo supuestamente intentara ahogar a su amo en una cuba de vino, es que el incidente sólo ha llegado a nosotros porque Bernat consideró necesario obtener un respaldo oficial a su derecho de mantener a Nadal en la esclavitud. No acusó de un delito a su esclavo. No le pidió al juez que lo penara con castigos corporales o con la muerte, sino que acudió al tribunal civil de la ciudad de Valencia para pedirle al juez que ratificara su derecho a venderle a Nadal a otro amo, sin duda ignorante de lo sucedido. Deseaba que el juez apoyara con su autoridad y sancionara su planteamiento de que la rebeldía de Nadal invalidaba todo derecho a la libertad que hubiera podido tener previamente.

Aceptemos o no como verdadera y fiel a los hechos la versión de Bernat de este episodio —haya pretendido realmente o no Nadal ahogar a su amo en una cuba de vino— el escrupuloso y expreso apego de

3. ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA, Justicia Civil, 924: M. 12 (bis), f. 44v-46v.

4. ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA, Justicia Civil, 924: M. 12 (bis), f. 44v-46v. «... a XXIII de juliol propassat ell haia donat libertat e franquesa a hun sclau de aquell appellat Nadal Pus de temps de cinch anys comptadors del dia de la confessie del dit contracte anant ab la condicio que aquell servis be e diligentment e sens fer frau malvestat e trahicio al dit en Bernat Gilabert ho lla hon ell volgues en axi que aquell durant lo dit temps no furtars jugars fugirs ne fahes malesa nenguna contre son senyor. E aço ha fet lo dit Bernat Gilabert per amor de deu e per prechs de alguns amichs e ben volents de aquell. E specialment a prechs dels honorable en Gracia Agramunt sucrer (cuirer) e de la muller de aquell».

5. ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA, Justicia Civil, 924: M. 12 (bis), f. 44v-46v: «...per les quals coses e altres lo dit catiu de justicia ha perdut qualsevol grat que aquell en la dita carta haia promesa al dit catiu puix aquell dit catiu no ha servat la promesa ne les condicions contengudes en la dita carta de libertat. E per ço que a vos molt magniffich justicia sia cert de les dites coses vos requer que per vos dit magniffich justicia sia reebuda sumaria informacio de les dites coses. E si a vos constara axi en veritat passar la dita rebellio feta per lo dit catiu al dit en Bernat Gilabert declarets la dita gracia feta al dit catiu de libertat a cinch anys no procehir com ab les dites condicions li haia donada la dita libertat e no sens aquella no obstant lo dit Bernat Gilabert poder vendre com a catiu la persona de aquell com axi de justicia fer se deia compliment de la qual per vos requer esser li ministrat».

Bernat al proceso legal resulta revelador para comprender cómo se establecía, se justificaba y se entendía por parte de sus contemporáneos el poder de un amo sobre su esclavo. La esclavitud en la Valencia del siglo XV era una institución regulada por un conjunto bien definido de procedimientos legales.

Analizados aisladamente, los esfuerzos de Bernat para impedir la manumisión de su esclavo pueden no parecer muy significativos. Que el sistema legal valenciano reafirmara el derecho de un amo a mantener en cautiverio a un esclavo «rebelde» no resulta demasiado sorprendente. No obstante, cuando se analiza la solicitud de Bernat junto a 87 demandas de libertad presentadas a tribunales municipales y de la Corona entre 1450 y 1500, las alegaciones de Bernat adquieren mucha mayor significación y ponen de manifiesto que, muy probablemente, lo que motivó su actuación fue algo más que un estricto apego a la ley. Las acciones parecieran ser de naturaleza más defensiva y reflejarían la preocupación de un amo de que su esclavo pudiera impugnar su derecho a mantenerlo sometido en servidumbre apelando a los términos legalmente vinculantes de su contrato de manumisión. Los pasos dados por Bernat demuestran la conciencia de los dueños de que también los esclavos tenían acceso, aunque limitado, a los tribunales. Además de la fuga o apelar a la munificencia de sus amos, los esclavos de la Valencia del siglo XV podían recuperar su libertad llevando a sus amos ante los tribunales.

Una lectura cuidadosa de los protocolos legales de Valencia revela que los esclavos podían reclamar su libertad merced a diferentes demandas. Las 87 demandas de libertad presentadas ante el tribunal del gobernador en la segunda mitad del siglo XV pueden agruparse en dos grandes categorías: las de esclavos que alegaban que su condición de tales era ilegal y las de esclavos que reclamaban haber ganado la condición de libres. Los primeros argumentaban que no debían haber sido esclavizados nunca. Los segundos, por el contrario, planteaban que, por diversas razones, sus amos estaban obligados a concederles la libertad. Por ejemplo, los esclavos de amos judíos que se convertían al cristianismo se transformaban técnicamente en libres al recibir el bautismo⁶. Las esclavas que tenían un hijo de sus amos o que eran obligadas a prostituirse fuera del burdel tenían derecho automáticamente a la condición de libres⁷. De igual modo, los contratos de manumisión y las donaciones de libertad hechos en actos de última voluntad y testamentos debían ser honrados y, si era necesario, apoyados por tribunales municipales y reales. Además, el código legal del reino estipulaba también que los esclavos a cuya redención se había fijado un precio debían ser liberados de inmediato al efectuarse el pago del mismo. Los amos no podían volverse atrás y rechazar el importe del rescate de un esclavo: estaban obligados por ley a aceptarlo.

Los querellantes que reclamaban su libertad sobre la base de que habían sido ilegalmente

6. Germá COLÓN; Aracadi GARCÍA (eds.). *Furs de València*. Barcelona: Barcino, 1990, V, p. 107 (Llibre VI, Rúbrica I, 17). Ver también la edición de Bienvenido Oliver del *Code de Tortosa*, [IV: p. 58. (I, IX, D)], citada en Charles VERLINDEN. *L'esclavage dans l'Europe médiévale 2, Italie, colonies italiennes du Levant, Levant latin, Empire byzantin*. Brugge; Gent: De Tempel, Rijksuniversiteit te Gent, 1977, p. 292.
7. Germá COLÓN; Aracadi GARCÍA (eds.). *Furs...* [4], V, p. 110 (Llibre VI, Rúbrica I, 21). Luis ALANYA (ed.). *Aureum opus regaliū privilegiorum civitatis et regni Valentie: Valencia 1515*. Valencia: [Anubar], 1972, p. 521 («Privilegia Ferdinandi Secundi», XXXIII, CCXXX).



«Así llevan los moros vendidos a la esclavitud en Castilla». Christoph Weiditz. Das Trachtenbuch... (1529).

esclavizados tomaban como base de sus peticiones una de las siguientes causas: apresamiento ilegal o paternidad libre. Los que alegaban la primera sostenían que su captura y sometimiento a la esclavitud eran ilegales. Casi nunca eran cautivos «de bona guerra», y sostenían haber sido secuestrados y vendidos ilícitamente como esclavos. Presentándose a veces como víctimas inocentes de comerciantes cristianos poco escrupulosos (culpables del delito de *collera*, o sea, de vender como esclavo a un individuo libre), o como cristianos que languidecían en un cautiverio musulmán, esos esclavos querellantes insistían en

que los suyos eran casos de identidad equivocada.

A su llegada al Reino de Valencia, se interrogaba cuidadosamente a los cautivos acerca de su fe, su genealogía y su lugar de residencia. Antes de que se les pudiera vender legítimamente como esclavos, se les concedía una audiencia pública en la que en teoría podían impugnar su apresamiento. Dados el momento y el lugar en que se producía esa audiencia, no resulta sorprendente que muy pocos plantearan su punto de vista o recusaran abiertamente la legalidad de su captura. Lanzados por la fuerza a un medio extranjero e intimidante, poco familiarizados, en muchos casos, con el idioma y los procedimientos legales de sus captores, y carentes de un defensor que trabajara directamente en favor de sus intereses, los cautivos muy rara vez impugnaban su situación en razón de su condición de «infieles y enemigos de la fe católica y de la Corona». De un total de 1.205 cautivos cuyo testimonio se ha conservado en protocolos de la Corona que recogen esas audiencias llevadas a cabo durante el siglo XV, sólo tres protestaron haber sido ilegalmente apresados⁸.

Sin embargo, con el paso del tiempo, los esclavos que vivían y trabajaban en Valencia no sólo absorbían los elementos más convencionales de su cultura —la religión, la comida, la forma de vestir, los juegos y actividades recreativas de sus nuevas comunidades de adopción— sino que también se familiarizaban con sus leyes y procedimientos legales. Y lo que es más importante, creaban redes de apoyo mutuo que reunían a defensores y protectores tanto en los hogares de sus amos

8. Los protocolos existentes de *presentaciones e confesiones de cautivos* del siglo XV se encuentran: ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA, Bailía, 193 y 194, que cubren, respectivamente, los años 1419-1434 y 1494-1497.

como en otros lugares, que los ayudaban a orientarse en el sistema legal valenciano.

En presencia de un conjunto relativamente amplio de argumentos legales con los cuales podían reclamar su liberación, los esclavos hábiles y bien relacionados iniciaban procesos en busca de su libertad. Para hacerlo, generalmente se procuraban el auxilio de un funcionario municipal que ha sido poco estudiado: el procurador de los miserables (*procurador dels miserables*)⁹. Éste era un funcionario municipal electo por un periodo de un año cuya función consistía en supervisar las condiciones imperantes en la prisión de la ciudad (*presó comuna*), para garantizar que los reclusos recibieran alimentación, ropas y un lecho adecuados. No obstante, más importante es el hecho de que fuera responsable de garantizar que los presos no permanecieran detenidos por tiempo indefinido a expensas del municipio. En relación con esta última responsabilidad, el procurador de los miserables llegó a desempeñar un papel que recuerda en algo al de un defensor de oficio. A cambio de un salario nominal, pagado por el municipio, el procurador se encargaba de que los pobres e indigentes de Valencia recibieran una audiencia justa y pronta en los tribunales de la ciudad. De ahí que en nombre de los llamados «miserables», el procurador tomara declaraciones, presentara mociones e

hiciera acto de presencia en las audiencias legales de los clientes, sin costo alguno para éstos.

Es por eso que cuando en 1454 un esclavo de nombre Johan decidió reclamar su libertad, buscó el auxilio del procurador de los miserables. Planteando que era un húngaro cristiano que había sido erróneamente tomado por turco musulmán y vendido como esclavo, Johan le solicitó que lo ayudara a presentar su demanda. El procurador, actuando en nombre de Johan, recogió las declaraciones de un número de testigos, incluidos tres comerciantes alemanes y un zapatero de la misma nacionalidad. Los cuatro declararon que después de interrogar concienzudamente a Johan en alemán y en húngaro, estaban convencidos de que «Johan es del reino de Hungría y cristiano por nacimiento, y no moro»¹⁰. Para agotar las evidencias, el procurador hizo que Johan también fuera examinado por un médico, quien declaró ante el tribunal, mediante una declaración jurada por escrito, que no había sido circuncidado, lo que constituía una prueba concluyente de que no era moro. Gracias a los prodigiosos esfuerzos del procurador de los miserables, el tribunal ratificó la condición de cristiano por nacimiento de Johan y dictaminó que era un hombre libre con derecho «a ir y venir, y a suscribir contratos según su voluntad»¹¹.

9. Para una breve reseña del papel y las funciones tradicionalmente asignadas al *procurador dels miserables* (así como una relación de las personas que ocuparon el cargo entre 1344 y 1708), ver F. CARRERRES I DE CALATAYUD. «El Procurador dels Miserables: notes per a la seva història». *Anales del Centro de Cultura Valenciana* (Valencia). IV (1931), p. 41-53.

10. ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA, Gobernación, 4581: M. 5: f. 36r-37v y M. 6: f. 2r. La declaración del *mestre* Albert, «çabater natural de la ciutat de Colunya habitador de present de la ciutat de Valencia», es representativa de la de los cuatro testigos. Albert reconoció que «no'l conexia sino que'l ha interrogat ab lenguatge ongres e alamaný de hon era e si era xristia de natura e com ha nom e aquell li havia respost en lo dit lenguatge verdader que era del regne de Ongria qui es del imperi d'Alamania y era xristia de natura de xristia de part de pare e mare e ell testimoni reinterroga aquell ab la dita lengua com era stat cativat e menat en la present ciutat e aquell recita en lo dit lenguatge per menut lo cas segons desus es contengut de que ell testimoni segons la sua lengua creu que aquell es del dit realme d'Ongria e xristia de natura e no moro e per tal lo ha e te el testimoni».

11. ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA, Gobernación, 4581: M. 5: f. 36r-37v y M. 6: f. 2r. El dictamen del Gobernador dice lo siguiente: «attenent que per actes e merits de proces [...] consta suficientment de la intencio dret e justicia del dit en Johan

Los esclavos que reclamaban legalmente la condición de libres no sólo podían gestionar la asesoría del procurador, sino que los tribunales les garantizaban el acceso a ese funcionario durante el curso del juicio. Al presentar una demanda de libertad, los esclavos quedaban bajo la custodia y protección del tribunal del gobernador. A partir de ese momento, eran enviados a la prisión de la ciudad o a una casa de seguridad designada para ese propósito hasta que se dilucidara satisfactoriamente la demanda sobre su condición. No obstante, en muchos casos, a instancias de su amo, el tribunal devolvía al esclavo a la custodia de su dueño. Sin embargo, sólo lo hacía si recibía un compromiso jurado del amo de que no se le infligiría ningún daño físico ni se le trasladaría fuera de los límites de la ciudad. De esa forma, el tribunal trataba de garantizar que los esclavos no fueran intimidados o amenazados para que retiraran su demanda o renunciaran a ella. No obstante, aún más notable resulta que los amos se comprometían también bajo juramento a consentir a sus esclavos acceder al procurador de los miserables. Por ejemplo, cuando una esclava de nombre Juliana presentó una demanda de libertad en 1456, su dueña se vio obligada a prometerle al tribunal, para que le devolvieran la custodia de Juliana, no sólo que no la golpearía «como a un esclavo» durante el tiempo que durase el juicio, sino también que le permitiría una

comunicación con el procurador de los miserables. La escritura de la fianza especificaba que a Juliana se le permitiría «ir a hablar y consultar con el Procurador» durante una hora, dos días a la semana: «los martes y viernes después de la cena»¹².

Es obvio, sin embargo, que el grado en que los amos cumplían esos compromisos jurados variaba mucho. Los tribunales no siempre garantizaban de manera efectiva la integridad física de los esclavos, y mucho menos su acceso a un abogado. Los amos a menudo respondían a la demanda de libertad de un esclavo mediante el empleo de la fuerza bruta. Considérense, por ejemplo, las experiencias de una esclava rusa de nombre Anna. En 1457, Anna presentó una demanda de libertad contra su amo, en la que reclamaba la condición de libre a consecuencia de haber tenido un hijo de él. Como de costumbre, al presentar la querella, Anna se puso bajo la custodia y protección del gobernador. No obstante, a petición de su amo, Anna fue devuelta a su custodia por el tiempo de duración del juicio. Cuando el agente municipal escoltó a Anna de regreso al hogar de su amo, le advirtió a éste, como era costumbre, que no podía trasladarla fuera de los límites de la ciudad ni hacerla víctima de ningún maltrato. No obstante, Anna declaró posteriormente que en cuanto se encontró de nuevo bajo su custodia, su amo la golpeó salvajemente, azotándola desnuda con una sog

Serec esser xristia de natura fill de xristia e xristiana natural del regne de Ungri ne consta de causa legitima per que aquell dega esser sclau. E per consequent aquell no esser moro ni de nacio de moros ni de turchs ni deure esser sclau. Per tal hiis e aliis attentis pronuncia e declara lo dit Johan Serec [...] esser ingenu e franch e no esser moro ni sclau e per consequent aquell no poder esser venut com a moro sclau declarant aquell haver libera facultat com a franch anar star e contractar com a persona franca e libera».

12. ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA, Gobernación, 2287: M. 16; f. 19r-21v. La escritura de la fianza dice: «en cara promes es obliga de no maltractar aquella axi com si no fos esclava e aço sub pena de docents florins aplicadors als cofrens del dit molt alt senyor rey en cara promes es obliga en poder del dit honorable tinent loch de governador que lexava aquella ho permetra que dos dies de la setmana ço es lo dimarts e lo divendres en lo apres dinar una hora en cascu dels dits dies que aquella puxa venir a parlar e comunicar ab lo procurador e advocat per la present causa».

de cáñamo, como castigo por presentar una demanda judicial contra él. Anna testificó que la paliza había sido tan brutal que se había visto obligada a guardar cama durante varios días. Sin embargo, todavía no confiado en haberla sometido mediante la intimidación, varias noches después, al amparo de la oscuridad fue enviada al pueblo de Benafer, fuera de los límites de la ciudad de Valencia. Su motivo para hacerlo, mantuvo Anna, era impedirle llevar adelante su legítimo reclamo de libertad. Una vez fuera de la ciudad de Valencia, le resultaría casi imposible buscar justicia, sobre todo porque en Benafer no había nadie que la conociera o que se interesara en ayudarla¹³.

Pero además de blandir el garrote, los amos en ocasiones les ofrecían algún incentivo a sus esclavos. En ocasiones intentaban disuadirles de presentar demandas de libertad con la promesa de que se la concederían a cambio de que renunciases a demandarlos. En 1485, un esclavo de nombre Pedro negó en el tribunal del gobernador su participación en una querella legal presentada contra su amo en demanda de su inmediata liberación.

Según los términos de su contrato de manumisión, a Pedro le estaba prohibido tratar de obtener la libertad en los tribunales. De ahí que, para evitar la anulación de ese contrato, Pedro declarara con insistencia en el tribunal del gobernador que la querella había sido presentada contra su voluntad por «ciertos castellanos de Valladolid». Tras ratificar la legitimidad de su condición de esclavo y admitir que carecía de base legal para reclamar la libertad, Pedro concluyó su declaración jurada testificando que estaba plenamente satisfecho de servir en su totalidad los doce años estipulados en su contrato de manumisión¹⁴.

No obstante, algunos dueños impugnaban la autoridad de los tribunales intervenir en las disputas entre amos y esclavos. Argumentaban que no era asunto de los tribunales como disponer de su propiedad privada, esto es, cómo y cuándo liberar a sus esclavos, o, incluso, si los liberaban o no. En 1457, una dama noble objetó la intervención de los tribunales en una disputa entre ella y su esclavo negro de nombre Joan, que había pedido la ayuda del gobernador para lograr que se

13. ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA, Gobernación, 2314: M. 1: f. 10r, nº 2317: M. 35: f. 32r-33v. «Item diu e posa que quant lo dit mossen Jacme Romeu comana la dita Anna al dit en Marti de Vaguena lo y porta a casa sua en Marti Aragones algozir de la vestra cort manant li que no la tragues de Valencia ni la venes ni mal tractas. [...] la dita Anna fon tornada a la dita casa d'en Marti de Vaguena a comanada per lo dit noble loch de governador lo dit en Marti de Vaguena cruelment e ab poqua pietat bate ab una corda de canem la dita Anna tota nua per que volia proclamar libertat de la qual ferida jague molt temps. [...] Item diu que no solament lo dit en Marti de Vaguena fonch e es stat inobedient al dit noble governador e manaments de aquell per batre la dita esclava mas encara per ço com una nit lo dit en Marti de Vaguena [...] amagadament hora de miga nit trague de la ciutat de Valencia la dita Anna e aquella porta o tramete al loch de Benafer [...] a fi que la dita Anna essent fora de Valencia no proclamara la dita libertat ni nen per aquella no s'en curaria axi com fins açi nengu no s'en es curat e axi tendria aquella per força axi com de fet ha fet tengut maltractant e batent aquella».
14. ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA, Gobernación, 2374: M. 4: f. 39r, nº 2376: M. 21: f. 10r-v. Pedro declaró que «ell no ha sabut res en la dita proclamacio de libertat feta per los dits castellans de Valladolid ans ab los presents scrits diu que ell no vol proclamar nenguna libertat com no la puxa proclamar e que verdaderament aquell es catiu e estat venut be e legittimament per catiu e que la libertat per ell dit propositant fonch proposada ... per vexar de despeses e conguxes al dit mestre Pere Crespo amo de aquell e no per que ell pogues tenir libertat com no la tingues ans es content e vol estar a la dita concordia e servir complidament lo temps que li resta e no vol ni enten proclamar libertat ni altre la proclame per ell ans vol e li plau de estar en lo dit servey per lo dit temps e servir lo dit son amo be e lealment segons ha promes en la dita concordia e diu que renuncia a qualsevol dret de libertat jatsia ell dit propositant sia cert non tinga alguna durant lo temps dels dits dotze anys».



Musulmanes. Retablo de San Vicente (Maestro del Glifo).

ejecutara una promesa de libertad incluida en la última voluntad y testamento de su antiguo amo. La viuda del noble fallecido, sin embargo, recusaba la autoridad del gobernador para interferir en el asunto, con el argumento

de que la determinación sobre el cumplimiento por parte de Joan de los términos de su manumisión había sido dejada, en su condición de albacea del testamento de su esposo, a su discreción. La viuda insistía en que ni el gobernador ni ningún otro funcionario gubernamental podían dictar si su esclavo se había ganado la libertad o cuando la misma se haría efectiva¹⁵. En este caso la Corona ratificó la autoridad absoluta del ama sobre sus esclavos¹⁶, pues el rey le prohibió al gobernador seguir interviniendo en el asunto. Sin embargo, protestas similares, planteadas por un comerciante genovés, no fueron atendidas.

En 1488, un comerciante genovés objetó los intentos del gobernador de obligarlo a aceptar el pago del monto estipulado por la redención de una esclava suya, de nombre Magdalena. El comerciante planteaba que, si bien era cierto que le había prometido la manumisión a cambio de sostener con ella relaciones sexuales y un precio de redención de 57 *lliures* «la justicia no puede permitirle a un esclavo obtener su libertad en contra de la voluntad de su señor». Sin embargo, a pesar de las protestas del comerciante, en este caso el gobernador ratificó la solicitud de libertad de Magdalena, y le ordenó al comerciante aceptar el precio de redención aportado por los amigos y simpatizantes de la esclava¹⁷.

15. ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA, Gobernación, 2290: M. 22: 27r-29v; M. 25: 1r-9v. Damiata, la dama noble, afirmó que «no es cars ne loch que vos dit molt noble tenint loch de governador puxats o dejats de justicia conexer de aquella. Per tal la dita na Damiata requer que la dita demanda o requesta feta per lo dit Johan de Viscaya no sia per vos dit molt noble tenint loch de governador admesa ans sia per vos a aquell denegada pronunciant e declarant la dita na Damiata no esser tenguda donar la dita libertat al dit Johan de Viscaya ne libertar aquell de la dita sua servitut imposant al dit Johan de Viscaya callament perdurable en e sobre la dita sua demanda o requesta remetent a la dita na Damiata la dita conexença segons la voluntat e disposició del dit testador e tenor de la dita clausula aposada en lo dit testament».

16. ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA, Gobernación, 2290: M. 27: f. 32r-33v.

17. ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA, Gobernación, 2386: M. 12: 40r-43r. Raffel Gentil, el comerciante, alegó que «la scriptura devant vos dit senyor governador per part de la dita Magdalena posada no procohex ni te fonament algu de justicia per quant la dita Magdalena volrria haver libertat contra voluntat de son senyor lo que justicia no comporta car iatsia que la dita Magdalena se vulla mostrar que lo dit micer Raffel Gentil en lo temps que compra aquella promesa que valent se aquella rescatar ho pogues fer pagant lo preu que costa e mes que lo dit micer Raffel Gentil hauria conegut carnalment aquella e que per les dites coses aquella satisfent a aquell lo preu que li costa hauria conseguit e o porra conseguir liber-

La frustración expresada en 1478 por un sillero y dueño de esclavos quizás fuera un reflejo de los sentimientos de muchos dueños cuando eran llevados a los tribunales por sus esclavos. El sillero se quejaba de que «es cosa de mal ejemplo que las esclavas que viven aún en estado de servidumbre diciendo que tienen un acuerdo con sus señores de liberarlas por cierta cantidad puedan andar adonde quieran y demandar su libertad»¹⁸. En 1459, otro dueño de esclavos valenciano instó al tribunal del gobernador a mostrar una mayor cuidado en la concesión de lo que consideraban una condición provisional de libres a los esclavos que presentaban demandas de libertad contra sus amos. Al implorarlo al tribunal que fuera prudente, ese dueño de esclavos planteaba que se debía tratar a los individuos según la condición en que se hallaban. En otras palabras, insistía en que se debía tratar a los esclavos como esclavos hasta que se demostrara que su condición era otra. Porque, advertía, a menos que se tomaran medidas preventivas inmediatas, todos los esclavos plantearían falsas alegaciones de derecho a la libertad, aunque sólo fuera por disfrutar temporalmente del trato dispensado a los libres¹⁹.

No obstante, a pesar de las alarmantes predicciones de ese comerciante, las investigaciones en los archivos de Valencia revelan

que entre 1450 y 1500 un promedio de dos esclavos al año acudieron al tribunal del gobernador para obtener su libertad. Sin embargo, en algunos años, por ejemplo, 1457, se presentaron siete *demandes de libertat*. Lo que resulta especialmente interesante es que esos demandantes esclavos alcanzaron su propósito en bastantes ocasiones. Cuando declaraban haber sido ilegalmente sometidos a la esclavitud, de las 16 demandas analizadas 9 tuvieron éxito. Aunque las alegaciones de «paternidad libre» eran extremadamente difíciles de probar y podían ser fácilmente refutadas, también esos casos alcanzaron un promedio sorprendente de fallos favorables. Al menos un 50% (cinco de diez) resultaron exitosos.

Como apuntamos antes, una parte significativa de las 87 demandas de libertad encontradas tenían como base alegaciones de que el esclavo en cuestión había cumplido los términos necesarios para alcanzar la libertad según aparecían estipulados en la última voluntad y testamento de su amo, o en un contrato de manumisión. En la mayoría de los casos, significaba que el esclavo había pagado su libertad, o había brindado servicios a su dueño o a una tercera persona durante el periodo de tiempo acordado. En estas circunstancias, una de cada dos demandas reconocía el derecho

tat les quals dites coses nos porien mostrar en alguna manera e hon se mostrassen ja per ço la dita Magdalena no poria conseguir la dita libertat».

18. ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA, Gobernación, 2348: M. 7: f. 36 El sillero alegó que «es cosa de mal exemple que les esclaves constituhides en stat de servitut per dir que tenen concordia ab lurs senyors de quitar se per certa quantitat stant tingue a ceruiment de anar s'en e proclamar en libertat». Adviértase que este dueño de esclavos centraba su queja contra procesos legales sin base en los casos específicos de las esclavas. Esta *demanda de libertat* se presentó en el mismo año en que el rey Fernando emitió un edicto restringiendo las posibilidades de las esclavas de presentar demandas de libertad contra sus amos por haber tenido un hijo de ellos. Véase: Germá COLÓN; Aracadi GARCÍA (eds.). *Furs...* [4], V: 110 (Llibre VI, Rúbrica I, 21).
19. ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA, Gobernación, 2294: M. 24: f. 37r-39v. «Axi mateix diu e posa que determenat es per justícia que segons lo stat e possessio en lo qual algu es trobat deu esser tractat. Et axi puy la dita Marta es trobada en stat de servitut ha e deu esser tractada com a sclava segons notori es disposicions de justícia altrament se seguiria que cascu catiu o cativa diria que son franchs sabents que durant la questio de la llibertat deguessen esser tractats com a franchs car al menys obtendrieu libertat per aquells temps en lo qual se examinaria la causa de la libertat».



Morisco. Cuerpo central del retablo de San Martín, s. XV. Museo de Bellas Artes de Valencia.

del esclavo (9 de los 18 casos considerados en nuestra investigación).

A un esclavo también se le podían hacer promesas de libertad no sujetas a ninguna condición, para celebrar sucesos importantes del ciclo de vida, como un matrimonio o un nacimiento, o, cuando el amo se encontraba en su lecho de muerte, para asegurar el bienestar de su alma. Como la mayoría de las mismas eran verbales, no es sorprendente que los litigios con frecuencia degeneraron en altercados. Aun así, la cantidad de demandas falladas a favor de los esclavos fueron relativamente alta: diez de trece.

Las esclavas también podían reclamar su libertad en caso de tener un hijo del amo o a consecuencia de haber sido forzadas a la prostitución fuera del burdel. Sin embargo, los resultados de estos procesos eran más inciertos. Lamentablemente, los tres casos encontrados en los que se argüía el supuesto de prostitución están incompletos. Y de las doce demandas interpuestas alegando paternidad del amo, sólo cuatro fueron aceptadas.

No obstante, si se tiene en cuenta que de 87 demandas de libertad 37 alcanzaron su objetivo, lo que supone más de un 40% de la muestra, resulta evidente que en un periodo en el que la asignación de la condición de esclavo era extremadamente complicada, los más hábiles conseguían sus propósitos alegando una nueva fe u orígenes étnicos diferentes, o reclamando ser hijos de personas libres. Con esas demandas, algunas legítimas y otras quizás no tanto, muchos consiguieron la libertad.

Pero lo que en un principio puede parecer un poderoso instrumento a disposición de los esclavos para alcanzar la libertad a menudo se volvía contra ellos. Considérese, por ejemplo, el siguiente caso. En 1471, una esclava griega de nombre María se querelló contra su ama (una monja del Convento de las Magdalenas) alegando que había sido ilegalmente esclavizada. Secuestrada a los ocho años y vendida como esclava por unos comerciantes italianos sin escrúpulos, María compareció ante el tribunal del gobernador más de 20 años después para reclamar su libertad. En su empeño por refutar y desacreditar su alegación, los dueños de María, tanto el antiguo como el actual, no sólo plantearon que la esclava era de origen ruso y no griego²⁰, sino que además, que es lo que es

20. No sólo plantearon que María era rusa y no griega, sino también que había sido legítimamente capturada por unos turcos, no secuestrada por los italianos. De ahí que, siendo cristiana ortodoxa de nacimiento, no tuviera derecho a los bene-

más curioso, mencionaron los muchos años de servicio que María había prestado «por su propia voluntad», argumento que estimaban una prueba irrefutable de la legitimidad de su condición. Si María tenía una sólida base legal para exigir su libertad, ¿por qué no había impugnado antes su esclavitud? Si tenía derecho a la libertad, no habría permitido que la vendieran²¹.

Resulta asombrosa la tenaz persistencia con que los amos sostenían argumentos artificiosos para impugnar la libertad de sus esclavos. Revela hasta qué punto estaban convencidos de que la esclavitud tenía su fundamento en el imperio de la ley y no en la fuerza bruta y la dominación²². En sus objeciones a esas demandas de libertad, y en la de las críticas sobre la legitimidad y la legalidad de la esclavitud en general, los dueños enfatizaban constantemente que los esclavos disponían de amplias oportunidades para impugnar de su sometimiento. Planteaban que podían proclamar su condición de libres ante varias instancias: en el momento en que

eran presentados ante los funcionarios de la Corona inmediatamente después de su captura, en el mercado antes de ser vendidos y, finalmente y con la ayuda del procurador de los miserables, mediante una demanda de libertad ante el tribunal del gobernador. Irónicamente, proporcionarles a los esclavos los medios para impugnar su condición les daba a los amos más argumentos para sancionar la legitimidad de la misma. Como quizás falazmente le aconsejara en 1477 un mercader a un esclavo que debía vender por encargo: «Si eres libre, dilo, que aquí en Valencia no te harán injusticia alguna»²³.

Por supuesto, la gran mayoría no litigaba legales en demanda de libertad. No obstante, a pesar de las impugnaciones de sus amos, no se puede llegar a la conclusión de que simplemente no querían hacerlo o de que no creían tener un derecho legítimo. El testimonio de los esclavos sobre la violencia que tenían que enfrentar para presentar sus demandas sugiere lo contrario. Fuera mediante la fuerza física, la intimidación verbal o el

ficios de los pronunciamientos del papa Urbano V, ya que había sido legítimamente capturada y sometida a la esclavitud por musulmanes. Según los términos de la bula papal, sólo los griegos capturados y esclavizados por otros cristianos tenían derecho a una manumisión automática. Para la *demanda de libertat* de María, ver ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA, Gobernación, 2331: M. 16: f. 3r-8v, nº 2332 y M. 26: f. 1r-4v. Para un análisis de la bula del papa Urbano V y sus repercusiones en la condición de los esclavos cristianos ortodoxos, ver Charles VERLINDEN. «Orthodoxie et Esclavage au bas Moyen Age», *Mélanges Eugène Tisserand* (Ciudad Vaticano). V. (1964), p. 427-456.

21. ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA, Gobernación, 2332: M. 26: f. 1r-4v. «Item diu e posa que cessa esser ver ab honor parlant lo contengut en lo cinque e sise capitols de la dita demanda ço es que la dita Maria fos portada contra sa voluntat a la present ciutat de Valencia ans ab veritat sta que la dita Maria es stada portada a la present ciutat de sa propria voluntat. E axi es ver. Item diu e posa que la dita Maria sclava apres que estada en la present ciutat ha stat per mes temps de hun any e mig en poder del dit en Raffael Mercader com a sclava de aquell sens que james no ha contradit ne reclamant ne dit que fos liberta e axi es ver. Item diu e posa que stant lo dit Pau Mercader en possessio de la dita sclava lo dit Pau Mercader e en Rafel Mercader germans han venut la dita sclava de voluntat e expres consentiment de la dita Maria sclava a la dita noble sor Ysabel de Bellvis les cinquanta lliures malorquines e messiones fetes a temps de huyt anys sens que la dita Maria no y feu ne y ha fet contradicció alguna. E axi consta per la dita carta de la qual fa fe si et in quantum».
22. No obstante, ello no significa que la ley y la fuerza bruta fueran mecanismos mutuamente excluyentes en el establecimiento de los derechos de amos sobre sus esclavos. La ley limitaba y, a la vez, perpetuaba la dominación de los amos sobre sus esclavos.
23. ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA, Gobernación, 4854: M. 21: f. 34r-38v. Tomado de la declaración del corredor Bonanat Pujol: «... cinch o sis anys pot haver poch mes o menys que a ell dit testimoni he a Pere Guardiola corredors los fonch donat a vendre lo dit Jacobo per catiu e portant lo per lo ciutat los qui'l volien comprar demanaven al dit Jacobo si era catiu que'n digues que en ciutat era que no li farien sobres algunes».

ofrecimiento de incentivos, los esfuerzos de los amos parecen haber sido extremadamente efectivos. De hecho, la esclava griega María refutó e hizo fracasar las alegaciones de su amo sobre sus supuestas complicidad y consentimiento con su condición señalando que sólo en ese momento había planteado oficialmente su demanda porque todos sus dueños anteriores se lo habían impedido físicamente. Declaró que cada vez que había intentado reclamar su libertad, su amo anterior la había golpeado y arrastrado por toda la casa. Continuó diciendo que, de hecho, su amo había llevado su empecinamiento en impedirle presentar una demanda hasta el punto de no permitirle acercarse a puertas y ventanas, y mucho menos salir de la casa²⁴.

El esclavo tenía que aportar una gran cantidad de pruebas como pone de manifiesto la demanda que presentó un esclavo de nombre Jacobo. Cristiano libre vendido ilícitamente como esclavo, presentó su primera *demande de libertat* en Tarragona. No obstante, su amo refutó sus afirmaciones sin mayor dificultad alegando que, al ser vendido, Jacobo había declarado ser esclavo. Frustrado su primer intento de alcanzar la libertad, huyó a Barcelona en la época de la Guerra de los Remensas (1462-1472), donde se unió a una banda de rebeldes catalanes y, capturado por fuerzas de la Corona, fue vuelto a vender como esclavo. No obstante, esta vez Jacobo tuvo la suerte de que lo comprara un zapatero residente en Valencia. Allí, en 1475, presentó una segunda demanda de libertad, que en esta ocasión tuvo éxito. Aunque llegó a conseguir



«Así van a caballo los valencianos». Christoph Weiditz. *Das Trachtenbusch...* (1529).

su libertad, los esfuerzos del zapatero valenciano para refutar sus alegaciones son sorprendentes y merecen un comentario. Para impugnar el derecho de Jacobo a la condición de hombre libre, el zapatero arguyó que aunque su captura y su sometimiento a la esclavitud iniciales hubieran sido ilegales, el hecho de que no se pronunciara públicamente contra ellos indicaba que había renunciado a su derecho a la libertad. Al no protestar de inmediato contra su sometimiento, Jacobo había perdido todo derecho. El zapatero afirmó que

24. ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA, Gobernación, 2332: M. 26: f. 1r-4v. «... en veritat sta que ella responnent es stada aci en Valencia ab lo dit en Raffel Mercader cert temps al qual ha servit empero ella responnent stant ab aquell no gosa demanar libertat car com la demanava e li dehia que ella volia exir en totes maneres de sa casa puix no la volia libertat e aquell hoyint les dites coses la batia e rocegava per casa e no la dexava fet a la finestra ni a la porta tant la tenia desstrete e per aquesta raho no li gosava demanar libertat».

«se puede concluir y claramente es de justicia, que aun si Jacobo fue alguna vez libre, al permitir que lo vendieran tantas veces —y en todas las ocasiones manifestó que era esclavo— Jacobo no puede ahora exigir su libertad»²⁵.

El zapatero impugnó tres veces, el dictamen del tribunal que ratificó la condición de libre de Jacobo. Insistía en que el hecho de que no se hubiera opuesto activa y continuamente a su sometimiento no sólo deslegitimaba su reclamación, sino que, de hecho, la invalidaba. En otras palabras, en lo tocante a la libertad propia, o se disfrutaba o se perdía. Tan fuerte era la convicción del zapatero de que Jacobo no sólo tenía la capacidad de proclamar su libertad, sino que tenía la responsabilidad legal de hacerlo, que presentó una acusación de fraude contra él. Animado por el propósito de recibir una compensación por los gastos en que había incurrido al participar en una venta ilegal, llevó a los tribunales a su exesclavo por permitir que lo vendieran fraudulentamente. En su reclamación, el zapatero explicaba que aspiraba a una compensación por daños porque «el mencionado Jacobo... en el momento de la venta sabía bien que era libre y permitió que lo vendieran»²⁶.

Lamentablemente, no sabemos cuál fue el veredicto definitivo del gobernador en este caso. Aun así, tomados en su totalidad, estos casos ilustran que en el siglo XV existían en Valencia una población esclava sumamente diversa y una comprensión muy compleja acerca de las circunstancias en las que podía esclavizarse legítimamente a un individuo. La necesidad dictaba que amos, funcionarios gubernamentales y vendedores de esclavos citaran las declaraciones de estos últimos para determinar su condición. Algunos, los más avezados, podían sacar provecho de esos escrúpulos legales y explotar con efectividad los canales legales a su disposición para demandar su libertad. No obstante, lo que a primera vista puede parecer un poderoso instrumento de manumisión, también era blandido por los amos para justificar el mantenimiento de la esclavitud con un aire de justicia y legalidad. La capacidad de un esclavo para impugnar la validez legal de su sometimiento no servía sino para subrayar la legitimidad del dominio ejercido por su amo. Dicho eso, la reconquista de la libertad por parte de esos 36 esclavos resulta aún más notable.

25. ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA, Gobernación, 2347: M. 15: f. 26r-29r. El zapatero no sólo exigía que Jacobo satisficiera los gastos en que había incurrido a causa del proceso, sino también que le reembolsara el dinero que había pagado (y subsecuentemente perdido) por su compra. «Ex quibus et alter se conclou e resulta en clar de justicia que en cars hon lo dit Jacobo tingues franquea alguna per aquell haver permes tantes voltes esser stat venut e aquell cascuna volta haver confessat esser catiu aquell dit Jacobo no pot demanar libertat».

26. ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA, Gobernación, 4854: M. 21: f. 34r-38v. «Ex quibus et als se conclou que puis lo dit en Jacobo de Seguer en lo temps de la dita venda sabia be que era franch e permetre que fos venut. E axi mateix expressament dix que era catiu de justicia seria e es tengut de dol e frau al dit mestre Jaume qui ha feta la dita fermansa e es compellit restituir lo preu de aquell per que lo dit Jacobo deu esser condemnat en tot so e quant lo dit mestre Jaume haura pagat per aquell e li convendra pagar e en tots lo dayns e damns que haura sostenguts e li haura convengut sostenir per la dita raho com axi de justicia fer se deja demanant compliment de aquella esser li administrat».

La esclavitud, la ley y la reclamación de derechos en Cuba: Repensando el debate de Tannenbaum

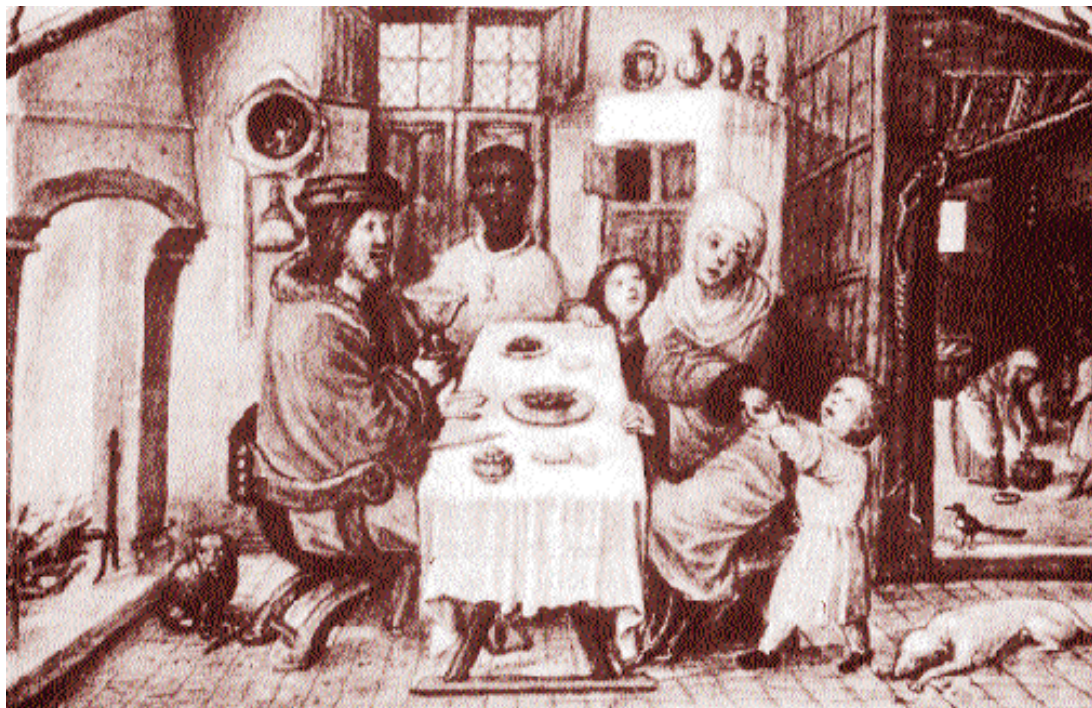
ALEJANDRO DE LA FUENTE

Los estudiosos de la esclavitud en América Latina le están prestando una atención renovada a la historia legal. Aunque estos estudios no tienen el desarrollo y la complejidad de los producidos por la historiografía norteamericana, donde la esclavitud ha sido un tema central para los historiadores del derecho desde hace un buen tiempo, da la impresión de que se está conformando una especialidad, algo que nos complace. Después de todo, muchos aspectos importantes de la vida de los esclavos en las colonias ibéricas, desde el nacimiento y la alimentación hasta el matrimonio, el tiempo de ocio, los castigos y el descanso, estaba teóricamente regulado por un corpus legal vastísimo. Algunas de esas regulaciones habían formado parte del derecho tradicional castellano durante siglos. Otras fueron aprobadas por la Corona o por órganos locales de la Administración y el poder.

El tema, por supuesto, no es nuevo en la historiografía latinoamericana. Generaciones anteriores de investigadores compilaron, clasificaron y estudiaron al menos los aspectos más destacados de ese derecho positivo¹. No obstante, dichos estudios tenían al menos dos limitaciones importantes. En primer lugar, privilegiaban el estudio de las leyes promulgadas por el Consejo de Indias y otros órganos superiores del Estado. Menos atención recibieron las regulaciones aprobadas por los órganos locales de poder, que reflejaban mejor los intereses de los dueños de esclavos en las colonias. En segundo lugar, estos autores a menudo analizaron el derecho positivo sin hacer referencia a las condiciones sociales en las que el mismo era aplicado, o a las experiencias e iniciativas de los esclavos, los amos y las autoridades coloniales.

En su influyente ensayo *Slave and Citizen*, publicado en 1946, Frank Tannenbaum

1. Para algunos ejemplos significativos, ver Fernando ORTIZ. *Los negros esclavos*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1975 (primera edición 1916); Luis M. DÍAZ SOLER. *Historia de la esclavitud negra en Puerto Rico (1493-1890)*. Madrid: Revista de Occidente, 1953; Carlos LARRAZÁBAL BLANCO. *Los negros y la esclavitud en Santo Domingo*. Santo Domingo: J. D. Postigo, 1967; Idelfonso PEREDA VALDÉS. *El negro en el Uruguay, pasado y presente*. Montevideo: Revista del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, 1965; Miguel ACOSTA SAIGNES. *Vida de los esclavos negros en Venezuela*. Caracas: Hespérides, 1967; Javier MALAGÓN BARCELÓ. *Código Negro Carolino (1784)*. Santo Domingo: Editora Taller, 1974.



Sirviente negro. *Libro de horas de d. Manuel* (1517).

subrayó la importancia del derecho para entender la esclavitud en la América Latina. Tannenbaum planteaba que las diferencias en las relaciones raciales existentes en los Estados Unidos y la América Latina partía de la diferencias entre sus respectivos sistemas esclavistas, que se habían desarrollado en «marcos morales y legales» diferentes. El desarrollo de la esclavitud en la América española y portuguesa estaba marcado por una larga tradición legal que pasaba por el código justiniano y reconocía que la esclavitud era contraria a la naturaleza y la razón. Esa tradición consideraba que los esclavos formaban parte de la comunidad cristiana y tenían derecho a recibir los sacramentos. Sus matrimonios y familias estaban protegidos

por la ley, las costumbres y la Iglesia. En las colonias británicas, por el contrario, la ausencia de jurisprudencia le había permitido a los dueños de esclavos definir a éstos como bienes muebles. Los esclavos carecían de «personalidad moral. Sus matrimonios y sus familias no gozaban» de protección legal. Además, mientras que en la América Latina las tradiciones legales y religiosas «se inclinaban en favor de la libertad», lo que facilitaba la manumisión, en los Estados Unidos la senda de la libertad estaba plagada de obstáculos legales. «La frecuencia y facilidad de las manumisiones», afirmó Tannenbaum, «influyó más que cualquier otro factor en el carácter y el resultado último de los dos sistemas esclavistas de este hemisferio»².

2. Frank TANNENBAUM. *Slave and Citizen: The Negro in the Americas*. Boston: Beacon Press, 1992 (edición original, Nueva York, 1946), p. 69.

Por tanto, *Slave and Citizen* contenía dos planteamientos centrales. El primero, que a diferencia de lo que sucedía en las colonias británicas, los esclavos de las sociedades iberoamericanas gozaban de personalidad legal y moral. El segundo, que esas diferencias en los ámbitos moral y legal de los dos sistemas esclavistas preconfiguraron o predeterminaron las relaciones raciales imperantes después de la emancipación en ambas regiones.

Como veremos más adelante, ambas conclusiones fueron impugnadas y algunos investigadores llegaron a afirmar que el estudio de la ley poco podía contribuir a la comprensión de las experiencias de la esclavitud en la América Latina. Dichas críticas, sin embargo, contribuyeron a subrayar la importancia de la obra de Tannenbaum para el estudio de la esclavitud y la ley en la región. Como ha dicho el jurista Robert Cottrol, los análisis de derecho comparado han estado encuadrados en buena medida en los marcos de referencia establecidos por el sociólogo Frank Tannenbaum en la década de 1940³.

Dado el impacto de *Slave and Citizen*, en las páginas que siguen reseño brevemente el debate iniciado por este trabajo para de esa forma analizar los estudios sobre la esclavitud y la legislación española en América producidos en las últimas décadas. Al hacerlo, pongo en tela de juicio la validez de algunas de las críticas de que ha sido objeto la obra de Tannenbaum y sostengo que algunos de

sus planteamiento siguen siendo válidos, en el sentido de que si bien las expresiones legales de los órganos superiores no resultan suficientes para entender la vida cotidiana de los esclavos, tampoco pueden ser pasadas por alto. Concuerdo con Cottrol en que el estudio de Tannenbaum «conserva su importancia», no sólo porque sentó los términos del debate, sino también porque evidenció la importancia de las normativas legales en determinar las condiciones de vida de los esclavos⁴. Entre esas leyes se encontraban los estatutos tradicionales de Castilla, que, como señaló Tannenbaum, siguieron siendo invocados por los tribunales durante el periodo colonial. El uso potencial y la aplicabilidad de esas leyes fueron sancionados en numerosas ocasiones por las autoridades y tribunales coloniales, que las invocaban al regular las relaciones sociales en las colonias y al encausar y controlar los esfuerzos de los esclavos por mejorar sus vidas o alcanzar la libertad.

No obstante, Tannenbaum atribuía a las leyes un poder de transformación de la realidad social que era difícil de concretar en la práctica. En este artículo uso el concepto de reclamación de derechos para acortar la distancia que media entre la ley como declaración abstracta de derechos y los esclavos como actores sociales con sus propias estrategias y objetivos. En vez de asumir que el derecho positivo dotaba a los esclavos de

3. Robert J. COTTRIL. «The long lingering shadow: Law, liberalism, and cultures of racial hierarchy and identity in the Americas». *Tulane Law Review* (New Orleans). 76/1 (2001), p. 40. La vigencia del libro de Tannenbaum se ve confirmada por la frecuencia con que se cita en estudios recientes. Para algunos ejemplos adicionales, ver Frederick COOPER; Thomas C. HOLT; Rebecca J. SCOTT. *Beyond slavery: explorations of race, labor, and citizenship in postemancipation societies*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2000, p. 1-32; Jane LANDERS. *Black society in Spanish Florida*. Urbana: University of Illinois Press, 1999, p. 1-2; Thomas N. INGERSOLL. *Mammon and Manon in early New Orleans: the first slave society in the deep South, 1718-1819*. Knoxville: The University of Tennessee Press, 1999, p. XVIII-XIX y p. 120-22; Gilbert C. DIN. *Spaniards, planters, and slaves: the Spanish regulation of slavery in Louisiana, 1763-1803*. College Station: Texas A & M University Press, 1999, p. XIII-XIV.

4. Robert J. COTTRIL. «The long lingering...» [3], p. 41-42.



Sirvienta, detalle de «Nacimiento de la Virgen», atribuido a García Fernandes, Portugal, primera mitad del siglo XVI. Sesimbra, Colección Duquesa de Palmela.

una personalidad «moral», como afirmaba Tannenbaum, sostengo que fueron los esclavos, al establecer demandas y presionar por el logro de beneficios, quienes dieron un significado social concreto a los derechos abstractos regulados por el derecho positivo. Mediante esas interacciones con las autoridades y los jueces coloniales, los esclavos actuaban (y eran percibidos) como sujetos jurídicos con una capacidad legal limitada.

Después de reseñar esos estudios, el resto del artículo está dedicado a analizar, utilizando fuentes primarias y secundarias, algunos aspectos de la esclavitud en Cuba. Una de las críticas fundamentales que se ha hecho

a *Slave and Citizen* —crítica que comparto— se refiere a su vaguedad geográfica y cronológica. Uso aquí el caso cubano para discutir los planteamientos de Tannenbaum acerca del «marco legal» de la esclavitud latinoamericana y para analizar algunas de las formas en que los esclavos usaron el sistema legal en su provecho. De esta manera, el artículo se centra en el primer planteamiento de Tannenbaum, relativo a la importancia de la ley para la mejor comprensión de la esclavitud, y no intenta esclarecer la problemática correlación que estableció entre esclavitud y «relaciones raciales».

Slave and Citizen

En las décadas que siguieron a su publicación, el trabajo de Tannenbaum generó un apasionado, aunque no siempre productivo, debate historiográfico. Uno a uno, sus planteamientos fundamentales fueron estudiados y en muchos casos modificados, criticados, o rechazados de plano. Por ejemplo, el tema de los precedentes y las tradiciones legales fue puesto en tela de juicio desde fecha muy temprana por el antropólogo Sidney Mintz, quien impugnó la idea de que estuvieran verdaderamente ausentes en el mundo no ibérico. Mintz encontró indicios de lo contrario en el derecho feudal británico relativo a la servidumbre, que todavía se aplicaba en la Inglaterra del siglo XVI. «El planteamiento de que no existía una tradición sobre la esclavitud en el Nuevo Mundo no católico no resulta enteramente convincente», señaló. «En Inglaterra existía un marco legal, y hasta cierto punto institucional, para la esclavitud británica en las Antillas y la América del Norte⁵. También se

5. Sidney MINTZ. *Caribbean transformations*. Chicago: Aldine Publishing, 1974, p. 70. Mintz ya lo había planteado antes, en una reseña de *Slavery*, de Stanley Elkins, publicada en 1961 y reproducida con el título de «Slavery and emergent capitalism» en Laura Foner; Eugene Genovese (eds.). *Slavery in the New World: a reader in comparative perspective*. Englewood

impugnó la idea de que los fundamentos romanos del derecho castellano les confiriera una verdadera personalidad moral a los esclavos. En un artículo publicado en 1965, Arnold A. Sio llegaba a la conclusión de que en diversas áreas claves, no existían diferencias suficientes «para distinguir la condición legal del esclavo como propiedad en los Estados Unidos comparada con la de Roma». Sio también señaló que al igual que en los Estados Unidos y Roma, en América Latina, la situación jurídica de los esclavos estaba definida por su condición de objeto de propiedad. Partiendo de esas críticas, otros estudios cuestionaron si los precedentes culturales y legales castellanos reconocían en realidad la humanidad de los esclavos y si estaban despojados de racismo. Como ha apuntado James Sweet en un artículo reciente, «el racismo que llegaría a caracterizar la esclavitud en las Américas estaba enraizado en actitudes culturales y religiosas ya existentes en España y Portugal en el siglo XV»⁶.

Aún más básica que la crítica relativa a la existencia y la naturaleza de los precedentes legales y culturales era la pregunta de si la legislación era o no relevante en dos aspectos. El primero era el relativo a la «transferencia efectiva» de las tradiciones europeas a las colonias. El segundo se refería al cumplimiento de las leyes. Sus críticos señalaron, con razón, que Tannenbaum había pasado

por alto casi totalmente ambas cuestiones en su análisis.

La cuestión de la transferencia efectiva de las tradiciones, planteada inicialmente por Mintz y desarrollada después por Herbert Klein en su estudio comparativo de Virginia y Cuba, tenía importantes ramificaciones. En primer término, ubicaba el debate acerca de la naturaleza de los regímenes esclavistas en un marco institucional, con independencia de las actitudes, el carácter y la benevolencia de los plantadores en tanto individuos. Un elemento clave de ese análisis consistía en determinar si el «centro del poder» se ubicaba en las colonias o allende el Atlántico. ¿Disponían los dueños de esclavos de la capacidad institucional para definir el medio social y legal circundante según sus intereses más inmediatos, o estaba esa capacidad mediada, obstaculizada incluso, por un gobierno metropolitano que se inmiscuía en la cuestión? Mintz comentaba:

«Los ingleses, por ejemplo, parecen haberles concedido a sus colonos un máximo de autoridad local, lo cual, en la práctica, podía equivaler a un máximo de poder para abusar de los esclavos y para pasar por encima de cualquier posible preocupación imperial por protegerlos. Por el contrario, las colonias españolas eran administradas desde la metrópoli [...] Consecuentemente la esclavitud estaba sujeta a un mayor control desde lejos en el caso español»⁷.

Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1969, p. 27-37. Para un punto de vista opuesto, ver Alan WATSON. *Slave law in the Americas*. Athens: The University of Georgia Press, 1989, p. 63-66. Watson cita un caso (p. 11) en el que un tribunal de Virginia determinó que la servidumbre feudal no podía considerarse «el prototipo de la esclavitud, tal como ha existido siempre aquí».

6. Arnold A. SIO. «Interpretations of slavery: the slave status in the Americas». *Comparative Studies in Society and History* (London, New York). 7/3 (1965), p. 296; James SWEET. «The Iberian roots of American racist thought». *The William and Mary Quarterly* (Williamsburg). 44/1 (1997), p. 144.

7. Sidney MINTZ. *Caribbean...* [5], p. 69; Herbert S. KLEIN. *Slavery in the Americas: a comparative study of Virginia and Cuba*. Chicago: Elephant Paperbacks, 1989 (primera ed. 1967). La importancia de las diferencias institucionales, ya presente en la obra de Tannenbaum, fue analizada también por Elkins, quien señaló que en América Latina varios poderes concurrentes — la Corona, la Iglesia, los dueños de esclavos — intervenían en la regulación de la vida de los esclavos. Ver Stanley M. ELKINS. *Slavery: a problem in American institutional and intellectual life*. Chicago: University of Chicago Press, 1968, p. 52-80.

Aún teniendo en cuenta estas precisiones, algunos críticos impugnaron el valor del enfoque de Tannenbaum en su conjunto. Estos críticos destacaron el abismo que separaba las formulaciones legales de las realidades sociales y pusieron en tela de juicio la utilidad de los estudios legales para entender el carácter y la naturaleza de los regímenes esclavistas. La Corona, afirmaba el antropólogo Marvin Harris, «podía publicar todas las leyes que quisiera, pero en las colonias tropicales era el azúcar quien reinaba». Tanto en los Estados Unidos como en la América Latina, «la ley y la realidad guardaban poca semejanza entre sí», de modo que quienes realizaban estudios comparativos de la esclavitud debían examinar «primero las condiciones materiales, antes de llegar a la conclusión de que lo que marcaba la diferencia era la mística del espíritu portugués o español»⁸. Entre esas condiciones materiales, Harris destacó que los factores demográficos eran claves. Mientras la emigración británica a Norteamérica había garantizado el crecimiento de la población y permitido que los blancos desempeñaran papeles intersticiales en la economía, la emigración portuguesa y española había sido mucho menor, de modo que

las proporciones raciales eran opuestas en las dos regiones. El crecimiento de la población en la América Latina se produjo fundamentalmente mediante la mezcla racial y el crecimiento vegetativo, con grupos intermedios de mestizos desempeñando allí funciones económicas y militares para las cuales no resultaba adecuada la mano de obra esclava y para las que no había blancos disponibles⁹.

En su refutación de Tannenbaum, Harris cayó en un determinismo al menos tan extremo como el del autor que impugnaba¹⁰. Pero no fue el único que hizo esas críticas. Otros estudiosos, incluidos los que suscribían los planteamientos fundamentales de Tannenbaum, concordaban en que los sistemas productivos eran un elemento clave que había que incorporar al análisis. En la década de 1970 comenzó a surgir un nuevo consenso entre los estudiosos: los sistemas esclavistas de la América Latina y de los Estados Unidos no tenían diferencias reales y las experiencias de los esclavos inmersos en sistemas productivos comparables eran notablemente similares. Los estudios de casos confirmaron que los efectos deshumanizantes de la esclavitud de plantación atravesaban las fronteras étnicas y coloniales¹¹. Con independencia del

8. Marvin HARRIS. *Patterns of race in the Americas*. New York: Walker and Co., 1964, p. 76. Otros autores también criticaron el énfasis de Tannenbaum en los preceptos legales. Ver David BRION DAVIS. *The problem of slavery in Western culture*. Ithaca: Cornell University Press, 1966, p. 223-43 y Gwendolyn MIDLO HALL. *Social control in slave plantation societies: a comparison of St. Domingue and Cuba*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1971. Para un ejemplo más reciente, ver Thomas N. INGERSOLL. *Mammon and Manon...* [3], p. XVIII, quien afirma que «las leyes y la religión ejercieron muy poca o ninguna influencia sobre la clase de los plantadores o la condición de los esclavos o los negros libres».
9. Marvin HARRIS. *Patterns of race...* [8], p. 84-92. La explicación demográfica de Harris encontró eco después en numerosos estudios. Para un ejemplo notable, ver Carl N. DEGLER. *Neither white nor black: slavery and race relations in Brazil and the United States*. Madison: The University of Wisconsin Press, 1971, p. 41-47.
10. Para una crítica concienzuda de Harris, ver Eugene D. GENOVESE. «Materialism and idealism in the history of Negro slavery in the Americas». En: Laura FONER; Eugene D. GENOVESE (eds.). *Slavery in the New World...* [5], p. 238-255.
11. Para ejemplos de esos estudios, ver Sidney MINTZ. *Caribbean...* [5]; Manuel MORENO FRAGINALS. *El ingenio: complejo económico-social cubano del azúcar*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1978 (publicado originalmente en 1964); Gwendolyn MIDLO HALL. *Social control...* [8]; Franklin KNIGHT. *Slave society in Cuba during the Nineteenth Century*. Madison: Wisconsin University Press, 1970; Warren DEAN. *Rio Claro: A Brazilian plantation system, 1820-1920*. Stanford: Stanford University Press, 1976. Ver también Eugene D. GENOVESE. «The treatment of slaves in different countries: problems in the application of the comparative method». En Laura FONER; Eugene D. GENOVESE (eds.). *Slavery in the New World...* [5], p. 202-210.

ámbito colonial en cuestión, la voluntad del amo era la única ley válida en las plantaciones. Algunos autores llegaron a sugerir que la esclavitud en la América del Norte podría haber sido menos brutal que en América Latina, evidencia de lo cual sería la capacidad de su población esclava para reproducirse, y plantearon que los esclavos en los Estados Unidos nunca habían sido considerados como meros bienes muebles ante la ley¹².

En consecuencia, el planteamiento central de Tannenbaum —a saber, que las diferentes relaciones raciales en el periodo posterior a la emancipación tenían su base en experiencias igualmente disímiles durante la esclavitud— se vio sometido a fuertes críticas en la década de 1970. Por ejemplo, tras un atento análisis comparativo de los sistemas esclavistas de Brasil y los Estados Unidos, Carl Degler llegó a la conclusión de que fueran cuales fuesen las variantes que pudieran haber existido entre dichos sistemas, las mismas «no resultaban fundamentales para explicar las diferencias en las relaciones raciales contemporáneas» y eran «resultado de circunstancias históricas en el Nuevo Mundo, y no de una intención moral o un derecho heredados». En su estudio comparativo de África del Sur y los Estados Unidos, publicado en 1982, John Cell arribó a una conclusión similar, afirmando que las condiciones prevalecientes antes de la

última parte del siglo XIX tenían «relativamente poco que ver con los orígenes de la segregación». Emilia Viotti da Costa resumió la nueva tendencia al escribir en 1992: «En la década de 1980 los estudiosos renunciaron a la convicción de que las diferentes formas de racismo, discriminación y segregación de la sociedad moderna tuvieran su origen en sistemas esclavistas diferentes, o de que los distintos patrones raciales contemporáneos pudieran explicarse apelando a diferencias tradicionales en las percepciones sobre la raza en los mundos anglosajón e ibérico»¹³.

Pero, ¿estaba Tannebaum tan equivocado? Lo cierto es que muchas de las críticas a su libro no resultan plenamente convincentes. Para empezar, el estudio de Tannenbaum no tenía como base una premisa falsa. Aunque las sociedades latinoamericanas del periodo posterior a la emancipación no eran, como se pensó en un tiempo, utopías raciales, lo cierto que se diferenciaban de la estadounidense al menos en un aspecto fundamental: la ausencia de segregación institucional. Como ha señalado George Reid Andrews, esta diferencia no es trivial. En las sociedades no segregadas existían oportunidades de movilidad individual e integración nacional simbólica que estaban ausentes en el sur de los Estados Unidos durante el periodo de la segregación racial institucionalizada¹⁴.

12. El mejor alegato de ese tipo ha sido hecho por Carl N. DEGLER. *Neither white nor black...* [9], p. 67-75. En lo relativo a las definiciones legales relativas a los esclavos, ver también David Brion DAVIS. *The problem of slavery...*[8], p. 244-55

13. Carl N. DEGLER. *Neither white nor black...* [9], p. 92; John W. CELL. *The highest stage of white supremacy: the origins of segregation in South Africa and the American South*. Cambridge: Cambridge University Press, 1982, p. XII; Emilia VIOTTI DA COSTA. «Commentary». *Luso-Brazilian Review* (Madison). 29/2 (1992), p. 147. El modelo de Tannenbaum fue cuestionado implícitamente también por los estudiosos del racismo y la desigualdad racial en la América Latina después de la década de 1950. Esos estudios fueron espacialmente sólidos y minuciosos en el caso de Brasil, otrora proclamado el paradigma de la democracia racial en las Américas. Las investigaciones de esos estudiosos indicaban que las relaciones raciales modernas en los Estados Unidos y la América Latina no eran tan diferentes como se pensaba. Para un análisis de estos estudios, ver Thomas SKIDMORE. «Race and class in Brazil: historical perspectives». En: Pierre-Michel Fontaine, (ed.). *Race, class and power in Brazil*. Los Angeles: CAAS, 1985, p. 11-24.

14. George Reid ANDREWS. *Blacks and whites in São Paulo, Brazil, 1888-1988*. Madison: Wisconsin University Press, 1991, p. 4.

Además, a pesar de los esfuerzos realizados para demostrar que los regímenes esclavistas eran esencialmente similares y de que cualquier diferencia que pudiera haber existido entre ellos se debía a las «condiciones materiales», sigue en pie una distinción significativa: la proporción de libertos con respecto al total de la población siempre fue mucho más alta en la América portuguesa y española que en los Estados Unidos. Lo que escribiera Frederick Bowser hace varias décadas sobre las colonias españolas sigue siendo válido: «Incluso en zonas donde la institución de la esclavitud estaba profundamente enraizada, los individuos de color libres constituían un elemento muy importante de la población»¹⁵. Se ha intentado interpretar esta notable diferencia como una función de las condiciones demográficas y económicas. Entre las explicaciones más frecuentes se encuentran: que los ciclos de auge y decadencia de la economía colonial constituían incentivos para la manumisión; que los dueños de esclavos en la América española y portuguesa liberaban a los esclavos ancianos, enfermos o de poco valor en el mercado, como las mujeres; que dadas las proporciones raciales en América Latina los negros libres eran necesarios para desempeñar trabajos para los cuales no resultaban apropiados los esclavos; o que la mayoría de los esclavos alcanzaba la manumisión mediante la autocompra, clara indicación de que el

interés fundamental de los dueños no era de índole moral o religiosa, sino económica¹⁶.

Cualquiera que sean sus méritos, estos argumentos no echan por tierra una de las tesis centrales de Tannenbaum acerca de la importancia de las manumisiones y de su impacto «en el carácter y el resultado último de los dos sistemas esclavistas de este hemisferio». Como plantea Stuart Schwartz, la facilidad con la que una persona podía pasar legalmente de la esclavitud a la libertad es «un aspecto esencial para evaluar un régimen esclavista»¹⁷. Esa facilidad era obviamente mucho mayor en las colonias españolas y en Brasil que en los Estados Unidos, y algunos de los argumentos empleados para disminuir la significación de esa diferencia crucial resultan difícilmente sostenibles. Por ejemplo, hay pocos indicios de que se seleccionara sistemáticamente para su manumisión a los esclavos ancianos e improductivos. Por el contrario, abundan los que muestran que en las manumisiones «por gracia», esto es, en las que no mediaba el pago, la mayoría de los beneficiados eran jóvenes y niños. Las tasas de autocompra eran mayores entre las mujeres que entre los hombres, pero ello no se debía a que su valor fuera menor, sino que reflejaba las oportunidades económicas y sociales que las esclavas lograban crear al desempeñar ocupaciones urbanas y domésticas. Además, al menos en algunas zonas, las mujeres jóvenes alcanzaban un valor de mercado superior al de los hombres¹⁸.

15. Frederick BOWSER. «Colonial Spanish America». En: David W. Cohen; Jack P. Greene (eds.). *Neither slave nor free: the freedmen of african descent in the slave societies of the New World*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1974, p. 37.
16. Carl N. DEGLER. *Neither white nor black...* [9], p. 39-47; Thomas N. INGERSOLL. *Mammon and Manon...* [3], p. 221-34; Donald G. EDER. «Time under the Southern cross: the Tannenbaum thesis reappraised». *Agricultural History* (Berkeley). 50/4 (1976), p. 600-614; David C. RANKIN. «The Tannenbaum Thesis Reconsidered: slavery and race relations in antebellum Louisiana». *Southern Studies* (Natchitoches). 18/1 (1979), p. 5-31.
17. Frank TANNENBAUM. *Slave and...* [2], p. 69; Stuart SCHWARTZ. *Sugar plantations in the formation of Brazilian society: Bahia, 1550-1835*. New York: Cambridge University Press, 1985, p. 253.
18. Frederick P. BOWSER. «The free person of color in Mexico City and Lima: manumission and opportunity, 1580-1650». En: Stanley L. Engerman; Eugene D. Genovese (eds.). *Race and slavery in the Western Hemisphere: quantitative studies*. Princeton:

El inteligente argumento demográfico de Harris, que muchos autores han reproducido después, es muy valioso a nivel macroestructural, pero no prueba que las ideas centrales de Tannenbaum sean erróneas. Resulta difícil concebir que cuando un dueño de esclavos le concedía la libertad a uno o más de sus esclavos tuviera en cuenta abstractas consideraciones demográficas y proporciones poblacionales. Lo que los dueños de esclavos sí tenían en mente, además de sus ganancias, era servir a Dios. Esas dos categorías no eran necesariamente contradictorias, ni las motivaciones económicas eliminaban las preocupaciones de índole religiosa. Como afirma Schwartz, refiriéndose a Brasil, la explotación de los esclavos estaba ubicada en un contexto ideológico en el que predominaban las metáforas de familia, obligación, fidelidad y clientela. En el acto de la manumisión, «se evidenciaba la unidad entre ganancia y paternalismo. Aunque ello nos pueda parecer contradictorio, para los dueños de esclavos... no lo era»¹⁹.

Hay también indicios de que los cambios de metrópoli tenían un efecto sobre los regímenes esclavistas coloniales. Por supuesto, la Luisiana es un caso claro de estudio, uno que ya ha sido utilizado para poner a prueba las tesis fundamentales de Tannenbaum. En la época de la ocupación española, tras tres décadas de gobierno francés, las personas de color libres de Luisiana representaban sólo el 3,5% de la población negra total. Cuatro



La Bollera. Víctor Patricio Landaluze. Museo de Bellas Artes, La Habana.

décadas más tarde, cuando la colonia pasó momentáneamente de nuevo a manos francesas, fue comprada por los Estados Unidos y se convirtió en un estado de la unión americana, la proporción había aumentado al 12%. Un historiador ha señalado que ese crecimiento «no se produjo porque los dueños admitieran el derecho moral de sus esclavos a la libertad, como sugiriera Tannenbaum, sino porque reconocieron a los vástagos de sus secretas (y a veces no tan secretas) vidas sexuales»²⁰.

Princeton University Press, 1975, p. 331-368; Lyman L. JOHNSON. «Manumission in colonial Buenos Aires, 1776-1810». *Hispanic American Historical Review* (Durham). 59/2 (1979), p. 258-79; Stuart SCHWARTZ. «The manumission of slaves in colonial Brazil: Bahia, 1684-1745». *Hispanic American Historical Review* (Durham). 54/4 (1974), p. 603-635.

19. Stuart SCHWARTZ. *Sugar plantations...* [17], p. 257.

20. David C. RANKIN. «The Tannenbaum thesis...» [16], p. 23. Otros estudiosos de la Luisiana reconocen que bajo el gobierno español aumentaron las manumisiones, pero subrayan en sus explicaciones consideraciones de mercado u otros factores «materiales». Ver Thomas N. INGERSOLL. *Mammon and Manon...* [3], p. 211-39; Thomas M. FIEHRER. «The african presence in colonial Louisiana: an essay on the continuity of Caribbean culture». En: Robert R. Macdonald; John R. Kemp; Edward F. Haas (eds.). *Louisiana's black heritage*. New Orleans: Louisiana State Museum, 1979, p. 3-31.

Aunque ése fuera el caso, de ello no se infiere necesariamente que los planteamientos de Tannenbaum resulten totalmente indefendibles. En primer lugar, ¿por qué comenzaron los amos a reconocer a los vástagos de su sexualidad bajo el dominio español y no antes? Ciertamente las relaciones sexuales de los amos con sus esclavas precedían a la presencia española. Además, el reconocimiento por parte de los amos de su descendencia con esclavas no les confería la libertad automáticamente a esos hijos, que, por supuesto, heredaban la condición social de sus madres. Los amos no sólo tenían que reconocer a los hijos frutos de su vida sexual; también tenían que conceder o comprar su libertad.

Los críticos pisan terreno mucho más firme cuando ponen en tela de juicio el énfasis de Tannenbaum en los preceptos legales para caracterizar la esclavitud, sin hacer referencia a su transferencia efectiva —en el caso de los «precedentes»— o a su aplicabilidad y cumplimiento en las colonias. Pero incluso en este sentido sus planteamientos no pueden desecharse fácilmente. Es posible que los estatutos legales hayan sido reiteradamente violados o ignorados en la práctica, pero aun así ofrecían, como apunta David Rankin «una definición conveniente y precisa de los valores de la sociedad»²¹. Sin embargo, la legislación colonial con frecuencia reflejaba los «valores» y preocupaciones ideológicas del Estado metropolitano y no los de los grupos dominantes en las colonias, donde se suponía que esas leyes se debían aplicar. De hecho, las regulaciones locales eran invaria-

blemente más severas en lo que toca a la regulación de las actividades sociales de los esclavos y las personas de color libres. Pero ello no implica que la legislación colonial no tuviera ninguna significación para los regímenes esclavistas de las colonias. Si lo normal era ignorar las leyes, como indican varios autores, ¿por qué se molestaban los plantadores y señores en movilizarse para evitar la publicación de regulaciones que consideraban irrazonablemente favorables a los esclavos? Si no se esperaba que se aplicaran o se hicieran cumplir, ¿cómo podían dichas leyes afectar la producción y el entramado social de las colonias?²²

Aunque la aplicación de las leyes sobre los esclavos en la América Latina no ha sido estudiada sistemáticamente, hay indicios de que, en determinadas circunstancias, los esclavos podían solicitar reparación legal de los tribunales y las autoridades coloniales. En un estudio pionero sobre la esclavitud y la ley en la Nueva Granada durante el siglo XVIII, Norman Meiklejohn demostró cuatro puntos de la mayor importancia. Primero, la legislación tradicional ibérica que reglamentaba la vida de los esclavos, en especial las *Siete Partidas*, permanecía vigente. Segundo, al menos algunos esclavos apelaban a la ley para reivindicar sus derechos antes los tribunales, particularmente en casos de manumisión y de denuncias contra amos crueles. Tercero, un funcionario local, el *síndico procurador*, desempeñaba un papel importante en la protección de los derechos de los esclavos. Y por último, aunque no lo último, los

21. David C. RANKIN. «The Tannenbaum thesis...» [16], p. 6. Para una opinión similar, ver Winthrop D. JORDAN. *White over black: American attitudes toward the Negro, 1550-1812*. New York: W. W. Norton, 1977, p. 588.

22. El caso más notorio de resistencia a la aplicación en las colonias de las leyes españolas sobre los esclavos es el de la real cédula que puso en vigor el Código Negro Carolino. Ver Manuel LUCENA SALMORAL. *Los códigos negros de la América española*. Madrid: Ediciones UNESCO, 1996, p. 108-23.

tribunales a menudo fallaban a favor de los esclavos²³.

Puede que las oportunidades para la presentación de demandas por parte de los esclavos hayan sido mayores en la Nueva Granada, pero no eran excepcionales. Incluso en zonas en que la esclavitud estaba firmemente enraizada, los esclavos más próximos a los centros de la administración colonial y a la cultura y los usos del grupo dominante se sirvieron del sistema judicial y legal español para reclamar ciertos derechos. Estudios recientes llevados a cabo en colonias tan dispares como Puerto Rico, Ecuador, Perú, Guatemala y Cuba no sólo han confirmado que la legislación tradicional española se aplicaba en las colonias, sino que, en ciertas circunstancias, los esclavos lograban emplearla para su provecho²⁴. Esto no debe sorprender. De la misma forma que el sistema legal español ayudaba a sujetar a los indígenas «al sistema que también los oprimía» protegiendo ocasionalmente sus derechos, la intervención en el caso de los esclavos fomentaba la confianza en las instituciones coloniales y desalentaba otras formas de resistencia, con lo que contribuía a la estabilidad y la paz

social²⁵. En ambos casos, cierto grado de intervención estatal operaba a favor de los intereses más generales del imperio.

Estos estudios sugieren que el énfasis de Tannenbaum en los preceptos y las instituciones legales no carece de valor. Es posible que los esclavos se hallaran «efectivamente fuera del alcance del Estado colonial», como ha planteado Robin Blackburn, pero esto no quiere decir que el Estado estuviera necesariamente fuera del alcance de los esclavos más emprendedores²⁶. Estudios recientes sobre las colonias españolas en la América del Norte confirman esta afirmación. Por ejemplo, en su estudio sobre la esclavitud en la Florida, Jane Landers demuestra que los esclavos africanos, en especial las mujeres, «aprendían a manipular en su provecho las leyes, las costumbres y las convenciones de género españolas». Sus hallazgos confirman la tesis central de Tannenbaum, a saber, que «el derecho y las costumbres españolas le concedían al esclavo una personalidad moral y jurídica, así como ciertos derechos y protecciones que no se encontraban en otros sistemas esclavistas»²⁷.

23. Norman A. MEIKLEJOHN. «The implementation of slave legislation in Eighteenth-Century New Granada». En: Robert Brent Toplin (ed.). *Slavery and race relations in Latin America*. Westport: Greenwood Press, 1974, p. 176-203.

24. Benjamín NISTAL MORET. *Esclavos prófugos y cimarrones: Puerto Rico 1770-1870*. Río Piedras: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1984; Manuel LUCENA SALMORAL. *Sangre sobre piel negra: la esclavitud quiteña en el contexto del reformismo borbónico*. Quito: Ediciones Abya-Yala, 1994; Carlos AGUIRRE. *Agentes de su propia libertad: los esclavos de Lima y la desintegración de la esclavitud 1821-1854*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1993; Christine HÜNEFELDT. *Paying the price of freedom: family and labor among Lima's slaves 1800-1854*. Berkeley: University of California Press, 1994; Thomas FIEHRER. «Slaves and freedmen in colonial Central America: rediscovering a forgotten black past». *Journal of Negro History* (New York). 64/1 (1979), p. 39-57; María E. DÍAZ. *The Virgin, the king, and the royal slaves of El Cobre: negotiating freedom in colonial Cuba, 1670-1780*. Stanford: Stanford University Press, 2000; Gloria GARCÍA. *La esclavitud desde la esclavitud: la visión de los siervos*. México D.F.: Centro de Investigación «Ing. Jorge Tamayo», 1996; Digna CASTAÑEDA. «The female slave in Cuba during the first half of the Nineteenth Century». En: Verene Shepherd; Bridget Brereton; Barbara Bailey (eds.). *Engendering history: Caribbean women in historical perspective*. New York: St. Martin's Press, 1995, p. 141-154.

25. Ward STAVIG. *The world of Tupac Amaru: conflict, community, and identity in colonial Peru*. Lincoln: University of Nebraska Press, 1999, p. 85. Sobre la compleja interacción entre el Estado colonial y las comunidades indígenas, ver también Steve J. STERN. *Peru's Indian peoples and the challenge of Spanish conquest. Huamanga to 1640*. Madison: University of Wisconsin Press, 1982.

26. Robin BLACKBURN. *The making of New World slavery: from the Baroque to the Modern, 1492-1800*. London: Verso, 1997, p. 18.

27. Jane LANDERS. *Black society...* [3], p. 2 y 139.



Misa. Johann Moritz Rugendas. *Voyage pittoresque dans le Brésil* (1835)

Algunos estudios legales relativos a los esclavos en la Luisiana coinciden con este juicio. Bajo el dominio español, y a pesar de que se siguió aplicando la legislación francesa, se respetó, al menos ocasionalmente, el derecho de los esclavos a la autocompra, lo que dio origen a un notable incremento de la población de color libre²⁸. La adquisición de la colonia por la unión norteamericana, a su vez, «dio inicio a una era en la que disminuyeron los derechos de los esclavos, dado que los plantadores de la Luisiana de repente se

vieron posibilitados de hacer sus propias leyes». Con la «norteamericanización» de la colonia y de su sistema legal, se eliminaron o restringieron considerablemente tres de los más importantes derechos de los esclavos, como eran la autocompra, el disponer de un peculio y el recurrir ante la ley contra un amo cruel. Según Judith Schafer, dos años después de la adquisición de Luisiana por la Unión Americana «muchos de los rasgos relativamente benignos de la legislación española habían desaparecido»²⁹.

Las oportunidades creadas por el derecho español para las demandas de esclavos eran en buena medida una función de la interacción entre los diferentes elementos de la compleja jerarquía institucional de las colonias. Esa jerarquía comenzaba en los órganos locales de poder, representados por los cabildos, y terminaba en la corte. El grado en que los dueños de esclavos detentaban el monopolio del poder y la autoridad era, para decirlo de una manera simple, inversamente proporcional a las oportunidades de los esclavos para beneficiarse de la legislación. Por regla general, los dueños de esclavos de la América española nunca disfrutaron de un monopolio del poder, y tuvieron que vérselas con la intromisión de las autoridades coloniales y de la Iglesia. No obstante, esta generalización contenía variaciones significativas, tan grandes, en realidad, que la afirmación resulta prácticamente inútil. Igual que cualquier intento de definir «la naturaleza» de la esclavitud en una colonia dada es una empresa sembrada de peligros, atribuirle un carácter general a las relaciones de poder entre la metrópoli y sus colonias es un ejercicio de

28. Hans W. BAADE. «The law of slavery in Spanish Louisiana, 1769-1803». En: Edward F. Haas (ed.). *Louisiana's legal heritage*. Pensacola: The Perdido Bay Press, 1983, p. 43-86; Judith K. SCHAFER. *Slavery, the civil Law, and the Supreme Court of Louisiana*. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1994.

29. Judith K. SCHAFER. *Slavery...* [28], p. 6.

valor limitado. Los constantes cambios en esas jerarquías de autoridad creaban oportunidades y limitaciones cambiantes no sólo para los esclavos, sino también para sus dueños.

De ahí que las importantes cuestiones planteadas por Tannenbaum, sus seguidores y sus críticos deban analizarse en referencia a una sociedad esclavista concreta, y que ese análisis deba estar vinculado a fases específicas de su evolución política y económica. Incluso los estudiosos que suscriben sus puntos de vista concuerdan en que uno de los principales defectos de *Slave and Citizen* era su vaguedad cronológica y geográfica. Es en respuesta a este problema que propongo ahora estudiar algunos aspectos de la esclavitud en Cuba. La isla constituye un excelente estudio de caso, al menos por dos razones. Primero, la esclavitud fue la forma preponderante de explotación de la fuerza de trabajo en la colonia durante más de trescientos años. Segundo, a inicios del siglo XIX la isla se convirtió en una floreciente sociedad esclavista de plantación y en uno de los principales productores mundiales de azúcar de caña. En otras palabras, en el caso cubano resulta posible evaluar, en una misma colonia, si las leyes ibéricas relativas a los esclavos se transfirieron durante el periodo colonial temprano y determinar si sobrevivieron a la fuerza deshumanizante de la agricultura comercial.

De hecho, la experiencia cubana ha sido utilizada tanto por simpatizantes como por detractores de Tannenbaum. Algunos autores la han empleado para demostrar el papel que desempeñaron el Estado colonial y la iglesia en mitigar la explotación de los esclavos. No obstante, la mayoría estima que Cuba es un ejemplo de la falsedad de las ideas de Tannenbaum, ya que el auge de la economía de plantación deshumanizó a los esclavos, para decirlo con las tan citadas palabras de Mintz, en un grado similar al de Jamaica y la América del Norte³⁰.

Parte del problema ha consistido en el uso selectivo de datos procedentes de periodos muy distintos del desarrollo de la isla, o de zonas con vínculos diversos con la economía exportadora. Como en Brasil, donde los estudios sobre la sociedad colonial se han centrado en el monocultivo, la esclavitud y el latifundio, en Cuba ha existido una tendencia a identificar la esclavitud con la economía de plantación³¹. Algunos historiadores han extrapolado los rasgos deshumanizantes de la agricultura de plantación para caracterizar toda la trayectoria de la esclavitud en la isla, con independencia de variaciones cronológicas o regionales³². Ese enfoque pasa por alto el hecho crucial de que, en la isla, la economía de plantación no se desarrolló hasta el

30. Sidney MINTZ, «Slavery and emergent...» [5], p. 31. El escrito de Mintz ha sido citado con frecuencia posteriormente. Para algunos ejemplos, ver Arnold A. SIO, «Interpretations of slavery...» [6], p. 307, y Donald G. EDER, «Time under the Southern cross...» [16], p. 612. Con mucho, el mejor estudio de la esclavitud cubana desde la óptica de Tannenbaum es el de Herbert S. KLEIN, *Slavery in the Americas...* [7].

31. Para un análisis de este problema en Brasil, ver B. J. BARICKMAN, *A Bahian counterpoint: sugar, tobacco, cassava, and slavery in the Recôncavo, 1780-1860*. Stanford: Stanford University Press, 1998.

32. Este punto de vista no es raro en los manuales de historia cubanos. Por ejemplo, ver Julio LE RIVEREND, *Selección de lecturas de historia de Cuba*. La Habana: Editora Política, 1984; Sergio AGUIRRE, *Historia de Cuba*. La Habana: Editorial Nacional, 1966, 3 v.; Jesús GUANCHE, *Procesos etnoculturales de Cuba*. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1983; Calixto MASÓ VELÁZQUEZ, *Historia de Cuba*. Miami: Ediciones Universal, 1976. Otros historiadores hablan de plantaciones azucareras en Cuba en el periodo colonial temprano. Por ejemplo, ver Eduardo TORRES-CUEVAS; Eusebio REYES, *Esclavitud y sociedad: notas y documentos para la historia de la esclavitud negra en Cuba*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1986; Francisco CASTILLO MELÉNDEZ, «Un año en la vida de un ingenio cubano (1655-1656)», *Anuario de Estudios Americanos* (Sevilla), 39 (1982), p. 449-463.

último cuarto del siglo XVIII. El desarrollo tardío de la economía de plantación en Cuba significó que el nuevo orden tuvo que ser impuesto a contrapelo de tradiciones culturales y costumbres sociales previas, y de algún modo reconciliado con ellas.

De ahí que un mejor conocimiento de la esclavitud en la isla durante el largo periodo previo a fines del siglo XVIII resulte de la mayor importancia para evaluar el impacto de la agricultura de plantación sobre las formas tradicionales de vida de los esclavos, y sobre las posibilidades de movilidad que pudieron haberse desarrollado. El auge de la esclavitud de plantación debe ser analizado en relación con las formas tradicionales de esclavitud que florecieron en Cuba durante el periodo colonial temprano. Dado que ése es con mucho el periodo menos estudiado de la historia de Cuba en general, y de su esclavitud en particular, dedicaré a él lo fundamental de lo que resta de este artículo³³. En la siguiente sección se muestra que durante ese periodo los esclavos de la colonia crearon ciertas oportunidades para plantear demandas y ascender socialmente. Una sección final explora brevemente algunos de los efectos que produjo el sistema de plantación en la esclavitud de la isla.

Debo señalar desde el inicio que aunque el análisis de la esclavitud colonial temprana se nutre, en buena medida, de mis investigaciones con fuentes primarias, para el periodo 1790-1860 he empleado sobre todo fuentes

secundarias. También, que el análisis que sigue no intenta ser un resumen comprensivo o equilibrado de la evolución de la esclavitud en Cuba, ni de los abundantes estudios sobre el tema. Lo que sí intenta es identificar algunas de las oportunidades que los esclavos fueron capaces de crear para presentar demandas, reclamar derechos y acceder a las instituciones coloniales, en especial durante el largo periodo previo a la plantación.

La esclavitud en la Cuba pre-plantacionista (1550-1770)

A partir de mediados del siglo XVI, los esclavos africanos constituyeron la fuente fundamental de mano de obra en la isla. Unos pocos centenares habían sido importados para compensar la pérdida de la población indígena, casi aniquilada ya en 1550. Tras el ocaso del efímero ciclo minero de principios del siglo XVI, la mayoría de esos esclavos se emplearon en actividades urbanas, o en labores agrícolas en las cuales frecuentemente lograban labrarse una pequeña cuota de autonomía personal e incluso financiera.

Parece ser que en los principales centros urbanos, donde vivía una gran proporción de los esclavos, había ciertas posibilidades de movilidad. Los esclavos y el creciente grupo de los negros y mulatos libres casi monopolizaban el importante sector terciario de La Habana a fines del siglo XVI y

33. Aunque no existe un estudio comprensivo de la esclavitud preplantacionista en Cuba, varias obras importantes han abordado el tópico. Además de Herbert S. KLEIN, *Slavery in the Americas...*[7], resultan especialmente útiles LEVI MARRERO, *Cuba: economía y sociedad*. Madrid: Editorial Playor, 1975-1992, especialmente vol. 2, p. 346-70 y vol. 5, p. 25-42; ISABELLO MACÍAS, *Cuba en la primera mitad del siglo XVII*. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1978; FRANCISCO CASTILLO MELÉNDEZ, «Un año en la vida...» [32], p. 449-63. Aunque superadas, HUBERT AIMES, *A history of slavery in Cuba, 1511 to 1868*. New York: Putman's Sons, 1907 y FERNANDO ORTIZ, *Los negros...*[1], siguen siendo contribuciones valiosas. Una comunidad de esclavos que ha recibido considerable atención es la de El Cobre, estudiada por JOSÉ LUCIANO FRANCO, *Las minas de Santiago del Prado y la rebelión de los cobreros, 1530-1800*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1975; LEVI MARRERO, *Los esclavos y la virgen del Cobre*. Miami: Ediciones Universal, 1980; MARÍA E. DÍAZ, *The Virgin, the king...*[24].

durante el XVII. La Habana, que era una importante ciudad portuaria, recibía anualmente la visita de las flotas de Nueva España y Tierra Firme, que traían consigo a miles de consumidores a quienes había que alimentar, alojar y entretener. Estas oleadas cíclicas de población y dinero tuvieron un marcado impacto inflacionario en el mercado local, donde los servicios y mercancías alcanzaban altos precios mientras las flotas permanecían ancladas en el puerto. Tanto era así, que los residentes de La Habana se referían al intervalo entre la estancia de las flotas como «el tiempo muerto», expresión que serviría después para designar el periodo que mediaba entre las zafras azucareras³⁴.

Los negros, tanto libres como esclavos, eran quienes prestaban muchos de esos servicios y lograban sacar provecho de esas oportunidades. En especial las mujeres negras copaban muchos de esos espacios económicos. Las autoridades locales se quejaban con frecuencia de que la mayoría de las tabernas y alojamientos de la ciudad, que en 1673 alcanzaban ya la cifra de ochenta, eran de su propiedad u operados por ellas. También eran las esclavas y negras libres quienes se hacían cargo de satisfacer las necesidades del creciente número de soldados destacados en La Habana, desempeñándose como lavanderas, cocineras y prostitutas³⁵.



Miniatura, *Román de Troie*, s. XV.

Los esclavos también desempeñaban numerosos oficios como artesanos y por la destreza que alcanzaban en los mismos llegaban a hacerse oficiales y maestros. El procurador de La Habana denunciaba en 1650 que muchos abrían sus propios establecimientos. Aproximadamente un siglo después, en 1761, Martín Félix de Arrate señalaba en su notable crónica de La Habana que los «negros y pardos», eran «muy diestros y capaces en el

34. Sobre el desarrollo de la economía marítima y de servicios en La Habana, ver Alejandro de la FUENTE; César GARCÍA DEL PINO; Bernardo IGLESIAS DELGADO. «Havana and the fleet system: trade and growth in the periphery of the Spanish empire, 1550-1610». *Colonial Latin American Review* (Albuquerque). 5/1 (1996), p. 95-115; Levi MARRERO. *Cuba...*[33], vol. 2, p. 138-64.

35. ARCHIVO DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE LA HABANA, Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana, originales, 1672-1683, fol. 45. Las autoridades locales se quejaban constantemente del gran número de esclavas dedicadas a las actividades de servicios, y trataron en repetidas ocasiones de limitar su autonomía. En 1553, 1557, 1599, 1601, 1620, 1654 y 1698 se dictaron regulaciones locales dedicadas específicamente a las actividades de estas mujeres negras. *Actas Capitulares del Ayuntamiento de la Habana, 1550-1578*. La Habana: Municipio de La Habana, 1937-1946, I, vol. 2, p. 75 y 150; ARCHIVO DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE LA HABANA, Actas Capitulares del Ayuntamiento de la Habana, trasuntadas, 1599-1604, f. 474v y 521; 1616-1624, f. 126; 1648-1654, f. 874; 1691-1702, f. 207. En las regulaciones generales relativas a las actividades de los esclavos en zonas urbanas también hubo referencias a las mujeres. Ver la Tabla 1 más adelante.

desempeño de oficios mecánicos, a los que a menudo se dedican, y en los que se convierten en maestros distinguidos, no sólo en los más bajos como los de zapatero, sastre, albañil y carpintero, sino también en los que requieren más habilidad y genio, como los de la platería, la escultura, la pintura y el tallado, como demuestran sus maravillosas obras»³⁶.

Un gran número de esos esclavos trabajaba por el llamado sistema de jornal, que fue muy común en las ciudades cubanas, así como en otras colonias, hasta el siglo XIX. Según el mismo, los esclavos debían pagar un monto diario o «jornal» a sus amos, pero estaban obligados a encontrar por sí mismos ocupación y patrono, como si fueran trabajadores libres. Al hacerlo, los esclavos podían maximizar su autonomía personal y financiera, y adquirir valiosos contactos y conocimientos acerca de las instituciones coloniales y su funcionamiento.

Aunque las oportunidades de los esclavos empleados en las zonas urbanas eran mayores, algunos esclavos rurales encontraron vías para participar también en el mercado urbano. Hasta bien avanzado el siglo XVII, la línea que separaba las áreas «rurales» de las «urbanas» era no sólo porosa, sino de muy difícil definición. La mayoría de los esclavos que no estaban empleados en las ciudades vivían en las pequeñas estancias

que, a manera de cinturón agrícola, rodeaban los centros urbanos. Como el principal propósito económico de esas pequeñas unidades era abastecer de alimentos el mercado local, el acceso fácil a la ciudad resultaba de la mayor importancia. Lo mismo era cierto para algunos ingenios, ubicados lo bastante cerca de las áreas urbanas como para que las autoridades eclesiásticas decretaran en fecha tan tardía como 1680 que a menos que hubiera una iglesia en el lugar, los esclavos empleados en ellos debían ser trasladados al pueblo todos los domingos para oír misa³⁷. Además de esta cercanía física de los esclavos a las ciudades y pueblos, las autoridades locales se quejaban de que un gran número de esclavos y negros libres se ganaban la vida recorriendo las estancias y comprando productos que revendían en las ciudades, canalizando hacia los mercados locales las producciones de los esclavos rurales³⁸.

El propósito y la estructura de esas unidades rurales diferían mucho de las plantaciones del siglo XIX. Dedicadas a la producción de alimentos para el consumo local, las estancias por lo general empleaban a uno o dos esclavos que vivían en el lugar con el dueño y su familia. En el periodo comprendido entre 1578 y 1610, sólo un 14,5% de las estancias de La Habana empleaban esclavos. El promedio de esclavos empleados por esas unidades no había cambiado a principios del

36. ARCHIVO DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE LA HABANA, Actas Capitulares del Ayuntamiento de la Habana, trasuntadas, 1648-1654, f. 618; José Martín Félix de ARRATE. *Llave del Nuevo Mundo*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1949, p. 95. Sobre el creciente sector de artesanos de La Habana, ver Leandro S. ROMERO. «Fichero ilustrado». *Revolución y Cultura* (La Habana). 36 (1975), p. 78-82; Leandro S. ROMERO. «Orfebrería habanera en las islas Canarias». *Universidad de La Habana* (La Habana). 222 (1984), p. 390-407.

37. Ver el l.2, tit.1, const.4 del Sinodo Diocesano de 1684 en Juan GARCÍA DE PALACIOS. *Sinodo Diocesano que de orden de S. M. celebró el Ilmo. Sr. Dr. D. Juan García de Palacios, Obispo de Cuba en Junio de [1684]*. La Habana: Oficina de Arazoza y Soler, 1814, p. 46.

38. ARCHIVO DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE LA HABANA, Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana, trasuntadas, 1599-1604, f. 474v.; 1648-1654, f. 874; 1691-1702, f. 207.

siglo XVIII³⁹. Ubicados a mayor distancia de las ciudades, los hatos y corrales de ganado empleaban a un número igualmente reducido de esclavos, que vivían en un estado de práctica autonomía. Su ocupación fundamental era la producción de cueros y el traslado periódico de reses para ser sacrificadas en la ciudad, en especial durante la visita de las flotas trasatlánticas. Los inventarios de esas fincas rara vez mencionan la presencia de capataces o administradores blancos en las unidades⁴⁰.

Incluso en los ingenios, que eran, por supuesto, las unidades que demandaban la mayor concentración de trabajadores, el número de esclavos por unidad era muy reducido cuando se compara con el de las plantaciones en otros lugares, o en la misma Cuba en fecha posterior. Un estudio de 40 ingenios de la jurisdicción de La Habana durante el periodo 1650-1699 arrojó que los ingenios empleaban entre 15 y 20 esclavos. No fue hasta la década de 1770 que esas cifras comenzaron a cambiar. Según otro estudio de 21 ingenios durante el periodo 1704-1766, el número promedio de esclavos seguía siendo el mismo, y sólo uno empleaba más de 30. Como en el siglo anterior, el mayor ingenio usaba 38 esclavos⁴¹.

Por tanto, en el largo periodo que precedió al surgimiento de la economía de plantación azucarera en el occidente de Cuba, los esclavos no estaban sujetos a las condiciones extremas de la agricultura de plantación. La limitada inmigración española a la isla exigió que realizaran actividades económicas que

de otra forma quizás les hubieran estado vedadas y que supusieran un cierto grado de autonomía. Gracias a su activa participación en transacciones mercantiles y otras relaciones sociales, los esclavos lograron adquirir importantes conocimientos acerca de la economía de mercado y la cultura dominante. Ese aprendizaje cultural incluía el conocimiento de que, bajo las leyes españolas, los esclavos tenían ciertos derechos y podían apelar a las autoridades —a una autoridad superior a la de sus amos— para lograr que se cumplieran.

Como es ampliamente conocido, el código fundamental que regulaba la esclavitud en Castilla eran las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, que datan del siglo XIII. Inspirado en fuentes romanas, ese notable *corpus* legal contenía no sólo regulaciones específicas relativas a diversos aspectos de la vida de los esclavos, sino también principios generales de orden legal y moral sobre la institución de la esclavitud, que pueden resumirse en tres consideraciones generales. En primer término, la esclavitud era contra natura: el estado natural de los hombres, y su más valioso atributo, era la libertad. De ahí se desprendía que los jueces y las leyes debían favorecerla. En segundo lugar, aunque los amos tenían el control absoluto de sus esclavos, incluidos los bienes que pudieran recibir, sus derechos tenían varias limitaciones, en especial en lo tocante a la integridad personal de los esclavos. Por ejemplo, en caso de asesinato, la ley

39. El estimado para 1578-1610 se realizó a partir de una base de datos de 271 contratos e inventarios de propiedades rurales creada a partir de datos tomados de registros notariales habaneros. Para inicios del siglo XVIII, ver Fe IGLESIAS GARCÍA. «La estructura agraria de La Habana, 1700-1775». *Arbor* (Madrid). 547-548 (1991), p. 91-112. (*Raíces históricas del pueblo cubano, I*).

40. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Protocolos Notariales de la Habana, Escribanía Fornaris, 1693, f. 192; 1694, f. 169 y 508v.

41. Alejandro de la FUENTE. «Los ingenios de azúcar en La Habana del siglo XVII: estructura y mano de obra». *Revista de Historia Económica* (Madrid). 9/1 (1991), p. 35-67; Mercedes GARCÍA RODRÍGUEZ. «Ingenios habaneros del siglo XVIII». *Arbor* (Madrid). 547-548 (1991), p. 113-38. (*Raíces históricas del pueblo cubano, I*).

no distinguía entre víctimas libres y esclavas. En tercer lugar, se reconocían y protegían ciertos derechos de los esclavos. Algunos dependían de la voluntad del amo, como los de poseer un peculio personal y el derecho a la autocompra; otros podían ejercerse aún contra la voluntad del amo, como el de contraer matrimonio⁴².

Es difícil establecer si este código «se transplantó casi intacto al Nuevo Mundo», como afirma Klein, pero no hay dudas de que esa legislación se observó al menos en alguna medida en la Cuba pre-plantacionista⁴³.

Por ejemplo, el acceso de los esclavos a los sacramentos católicos del bautismo y el matrimonio era bastante común. En La Habana del siglo XVII (1585-1644), los esclavos participaron en una cuarta parte de los matrimonios celebrados, porcentaje que parece estar más o menos en concordancia con la proporción que representaban de la población adulta de la ciudad. En Sancti Spiritus, un pueblo ubicado en el centro de la isla, participaron en una quinta parte de los matrimonios celebrados entre 1621 y 1670⁴⁴. También en los bautismos estaban bien representados. Los hijos de madres esclavas representaron

un 16% de todos los bautismos de niños registrados en La Habana entre 1590 y 1610, y un 12% en Sancti Spiritus entre 1597 y 1659. Las autoridades eclesiásticas también le administraron los sacramentos a un gran número de esclavos africanos adultos. En La Habana, los mismos representaban una cuarta parte de los bautizados. En Sancti Spiritus, un 13%⁴⁵.

A través de estos sacramentos, accedían a la «comunidad moral» y establecían vínculos sociales y religiosos con otros esclavos y con individuos que ocupaban posiciones superiores en la jerarquía sociorracial. El hecho de que en muchos de sus bautizos y matrimonios los padrinos fueran blancos indica no sólo la existencia de redes sociales interraciales, sino también que los negros consideraban esos contactos potencialmente beneficiosos para sí y para sus hijos⁴⁶. Los padrinos podían resultar valiosos, sobre todo cuando los esclavos entraban en contacto con instituciones coloniales para reclamar derechos consagrados por las leyes españolas.

El más importante de esos derechos, el de comprar la libertad, estaba firmemente establecido en la legislación española y era protegido por ella. Los esclavos reclamaron este

42. Para un análisis de las disposiciones sobre los esclavos en las Siete Partidas, ver David Brion DAVIS. *The problem of slavery...*[8], p. 102-106; Alan WATSON. *Slave law...* [5], p. 40-47; Fernando ORTIZ. *Los negros...*[1], p. 309-316. Para este artículo he utilizado la versión de las Siete Partidas que aparece en *Los códigos españoles concordados y anotados*. Madrid: La Publicidad, 1847-1851. 12 v.

43. Herbert S. KLEIN. *Slavery in the Americas...*[7], p. 59.

44. Para un análisis de las cifras de La Habana, ver Alejandro de la FUENTE. «Los matrimonios de esclavos en La Habana, 1585-1645». *Ibero-Amerikanisches Archiv* (Berlin). 16/4 (1990), p. 507-28. Las cifras de Sancti Spiritus tienen como base el Libro Primero de Matrimonios de Blancos y de Color. Parroquial del Espíritu Santo, Sancti Spiritus, 1623-1739. Archivo Nacional de Cuba, Fondo Valle Iznaga.

45. Las cifras tienen como base el ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE LA HABANA, Libro Barajas de Bautismos de Españoles, 1590-1610; el Archivo de la Parroquial Mayor de la Villa de Sancti Spiritus, Libro Primero de Bautizos, en Archivo Nacional de Cuba, Fondo Valle Iznaga.

46. El 41% de los padrinos de los niños esclavos en La Habana y el 52% en Sancti Spiritus eran blancos. Por el contrario, la abrumadora mayoría de los padrinos de esclavos adultos eran también esclavos (78% en La Habana y 59% en Sancti Spiritus). El 41% de los testigos y padrinos de matrimonios de esclavos celebrados en La Habana también eran blancos. Los resultados de mis investigaciones relativas a los patrones de padrinazgo en Cuba durante el periodo colonial temprano coinciden en líneas generales como los de Stuart SCHWARTZ. *Slaves, peasants, and rebels: reconsidering Brazilian slavery*. Urbana: University of Illinois Press, 1992, p. 137-60.



«Esclavos refinando azúcar». Theodore de Bry, América por (1595).

derecho en toda la América española. En Cuba, como en el resto de la región, el acceso a la libertad era una función de varios factores. Las manumisiones, fuera por autocompra o por «gracia» del amo, eran más numerosas en el caso de los esclavos criollos que en el de los africanos, en las mujeres que en los hombres) y en los mulatos que en los descritos como negros. En contra de lo que

han sugerido algunos de los críticos de Tannenbaum, en La Habana del siglo XVII la mitad de los esclavos que obtuvieron su libertad tenían menos de 15 años de edad. Tres cuartas partes de esos esclavos jóvenes eran descritos como «mulatos», esto es, frutos de relaciones sexuales interraciales, y es posible que sus padres u otros parientes blancos los hayan ayudado a obtener la libertad⁴⁷.

47. Para un análisis de la manumisión en el periodo colonial temprano en La Habana, ver Alejandro de la FUENTE. «A alforria de escravos em Havana, 1601-1610: primeiras conclusões». *Estudos Econômicos* (São Paulo). 20/1 (1990), p. 139-59. También he utilizado los resultados de una muestra de 300 cartas de manumisión conservadas en ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Protocolos Notariales de La Habana, Escribanía Fornaris, 1690-1694. Para los siglos XVIII y XIX, ver Manuel MORENO FRAGINALS. «Peculiaridades de la esclavitud en Cuba». *Del Caribe* (Santiago de Cuba). 4/8 (1987), p. 4-10. Para el periodo 1790-1880, ver Laird W. BERGAD; Fe IGLESIAS GARCÍA y María del Carmen BARCIA. *The Cuban slave market, 1790-1880*. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1995, p. 131-141.

Lo cierto es que a inicios del siglo XVII el 25% de las autocompras de esclavos realizadas en La Habana se hizo con la ayuda financiera de individuos blancos, que donaron o prestaron el dinero para pagar la libertad. Los parentescos y redes sociales mencionados con anterioridad pueden haber jugado un papel importante en esos casos. En 1604, un dueño de esclavos que compró la libertad de un esclavo mulato declaró que lo hacía para servir a Dios y porque el padre del esclavo era «un hombre honrado y mi amigo»⁴⁸. En 1691, Nicolás de Landueta, un hombre blanco, compró la libertad su ahijado, el esclavo Pablo, de siete años de edad⁴⁹.

La compra de la libertad se veía facilitada por una práctica legal que se desarrolló en la isla, y quizás en otras colonias españolas, a partir del siglo XVI: la coartación. La coartación le concedía a los esclavos la posibilidad de acordar con sus amos un precio definitivo para obtener su libertad y de depositar dinero hasta llegar al monto fijado. En otras palabras, compraban su libertad a plazos. Estos acuerdos eran legalmente vinculantes y limitaban de varias maneras la capacidad del amo para disponer del esclavo. Un esclavo que hubiera pagado una parte de su precio no podía ser hipotecado o vendido por un valor superior. Por ejemplo, en 1690, el esclavo Juan, un criollo

de 17 años, fue vendido cuatro veces, siempre con la condición de que se le liberaría en cuanto pagara los 200 pesos que le faltaban por abonar de su valor total. En la práctica, sólo se vendía una fracción de Juan. El mismo era dueño de una parte de sí⁵⁰. Y no se trata de un mero legalismo. A los compradores se les informaba que sólo podían usar la parte del esclavo por la cual pagaban. Si lo empleaban a tiempo completo, tenían que destinar una parte proporcional de su trabajo a la compra de su libertad. De ahí que cuando en 1690 se vendió a una esclava mulata que ya había pagado la mitad de su precio, el contrato estipulara que tenía derecho a disponer de la mitad de su trabajo, y que la venta era «sólo de la mitad de la dicha mulata»⁵¹.

Los investigadores aún no han podido desentrañar los orígenes y la evolución de esta curiosa figura legal, pero su inicio parece remontarse a los estatutos legales tradicionales de Castilla. Una ley de las Siete Partidas regulaba una forma de venta condicional en la cual el esclavo debía ser manumitido en ciertas circunstancias. Esas condiciones no podían alterarse, lo cual constituía uno de los elementos principales de la institución tal como evolucionó posteriormente⁵². Se ha afirmado a menudo que ésta fue una práctica estrictamente cubana y que surgió en el siglo XVIII⁵³.

48. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Protocolos Notariales de La Habana, Escribanía Fornaris, 1604, f. 452.

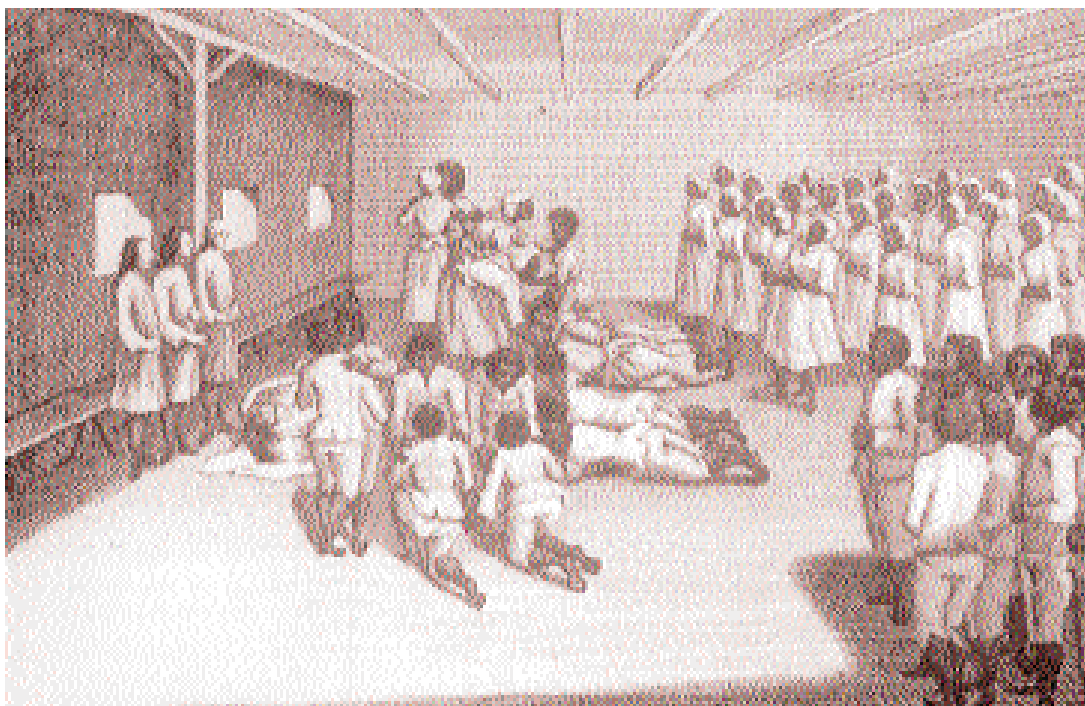
49. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Protocolos Notariales de La Habana, Escribanía Fornaris, 1691, f. 273. En otros casos era el progenitor blanco quien compraba la libertad de sus hijos. Por ejemplo, ver el testamento de Isabel Valderas en ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Protocolos Notariales de La Habana, Escribanía Regueira, 1606, f. 207.

50. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Protocolos Notariales de La Habana, Escribanía Fornaris, 1690, f. 140, 144, 262 y 363.

51. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Protocolos Notariales de La Habana, Escribanía Fornaris, 1690, f. 44.

52. Véase: *Los códigos españoles*... [42], vol. 3, p. 614, ley 45, tít. 5, part. 5. Pero no existía ninguna ley específica que regulara la coartación, que parece haber sido una práctica legal consuetudinaria. Ver Alan WATSON. *Slave law*... [5], p. 51; Manuel LUCENA SALMORAL. «El derecho de coartación del esclavo en la América Española». *Revista de Indias* (Madrid). LIX/216 (1999), p. 357-74.

53. Fernando ORTIZ. *Los negros*... [1], p. 285-90; Rolando MELLAFE. *Breve historia de la esclavitud en América Latina*. México D.F.: Secretaría de Educación, 1973, p. 136; Carlos E. DEIVE. *La esclavitud del negro en Santo Domingo, 1492-1844*. Santo Domingo: Museo del Hombre Dominicano, 1980, vol. 2, p. 409. Para un ejemplo reciente en el que el carácter supuestamente tardío de la política de coartación resulta central para una crítica del enfoque de Tannenbaum, ver Thomas N. INGERSOLL. *Mammon and Manon*... [3], p. 221-232.



Bautizo de esclavos, dibujo en David Cranz, *Kurze, zuverlässige Nachricht von der, unter dem Namen der Böhmisch-Mährischen Brüder bekannten, Kirche Unitas Fratrum*.

En realidad, fue utilizada en la isla al menos a partir de fines del siglo XVI —el primer caso que he encontrado se remonta a 1597— y es mencionada en regulaciones reales del siglo XVII. Una real cédula de 1673 relativa a los esclavos del rey de la comunidad de El Cobre, les ordenaba a los funcionarios de la Corona que les permitieran *cortarse*, aunque fuera pagando a plazos por su libertad. Más revelador, quizás, es el hecho de que en la primera edición del *Diccionario de la Lengua Castellana*, de 1729, una de las acepciones del lema «cortarse» fuese la acción mediante la cual un esclavo «ajustaba» con su amo el precio de su libertad⁵⁴.

Parece ser que los principios tradicionales de la legislación ibérica relativos a la libertad y el matrimonio, dos de los más importantes derechos consagrados en las leyes sobre esclavos, se ratificaron y aplicaron, hasta cierto punto, en el mundo colonial, como indicara Tannenbaum años atrás. Además, la legislación posterior confirmó que se debían observar esos derechos. La Corona insistió en que el derecho de los esclavos a contraer matrimonio libremente debía ser ratificado incluso contra la voluntad de sus amos, y confirmó, como señalaban las Siete Partidas, que el matrimonio no constituía una causal de libertad. Esa política no tenía como única

54. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Protocolos Notariales de La Habana, Escribanía Regueira, 1597, f. 134; ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Academia de la Historia, leg. 89, n. 548: «Ortiz de Matienzo a Su Majestad, La Habana, 23 de noviembre de 1673»; REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. *Diccionario de la Lengua Castellana*. Madrid: Imprenta de Francisco del Hierro, 1729, p. 626.

base consideraciones de orden religioso. Numerosos decretos reales estipulaban claramente que se debía alentar los matrimonios para que los esclavos fueran pacíficos y «seguros». Como ha apuntado Davidson, «una vida matrimonial protegida no era sólo una obligación cristiana, sino también un medio esencial para garantizar la tranquilidad y estabilidad de los esclavos»⁵⁵.

La legislación colonial también ratificó los principios de que los amos tenían el derecho a concederles la manumisión a sus esclavos, y de que debía permitirse a estos últimos comprar su libertad. En una real cédula de 1529 se le preguntaba al gobernador de Cuba si resultaba factible concederles la libertad a los esclavos después de que hubieran servido un tiempo y pagado cierta cantidad de dinero. Cuando se le informó al rey que muchos soldados habían tenido hijos con esclavas en La Habana a fines del siglo XVI, éste rápidamente dio instrucciones de que se les diera a dichos soldados preferencia en la compra «si» su intención era liberarlos. La Corona también reiteró el derecho de los esclavos a iniciar procesos legales para obtener su libertad⁵⁶.

Y esto es algo que los esclavos hicieron. Hay datos de que en algunos casos los esclavos pudieron hacer uso de la ley para plan-

tear demandas y crear oportunidades de progreso. Y también de que, al menos en ocasiones, los tribunales coloniales y los funcionarios de la Corona no tuvieron más alternativa que hacer cumplir la ley. Por otro lado, los documentos parecen indicar que muchos amos hicieron todo lo que estaba en su poder para circunscribir lo más posible la autonomía y la movilidad de sus esclavos. En 24 apelaciones relativas a casos de libertad de esclavos entre 1668 y 1698 ubicadas en La Habana, catorce fueron de dueños de esclavos contra sentencias favorables a los esclavos dictadas por tribunales de instancias inferiores⁵⁷. Según Moreno Fragonal, en La Habana del siglo XVIII un 8% de las manumisiones incluidas en su estudio dieron lugar a querellas legales en las que los esclavos obtuvieron veredictos favorables.⁵⁸ Cuando, en el curso de los litigios se sospechaba que uno de los jueces designados era parcial al amo, los esclavos tenían derecho a impugnarlo y a pedir que se designara a un nuevo juez para decidir en el caso⁵⁹. Al menos en principio, los esclavos tenían derecho a presentar sus demandas ante autoridades judiciales superiores, aunque los costos que ello suponía deben haber hecho esos procedimientos poco frecuentes, incluso excepcionales. A pesar de esas dificultades, en 1693

55. David M. DAVIDSON. «Negro slave control and resistance in colonial Mexico, 1519-1650». En: Richard Price (ed.). *Maroon societies: rebel slave communities in the Americas*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1979, p. 85. Para un análisis de ciertos aspectos de esa legislación, ver Alejandro de la FUENTE, «Los matrimonios de esclavos...» [44], p. 507-528.

56. R. C. 9-11-1526, ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Academia de la Historia, leg. 80, n. 7. Richard KONETZKE. *Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica 1493-1810*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Jaime Balmes, 1953-1962, vol. 1, p. 547; R. C. 15-4-1540, en: *Recopilación de leyes de los reinos de las Indias*. Madrid: 1681, ley 8, tit. 5, l.7.

57. Esas apelaciones están registradas en ARCHIVO DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE LA HABANA, Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana, trasuntadas.

58. Manuel MORENO FRAGINALS. «Peculiaridades...» [47], p. 7.

59. Por ejemplo, ver las peticiones de Luisa Murga, 11-23-1671 y María Guiomar, 11-27-1676 en sus procesos legales en demanda de libertad. Ambas en ARCHIVO DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE LA HABANA, Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana, trasuntadas, 1667-1672, f. 748 y 1672-1683, f. 150.

Domingo Fernández, un esclavo africano designado como loango, presentó ante la Audiencia de Santo Domingo una apelación contra la sentencia en su contra dictada por autoridades locales⁶⁰.

No se debe exagerar la posibilidad que tenían los esclavos de presentar demandas, porque sólo aquellos casos que tuvieron un éxito al menos inicial generaron huellas documentales que pueden ser estudiadas por los investigadores. Además, como indican algunos de los ejemplos mencionados, los litigantes con frecuencia tenían que enfrentarse en batallas legales con sus amos⁶¹. Pero aun si los casos de demandas eran minoría, representaban vías de avance y metas posibles para otros esclavos que batallaban por su libertad. También demostraban que era posible impugnar la autoridad del amo ante los tribunales. Algunos hicieron uso de ese marco legal para presentar demandas aun cuando sus derechos no eran para nada claros⁶².

Lo que sí está fuera de toda duda es que las leyes tradicionales españolas se invocaban para normativizar las relaciones sociales. Es más, al aplicar las leyes castellanas a los esclavos, las autoridades judiciales se enfrentaban a situaciones en las que se veían obligadas a

reconciliar principios legales y costumbres contradictorios. Por ejemplo, a tenor de las Leyes de Toro de 1505, que regulaban las relaciones familiares, las mujeres casadas debían obtener una «licencia» especial de sus maridos para firmar contratos y realizar otras transacciones legales. Pero las autoridades y los residentes de la colonia se enfrentaban a situaciones en las que un marido esclavo tenía por esposa a una mujer libre. Entre 1585 y 1644, el 6% de los matrimonios registrados en La Habana fueron de ese tipo. En esos casos, las autoridades judiciales aplicaron una de las Leyes de Toro relativa a la licencia del marido, pero como los esclavos no gozaban de plena capacidad legal, se les exigía que obtuvieran a su vez una «licencia» de sus amos⁶³. O sea, los amos daban una licencia a sus esclavos para que éstos pudieran autorizar a sus esposas libres a realizar transacciones legales.

A través de estas licencias los esclavos podían realizar diligencias legales de manera similar a otras personas dependientes del cabeza de familia. De hecho, algunas de esas transacciones legales parecen incompatibles con la condición social de los esclavos. Por ejemplo, en 1591, con la autorización de su

60. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Protocolos Notariales de La Habana, Escribanía Fornaris, 1693, f. 49.

61. Para casos en que los esclavos tuvieron que superar obstáculos significativos para obtener su libertad a pesar de que contaban con cartas de libertad de sus amos fallecidos, ver ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Protocolos Notariales de La Habana, Escribanía Junco, 1677-1678, s/f (declaración fechada el 1-1-1677); ARCHIVO DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE LA HABANA, Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana, trasuntadas, 1672-1683, f. 150; ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Protocolos Notariales de La Habana, Escribanía Fornaris, 1691, f. 343.

62. Por ejemplo, en 1681 la esclava Felipa demandó su libertad porque había «escapado de Jamaica, en poder de los ingleses» e ido a los territorios católicos de Su Majestad. El gobernador falló a favor de la primera, sentencia que su supuesto amo apeló. Otro esclavo le reclamó su libertad al cabildo habanero en 1597 alegando que había prestado un valioso servicio al descubrir y denunciar a quienes habían cometido el «pecado nefando» (sodomía). Aunque esto no estaba incluido en las Siete Partidas como causal de libertad, en ellas se estipulaba que cuando los esclavos prestaban valiosos servicios sociales debían ser liberados. Se desconoce el resultado final de ambos procesos. Ver ARCHIVO DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE LA HABANA, Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana, trasuntadas, 1672-1683, f. 329v; 1584-1599, f. 405; Ley 3, tit. 22, partida 4, en *Los códigos españoles...*[42], vol. 3, p. 522.

63. Para un ejemplo concreto, ver un caso de 1641 en ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Gobierno General, leg. 319, n. 15420 y ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Protocolos Notariales de La Habana, Escribanía Regueira, 1609, f. 198.



Músicos negros, detalle de El matrimonio de Santa Ursula, c. 1520. Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga.

amo, Gaspar Zape contrató a un abogado para recuperar «unas casas y un terreno» que un vecino de la ciudad de La Habana, ya fallecido, había comprado con «dinero de Gaspar y para él». En 1595, María, una esclava mulata, declaró que «era dueña» de una casa en El Ejido, un área residencial de La Habana donde vivían muchos negros libres. Un año después, la esclava Francisca Velázquez vendió un terreno con dos casas de madera en la misma zona⁶⁴. La licencia del

amo les permitía heredar bienes, reclamar su posesión ante la ley y disponer de ellos⁶⁵.

Entre esos bienes se encontraban otros esclavos. Cuando Francisca de Miranda, una criolla de treinta y cinco años de la Nueva España que trabajaba como cocinera de los soldados, compró su libertad en 1585, pagó con uno de los dos que poseía: una Catalina angola, de 25 años de edad. En 1690, una esclava compró la libertad de su hija Inés, de 18 años, mediante la venta de un esclavo «del

64. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA. Protocolos Notariales de La Habana, Escribanía Regueira, 1591, f. 191; 1595, f. 424v.; 1596, f. 331.

65. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Protocolos Notariales de La Habana, Escribanía Regueira, 1596, f. 331; 1610, f. 349; Escribanía Fornaris, 1694, f. 201v; Escribanía Ortega, 1653, f. 2.

que era dueña» desde hacía algún tiempo. En 1595, un esclavo de la Corona de nombre Felipe, empleado en la construcción del Morro, compró a María, angola, por 250 ducados⁶⁶.

Estos ejemplos parecen indicar que los esclavos —incluidos, lo que resulta notable, los esclavos africanos— se las ingeniaban para participar activamente en la economía de mercado urbana y en complejas redes sociales que incluían a individuos de diferentes condiciones raciales y sociales⁶⁷. A la vez, al menos algunos esclavos lograron familiarizarse con la cultura dominante hasta el punto de poder labrarse una pequeña cuota de autonomía personal y financiera, y de reclamar derechos ante las autoridades y los tribunales coloniales.

Era precisamente porque los dueños de esclavos desesperaban ante su relativa incapacidad para controlar eficazmente las actividades sociales y productivas de su fuerza de trabajo que las disposiciones locales relativas a la esclavitud eran siempre más severas que la legislación metropolitana. Reglamentar el trabajo esclavo en las zonas urbanas constituía una preocupación fundamental de las autoridades seculares y religiosas de La Habana, como muestra la Tabla 1. Después de los cimarrones, que eran, por supuesto, un tema de la mayor importancia en lo tocante a los esfuerzos de los amos por ejercer el

control social, la mayor proporción de las regulaciones tenía que ver con las actividades urbanas de los esclavos, y su propósito era limitar lo más posible su autonomía. Muchas de esas regulaciones se referían a las ventas al detalle realizadas por esclavos, especialmente de vino; a su alojamiento en viviendas propias, aparte de las de sus amos; y a lo que los dueños de esclavos consideraban males sociales generados por el sistema de esclavos «ganadores» o a jornal⁶⁸.

Sin embargo, la frecuencia misma con que se emitían esas regulaciones es un buen indicador de que su éxito resultaba modesto. El punto clave era que, al carecer del monopolio del poder, los dueños nunca pudieron hacer cumplir sus propias disposiciones, que debían ser aprobadas por las autoridades. Además, los esclavos aprendieron que podían apelar a éstas. Y lo hicieron, incluso en casos en que no se violaba ninguna ley, como sucedió en 1688, cuando le pidieron al gobernador que decretara una disminución del monto diario que debían pagar por concepto de jornal, con el argumento de que la cantidad que exigían los amos era abusiva⁶⁹. En esas batallas legales contaban con la asistencia de otros esclavos, porque bajo la ley española tenían derecho a comparecer como testigos ante los tribunales⁷⁰.

66. María T. de ROJAS. *Índice y extractos del Archivo de Protocolos de la Habana, 1578-1585*. La Habana: s. p., 1947-1957, 3 v., I, n. 652-54; ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Protocolos Notariales de La Habana, Escribanía Fornaris, 1690, f. 264; ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Protocolos Notariales de La Habana, Escribanía Regueira, 1595, f. 995.

67. Para un buen ejemplo ver el testamento de Ana Bioho, que relaciona deudas de varios blancos, negros libres y otros esclavos. Entre los deudores se encontraba su propio amo, quien había recibido dinero a cuenta de su manumisión. Ver ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Protocolos Notariales de La Habana, Escribanía Regueira, 1604, f. 318.

68. He agrupado en la categoría «Otros» las regulaciones relativas a diversos aspectos de la vida de los esclavos y de los negros libres. Entre ellas hay ordenanzas que tienen que ver con la alimentación, el vestuario, la recreación y asuntos similares.

69. Las quejas de los esclavos acerca del alquiler diario fueron elevadas al Consejo de Indias en Madrid. Ver: ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, Santo Domingo, leg. 65, n. 4: «Informe del licenciado Gerónimo de Córdova, 1690»; ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Academia de la Historia, leg. 90, n. 641: «Diego Antonio de Viana Hinojosa a Su Majestad, La Habana, 1688».

70. Para un caso en que un esclavo africano testificó en un proceso que involucraba a blancos, ver ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, Escribanía de Cámara, leg. 74A: «Demanda de naturaleza de Enrique Méndez y Diego de Noroña, 1608».

Tabla 1: Regulaciones relativas a los esclavos y los negros emitidas por las autoridades locales de La Habana, 1550-1699 (Distribución Porcentual. N=175)

| | |
|---|------|
| Comercio al detalle, cantineros, hospederos | 17,7 |
| Alquiler de esclavos | 4,6 |
| Vivienda aparte | 7,4 |
| Otras actividades urbanas | 10,9 |
| Posesión de armas | 5,1 |
| Cimarrones | 33,7 |
| Matrimonio y religión | 9,7 |
| Otros | 10,9 |

Fuentes: ARCHIVO DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE LA HABANA, Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana, 1550-1699; Juan GARCÍA DE PALACIOS. *Sínodo Diocesano que de orden de S. M. celebró el Ilmo. Sr. Dr. D. Juan García de Palacios, Obispo de Cuba en Junio de [1684]*. La Habana: Oficina de Arazoza y Soler, 1814.

Esas tradiciones ya estaban profundamente enraizadas cuando la economía de plantación comenzó a desarrollarse en el occidente cubano en el último cuarto del siglo XVIII. El impacto de esas tradiciones y costumbres en las relaciones sociales se vio aumentado por la presencia de una nutrida comunidad de individuos de color libres. En 1792, en los albores de la economía de plantación, los negros y mulatos libres representaban el 38% de la población no blanca de la isla y el 20% de la población total. Aunque la integración de este grupo en la sociedad colonial estaba mediada por ideas jerárquicas relativas al ancestro, la cultura y la pureza de sangre, existen sólidos indicios de que pudieron acumular propiedades y participar en algunos de los rituales cívicos de la ciudad. La visibilidad y relativa movilidad de este grupo se vio reforzada también por su prominente presencia en las milicias, en las que a partir de fines del siglo XVI los

pardos y morenos se agrupaban en compañías y batallones apartes, al mando de sus propios oficiales. Esos soldados de color libres representaban el 29% de las fuerzas militares de la colonia en 1770⁷¹. Ellos fueron los fundadores de lo que ya en el siglo XIX había llegado a ser una nutrida pequeña burguesía de negros y mulatos libres.

La esclavitud de plantación

Ni las tradiciones legales y sociales, ni la presencia de una nutrida comunidad de personas de color libres pudieron detener la expansión de la esclavitud de plantación y sus secuelas brutales de polarización social y racial. Pero es probable que, hasta cierto punto, hayan servido para subvertir la formación de una sociedad de plantación como las que conocieron otros territorios del Caribe. En este sentido, la experiencia cubana fue inusual en el mundo colonial. En colonias como Jamaica y Barbados, las plantaciones

71. Herbert S. KLEIN. *Slavery in the Americas...*[7], p. 217-18; Pedro DESCHAMPS CHAPEAUX. *Los batallones de pardos y morenos libres*. La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1976; Francisco CASTILLO MELÉNDEZ. *La defensa de la isla de Cuba en la segunda mitad del siglo XVII*. Sevilla: Diputación Provincial, 1986, p. 194-201; Leví MARRERO. *Cuba...*[33], vol. 5, p. 28-30. Las cifras sobre la población de color libre han sido tomadas de Kenneth KIPLE. *Blacks in colonial Cuba 1774-1899*. Gainesville: The University Presses of Florida, 1976, p. 4 y 28-30.

definieron las sociedades coloniales poco tiempo después de su ocupación por los europeos. En la época de desarrollo de la economía de plantación en Cuba, la esclavitud ya había formado parte de la vida social y económica de la isla durante más de doscientos años.

En Cuba, como dondequiera que existió, la economía de plantación tuvo un impacto devastador en las relaciones sociales y raciales. Entre 1790 y 1860 se importaron a la isla más africanos que en los dos siglos y medio anteriores⁷². Los que fueron enviados a las plantaciones azucareras fueron tratados como medios de producción y su condición humana resultó en buena medida obliterada por los imperativos impersonales de la agricultura comercial⁷³. Además, la naciente «sacarocracia», término acuñado por Manuel Moreno Fragnals para referirse a la nueva clase de los plantadores, detentaba un poder suficiente para oponerse con éxito a la intromisión de las autoridades coloniales en sus intentos por regular su mundo inmediato. Por ejemplo, cuando la Corona trató de publicar en 1790 en la isla el código negro de 1789, relativamente benigno, los plantadores se movilizaron para impedir la promulgación de la nueva ley, con el argumento de que erosionaría la disciplina y la moral de los esclavos. Se restringieron algunos derechos tradicionales, como los matrimonios interraciales,

que después de 1805 sólo se podían realizar mediante un permiso especial de las autoridades. Se produjo además una embestida contra los derechos y los privilegios relativos de la comunidad negra libre. La participación de los negros en las milicias se prohibió temporalmente en 1844, «el año del cuero», cuando la supuesta colaboración de los negros libres con una conspiración de esclavos sirvió de excusa para reprimir a cientos de negros y mulatos libres⁷⁴.

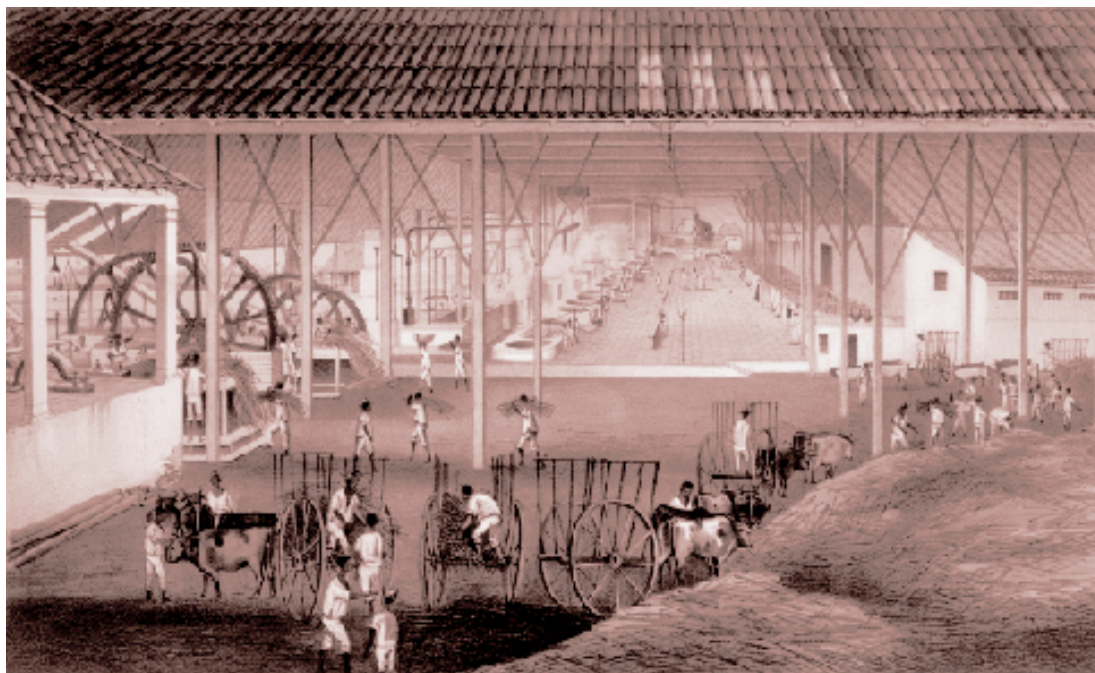
Resulta casi imposible exagerar el impacto que tuvo la esclavitud de plantación en la sociedad colonial. Pero sería erróneo asumir que las tradiciones legales y sociales heredadas del periodo anterior desaparecieron de la noche a la mañana. Es en este punto que se requiere mucha más investigación empírica. Aun así, los estudios realizados hasta el momento han esclarecido tres puntos importantes que resultan relevantes para el presente análisis. Primero, el sistema de plantaciones nunca se extendió a toda la isla. En parte debido a las limitaciones a la trata impuestas por los británicos desde principios del siglo XIX, las importaciones de esclavos a Cuba terminaron en la década de 1860⁷⁵. De su ubicación original en el interior de La Habana, las plantaciones de azúcar se expandieron hacia Matanzas y el sur de Las Villas, en el centro de la isla, pero eran casi inexistentes en el departamento oriental. Hacia el Este, en

72. David ELTIS [et al]. *The Trans-Atlantic slave trade: a database on CD-Rom*. New York: Cambridge University Press, 1999. Juan PÉREZ DE LA RIVA. *¿Cuántos africanos fueron traídos a Cuba?* La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1977, estima que hasta 1790 habían llegado a la isla unos 100.000 esclavos, mientras que en el siglo XIX llegaron 700.000.

73. Sobre este punto, ver el interesante debate entre Manuel MORENO FRAGINALS. *El ingenio...* [11], vol. 2, p. 7-90, y Rebecca J. SCOTT. *Slave emancipation in Cuba: the transition to free labor, 1860-1899*. Princeton: Princeton University Press, 1985.

74. Manuel MORENO FRAGINALS. *El ingenio...* [11], vol. 1, p. 126-33, vol. 2, p. 7-90; Franklin KNIGHT. *Slave society...* [11], p. 59-126; Robert PAQUETTE. *Sugar is made with blood: the conspiracy of La Escalera and the conflict between empires over slavery in Cuba*. Middletown: Wesleyan University Press, 1988; Verena MARTÍNEZ-ALIER. *Marriage, class, and colour in Nineteenth-Century Cuba: a study of racial attitudes and sexual values in a slave society*. London, New York: Cambridge University Press, 1974; Herbert S. KLEIN. *Slavery in the Americas...* [7], p. 220-222.

75. Laird BERGAD; Fe IGLESIAS GARCÍA; Carmen BARCIA. *The Cuban slave market...* [47], p. 47-52.



Ingenio Progreso. Justo G. Cantero, Los ingenios (1857).

las provincias de Camagüey y Oriente, no se produjo azúcar en grandes cantidades hasta principios del siglo XX. En la década de 1850, sólo el 5% del azúcar de Cuba se producía en esas provincias⁷⁶.

No es sorprendente, entonces, que la composición demográfica de las provincias del oriente de la isla fuera muy distinta a las del occidente de Cuba. Entre 1792 y 1861, la proporción de libertos en la población del occidente disminuyó significativamente, de un 19% a un 13%. Por el contrario, la importancia relativa de la población de color libre en el este aumentó durante el siglo XIX, hasta alcanzar el 29% en 1861. En esa zona, las condiciones siguieron siendo favorables para

que sobrevivieran las formas tradicionales de explotación de los esclavos hasta bien entrado el siglo XIX. Por eso el historiador cubano Jorge Ibarra ha calificado de «patriarcal» a la esclavitud en el Oriente no plantacionista⁷⁷.

En segundo lugar, los negros y mulatos libres siguieron representando una nutrida, aunque decreciente, proporción de la población total de la colonia. Entre las décadas de 1820 y 1840, su porcentaje en la población total disminuyó hasta el 15% —el más bajo de Cuba en el siglo XIX— pero la comunidad siguió creciendo en términos absolutos. Ese aumento no puede atribuirse sólo al crecimiento vegetativo. A pesar de la expansión de la esclavitud de plantación y de la creciente

76. Manuel MORENO FRAGINALS. *El ingenio...* [11], vol. 3, p. 59.

77. Jorge IBARRA. «Regionalismo y esclavitud patriarcal en los departamentos oriental y central de Cuba». *Anales del Caribe* (La Habana). 6 (1986), p. 22-52.

polarización racial, el derecho a la autocompra siguió ejerciéndose en la Cuba del siglo XIX. En su estudio del mercado de esclavos en Cuba (1790-1880), Bergad, Iglesias y Barcia hallaron que el 13% de los esclavos vendidos en la isla eran coartados. Si esa proporción era, como sugieren los autores, «similar» al porcentaje de coartados en la población total de esclavos, ello indica que las vías tradicionales de obtención de la libertad permanecieron enraizadas en la sociedad colonial cubana incluso durante el periodo de auge de la plantación. Seguramente sólo una parte de esos esclavos pudo completar el pago exigido para comprar su libertad, pero esa tradición legal siguió vigente y pudo haber sido empleada con bastante frecuencia⁷⁸.

En tercer lugar, parece claro que la mayoría de los coartados eran esclavos urbanos. La esclavitud de plantación no sólo aumentó las disparidades regionales en la isla, sino que creó lo que era esencialmente un sistema esclavista dual incluso en el occidente de Cuba. Los esclavos de las plantaciones por lo general tenían pocas oportunidades de reclamar sus derechos, mientras que los empleados en las zonas urbanas siguieron accediendo a las instituciones coloniales con cierto éxito. Como señala Knight, «las regulaciones legales tenían cierto sentido y efecto en las ciudades». A mediados del siglo XIX, los esclavos urbanos eran una minoría en Cuba, pero una

minoría significativa: alrededor de un 20%, según varios estimados compilados por Knight. La distribución geográfica desigual del grupo contribuía a aumentar aún más su visibilidad e importancia, ya que casi la mitad de los esclavos urbanos de la isla vivía en La Habana⁷⁹. Muchos de esos esclavos siguieron ganándose la vida mediante el sistema de jornal y algunos pudieron ahorrar lo suficiente para comprar su libertad, como en siglos anteriores. Su proximidad a las instituciones y autoridades coloniales, su acceso a los cabildos y hermandades religiosas africanas, y su participación en la economía monetaria facilitaron su integración en la sociedad colonial, simbolizada, sobre todo, por la nutrida clase de pequeños empresarios de color que vivían en los principales centros urbanos⁸⁰.

En las zonas donde el azúcar no ejercía su imperio inmediato (y quizás también en ellas), los esclavos siguieron creando oportunidades para iniciar demandas. Aunque los datos disponibles son fragmentarios, los mismos indican que, en las ciudades, algunos esclavos siguieron apelando a las autoridades coloniales en reclamo de su libertad⁸¹. Cuando en 1855 un funcionario colonial se quejó al cabildo de Santiago de Cuba de que los esclavos obtenían su coartación con demasiada facilidad, las autoridades municipales le respondieron que se limitaban a hacer cumplir los decretos y leyes del reino sobre el tema⁸². A pesar del desarrollo de

78. Laird BERGAD; Fe IGLESIAS GARCÍA; Carmen BARCIA. *The cuban slave market...* [47], p. 122-131. Los que visitaban la isla se referían a menudo a esta institución. Para algunos ejemplos, ver Louis A. PÉREZ, *Slaves, sugar, and colonial society: travel accounts of Cuba, 1801-1899*. Wilmington: SR Books, 1992.

79. Franklin KNIGHT. *Slave society...* [11], p. 62-63; Levi MARRERO. *Cuba...* [33], vol. 9, p. 208.

80. Sobre la población de color libre de las zonas urbanas, ver Pedro DESCHAMPS CHAPEAUX. *El negro en la economía habanera del siglo XIX*. La Habana: UNEAC, 1971 y Rafael DUHARTE. *El negro en la sociedad colonial*. Santiago de Cuba: Editorial Oriente, 1988.

81. Rafael DUHARTE. *El negro...* [80], p. 56-58. Hasta el momento he identificado más de 500 casos en los que los esclavos presentaron peticiones a las autoridades y los tribunales en el periodo 1770-1870, en sólo una de las secciones del ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, la del Gobierno Superior Civil. Esas peticiones por lo general giraban en torno a dos asuntos: su libertad o coartación y un cambio de dueño debido a maltratos u otras razones.

82. Emilio BACARDÍ y MOREAU. *Crónicas de Santiago de Cuba*. Madrid: 1973, vol. 3, p. 159.



Soldado y mulata. Victor Patricio Landaluce. Museo de Bellas Artes, La Habana.

la esclavitud de plantación, esas leyes siguieron reafirmando el principio legal tradicional que los facultaba para comprar su libertad y a apelar a las autoridades coloniales. En el mismo espíritu del cancelado código negro de 1789, el Reglamento de Esclavos de 1842, estipulaba la designación de un funcionario protector de los esclavos, el síndico procurador,

que debía representarlos en los litigios legales y otras diligencias oficiales. Aunque resulta imposible evaluar cuán frecuente o efectiva resultaba la intervención de esos síndicos, es claro que algunos esclavos urbanos lograban agenciarse su apoyo y ayuda⁸³. Al menos en teoría, los síndicos estaban obligados a dar curso a todo pedido de libertad. Como afirmara un síndico de Santiago de Cuba en 1829, una vez que se le informaba sobre el posible derecho a la libertad de un esclavo, «no podía desconocerla»⁸⁴.

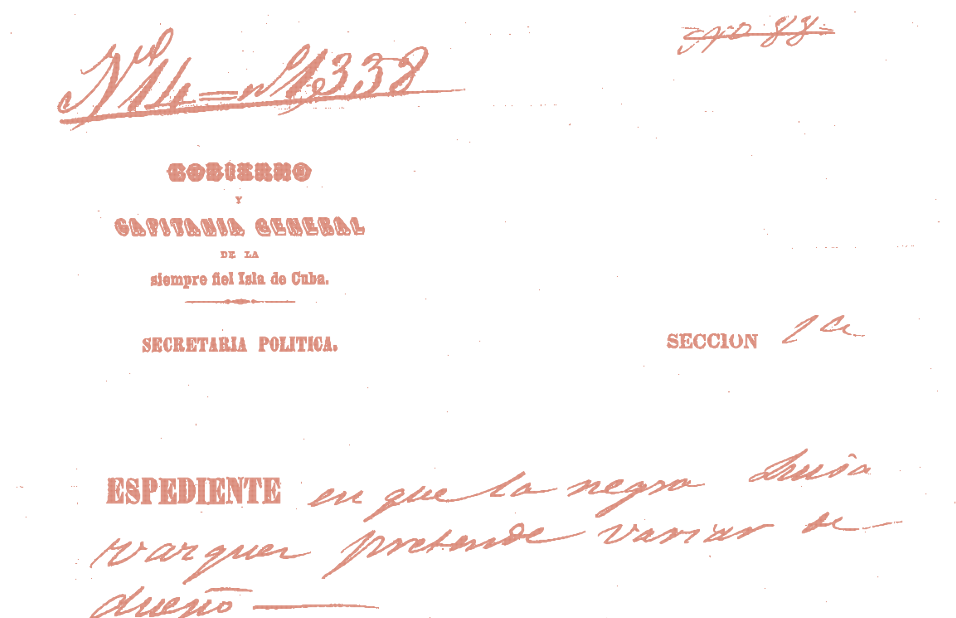
Vale la pena apuntar también que, aunque la esclavitud de plantación había transformado la isla, la legislación sobre el tema continuó mostrando una notable continuidad doctrinal con los estatutos tradicionales castellanos. La ordenanza de 1842 consagraba toda la panoplia de limitados derechos tradicionales de los esclavos: la autocompra y la coartación, el matrimonio, el bautismo y el cambio de dueño en caso de maltratos físicos⁸⁵. Además, aún en fecha tan tardía como mediados del siglo XIX, los tribunales cubanos invocaban en sus veredictos las Siete Partidas y otros códigos históricos españoles⁸⁶. El proceso mismo de la abolición, magistralmente estudiado por Rebecca Scott, evidencia que las plantaciones azucareras no pudieron eliminar las formas tradicionales de demandas de los esclavos. Ese proceso, que las autoridades coloniales

83. Para unos pocos ejemplos, ver: ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Audiencia de la Habana, leg. 24, n. 312: «Libertad que pretende la parda Francisca de Paula, 1830»; ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Gobierno Superior Civil, leg. 968, n. 34211: «Dimas Chavez por la libertad de su madre, 1866»; ARCHIVO PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CUBA, Juzgado de Primera Instancia, leg. 379, n. 9: «Incidente al intestado de D. Luis Minet, 1833»; ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Audiencia de la Habana, leg. 1, n. 65: «Causa criminal por lesiones de la negra Agripina Criolla, 1879».

84. ARCHIVO PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CUBA, Juzgado de Primera Instancia, leg. 379, n. 3: «El Síndico Procurador General reclama la libertad del negro Nicolas. Santiago de Cuba, 1829».

85. Para un análisis del reglamento de esclavos de 1842, ver Franklin KNIGHT. *Slave society...* [1], p. 126-32; Fernando ORTIZ. *Los negros...* [1], p. 339-343 y 439-352.

86. Para varios ejemplos relativos a procesos criminales, ver: ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Miscelánea de Expedientes, leg. 1391, A: «Expediente criminal contra Andrés y Justo Mena, La Habana 1864»; Bienvenido CANO; Federico de ZALBA. *Libro de los síndicos de ayuntamiento y juntas protectoras de Libertos*. La Habana: Imprenta del Gobierno, 1875; Antonio Andrés AZOY. *Colección de causas criminales*. Matanzas: Imprenta El Ferrocarril, 1868, 2 v.; Fernando ORTIZ. *Los negros...* [1], p. 349.



Expediente en el que una esclava, Luisa Vázquez, pretende cambiar de dueño en La Habana en 1854. Archivo Nacional de Cuba, Gobierno Superior Civil, leg. 949, nº. 33545.

esperaban implementar gradualmente y bajo un estricto control desde arriba, resultó acelerado por los propios esclavos, que emplearon los recursos legales e institucionales a su alcance, además de estrategias extralegales. Resulta obvio que algunos esclavos poseían los conocimientos y habilidades culturales necesarias para lograr que se hicieran cumplir las leyes que eran potencialmente favorables⁸⁷.

No es necesario idealizar la experiencia de la esclavitud en las colonias españolas para percatarse de que, al amparo de las leyes españolas, en dependencia del lugar que ocupaban en la estructura productiva y de la fase específica de desarrollo del sistema esclavista, los esclavos podían reclamar ciertos derechos y abrirse algunas vías de mejora personal. La legislación nunca pudo

proteger con efectividad a los esclavos de los abusos, y mucho menos garantizar su integridad física o su bienestar. Pero los que lograban familiarizarse con las instituciones coloniales podían, a pesar de tener que salvar significativos obstáculos, apelar a una autoridad superior a la de sus amos para reclamar algunos de los derechos contenidos en las leyes españolas. Como exclamara un viajero norteamericano que visitó la isla en 1855, en Cuba había «un amo... por encima de los amos»⁸⁸.

Como señalara Tannenbaum, esas leyes, y el potencial que generaban para la reclamación de derechos por parte de los esclavos, no existían en la América británica ni en el sur de los Estados Unidos. En las colonias ibéricas esas oportunidades siempre fueron

87. Rebecca J. SCOTT. *Slave emancipation...* [74].

88. William H. HURLBUT. *Pictures of Cuba*. London: Longman, 1855, p. 102.

limitadas, incluso para los esclavos que no estaban sujetos a la deshumanizante experiencia de la agricultura de plantación, pero existían. Por el contrario, según el derecho británico, los esclavos carecían de «identidad legal, derecho a una vida familiar, tiempo de ocio o instrucción religiosa, y de acceso a las instituciones legales para protestar o querrelarse contra sus amos»⁸⁹. A diferencia de lo ocurrido en los Estados Unidos, donde, según Ira Berlin, el derecho de los amos a liberar a sus esclavos «se redujo con la expansión de la esclavitud», en Cuba ese poder nunca se restringió, ni siquiera en el periodo de auge del sistema de plantación con trabajo esclavo. De ahí que en la América británica no se desarrollara, como sí ocurrió en las colonias españolas y en Brasil, una nutrida población de color libre⁹⁰. El hecho de que en las colonias españolas la autocompra y la manumisión fueran siempre una posibilidad, protegida por las leyes y las costumbres sociales, implicaba que la esclavitud no era una condición permanente e inexorable. Incluso en el siglo XIX

resulta difícil imaginar un tribunal en Cuba que declarara, como lo hizo un juez en Georgia en 1839, que «ni la humanidad, ni la religión, ni la justicia común nos obligan a sancionar o favorecer la emancipación en el país, a darles la libertad a nuestros esclavos»⁹¹.

Que esas condiciones garantizaran que la transición de la esclavitud a la ciudadanía resultara inexorable, como también planteó Tannenbaum, es una cuestión totalmente distinta. En buena parte de América Latina la emancipación no trajo por resultado la ampliación de los derechos de ciudadanía para los antiguos esclavos. En Cuba esa transición sí tuvo lugar, pero sólo tras treinta años de lucha anticolonial en la cual participaron blancos y no blancos. La guerra sentó nuevas bases de reclamación y reforzó las antiguas. En medio de la competencia de la dirigencia nacionalista y el gobierno colonial por conquistarse el apoyo de los negros, los esclavos y sus descendientes encontraron vías para acceder a nuevos espacios sociales y para exigir sus derechos con renovado vigor⁹².

89. Hilary McD. BECKLES. «Social and political control in the slave society». En: Franklin Knight (ed.). *The slave societies of the Caribbean*. London: UNESCO, 1997, p. 201. (*General History of the Caribbean*, 3). Sobre la legislación de esclavos en el Sur de los Estados Unidos, ver Mark V. TUSHNET. *The American law of slavery 1810-1860*. Princeton: Princeton University Press, 1981; Thomas D. MORRIS. *Southern slavery and the law, 1619-1860*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1996; Alan WATSON. *Slave law...* [5], p. 63-90; Paul FINKELMAN (ed.). *Slavery and the law*. Madison: Madison House, 1977; Eugene D. GENOVESE. «Slavery in the legal history of the South and the nation». *The Journal of Southern History* (Baton Rouge). 59 (1981), p. 969-998; Ariela J. GROSS. *Double character: slavery and mastery in the antebellum southern courtroom*. Princeton: Princeton University Press, 2000.
90. Ira BERLIN. *Slaves without masters: the free Negro in the antebellum South*. New York: Pantheon Books, 1974, p. 138. Sobre restricciones a la manumisión ver también Arthur HOWINGTON. «A property of special and peculiar value': the Tennessee Supreme Court and the law of manumission». En: Paul Finkelman (ed.). *Law, the Constitution, and slavery*. Nueva York: Garland, 1989, p. 210-23. Para un análisis comparativo de la cuestión en la América Latina, ver David W. COHEN; Jack P. GREENE (eds.). *Neither slave...* [15].
91. Citado en Mark V. TUSHNET. *The American law...* [89], p. 21.
92. Para un análisis de las complejas confluencias entre las guerras de independencia, el proceso de emancipación de los esclavos y la creación de una coalición nacional multirracial, ver Ada FERRER. *Insurgent Cuba: race, nation, and revolution 1868-1898*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1999; Rebecca J. SCOTT. *Slave emancipation...* [74]. Para un análisis del activismo y las demandas de los negros en los primeros años de la república, ver el reciente volumen editado por Fernando MARTÍNEZ HEREDIA; Rebecca J. SCOTT; Orlando F. GARCÍA MARTÍNEZ. *Espacios, silencios y los sentidos de la libertad: Cuba entre 1878 y 1912*. La Habana: Unión, 2001. Ver también Rebecca J. SCOTT. «Reclaiming Gregoria's mule: the meanings of freedom in the Arimao and Caunao valleys, Cienfuegos, Cuba, 1880-1899». *Past and Present* (Oxford). 170 (2001), p. 181-217, y Rebecca J. SCOTT; Michael ZEUSKE. «Property in writing, property on the ground: pigs, horses, land, and citizenship in the aftermath of slavery, Cuba, 1880-1909». *Comparative Studies in Society and History* (London, New York). 44 (2002), p. 669-699.

Raza, esclavitud y libertad en Santo Domingo

RICHARD LEE TURITS*

En las últimas décadas, los estudiosos han hecho que pierda crédito la idea generalizada a mediados del siglo XX de que la historia de la raza y la esclavitud en la América Latina era básicamente diferente a la de los Estados Unidos, e incluso relativamente benigna comparada con ella¹. No obstante, la percepción de que la raza y la esclavitud permanecieron iguales a sí mismas a lo largo del tiempo, el espacio y el modo de producción —las economías de plantación, la cría de ganado, la minería del oro o la artesanía urbana— resulta igualmente insostenible². Un rasgo clave de la esclavitud que varió a lo largo del territorio de las Américas entre los siglos XVI y XIX fue la posibilidad de que los esclavos

consiguieran su libertad mediante la manumisión o la fuga. La relativa viabilidad de la manumisión y el cimarronaje durante una buena parte de la historia del Caribe español, por ejemplo, condujo a la existencia en él de poblaciones libres de color mucho más nutridas (a menudo un porcentaje más de diez veces mayor) que en las colonias británicas y más tarde, en los Estados Unidos. De hecho, en Santo Domingo, Puerto Rico, Venezuela y la Colombia caribeña, la población libre de color constituyó en ciertos momentos el grupo más nutrido de la sociedad (como ocurrió también en algunas regiones del Brasil, y antes de 1872 en todo ese territorio suramericano)³. En una investigación

*Quisiera expresar mi agradecimiento a Alejandro de la Fuente, Raymundo González y Hannah Rosen, quienes con sus propios estudios, las largas conversaciones que hemos sostenido y sus sugerencias a una versión anterior de este trabajo, han hecho una enorme contribución al mismo. También les agradezco sus comentarios a los participantes en las sesiones de la conferencia de la Canadian Association for Latin American and Caribbean Studies (Montreal, 25 de octubre de 2002) y de la conferencia "Law, Slavery, Emancipation, and Claims-Making: Cuba in Comparative Perspective" de la University of Pittsburgh (25 de abril de 2003). Además, le debo un reconocimiento especial a Lucía Suárez por sus sugerencias, a Edward Jáquez Díaz, del Archivo General de la Nación de Santo Domingo, por su experta asistencia con archivos y bibliografía, y a Quisqueya Lora por su valiosa ayuda en las labores de investigación y transcripción. Por último, le agradezco a Esther Pérez Pérez su excelente traducción.

1. Véase Frank TANNENBAUM. *Slave and citizen*. Boston: Beacon Press, 1992. (Primera edición 1946).
2. Ira BERLIN. *Many thousands gone: the first two centuries of slavery in North America*. Cambridge: Harvard University Press, 1998, p. 6.
3. Por el contrario, la población libre de color generalmente representaba alrededor del 3% del total en la América anglofona. Cuba era un caso intermedio; en el siglo XIX las personas libres de color representaban alrededor del 15% (y una

reciente, he comenzado a explorar la hipótesis de que los sentidos raciales consolidados en las Américas —en los que la ascendencia africana se equiparaba a la esclavitud y la ascendencia europea a la libertad y el mando— fueron, en ciertos aspectos, confundidos, alterados o subvertidos en contextos históricos en los cuales la población libre de color constituyó una parte grande de la sociedad desde mucho antes de la abolición de la esclavitud⁴.

El historiador Ira Berlin ha subrayado la disparidad de las formas económicas, sociales, legales y culturales que caracterizan, de un lado, a las «sociedades esclavistas» (en las cuales la esclavitud en gran escala resultaba central para la economía) y, de otro, a las «sociedades con esclavos» (en las que «los esclavos estaban ubicados en una posición marginal con respecto a los procesos productivos centrales»), signadas estas últimas por una ambigüedad y una indeterminación mayores en lo que toca a los sentidos de lo negro y lo blanco, e, incluso, de la esclavitud y la libertad⁵. La historia del gran Caribe español parece indicar que podríamos añadir un tercer grupo —aun cuando tenga algunos puntos de coincidencia parcial con los dos anteriores— a esa tipología de las Américas en el periodo previo a la emancipación: el de las

sociedades donde una gran parte de la población —una minoría nutrida o incluso una mayoría— estaba formada por personas libres de color. La atención a la historia y a las consecuencias de ese legado en sociedades con un gran componente afroamericano puede ayudar a explicar una indeterminación aparentemente aún mayor de la raza en una buena parte de la historia del Caribe español (y también del Brasil) a partir de 1492. También puede contribuir a explicar la relativa debilidad de identidades colectivas raciales, de imaginar historias y experiencias comunes sobre la base del color de la piel o la ascendencia africana, que ha caracterizado a naciones como la República Dominicana hasta nuestros días⁶.

La relativa viabilidad de la manumisión en la América Latina fue uno de los factores que llevó al historiador Frank Tannenbaum, entre otros, a mediados del siglo XX, a la conclusión de que en la América Latina había habido una presencia menor de racismo y brutalidad contra los esclavos que en la América anglófona. Una generación posterior de estudiosos refutó cabalmente esas conclusiones. Es obvio que las mayores posibilidades de libertad para los esclavos en la América Latina, y aun, en términos más generales, de inclusión en la sociedad de la población de

minoría de la población de color). En Oriente, sin embargo, la situación era más parecida a la del resto del Caribe español. En Santiago de Cuba, la población libre de color constituía el grupo más nutrido de la ciudad en 1808. Rafael DUHARTE. «Cimarrones urbanos en Santiago de Cuba». *Del Caribe* (Santiago de Cuba). 2/5 (1985), p. 11; Franklin KNIGHT. «Cuba». En: David Cohen; Jack Greene (eds.). *Neither slave nor free: the freedmen of African descent in the slave societies of the New World*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1972, p. 289; Herbert KLEIN. «Nineteenth-Century Brazil». En: David Cohen; Jack Greene (eds.). *Neither slave nor free...* [3], 321; «Population tables». En: David Cohen; Jack Greene (eds.). *Neither slave nor free...* [3], 335-39; Aline HELG. «The limits of equality: free people of colour and slaves during the first independence of Cartagena, Colombia, 1810-15». *Slavery and Abolition* (London). 20/2 (1999), p. 24.

4. Una perspectiva similar en relación con Sabará, Brasil, en Kathleen HIGGINS. «*Licentious liberty*» in a Brazilian gold-mining region: slavery, gender, and social control in Eighteenth-Century Sabará, Minas Gerais. University Park: Pennsylvania State University Press, 1999, p. 171.

5. Ira BERLIN. *Many thousands gone...* [2], p. 8.

6. Algo análogo en relación con Venezuela y la Colombia ha sido señalado por Aline HELG. «The limits of equality...» [3], p. 24.



Viviendas de negros. Samuel Hazard, Santo Domingo past and present (1873).

color, no significó una menor jerarquía racial o brutalidad contra los esclavos. Sin embargo, tuvieron efectos sociales significativos y peculiares que, junto a sus causas, vale la pena estudiar, incluidos sus modos peculiares de racismo. De ahí que me haya dedicado a explorar la historia del Santo Domingo colonial para intentar dar respuesta a dos órdenes de preguntas. En primer lugar, ¿qué condiciones explican la disparidad de la historia de la manumisión y la fuga de esclavos en las diferentes regiones de las Américas? ¿Hasta qué punto eran esas historias producto de normas legales e ideologías diversas en la época colonial, o de condiciones económicas y políticas particulares? Y en segundo término, ¿cómo condicionaron los diferentes patrones de manumisión y fuga de esclavos y las muy distintas dimensiones de la población libre de color los contornos de identidades raciales y

modos de racismo históricamente específicos? En este trabajo expondré algunas hipótesis iniciales y perspectivas emergentes a propósito de esas preguntas, elaboradas a partir de investigaciones realizadas en los archivos dominicanos para un proyecto que se encuentra aún en sus primeras etapas.

El caso dominicano resulta central para ese proyecto, porque es allí donde fueron más pronunciados los rasgos peculiares de la formación racial en el Caribe español durante el periodo temprano. En Santo Domingo, la población de ascendencia africana fue la gran mayoría de la sociedad desde el siglo XVI (aproximadamente el 75% de la población, unos 20.000 esclavos, en esa época), pero nunca se consolidó una «sociedad esclavista» ni una identidad colectiva negra perdurable. De hecho, hacia fines del siglo XVII, en Santo Domingo, la primera sociedad de plantación

de América, se había convertido en una sociedad en la que las personas libres de color, en su mayoría campesinos independientes, constituían la mayoría de la población, siglos antes de que se aboliera la esclavitud⁷.

La República Dominicana es también un terreno especialmente fértil para la investigación del Caribe español porque, a diferencia de Cuba y hasta cierto punto de Puerto Rico, nunca sufrió la transformación producida por el subsiguiente desarrollo de plantaciones esclavistas en el siglo XIX, divergencia histórica que se debió en buena medida al impacto diferente que tuvo la revolución haitiana en esos territorios. Mientras que la Cuba del siglo XIX (por lo menos hasta la década de 1870) constituye un dramático ejemplo del aumento de la incidencia de la raza en la política, la ley y la cultura que se produce en la transición de una «sociedad con esclavos» a una «sociedad esclavista»⁸, la historia de ese periodo en la República Dominicana, donde, después del siglo XVI, nunca se desarrolló una «sociedad esclavista», revela un cierto tipo de ausencia de «raza» en las esferas legal y social y una sociedad esencialmente carente de comunidades imaginadas así como de

leyes que tomaran el color de la piel o la genealogía como base⁹.

La historia de Santo Domingo sugiere que Tannenbaum tenía razón en que la América Latina era un mundo diferente a la América anglosajona en términos de raza y esclavitud (y esto tendría consecuencias en términos de cómo se imaginaría la nación), pero que se equivocaba en cuanto a las razones básicas de esa diferencia. En su análisis del nivel relativamente alto de manumisiones e integración racial en la América Latina, Tannenbaum parece haber sobrestimado el papel desempeñado por los diversos discursos y legados imperiales y subestimado las trayectorias económicas locales, así como las luchas políticas, a saber, las presiones ejercidas por las propias personas de color. A contrapelo de lo enfatizado por Tannenbaum, las leyes vigentes en la América Latina eran, en conjunto, abiertamente racistas. Era en la práctica, y en determinados contextos, que se producían una fluidez y una movilidad raciales relativas en la América Latina colonial, a saber, en los periodos extensivos previo y posterior al predominio de la plantación esclavista¹⁰. Además, como veremos, tan pronto el Estado colonial español

7. Ver Richard TURITS. *Foundations of despotism: peasants, the Trujillo regime, and modernity in Dominican history*. Stanford: Stanford University Press, 2003, cap. 1.

8. Sobre la creciente incidencia de la raza en Cuba a partir del desarrollo de una economía de plantación azucarera, ver Verena MARTÍNEZ-ALIER. *Marriage, class and colour in Nineteenth-Century Cuba: a study of racial attitudes and sexual values in a slave society*. London, New York: Cambridge University Press, 1974., y Gwendolyn Midlo HALL. *Social control in slave plantation societies: a comparison of St. Domingue and Cuba*. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1996, p. 119-35.

9. Véase también Silvio TORRES-SELLANT. «Tribulations of Blackness: Stages in Dominican Racial Identity». *Latin American Perspectives* (Thousand Oaks). 25/3 (1998), p. 126-146. A la vez, puede que formas de inclusión en la nación que se remontan a la era previa a la plantación hicieran posible el papel preponderante desempeñado por los hombres de color en las guerras de independencia cubanas —historia que Cuba comparte con la República Dominicana— y el discurso de integración racial que surgió a lo largo de esas luchas. La obra del historiador Alejandro de la Fuente sobre la Cuba colonial apunta en esa dirección. Véase Alejandro de la FUENTE. «Slavery and claims-making in Cuba: The Tannenbaum debate revisited». *Law and History Review* (de próxima aparición, 2004). Ello indicaría que, junto a profundas divergencias, ciertas historias compartidas de raza siguieron siendo importantes en el Caribe español incluso hasta muy avanzado el siglo XIX. Sobre los discursos de la integración racial en periodos posteriores, ver Alejandro de la FUENTE. *A nation for all: race, inequality, and politics in Twentieth-Century Cuba*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001 y Ada FERRER. *Insurgent Cuba: race, nation, and revolution, 1868-1898*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1999.

10. Sobre Brasil, ver Carl DEGLER. *Neither black nor white: slavery and race relations in Brazil and the United States*. Madison: University of Wisconsin Press, 1971, p. 213-221 y Kathleen HIGGINS. «Licentious liberty»... [4], p. 42, 151-52 y 216.



«Envían a los negros de tierras moras a la mina de La Española». Teodore de Bry. *América* (1595).

diseñó un modelo de plantación en sus posesiones caribeñas a fines del siglo XVIII (unos 250 años después del inicio de la colonización), los funcionarios evidenciaron grandes afanes por reducir y restringir la población libre de color¹¹. No obstante, esos esfuerzos fueron en buena medida vanos. Como resultado de ello, el Santo Domingo colonial le dejó un fuerte legado a la República Dominicana, al mezclar la jerarquía racial con la integración racial, y leyes de contenido racista con prácticas comparativamente fluidas.

Esclavitud y libertad en Santo Domingo

En los albores del colonialismo español, la isla de Santo Domingo, o la Española, se convirtió en la cuna de la «modernidad» en lo que los colonialistas españoles llamaban el Nuevo Mundo. Aunque este periodo ha sido bastante olvidado por la historiografía de la esclavitud, Santo Domingo no sólo fue el asiento inicial del moderno colonialismo transoceánico, sino también la sede de los primeros complejos azucareros de las Américas y de la primera sociedad de plantación del Nuevo Mundo¹².

11. Sobre Cuba, ver Gwendolyn Midlo HALL. *Social control in slave...* [8], p. 127-35.

12. Justo del Río MORENO; Lorenzo LÓPEZ Y SEBASTIÁN. «El comercio azucarero de La Española en el siglo XVI. Presión monopolística y alternativas locales». *Revista Complutense de Historia de América* (Madrid). 17 (1991), p. 39-78; Mervyn RATEKIN. «The Early Sugar Industry in Española». *Hispanic American Historical Review* (Durham). 34/1 (1954), p. 1-19.

Su industria azucarera experimentó un auge espectacular entre 1520 y 1600 merced a la sistemática explotación, sobre todo, de los africanos esclavizados. Los documentos españoles indican que en todos los años de la década de 1530 hubo en Santo Domingo entre treinta y cuarenta ingenios en funcionamiento¹³. En 1544, según el dueño de una plantación, la colonia exportaba 1.375 toneladas de azúcar.¹⁴ Y a mediados del siglo XVI la producción anual de azúcar llegó a ser de varios miles de toneladas¹⁵. En 1568, el oidor Juan de Echagoian le informó al rey de España que de los más de treinta ingenios que funcionaban entonces en La Española, en dos que eran propiedad de Melchor de Torres trabajaban 900 esclavos, una cifra grande para cualquier época. Estimaba que en total había unos 20.000 esclavos trabajando en los ingenios, en otras haciendas y ranchos, como sirvientes y como peones en la ciudad, al tiempo que otros afirmaban que el número total de españoles era de 6.000¹⁶.

Pero a fines del siglo XVI la industria azucarera se desplomó con la misma rapidez con que se había desarrollado. El subsiguiente subdesarrollo económico y político de La Española en el siglo XVII ha llevado a muchos historiadores a llamar a ese periodo el siglo de «la miseria», y a considerarlo una época de total «retroceso histórico» con respecto al anterior putativo esplendor de Santo Domingo en el siglo XVI¹⁷. Sin embargo, el fin de la economía de plantación en el siglo XVII fue provechoso para los exesclavos liberados y los cimarrones, que engrosaron las filas de un creciente campesinado independiente. El ocaso de la economía de plantación hizo que los ranchos ganaderos, o hatos, se convirtieran en la única empresa comercial de importancia de la isla. Algunos esclavos trabajaron en esas grandes haciendas ganaderas, aunque sus necesidades de mano de obra eran mínimas¹⁸. Con el tiempo, muchos dueños comenzaron a alquilar a los esclavos sobrantes¹⁹. Esas condiciones de

13. «Relación de la isla Española enviada al Rey D. Felipe II por el Lic. Echagoian, oidor de la Audiencia de Santo Domingo». *Boletín del Archivo General de la Nación* (Santo Domingo). 4/19 (1941), p. 446; Roberto CASSÁ; Genaro RODRÍGUEZ MOREL. «Consideraciones alternativas acerca de las rebeliones de esclavos en Santo Domingo». *Ecas* (Santo Domingo). 2/3 (1994), p. 162.
14. Lorenzo LÓPEZ Y SEBASTIÁN; Justo del RÍO MORENO. «Comercio y transporte en la economía del azúcar antillano durante el siglo XVI». *Anuario de Estudios Americanos* (Sevilla). 49 (1992), p. 84.
15. Genaro RODRÍGUEZ MOREL. «Esclavitud y vida rural en las plantaciones azucareras de Santo Domingo. Siglo XVI». *Anuario de Estudios Americanos* (Sevilla). 49 (1992), p. 94 y 99-100.
16. «Relación de la isla Española enviada al Rey D. Felipe II por el Lic. Echagoian». *Boletín del Archivo General de la Nación* (Santo Domingo). 4/19 (1941), p. 446; Pierre CHAUNU. *Sevilla y América siglos XVI y XVII*. Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1983, p. 77; Roberto CASSÁ; Genaro RODRÍGUEZ MOREL. «Consideraciones alternativas...» [13], p. 162. Otros estimados de la población esclava realizados a mediados del siglo XVI por eclesiásticos y funcionarios estatales oscilan entre los 12.000 y los 30.000, aunque hay cifra consensuada en torno a los 25.000 (Roberto CASSÁ; Genaro RODRÍGUEZ MOREL. «Consideraciones alternativas...» [13], p. 162n; Carlos Esteban DEIVE. *La esclavitud del negro en Santo Domingo (1492-1844)*. Santo Domingo: Museo del Hombre Dominicano, 1980, vol. 2, p. 602-605). Lamentablemente, se dispone del dato preciso del número de esclavos para este periodo, que también había incluido muchos indios importados de otras partes del región. (Los pueblos indígenas de la isla fueron ya prácticamente extinguidos como resultado de la explotación violenta y las enfermedades nuevas de los colonos europeos). Carlos Esteban Deive. *La Española y la esclavitud del indio*. Santo Domingo: Fundación García Arévalo, 1995; Jalil Sued Badillo. «The Island Caribs: New Approaches to the Question of Ethnicity in the Early Colonial Caribbean». En: Neil Whitehead (ed.). *Wolves from the sea: readings in the anthropology of the native Caribbean*. Leiden: KITLV Press, 1995, p. 67.
17. Por ejemplo, Pierre CHAUNU. *Sevilla y América...* [16], p. 68-80; Frank PEÑA PÉREZ. «Despoblación y miseria en Santo Domingo en el siglo diecisiete». *Investigación y Ciencia* (Santo Domingo). 1/1 (1986), p. 83.
18. Para el análisis más completo de la esclavitud en Santo Domingo, ver Carlos Esteban DEIVE. *La esclavitud del negro...* [16].
19. Ver Antonio SÁNCHEZ VALVERDE. *Idea del valor de la isla española*. Santo Domingo: Editora Nacional, 1971, p. 169-171. (Primera edición: *Idea del valor de la isla española, y utilidades, que de ella puede sacar su monarquía*. Madrid: Pedro Marín, 1785).



Bohío Samuel Hazard, *Santo Domingo past and present* (1873).

subdesarrollo de una modesta economía ganadera les proporcionaron a muchos esclavos sustanciales oportunidades de alcanzar su libertad mediante la fuga, la autocompra, o la concesión graciosa. De ahí que la población esclava disminuyera gradualmente de más de tres cuartas partes del total de la población de la colonia en el siglo XVI a un estimado del 15% en el ocaso de la dominación española en Santo Domingo a fines del siglo XVIII, y que con el paso del tiempo decreciera incluso el en términos absolutos²⁰. Ya en 1681, casi tres cuartas partes de la población no blanca

de Santo Domingo (la mayoría de la colonia) era legalmente libre²¹.

También contribuyó a la disminución del número de esclavos la relativa liberalidad de las leyes y prácticas de la manumisión —o, para ser más precisos, la relativa ausencia de restricciones a la manumisión— existente en Santo Domingo. Como en la mayor parte de la América española y portuguesa, y a diferencia de los sistemas esclavistas del resto del continente, no se elaboró una panoplia de leyes encaminadas a impedir la manumisión mediante la prohibición, la imposición de

20. En 1785, Antonio Sánchez Valverde mencionó la cifra de doce a catorce mil esclavos para una población total de aproximadamente 125.000 habitantes. Antonio SÁNCHEZ VALVERDE. *Idea del valor...* [19], p. 169. Un estimación poco confiable de la población, publicado en 1822, indicaba que en 1794 un 29 % de la población era esclava, esto es, 30.000 individuos, frente a los 14.000 (que es una cifra más plausible) registrados en 1783. No obstante, es dudoso que hayan llegado a Santo Domingo más que unos pocos miles de esclavos durante ese periodo de 11 años. Ver Carlos LARRAZÁBAL BLANCO. *Los negros y la esclavitud en Santo Domingo*. Santo Domingo: Julio D. Postigo e hijos Editores, 1975, p. 184.

21. Carlos LARRAZÁBAL BLANCO. *Los negros...* [20], p. 183-84.

gravámenes u otros obstáculos oficiales o desincentivos económicos²². Por el contrario, se desarrollaron costumbres que les permitían a los esclavos (o a sus padres, padrinos u otros) comprar su libertad si podían pagarle al amo lo que se consideraba su precio justo. Con el tiempo —y la pugna o «negociación» entre esclavos, amos y funcionarios estatales— estas costumbres aparentemente se convirtieron en derechos consuetudinarios²³. No obstante, dada la pobreza de la colonia y lo limitado de su mercado y sus necesidades de esclavos (en especial en el campo) muchos dueños parecen haber estado bien dispuestos

a venderles la libertad con el fin de obtener ingresos que por otras vías les resultaban escasos o, en algunos casos, para desembarazarse de la responsabilidad de mantener a niños o ancianos²⁴. Los precios de autocompra que aparecen en los protocolos notariales oscilan entre 25 y 310 pesos en el siglo XVIII. Los esclavos a menudo acumulaban los fondos necesarios para comprar su libertad ahorrando la parte que les correspondía del salario recibido cuando sus amos los contrataban como jornaleros; el alquiler de esclavos era una práctica común en las ciudades en el siglo XVIII²⁵. Además, hay indicios de que un número sus-

22. Ira BERLIN. *Many thousands gone...* [2], p. 52-53, 124, 186-87 y 212; Frank TANNENBAUM. *Slave and citizen...* [1], p. 69-71. Para la información incluida en este párrafo sobre las manumisiones en Santo Domingo he tomado como base mi lectura de fuentes documentales en Archivo General de la Nación, el Archivo Real de Higüey y el Archivo Real de Bayagüana, así como las fuentes citadas después, en especial la obra del historiador Raymundo González y las conversaciones que he sostenido con él.
23. A fines del siglo XVIII, el observador M.L.E. Moreau de Saint-Méry sostenía que «todo esclavo [...] puede hacerse libre, pagándole el precio [250 pesos fuertes] al amo, quien no puede negarse». M.L.E. MOREAU DE SAINT-MÉRY. *Descripción de la parte española de Santo Domingo*. Ciudad Trujillo: Editora Montalvo, 1944, p. 94 y 92 (primera edición en 1796). La propuesta hecha a la Audiencia de Santo Domingo en 1784 de que se prohibiera a los esclavos comprar su libertad «sin el consentimiento de sus señores» también parece indicar que ello se consideraba posible. Javier MALAGÓN BARCELÓ. *Código negro carolino (1784)*. Santo Domingo: Taller, 1974, p. 88; H. HOETINK. *The Dominican People, 1850-1900: notes for a historical sociology*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1982, p. 182-183. En ausencia de una ley positiva, sin embargo, los esclavos estaban lejos de tener garantías de poder comprar su libertad. No obstante, parece ser que en la Luisiana española del periodo los dueños sí estuvieron obligados a conceder la autocompra solicitada por los esclavos y a aceptar el precio fijado, si era necesario, por los tribunales. Sobre la Nueva Orleans española ver la obra de Kimberley HANGER. *Bounded lives, bounded places: free black society in colonial New Orleans, 1769-1803*. Durham: Duke University Press, 1997, p. 11, 19, 25-27, 49-51, 70-71 y 186. La autora encontró que una de cada siete manumisiones compensadas fueron impugnadas por los dueños de los esclavos. Las normas que regulaban la autocompra parecen haber variado a lo largo del tiempo y del espacio en la América Latina, y haber sido establecidas, en buena medida, atendiendo a la costumbre, el derecho consuetudinario ganado por los esclavos y el precedente legal. Ver Hubert H. S. AIMES. «Coartación: a Spanish institution for the advancement of slaves into freedom». *Yale Review* (New Haven). 17 (1909), p. 412-31. Para fines comparativos, ver Sidney CHALOUB. «Slaves, freemen, and the politics of freedom in Brazil». *Slavery and Abolition* (London). 10/3 (1989), p. 64-84. Chaloub investiga las ambigüedades del derecho o las leyes consuetudinarios de autocompra en Brasil en el siglo XIX.
24. En caso de conflicto con sus dueños en lo tocante a la autocompra, algunos esclavos lograban recurrir, y en ocasiones lo hacían con éxito, a los tribunales para reclamar su libertad, como ha descubierto el historiador Raymundo González en varios casos en que los esclavos pagaron su precio de coartación (un acuerdo de autocompra gradual —una compra a plazos— entre el amo y el esclavo, también muy utilizado en Cuba). Estos conflictos parecen haberse concentrado en la década de 1780, quizás porque en ese periodo los dueños volvieron a tener esperanzas de que se desarrollaran sus plantaciones. Ver Raymundo GONZÁLEZ. «Esclavos reclamaron su libertad en los tribunales de justicia». *El Caribe*, 14 de diciembre de 1991. Sobre la coartación en Cuba, ver Hubert H.S. AIMES. «Coartación: a Spanish institution...» [23]; Rebecca SCOTT. *Slave emancipation in Cuba: the transition to free labor, 1860-1899*. Princeton: Princeton University Press, 1985, p. 13-14 y 105-107; Alejandro de la FUENTE. «Slavery and claims-making...» [9].
25. Raymundo GONZÁLEZ. «Campesinos y sociedad colonial en el siglo dieciocho dominicano», ponencia presentada al Quinto Congreso Dominicano de Historia, Santo Domingo, 24-27 de octubre de 1991; Dorvo SOULASTRE. *Voyage par terre de Santo-Domingo, Capitale de la Partie Espagnole de Saint-Domingue, au Cap-François, Capitale de la Partie Française de la même isle*. Paris: Chaumerot, 1809, reproducido en Emilio RODRÍGUEZ DEMORIZI. *La era de Francia en Santo Domingo: contribución a su estudio*. Ciudad Trujillo: Editora del Caribe, 1955, p. 58.

tancial de dueños los liberaba sin costo²⁶, entre otros casos, cuando se trataba de hijos propios que habían tenido con sus esclavas²⁷.

Además de la autocompra y otras formas de manumisión, la población esclava disminuyó porque un gran número de esclavos huyó al monte, esto es, a los bosques tupidos y vírgenes de la colonia. El vasto territorio despoblado de Santo Domingo, su abundante fauna, su geografía escabrosa y su mínima infraestructura proporcionaban óptimas condiciones para que los esclavos escaparan en busca de su libertad y se procuraran medios de subsistencia²⁸. Y esas mismas condiciones también minimizaban la capacidad de los funcionarios de la colonia para alcanzar los parajes rurales, de modo que los cimarrones pudieron mantenerse fuera de la estrecha visión metropolitana del Estado. Aunque algunos dueños siguieron contratando los servicios de los rancheadores, la escala y la frecuencia de sus operaciones eran mínimas,

dada la disminución de la necesidad de mano de obra y de los recursos de la elite²⁹. En esas condiciones, los antiguos esclavos, sus descendientes y otros campesinos lograron vivir dispersos en las zonas rurales con bastante independencia de los funcionarios estatales y las elites. Vivían de la caza de cerdos en los bosques, de la cría de ganado en las llanuras, de la recolección de frutas, de la pesca donde era posible y de la agricultura de subsistencia en terrenos de cultivo que desplazaban de lugar. Los que habitaban cerca de los ranchos ganaderos trabajaban ocasionalmente en ellos como peones, pero no era la norma. La mayoría de los esclavos transformados en campesinos se labró una existencia relativamente autónoma³⁰. Mezclados con población marginal de ascendencia europea, constituyó un campesinado afrocaribeño excepcional y estable siglos antes de la abolición formal de la esclavitud en 1822, fecha de inicio del dominio haitiano sobre el país³¹.

-
26. Alejandra LIRIANO. *El papel de la mujer de origen africano en el Santo Domingo colonial, siglos XVI-XVII*. Santo Domingo: Centro de Investigación para la Acción Femenina, 1992, p. 53-55. Algunas veces esas manumisiones estaban condicionadas a que los esclavos continuaran sirviendo a sus ancianos amos hasta su muerte. Ver, por ejemplo, ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Archivo Real de Higüey, leg. 27, exp. 137.
27. Javier MALAGÓN BARCELÓ. *Código negro...* [23], p. 46 y 203; Antonio SÁNCHEZ VALVERDE. *Idea del valor...* [19], 170-172; Carlos Esteban DEIVE. *La esclavitud del negro...* [16], p. vol. 2, p. 405; Carlos LARRAZÁBAL BLANCO. *Los negros...* [20], p. 180. Sobre la manumisión supuestamente «muy común» por testamentos o por «una afección ilícita», ver también M.L.E. MOREAU DE SAINT-MÉRY. *Descripción de la parte española...* [23], p. 92. Para fines comparativos, ver Kimberley Hanger. *Bounded lives...* [23], p. 19 y 35-37.
28. En el siglo XVI, cuando el Estado financiaba los intentos encaminados a volver a capturar a los cimarrones, la mayoría se veían obligados a vivir en comunidades muy militarizadas y concentradas en busca de protección. En Santo Domingo se fundaron en el siglo XVI y principios del XVII alrededor de una docena de manieles (comunidades de cimarrones). En 1542, el arcediano de Santo Domingo informó que había miles de cimarrones viviendo en los manieles. En la segunda mitad del siglo XVII, en un proceso paralelo a la desaparición de las plantaciones y al cese de las expediciones militares promovidas por el Estado, los cimarrones fueron abandonando los manieles. Ver Carlos DEIVE. *Los guerrilleros negros: esclavos fugitivos y cimarrones en Santo Domingo*. Santo Domingo: Fundación Cultural Dominicana, 1989, p. 43-44, 73 y 251.
29. Raymundo GONZÁLEZ. «Esclavos 'ocultos' fueron fuente de conflicto durante la colonia». *El Caribe*, 1 de mayo de 1993.
30. Raymundo GONZÁLEZ. «Autonomía de la vida rural fue una característica de evolución de sociedad dominicana en el siglo XVIII». *El Caribe*, 10 de agosto de 1991, y «Frontera ganadera y dispersión rural caracterizan siglo XVIII dominicano». *El Caribe*, 24 de agosto de 1991; Richard TURITS. *Foundations of despotism...* [7], cap. 1.
31. En los siglos XVII y XVIII, varios funcionarios y observadores europeos clasificaron la mayoría de la población como «mulata» o «mestiza». Roberto CASSÁ. *Historia social y económica de la República Dominicana*. Santo Domingo: Alfa y Omega, 1992, vol. 1, p. 108; Frank MOYA PONS. *El pasado dominicano*. Santo Domingo: Fundación J. A. Caro Álvarez, 1986, p. 102-103; Frank PEÑA PÉREZ. «Despoblación y miseria...» [17], p. 89; C. LYONNET. «Estadística de la parte española de Santo Domingo, 1800». En: Emilio Rodríguez Demorizi (ed.). *La era de Francia...* [25], p. 191. Carlos LARRAZÁBAL BLANCO. *Los negros...* [20], p. 184.

El racismo y las categorías raciales oficiales habían figurado de manera prominente en la ley y la ideología coloniales³². Pero aún no tenemos muy claro cómo evolucionaron en condiciones de libertad en el monte dominicano durante el periodo colonial y en la república. Los campesinos independientes llevaron una vida contrapuesta a las visiones coloniales de una sociedad de blancos libres y trabajadores negros subordinados. La distancia a la que se encontraba el campesinado de las instituciones metropolitanas, la reducida presencia de blancos en las áreas rurales y el escaso grado de segmentación económica en la sociedad campesina, pudieron haber minado la importancia cotidiana de las categorías raciales en el campo³³. No obstante, el racismo oficial continuó imperando, sobre

todo en las ciudades. El Estado mantenía, al menos en principio, una clara jerarquía racial similar a la reinante en otras partes del imperio español. Existía una tradición legal que privilegiaba a quienes podían demostrar «limpieza de sangre», y normas, leyes y reglamentos les prohibían a los individuos de color desempeñar ciertas profesiones, ingresar en la universidad y ocupar algunos cargos en la burocracia, las fuerzas armadas y el clero. Aun así, estas restricciones y discriminación raciales se mitigaron en la práctica durante el siglo XVIII, a pesar de varios esfuerzos oficiales e individuales por mantenerlas. Y algunas personas de color lograron conseguir posiciones en la Universidad, la Iglesia, el Estado y el Ejército.³⁴ Algunos individuos libres de color también adquirieron esclavos. Los

32. Y ello dio pie a una diversidad de representaciones (y sub-representaciones), construcciones acerca de la «belleza», aforismos populares y formas de privilegio y estigma, todos racistas, que persistieron después de que el país se independizó de Haití en 1844, aunque de manera paradójica. H. HOETINK. *The Dominican People...*[23], p. 188-192; Carlos DEIVE. «El prejuicio racial en el folklore dominicano». *Boletín del Museo del Hombre Dominicano* (Santo Domingo). 4/8 (1977).
33. Un análisis preliminar de los registros matrimoniales del siglo XVIII en Santo Domingo también apunta a la debilidad de las comunidades e identidades raciales, particularmente en las zonas rurales, donde muchos de los identificados como «negros» o «mulatos» por oficiales eclesiásticos contrajeron matrimonio con individuos no identificados como personas de ascendencia africana (tampoco son reconocidos como «blancos», categoría que no aparece, salvo implícitamente, en estos registros). Ello parece reflejar la existencia de matrimonios interraciales y/o que las identidades oficiales que denotaban personas de ascendencia africana fueron reservadas fundamentalmente para quienes habían sido esclavos o tenían familiares cercanos que lo habían sido. Véase: ARCHIVO DEL ARZOBISPADO, Santo Domingo, Libro de Matrimonios 1, Santa Cruz del Seybo, 1744-1783. También resulta significativo que no hubiera libros parroquiales separados para blancos y no blancos, como llegó a haber en el resto del gran Caribe español; de hecho, en la actualidad, estoy investigando la manera en que fueron separados esos libros, en casi todas las colonias de la América Latina colonial. De ahí que en Santo Domingo en los mismos libros se registraran los matrimonios, bautizos y muertes de blancos, esclavos y «libres» (de color). Y en algunos casos los nombres de prominentes miembros de la colonia aparecen, por ejemplo, inmediatamente antes o después de los de cimarrones de Saint Domingue y esclavos nacidos en Africa. En 1815, funcionarios locales defendieron ante la Corona esta práctica excepcional explicando que no podían «tener una ciencia cierta de las calidades de los padres, ó de los que contraen matrimonio para insertar en [las partidas] si son blancos, pardos, ó esclavos [sic., negros?]». Véase: ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, Indiferente General, leg. 1534: «El Gobernador y Capitán General al Secretario del Supremo Consejo de Indias, 16 de Junio de 1815». La importancia del asunto exige más investigación, pero parece haberse correspondido con las condiciones sociales que hicieron que las comunidades —incluso en la capital— no se constituyeran claramente en términos del color de la piel. Ello puede haber tornado especialmente problemáticas la determinación de la condición racial y la separación entre las consideradas blanca y no blanca.
34. M.L.E. MOREAU DE SAINT-MÉRY. *Descripción de la parte española...* [23], 93-94; Frank MOYA PONS. «Dominican national identity: a historical perspective». *Punto 7 Review: a journal of marginal discourse* (New York). 3/1 (1996), p. 15; Silvio TORRES-STAILLANT. «Creoleness or blackness: a Dominican dilemma». *Plantation Society of the Americas* (Fiehrer). 5/1 (1998), p. 31; Carlos Esteban DEIVE. *La esclavitud del negro...* [16], vol. 2, p. 553-598; H. HOETINK. *The Dominican People...*[23], p. 183; Leslie ROUT, Jr.. *The African Experience in Spanish America: 1502 to the Present Day*. Nueva York: Cambridge University Press, 1976, p. 136-156. Ver también Cipriano de UTRERA. «Antonio Sánchez Valverde». En: Sánchez Valverde. *Idea del valor...*[19], p. 7-39.

documentos oficiales registran, por ejemplo, a «morenos libres» dueños de «morenos esclavos». Éste es un aspecto que demanda una investigación más en profundidad³⁵. Asimismo, en el habla local surgieron un conjunto de términos raciales que fueron empleados para designar a personas de color privilegiadas, esto es, aquellas que habían conseguido acceder a los cargos e instituciones teóricamente reservados para los blancos. En el siglo XVIII, los funcionarios locales clasificaban a menudo a tales individuos como «trigueños» o como «blancos de la tierra» o «blancos que da la tierra», o sea, el tipo de blanco que esta tierra produce. El empleo de esos términos era, por una parte, una encarnación del racismo. Pero también parecen haber tenido un fin práctico que iba a contrapelo de la jerarquía racial: permitirles a personas de color ocupar posiciones y desempeñar responsabilidades (por ejemplo, en las milicias) legalmente reservadas a los blancos³⁶. Por tanto, este léxico suponía una mediación entre las leyes metropolitanas y las realidades locales, y entre el resentimiento y los esfuerzos de los blancos encaminados a subordinar a las personas libres de color y la movilidad, la insistencia en la igualdad, y, en la práctica, el importante papel desempeñado por la población de ascendencia africana en la conformación de la sociedad colonial dominicana.

Sin embargo, a pesar de una cierta liberalización, el prejuicio y la discriminación siguieron afectando mucho a la población libre de color de las zonas urbanas, confinada en buena medida a oficios como los de fabricantes de monturas, zapateros y carpinteros, y que se veía obligada a competir por esos empleos con los esclavos³⁷. No obstante, en las zonas rurales explotaba libremente lo que parecía ser una vastedad ilimitada de tierras vírgenes, territorio en el que las formas o reclamaciones de propiedad eran vagas e inciertas.³⁸ Los protocolos notariales indican también que cierto número de personas libres de color se convirtieron en ganaderos y dueños de tierras relativamente prósperos. De seguro en las zonas rurales, las personas libres de color del Santo Domingo colonial no constituían el tipo de grupo marginal que sí lo eran, por ejemplo, en los Estados Unidos antes de la Guerra Civil. En consecuencia, dos mundos diferentes parecen haber coexistido en Santo Domingo durante la era colonial. La esclavitud, la jerarquía racial establecida por la ley y la ideología colonial española afectaban mucho a las personas libres de color de las zonas urbanas. Si existía un discurso conservador de inclusión en algunos sentidos, es obvio que no existía un discurso liberal de igualdad. Pero apartados de esos espacios urbanos, los campesinos de

35. Ver por ejemplo el acta de matrimonio del 7 de septiembre de 1738 entre Francisca del Rosario y Joseph de Altagracia, identificados como «morenos esclavos» de los «morenos libres» capitán Juan Mendes y Ana Santiago. ARCHIVO ARZOBISPAL, Libro de Matrimonios 4, Catedral (Santo Domingo), 1718-1741: «Acta de matrimonio del 7 de septiembre de 1738 entre Francisca del Rosario y Joseph de Altagracia».

36. Ver, por ejemplo, Emilio RODRÍGUEZ DEMORIZI. *Milicias de Santo Domingo, 1786-1821*. Santo Domingo: Editora del Caribe, 1978, p. 111-12. Raymundo González me informó sobre el uso de la expresión «blancos que da la tierra» en el Santo Domingo del siglo XVIII. Comunicación personal con González, 23 de junio de 1999. Ver también J.B. LEMONIER DELAFOSSE. *Segunda campaña de Santo Domingo: Guerra dominico-francesa de 1808*. Santiago, R.D.: Editorial El Diario, 1946, p. 151, y Jonathan BROWN. *The history and present condition of St. Domingo*, vol. 2. London: Frank Cass & Co., 1971, p. 286.

37. Raymundo GONZÁLEZ. «Libertos en la sociedad esclavista», *El Caribe*, 30 de noviembre de 1991; comunicación personal con González, 23 de junio de 1999.

38. Richard TURITS. *Foundations of despotism...* [7], cap. 1.

ascendencia africana vivían en buena medida fuera del alcance del Estado colonial y de los escenarios donde predominaban sus distinciones raciales³⁹.

Pero las coyunturas económicas que se produjeron a lo largo del siglo XVIII movilizaron nuevos intereses del Estado y la elite de desarrollar la agricultura de plantación y de someter al campesinado de la colonia para que proveyera una mano de obra barata que resultaba sumamente necesaria. En 1788, el gobernador interino y oidor de la Real Audiencia de Santo Domingo, Pedro Catani, se lamentaba de las facilidades imperantes para la manumisión y la fuga de esclavos, que habían incrementado las filas del campesinado autónomo, y las culpaba del estancamiento económico de la colonia. Catani denostaba a los «negros libres, que se ubican en el paraje que les parece, trabajando por sí o por otro como les acomoda [...] no tienen sujeción; se sitúan por lo común dentro de los montes; viven a su antojo con toda libertad e independencia; van casi desnudos y son la causa y origen de todos los daños que se cometen y pueden ocurrir en la isla»⁴⁰.

En esa época, las elites locales, y después la Corona, emprendieron diversos esfuerzos para redactar un código negro inspirado en los franceses de 1685 y 1724, que consolidara

las normas legales relativas a la raza y la esclavitud en Santo Domingo. Con la esperanza de emular la lucrativa economía de plantación de la vecina Saint Domingue, la corona le ordenó en 1783 al gobernador de Santo Domingo que redactara «unas ordenanzas para el gobierno económico y moral de los negros de esta isla». Un año después, una comisión integrada por autoridades políticas y eclesiásticas y grandes terratenientes locales, y encabezada por el oidor decano de la Audiencia de Santo Domingo, el jurista vasco Agustín Ignacio Emparán y Orbe, concluyó el Código de Legislación para el Gobierno Moral, Político y Económico de los Negros de la Isla Española o Código Negro Español, conocido también como carolino código negro, en honor de Carlos III⁴¹.

Lo que más llama la atención en los informes rendidos a Emparán por la comisión compuesta por personajes de la elite local no son las preocupaciones causadas por la esclavitud *per se* o el cimarronaje, sino por la creciente población libre de color. La comisión denunció la frecuencia supuestamente excesiva de las manumisiones y la gran población resultante de descendientes de africanos que vivía en el campo en lo que tildaban de ociosidad. El coronel Joaquín García, un miembro de la elite local que pronto

39. Sin embargo, ello no significa que las personas libres de color que vivían en las zonas rurales no se vieran afectadas por las amenazas y las influencias de las fuerzas metropolitanas. Las normas de exclusión racial y los prejuicios raciales de la sociedad urbana pueden haberse irradiado, en cierto sentido, hacia las zonas rurales. Y los campesinos pueden haberse visto directamente enfrentados a ellas si se aventuraban a ponerse demasiado al alcance de los espacios metropolitanos. De hecho, una de las razones por la que muchos campesinos dependían tanto de la caza y la recolección en los bosques en vez de dedicarse a la agricultura sedentaria puede haber sido la de que necesitaban la movilidad geográfica para eludir a los buscadores de esclavos y los funcionarios coloniales. Resulta claro que las personas que se desplazan de un lugar a otro pueden escapar con más facilidad de la mirada y los dictados del Estado.

40. Raymundo GONZÁLEZ. «Campesinos y sociedad colonial...» [25]. ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, Santo Domingo, 998. «Pedro Catani a Su Majestad, Informe sobre la comisión para capturar el negro incógnito», Santo Domingo, 25 de mayo de 1793». Reproducido en Raymundo GONZÁLEZ. «Ideología del progreso y campesinado en el siglo diecinueve», *Ecos* (Santo Domingo). 1/2 (1993), p. 28.

41. Javier MALAGÓN BARCELÓ. *Código negro...* [23], p. XVIII-XIX, XLVI, LI y 159. Louis SALA-MOLINS. *L'Afrique aux Amériques: Le Code Noir espagnol*. París: Presses Universitaires de France, 1992.



Plaza del Mercado Samuel Hazard, *Santo Domingo past and present* (1873)

llegaría a ser gobernador, se quejaba de que la manumisión a la muerte del amo se había convertido en una práctica casi habitual, y de que cada nuevo esclavo libre significaba «uno más que contar en el número de vagos o mal entretenidos negros»⁴². García no sólo expresaba sus preocupaciones por lo reducido de la producción, sino también por el limitado papel de la raza en la sociedad rural. Los negros y pardos libres, se lamentaba, andan por la colonia con «toda frescura y seguridad» y confunden su identidad «con la del amo, vecino blanco, patricio honrado y hombre

distinguido, como si no hubiera más clases que libres o esclavos». De ahí, argüía que resultaba necesario que las estipulaciones del código «abracen todas las clases que proceden de negros...pues si solamente se determinase sobre los esclavos, quedaría (a mi entender) toda la dificultad en pie»⁴³.

El Código Negro de 1784 respondió a esas preocupaciones e intereses de la elite local de restablecer la jerarquía racial de la ideología colonial española. Además de procurar «la ocupación útil y asidua de los negros libres y esclavos en el cultivo de las producciones

42. Javier MALAGÓN BARCELÓ. *Código negro...* [23], p. 97-98.

43. Javier MALAGÓN BARCELÓ. *Código negro...* [23], p. 94-95, 98.

que necesita la metrópoli», en el preámbulo se exigía también «su división oportuna en clases y razas». Según García, en las zonas rurales existía muy poco respeto por la jerarquía racial. Las estipulaciones del código parecen indicar que ello también constituía una realidad en zonas más urbanas. El Código intentaba restablecer la diferencia racial mediante una regulación estricta de la deferencia pública, esto es, mediante la «perfecta subordinación y respeto...a toda persona blanca» por parte de las personas de color; castigos racialmente diferenciados, que incluían los azotes públicos de negros y mulatos libres; restricciones al empleo y a la movilidad geográfica de los negros, mulatos y tercerones; regulaciones sobre artículos suntuarios que les prohibían a negros y mulatos usar vestidos elegantes; e interdicciones a la educación de negros y «pardos primerizos», así como la implantación de la segregación racial de «los blancos, los tercerones, cuarterones y demás que pueden ponerse en aulas separadas» en las escuelas donde antes la «confusión y mezcla» habían creado, supuestamente, «las sinietras impresiones de igualdad y familiaridad entre ellos». El Código también estipulaba el fin del desempeño imperante de «los negros y libres y aun algunos esclavos...[en] todas las artes, profesiones y oficios mecánicos, defraudando a la población blanca y de color

medio». Estas formas de discriminación legal se sumaban a otras medidas encaminadas a eliminar la autonomía campesina, como estrictas leyes sobre la vagancia y ordenanzas que estipulaban que los campesinos que vivían «alzados» en los montes serían reasentados en lugares cercanos a centros de población.

Por último, el Código intentaba establecer un control estatal sobre la manumisión y, por ese medio, sobre las dimensiones de la población libre de color. El Código prohibía «en adelante la ilimitada facultad y práctica de conferir libertades por sola la oblación de su precio». Requería para la manumisión «la participación y licencia del Gobierno...[para conservar] el justo equilibrio del número del pueblo de esclavos, y libres»; prueba de la «buena conducta» del «siervo»; y que el dinero pagado por la compra de la libertad no hubiera sido adquirido mediante la prostitución o el robo. Finalmente, el Código prohibió a «los poseedores de esclavos» que dieran libertad «a sus siervas e hijos» cuando el motivo fuera vivir en concubinato con las mismas. Teóricamente, en estos casos los (ex-)esclavos serían confiscados y vendidos por el Estado (aunque no era obvio cómo esta declaración sería puesta en práctica)⁴⁴.

Por razones que aun no están claras, la Corona nunca promulgó el carolino código negro.⁴⁵ No obstante, la historia de ese intento

44. Muchas de estas restricciones sobre la manumisión fueron inspiradas por ordenanzas del *Code Noir* francés. Javier MALAGÓN BARCELÓ. *Código negro...* [23], p. 162, 164, 171-172, 184 y 202-203.

45. En 1789, la Corona promulgó el código de esclavos, la «Real Cédula de su Magestad sobre la Educación, Trato y Ocupaciones de los esclavos, en todos sus dominios de Indias e Islas Filipinas», pero suspendió formalmente su aplicación en 1794 debido a la oposición de funcionarios y dueños de esclavos en Cuba, Venezuela, Colombia, Luisiana, y Santo Domingo, que lo consideraron demasiado liberal en términos de la protección legal que brindaba a los esclavos. Además, su suspensión se produjo en el contexto de los temores y la guerra generados por la revolución haitiana, que parece haber contribuido a inspirar un intento de rebelión de esclavos en Santo Domingo en 1793. En la actualidad investigo esta conspiración que, según se afirmó, alcanzó un amplio desarrollo en zonas centrales fronterizas con Saint Domingue. Javier MALAGÓN BARCELÓ. *Código negro...* [23], p. LIV-LXI; «Autos seguidos sobre la Insurrección pretendida por los negros esclavos en Hinch (Santo Domingo)», 26 de marzo de 1793. AGN, Archivo de la Nación de la República Dominicana cortesía del Archivo Nacional de Cuba, leg. 4, signatura 43.



Antiguo trapiche azucarero francés. Samuel Hazard, *Santo Domingo past and present* (1873).

de reforma legal durante el periodo colonial evidencia que las manumisiones frecuentes y la existencia de una gran población libre de color en Santo Domingo chocaba con las actitudes y los fines racistas de las elites españolas local y metropolitana. De ahí que no se puedan explicar los altos niveles de manumisión y la presencia de una población libre de color de grandes dimensiones y comparativamente bien integrada simplemente como producto de un discurso relativamente liberal sobre la raza y la esclavitud en España y la América Latina. Más bien, parece que éstos eran, fundamentalmente, resultado de la pugna, la negociación y el compromiso entre funcionarios estatales, dueños de esclavos y descendientes de africanos en el periodo temprano previo a la plantación, y después, de un número sustancial de personas libres

de color con derechos (consuetudinarios) y un nivel de integración demasiado enraizado en la sociedad para que fuera posible revertirlo fácilmente. Estimo que cuando España ya estuvo lista para respaldar los esfuerzos de la elite local para (re)establecer una economía de plantación esclavista y un orden racial colonial, la población libre de color era demasiado numerosa y estaba demasiado integrada para ser tan excluida y explotada como se preveía, por ejemplo, en el nunca llevado a la práctica Carolino Código Negro. De hecho, tales formas de exclusión y explotación habrían aumentado mucho las posibilidades de una rebelión en gran escala, en la cual, la población libre de color habría terminado aliándose con los esclavos, como ocurrió en esa época en Saint Domingue después de que una población libre de color

relativamente bien integrada fue dramáticamente reprimida⁴⁶. Además, en el caso dominicano, el Código Negro encarnaba una fantasía española de divisiones raciales barrocas que nunca se habría podido llevar a la práctica sin una enorme expansión de las fuerzas policiales, los registros genealógicos, los gastos gubernamentales y el aparato del Estado colonial en general.

La formación racial dominicana

La formación temprana y continua de un campesinado independiente de color que constituía la mayoría de la población en el Santo Domingo colonial sería seguida por la abolición de la esclavitud y el establecimiento de la igualdad racial legal durante la anexión de la República Dominicana por Haití, de 1822 a 1844 (tras haber conquistado su independencia de España en 1821)⁴⁷. Y esa ocupación fue seguida, a su vez, durante todo el siglo XIX, por una serie de luchas por la independencia y rebeliones políticas multirraciales. En conjunto, todos esos fenómenos dejaron un legado racial paradójico en la República Dominicana. Por un lado, en las

décadas posteriores al logro de la independencia de Haití, el Estado dominicano estuvo dirigido principalmente por personas de color, como el presidente Buenaventura Báez (1849-1853, 1856-1858, 1865-66, 1868-1874, 1876-1878), hijo de una esclava, y el presidente Ulises Heureaux (1882-1884, 1887-1899), de padre haitiano y madre originaria de Santo Tomás⁴⁸. Y a partir del periodo de la independencia hasta la ocupación norteamericana en 1916, por lo general no se emplearon categorías raciales en los documentos oficiales. Por otra parte, al menos las elites dominicanas siguieron privilegiando las facciones físicas asociadas con Europa y estigmatizando las asociadas con África. A inicios de la década de 1870, un viajero de Nueva Inglaterra que visitó la República Dominicana se sorprendió de la coexistencia con la igualdad racial establecida por ley de una intensa sensibilidad al tono de la piel entre las clases altas:

«Aunque los dominicanos son una raza mestiza [...] existe una especie de gradación según la «cantidad de café», que es la frase que se emplea aquí [...] el gobierno no sabe de esa aritmética, y

46. Dinámicas análogas quizás funcionaron en las conspiraciones ocurridas en Cuba en 1812 y 1844 y en la Segunda Guerra Seminole en la Florida (1835-1842). Mi hipótesis es que, en general, los estados sólo eran capaces de restringir las manumisiones y de reprimir fuertemente a las personas libres de color sin generar un fermento político, o incluso una revolución como ocurrió en Saint Domingue, cuando esas medidas se imponían desde un inicio e impedían el surgimiento de una población libre de color de grandes dimensiones o con poder socioeconómico. Ése fue el camino que siguieron, en general, las colonias británicas.

47. El impacto de la ocupación haitiana se evidencia en documentos de la Iglesia (los registros del Arzobispado de Santo Domingo). Hasta 1822, los registros eclesiales de los nacimientos, los matrimonios y los fallecimientos ocurridos en Santo Domingo incluían no sólo si el individuo en cuestión era esclavo, sino también en algunos casos si era «libre» (de color) o liberto, y en algunos casos si era «negro», «moreno» o «pardo» (o «mulato»). Una vez anexado el país a Haití en 1822 — pocos meses después de declarar su primera independencia de España — todas las categorías raciales, descripciones del color de la piel y referencias a una (pasada) condición de servidumbre desaparecieron de los registros. Tras la independencia de Haití en 1844, los registros civiles de nacimientos, matrimonios y fallecimientos (que se conservan en el Archivo General de la Nación) tampoco incluyeron distinciones raciales.

48. H. HOETINK. *The Dominican People...* [23], p. 102-103. No obstante, esos dirigentes políticos fueron repetidamente estigmatizados por sus opositores debido a su genealogía, su apariencia física y su supuestamente dudosa nacionalidad. Sin embargo, a principios del siglo XX, con el crecimiento económico, el surgimiento de una burguesía nacional y la difusión del racismo científico en Europa y América, los blancos reconquistaron su predominio político, entre otras cosas, ocupando la presidencia hasta que Rafael Trujillo se hizo del poder en 1930. Carlos DEIVE. «El prejuicio racial...» [31], p. 90; H. HOETINK. *The Dominican People...* [23], p. 189-92.



Elaborando tabaco. Samuel Hazard, *Santo Domingo past and present* (1873).

emplea a su servicio, indiscriminadamente, a todos los «grados de café», y muchos de los más capaces son muy negros»⁴⁹.

Por una parte, el grado en que las personas de ascendencia africana, particularmente en el campo, fueron incorporadas en una temprana comunidad criolla o proto-nacional,

y también en las múltiples revoluciones dominicanas de independencia contribuye a explicar la formación racial dominicana en el periodo que siguió a la independencia, en el que no se desarrolló en esa nación predominantemente afroamericana ni un sistema legal de exclusión o segregación racial ni una

49. Rodolphe GARCZYNSKI. «Life in Santo Domingo City». *Appletons' Journal* 9/223 (1873), p. 839-42. Le agradezco a Aldo Lauria-Santiago el haberme proporcionado una copia de este artículo. Sobre el racismo expresado en criterios estéticos en la República Dominicana, ver también Carlos DEIVE. «El prejuicio racial...» [31], p. 80-84. El sociólogo Harry Hoetink describió

identidad colectiva negra (esto es, una comunidad marcada o representada por el color de la piel, integrada por descendientes de africanos). Por otro lado, el impacto y las formas precisas de discriminación y prejuicio producidos por la simultánea preocupación racista con las gradaciones del color de la piel, y las variaciones de ese racismo con el tiempo, el espacio y las clases, así como sus implicaciones sociales y políticas, son cuestiones que requieren más estudio⁵⁰.

No obstante, en este punto de mis investigaciones parece claro que estas historias aparentemente contradictorias de integración y discriminación coadyuvaban al surgimiento de formas de identidad y modos de racismo

en la República Dominicana en los que las características físicas no han dado pie, por lo general, a comunidades imaginadas, esto es, grupos sociales asociados con historias y experiencias comunes. Más bien, han servido para estratificar infinitamente a los individuos según un continuo racista de la apariencia física y la «belleza», cuya base es la proximidad a las imágenes europeas o africanas. De ahí que un racismo de corte colorista ha imperado, pero, por lo general, los individuos considerados dominicanos no han estado divididos por la «raza» en el sentido de adscripciones colectivas de alteridad⁵¹. Me inclino a pensar que la aparentemente muy antigua ausencia de una identidad colectiva

la sociedad dominicana, desde fecha muy temprana, como un continuo infinito de distinciones raciales cuya base era el tono de la piel y otros rasgos físicos cuyos polos se asociaban con los colonialistas europeos de un lado, y con los africanos esclavizados del otro, por oposición a un sistema racial sustentado predominantemente en la existencia de dos o tres estratos (blancos – mulatos – negros). Ver Harry HOETINK. *Caribbean race relations. A study of two variants*. Nueva York: Oxford University Press, 1971 y Harry HOETINK «Race' and color in the Caribbean». En Sidney Mintz; Sally Price. *Caribbean Contours*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1985.

50. He encontrado en el Archivo General de la Nación (Santo Domingo) documentos de fines del siglo XIX y principios del XX que reflejan un discurso de gradación del color de la piel en evolución y aparente profundización. Por ejemplo, los registros militares y de prisiones que describen a los soldados y a los reclusos empleaban un vocabulario muy elaborado para describir el color de la piel (y muchos otros rasgos físicos). Resulta presumible pensar que los documentos militares reflejaban la tradición de recoger la mayor cantidad posible de detalles a fin de ayudar a identificar las bajas. Y la forma de los registros de prisiones muy probablemente estaba inspirada en propósitos similares, esto es, la identificación de los prisioneros que escapaban, y, a fines del siglo, en la criminología de corte racista científico que imperaba entonces en Europa y las Américas. No obstante, resulta interesante que en vez de seguir un esquema racial de tres estratos, los registros militares y de prisiones empleaban una panoplia de términos que se solapaban para describir el color de la piel: «blanco», «claro», «trigueño», «amarillo», «mulato», «pardo», «oscuro», «negro», y, más a menudo, «moreno» e «indio» (en ocasiones con la especificación de «indio oscuro» o «indio claro»).
51. Las estadísticas del censo en la era trujillista siguieron identificando a la mayoría de los dominicanos como «mestizos». El censo de 1935 indicaba que el 13% de la población era «blanca», el 19% «negra», y al 68% «mestiza». Véase Jean PRICE-MARS. *La República de Haití y la República Dominicana: diversos aspectos de un problema histórico, geográfico y etnológico*. Puerto Príncipe: 1958, vol. I, p. 181. Pero parece ser que el esquema racial de dos o tres estratos era mucho menos significativo para la mayoría de los dominicanos que el color de la piel. En 1932, cuando se emitió por primera vez la cédula de identidad, una autora observó cómo describían su «color» para estos carnés de identidad los habitantes de El Cibao. Haciéndose eco de observaciones realizadas en el siglo XIX, llegaba a las siguientes conclusiones: «Aquí nos distinguimos por esta clasificación de colores: blanco, indio, indio claro, indio oscuro, mulato, mulato colorado y moreno [...] Muy raros declaran ser negros, a no ser haitianos o de las colonias inglesas [del Caribe]; los nuestros se llaman morenos, nombre que se da regularmente por confianza y por cariño». Véase M. UBALDO GÓMEZ. «El color de los dominicanos». *Bahoruco* (Bahoruco). 3/106 (1932), p. 18-20. Con el tiempo, el color intermedio de «indio» llegó a incluir en la cédula hasta a los dominicanos de piel más oscura. Algunos estudiosos han interpretado el uso del término «indio» como evidencia de una identificación racial o étnica falsa de los dominicanos con los indios, y una negación de su legado racial africano, que se convirtió en institución legal durante el régimen de Trujillo. Ernesto SAGAS. *Race and politics in the Dominican Republic*. Gainesville: University Press of Florida, 2000, p. 67 y 76. Y la denigración y el ocultamiento frecuentes del importante papel desempeñado por las prácticas afrocaribeñas en la historia y la cultura dominicanas son formas obvias de racismo. Pero el término «indio» generalmente se ha empleado en el lenguaje cotidiano como adjetivo, sin que implique prácticamente ningún referente genealógico indígena (más allá del

negra entre los individuos de ascendencia africana en la República Dominicana —que incluso en nuestros días les produce perplejidad a muchas personas de otros países— fue consecuencia originalmente de la inexistencia de una esclavitud de plantación desde principios del siglo XVII, y de la presencia de una población mayoritariamente libre y de color casi doscientos años antes de que se produjera la emancipación formal⁵².

La República Dominicana contemporánea ha sido interpretada generalmente por los estudiosos como una nación en la cual los descendientes de africanos niegan ser «negros», y en la que el racismo interno se «desplaza» a Haití y a los haitianos. Pero si asumimos seriamente la idea de que la raza es una construcción histórica y no una esencia que atraviesa las fronteras de las culturas, y que las comunidades pueden ser imaginadas de formas múltiples y muy diferentes, resulta insostenible este argumento de la existencia de una «falsa conciencia». La historia dominicana es fascinante precisamente porque los descendientes de africanos *no* construyeron una identidad común negra, y porque incluso hasta nuestros días, la sociedad no está dividida en comunidades raciales, aun cuando los individuos sí están estratificados, en formas que aún tienen que ser



Guajiro. Samuel Hazard, *Santo Domingo past and present* (1873).

precisamente delineadas, según un continuo de color de corte racista. Es seguro que esta formación racial refleja los esfuerzos de los dominicanos para distanciar su identidad de la desacreditada por discursos racistas globales y de las elites, así como la dinámica de las relaciones entre Haití y la República Dominicana.

metafórico) para designar un rango somático y de colores de la piel en el marco de un continuo de apariencias raciales, a saber, un individuo de piel más clara que la media, pero aun así no blanco. Y no se ha empleado, precisamente, como sustituto de «negro». Hasta nuestros días se emplea en el lenguaje cotidiano el término «moreno» para describir el color de los dominicanos de piel más oscura, y «negro» se usa como categoría racial en las estadísticas oficiales (pero no para describir el «color» en la cédula). Pocos dominicanos de color han negado ser parcialmente descendientes de africanos. No obstante, la falta de construcción de una identidad común negra —y, aparentemente, de cualquiera identidad colectiva o noción de comunidad sobre la base de color— en la República Dominicana exige más estudio, y es una de las anomalías en el seno de la diáspora africana que mi proyecto de investigación en curso intenta elucidar más profundamente. Nótese también que el término «indio» era de uso común al menos desde fines del siglo XIX. Ver, ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Ministerio de Guerra y Marina, leg. 55: «Comandancia del Puerto de Barahona. Relación de los marinos inscritos en el registro de matrículas en esta Comandancia, 19 de abril de 1897», que enumera el «color» de veintidós marinos (diez eran «morenos», nueve «indios» y tres «indios claros»).

52. Ver también Silvio TORRES-SELLANT. «Tribulations of Blackness...» [9] ; Frank MOYA PONS. «Dominican national identity...» [34], p. 14-25.

Como he planteado en trabajos anteriores, a fines del siglo XIX —en los años cuando comenzó la migración haitiana hacia la región fronteriza de la República Dominicana— los discursos de la elite comenzaron a menospreciar cada vez más las prácticas culturales asociadas con Africa y a construir a Haití y a los haitianos étnicos como una nación o una raza «africana» y «negra», en contraste putativo con todos los dominicanos (con independencia del color de su piel). Y ese antihaitianismo se convirtió en un discurso popular durante el régimen de Trujillo y siguió siéndolo después

de terminado su gobierno⁵³. Pero, sobre todo, lo que sostengo aquí es que la formación racial dominicana contemporánea, sus formas paradójicas de racismo sin «raza» (es decir sin identidades colectivas y comunidades raciales), son hijas de una larga trayectoria que parte de la historia temprana del cimarronaje, de la manumisión y de la libertad de los montes. Y, en este sentido, tiene analogías con otros espacios de las Américas constituidos, en buena medida, por una población libre de ascendencia africana mucho antes de la abolición de la esclavitud.

53. Richard TURITS. «A world destroyed, a nation imposed: the 1937 Haitian massacre in the Dominican Republic». *Hispanic American Historical Review* (Durham). 82/3 (2002); Richard TURITS. *Foundations of despotism...* [7], cap. 5.

La manumisión, el género y la ley en el Brasil del siglo XIX: el proceso legal de Liberata por su libertad

KEILA GRINBERG

La historia de Liberata

Alrededor de 1790, José Vieira, un residente de la zona de Desterro, ubicada en el sur de Brasil, compró a Liberata, entonces una mulata de diez años de edad. Poco después comenzó a acosarla hasta que la joven consintió en sostener relaciones sexuales con él a cambio de la promesa de su futura libertad.

Tres años más tarde, Liberata y Vieira tuvieron un hijo, bautizado como libre con el nombre de João. A continuación Liberata sufrió tal persecución a manos de la familia de Vieira, que cuando nació su segundo hijo le pareció preferible bautizarlo como esclavo, sin declarar su paternidad. A partir de ese momento, comenzó a exigirle a su amo la libertad prometida. Vieira le aseguró entonces que la liberaría después de su muerte, en su testamento, pero Liberata ya no creía en él. Quería cambiar su vida, comenzó una relación romántica con un mulato libre de nombre José y se dirigió al sacerdote de la parroquia para que intercediera ante Vieira para que la liberara a cambio del pago de

115.200 reales¹. José quería comprar la libertad de Liberata para casarse con ella. Pero Vieira no se mostró de acuerdo con la suma y le prohibió a Liberata contraer matrimonio.

Ésa fue la razón de que la esclava se dirigiera al tribunal municipal de Desterro en julio de 1813 para promover una querrela en demanda de su libertad contra su amo Vieira, en la que su defensor alegaba para ello el argumento de que se la había mantenido en una prisión particular y que había sufrido malos tratos cotidianamente a manos de su dueño². Pero Vieira no respondió a la petición del tribunal, sino que optó por defenderse realizando un canje de esclavos con su hijastro Floriano José Marques, que, por tanto, se convirtió en el dueño legal de Liberata, lo que implicaba que las promesas de libertad de Vieira carecían ya de todo valor.

Ante esa situación, el defensor de Liberata adoptó una nueva estrategia: acusar a José Vieira, a partir de informaciones que le dio Liberata, de matar a sus nietos, los hijos ilegítimos de su hija. Vieira había matado a cuatro

1. La moneda brasileña de la época era el real.

2. ARCHIVO NACIONAL (Rio de Janeiro), Tribunal da Relação, Desterro, Juicio nº 1337, caja 214.



Negras libres viviendo de su trabajo. Jean-Baptiste Debret, Voyage pittoresque et historique au Brésil (1831).

recién nacidos, arrojándolos al mar o enterrándolos en sus propiedades, por temor a que perjudicaran su reputación. La acusación resultó fructífera: un mes después, Liberata retiró su denuncia y recibió la libertad.

Ésta es la primera parte de un largo proceso en demanda de libertad encontrado en el Archivo Nacional de Río de Janeiro, en la sección del Tribunal de Apelaciones de la ciudad. Junto con la abundancia de detalles y el notable relato, la lectura del proceso me dio

la clara impresión de que se trataba de un caso relativamente corriente. Dejando a un lado las atrocidades cometidas por José Vieira, lo que me pareció de rutina fue la solución por medios privados de la cuestión de la libertad. Aunque comenzó con una acción legal, el caso se resolvió mediante un acuerdo entre una esclava y su dueño que contó con la aprobación de un abogado. No obstante, no era eso lo que revelaban muchos otros procesos en demanda de libertad encontrados.

Procesos en demanda de libertad en el Brasil del siglo XIX

El conocimiento de la existencia en Brasil durante un largo periodo de tiempo de procesos en demanda de libertad no es nuevo. Silvia Lara los menciona en su libro sobre la esclavitud en Campos durante el periodo colonial. Peter Eisenberg, al escribir sobre la transición del trabajo esclavo al trabajo libre en Pernambuco, subrayó la importancia de su estudio como una vía para comprender mejor la efectividad de las leyes relativas a la manumisión. Lenine Nequete analizó esos documentos desde un punto de vista legal en *O Escravo na Jurisprudência Brasileira*. Los libros de Sidney Chalhoub y Hebe Mattos, que investigan las estrategias para la obtención de la libertad durante las últimas décadas del régimen de trabajo esclavo en Brasil son, hoy por hoy, lectura obligada en esta área³.

Cuando Sidney Chalhoub publicó *Visões da Liberdade*, el primer estudio sustentado

3. SÍLVIA H. LARA. *Campos da violência: escravos e senhores na Capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988; PETER EISENBERG. *Modernização sem mudança: a indústria açucareira em Pernambuco, 1840-1910*. Rio de Janeiro, Campinas: Paz e Terra, Editora da Unicamp, 1977. LENINE NEQUETE. *O escravo na jurisprudência brasileira: magistratura e ideologia no segundo reinado*. Porto Alegre: Revista dos Tribunais, 1988. SIDNEY CHALHOUB. *Visões da liberdade: as últimas décadas da escravidão na corte*. São Paulo: Companhia das Letras, 1990; HEBE MATTOS. *Das cores do silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista - Brasil século XIX*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.

en el análisis de un gran número de estas fuentes, una de las preocupaciones centrales de la historiografía brasileña sobre la esclavitud era subrayar la humanidad de los esclavos, presentando sus acciones cotidianas y sus estrategias para alcanzar la libertad del dominio que sobre ellos ejercían sus amos. Mediante la búsqueda de fuentes que les permitieran conocer mejor las vidas de los esclavos, sus relaciones personales y cotidianas con amos y personas libres, Chalhoub se interesaba por poner en tela de juicio la ya tradicional interpretación de que la conducta de los esclavos sólo podía entenderse en términos de una dualidad de pasividad y rebelión⁴. Hebe Mattos, en *Das cores do silêncio*, también contribuyó a refutar la idea de que si no participaban en una rebelión, poco podían hacer los esclavos para cambiar su condición. En su análisis, emplea las demandas legales de libertad para demostrar la creciente fragilidad de la política de dominio de los amos, a partir del momento en que los esclavos, representados por abogados, defendieron en los tribunales su derecho a la libertad, rompiendo así los vínculos de servidumbre con los dueños a quienes hasta entonces debieran obediencia.

La obra de Chalhoub y Mattos sacó a la luz un conjunto de evidencias acerca del papel desempeñado por esas acciones legales en el proceso de deslegitimación de la esclavitud en el Brasil del siglo XIX. De ella se desprende claramente que las acciones legales, al poner en jaque las costumbres



Negras de Rio de Janeiro. Johann Moritz Rugendas. *Voyage pittoresque dans le Brésil* (1835).

establecidas y rediseñar las relaciones entre esclavos y amos, fueron un recurso utilizado por los primeros y sus abogados a partir de la década de 1850 para presionar en favor de la libertad de esclavos específicos y para promover los derechos civiles e incluso la emancipación general. En el presente artículo me propongo, mediante el análisis de la demanda legal de libertad promovida por la esclava Liberata, examinar las posibilidades de obtención de la libertad mediante un proceso legal en el Brasil del siglo XIX, especialmente en el periodo previo a la abolición del comercio trasatlántico de esclavos en

4. Para ejemplos de la historiografía que suscribe este dualismo, ver Fernando Henrique CARDOSO. *Capitalismo e escravidão no Brasil meridional: o negro na sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul*. São Paulo: DIFEL, 1962; Jacob GORENDER. *O escravismo colonial*. São Paulo, Ática, 1971. Para un análisis de ese movimiento historiográfico, ver Ciro Flamarion S. CARDOSO (ed.). *Escravidão e Abolição no Brasil - novas perspectivas*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1988 y Sílvia H. LARA (ed.). *Escravidão*. São Paulo: 1988 (*Revista Brasileira de História*; 8/16 [1988])

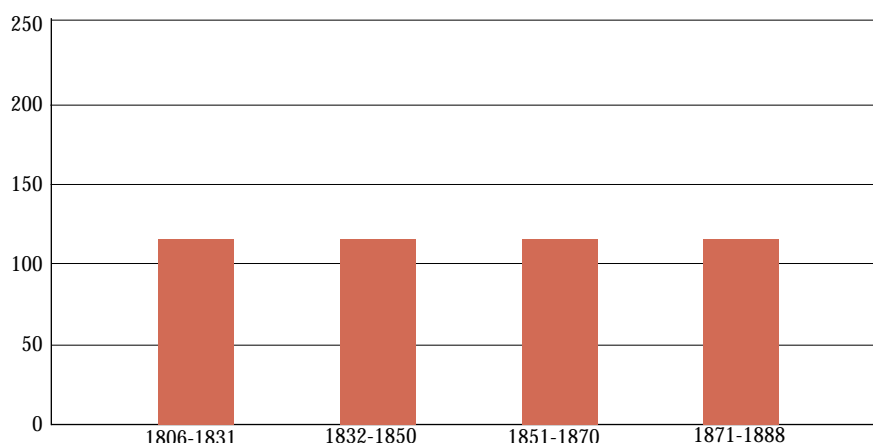
1850⁵. El hecho de que numerosos esclavos hayan logrado obtener su libertad mediante dichos procesos legales muestra que el imperio brasileño tuvo una efectiva intervención en el cambio de la condición de éstos.

Se conoce que el recurso a los tribunales por parte de esclavos era una práctica relativamente corriente en Brasil, al menos durante el siglo XIX. Cuando investigaba en el Archivo Nacional encontré en una gaveta rotulada «Esclavos» de la Corte de Apelaciones de Río de Janeiro, 671 documentos, de los cuales 291 eran procesos penales y 380 demandas de

libertad, todos llevados a cabo en Brasil entre 1808, cuando João VI y la corte portuguesa se trasladó a Río de Janeiro, y 1888, fecha de abolición de la esclavitud en el país⁶. Aunque no se conoce cuándo comenzaron esos procesos en Brasil, los documentos encontrados evidencian que tuvieron lugar a todo lo largo del XIX, y que con el transcurso del siglo su número aumentó (ver gráfico 1).

Se conoce también que dichos procesos se llevaron a cabo en todo el país, pero muy especialmente en el sudeste y el sur (ver gráfico 2)⁷. De hecho, los estudios de Chalhoub

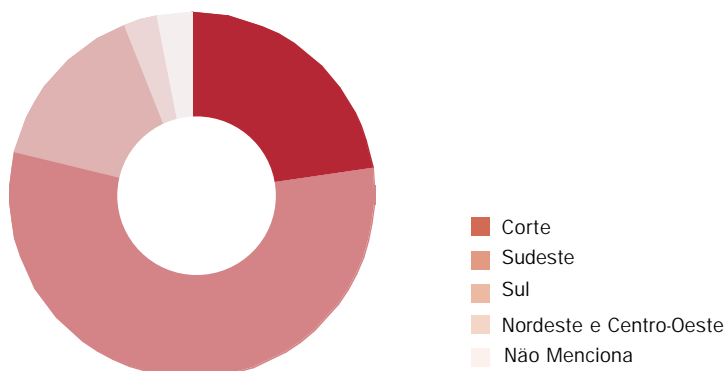
Gráfico 1: Frecuencia de los procesos en demanda de libertad en el Brasil del siglo XIX



Fuente: ARQUIVO NACIONAL (Río de Janeiro), Tribunal da Relação do Río de Janeiro.

5. Como los procesos legales en demanda de libertad expresan una forma de conflicto entre amos y esclavos, constituyen un medio para evaluar algunos de los factores responsables del ocaso de la esclavitud. Entre ellos están la existencia de comunidades establecidas de africanos libres y libertos y sus descendientes, la participación de los esclavos en diversas actividades económicas, y el papel social de abogados, juristas, jueces y el Estado como un todo en la definición de la condición de los individuos que planteaban que no eran —o al menos ya no eran— esclavos. Ésos son los temas que explora fundamentalmente la historiografía más reciente relativa a los procesos legales en demanda de libertad en los Estados Unidos. Ver, por ejemplo, Kimberly HANGER. *Bounded lives, bounded places: free black society in colonial New Orleans, 1769-1803*. Durham: Duke University Press, 1997; Stephen T. WHITMAN. *The price of freedom: slavery and manumission in Baltimore and early national Maryland*. Kentucky: University Press of Kentucky, 1997; Patience ESSAH. *A house divided: slavery and emancipation in Delaware, 1638-1865*. Charlottesville, Londres: University Press of Virginia, 1996.
6. En el Archivo Nacional de Río de Janeiro, la sección referida al Tribunal de Apelaciones está organizada en orden alfabético según el nombre del actuario del proceso, sin distinguir entre juicios penales o civiles. Los procesos relativos a los esclavos se conservan en una gaveta aparte.
7. Ello podría explicarse por el hecho de que hasta 1874 el Tribunal de Apelaciones de Río de Janeiro recibía los casos cuyas decisiones se apelaban en tribunales ubicados en el sur y el sudeste del país. Las acciones promovidas en el nordeste de Brasil, después de que sus decisiones eran objeto de una apelación, se enviaban al Tribunal de Apelaciones de Bahía, en Salvador.

Gráfico 2: Frecuencia de procesos legales en demanda de libertad en el Brasil del siglo XIX, por regiones



Fuente: ARQUIVO NACIONAL (Rio de Janeiro), Tribunal da Relação do Rio de Janeiro. *Corte* significa Rio de Janeiro, la capital del imperio; *Sudeste* se refiere al sudeste del país, que comprende las provincias de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro y Espírito Santo; *Sul/Co/Ne* comprende todas las demás regiones de Brasil, esto es, el sur, el oeste y el nordeste; y bajo *Não Menciona* se agrupan los procesos en que no se menciona la región en la que tuvieron lugar.

y Mattos, que se centran en la región sudeste del Brasil, en la época la zona más populosa y rica del país, parecen indicar que la proximidad a los principales centros urbanos facilitaba el acceso a la información y a los individuos necesarios para emprender un proceso legal de obtención de la libertad. Además, la mayoría de los esclavos que entablaron demandas de libertad habían nacido en Brasil, mantenían alguna relación con sus amos y algún tipo de lazo familiar estable; ello parece indicar que las relaciones duraderas con el amo y con la familia propia eran factores claves para el éxito de los intentos de los esclavos por conquistar su libertad.

A juzgar por los testimonios presentados por los esclavos que se pueden encontrar en los procesos legales en demanda de libertad, éstos llevaban a sus amos ante los tribunales por una serie muy diversa de razones. En el caso de Liberata, la causa principal era la negativa de su amo a permitir que se comprara su libertad, a lo que se añadía la continua violencia a la que estaba sometida. Pero

en otros casos, las razones incluían el derecho a una carta de manumisión, en la que los amos le prometían a un esclavo concederle la libertad y después no lo hacían; o amos que manumitían a esclavos en un testamento, disposición cuyos beneficiarios se negaban a cumplir; la argumentación de que los esclavos ya vivían como libertos y se defendían de los intentos de sus antiguos amos u otra persona para volver a someterlos a la esclavitud (esos casos recibían el nombre de «*manutenções de liberdade*», o sea, mantenimiento de la libertad); o amos que reclamaban que sus supuestos esclavos vivían ilegalmente como libertos («*manutenções de escravidão*», esto es, mantenimiento de la esclavitud). Otros argumentos eran el «vientre libre», o sea, casos en los que los esclavos afirmaban ser descendientes de una mujer libre, por lo general una indígena, y por tanto, haber sido sometidos a la esclavitud de manera ilegal; casos relativos a la compra de la libertad, bien por los propios esclavos o por un tercero; o afirmaciones de haber llegado a Brasil

después de la prohibición del comercio trasatlántico de esclavos, lo que implicaba que los esclavos de reciente arribo debían ser liberados de inmediato; y acusaciones de violencia por parte del amo, incluido el empleo de esclavas como prostitutas. Los dos últimos alegatos están directamente relacionados con la legislación de la época. Al afirmar que habían llegado a Brasil después de la prohibición del comercio trasatlántico de esclavos, los querellantes podían estar haciendo referencia a la ley del 7 de noviembre de 1831, que, aunque nunca se puso en práctica de manera efectiva, instituía que «Todos los esclavos que arriben al territorio o los puertos de Brasil procedentes del extranjero, deberán ser libres»; o a la ley de 1850, que sí logró poner fin a la participación brasileña en el comercio trasatlántico de esclavos⁸ (ver tabla 1).

Los dos primeros motivos que aparecen en la tabla 1, «carta de concesión de la libertad» y «mantenimiento de la libertad» —que, en conjunto, representan el 47,5% de los casos, esto es, casi la mitad— reflejan que los esclavos dependían de sus dueños para obtener la

libertad: la carta que la concedía expresaba la voluntad del dueño de liberar a su esclavo (aunque después de su muerte), y los casos de mantenimiento de la libertad se referían a esclavos que habían sido libres durante un tiempo y que, bajo la amenaza de algún conflicto, y conscientes de la posibilidad de ser sometidos de nuevo a la esclavitud, solicitaban protección. Esto muestra que la manumisión también significaba, y en no poca medida, un robustecimiento de la esclavitud, al propagar entre los esclavos la idea de que la buena conducta y la sumisión podían dar por resultado la libertad futura. En resumen, los principales motivos mencionados por los esclavos involucrados en los procesos muestran que la manumisión, incluso mediante procesos legales de demanda de libertad, era un poderoso instrumento de reforzamiento de la dinámica ideológica y de poder de la esclavitud en la sociedad brasileña.

No obstante, esos casos no alcanzan a explicar todos los significados que los procesos en demanda de libertad tuvieron en el Brasil del siglo XIX. Todos los demás motivos

Tabla 1: Motivos utilizados en procesos legales en demanda de libertad, Río de Janeiro, 1806-1888

| Motivo | Número de procesos | % |
|-------------------------------------|--------------------|------------|
| Carta de concesión de la libertad | 126 | 31,5 |
| Mantenimiento de la libertad | 65 | 16,25 |
| Compra de la libertad | 55 | 13,75 |
| Mantenimiento de la esclavitud | 45 | 11,25 |
| «Ventre libre» | 43 | 10,75 |
| Violencia | 16 | 4 |
| Llegada después del fin de la trata | 11 | 2,75 |
| No específica | 39 | 9,75 |
| Total | 400 | 100 |

Fuente: ARQUIVO NACIONAL (Río de Janeiro), Tribunal de Apelaciones de Río de Janeiro.

8. Ver *Coleção das Leis do Império do Brasil*. Río de Janeiro: 1831. Sobre los casos de prostitución, ver la nota 21.

Tabla 2: Procesos en demanda de libertad, Río de Janeiro, 1806-1888

| Periodo | Número de procesos | % |
|--------------|--------------------|------------|
| 1806-1822 | 12 | 3 |
| 1823-1850 | 107 | 26,75 |
| 1851-1870 | 201 | 50,25 |
| 1871-1888 | 80 | 20 |
| Total | 400 | 100 |

Fuente: ARQUIVO NACIONAL (Río de Janeiro), Tribunal de Apelaciones de Río de Janeiro. Las divisiones temporales tienen como base el año de la independencia de Brasil (1822), la fecha que marcó el fin del comercio trasatlántico de esclavos (1850), la de la promulgación de la ley del vientre libre (1871) y la de la abolición de la esclavitud (1888). En 1806 se presentaron por primera vez procesos en demanda de libertad en el Tribunal de Apelaciones de Río de Janeiro.

citados, en especial los de autocompra (13,75% de los casos), muestran que los esclavos gozaban de cierto grado de autonomía. Para comprar su libertad, tenían que disponer de cierta cantidad de dinero. Para probar la genealogía de alguien sometido ilegalmente a la esclavitud (10,75%) o su arribo a Brasil tras el fin de la trata (2,75%), los esclavos en cuestión tenían que disponer de buenas fuentes sobre su situación, que sólo se conseguían mediante los contactos con otros esclavos, libertos e individuos libres, sobre todo en las grandes ciudades. Además, los motivos que experimentaron un incremento sustancial de su incidencia fueron la compra de la libertad y el «vientre libre», casos numerosos a partir de 1860. Ese desplazamiento en la incidencia de los motivos demuestra que durante la crisis final del régimen esclavista, la manumisión asumió nuevos significados y se convirtió cada vez más en una fuerza política de oposición a la esclavitud. Esa transformación del significado de la manumisión contribuye a

explicar por qué aumentaron rápidamente los procesos legales tras la independencia brasileña, y todavía más después del fin del comercio trasatlántico de esclavos en 1850.

Hasta la independencia de Brasil, en 1822, sólo 12 procesos en demanda de libertad llegaron al Tribunal de Apelaciones. Aun cuando se pueda sospechar que el número no es demasiado confiable –con la llegada de la familia real portuguesa, en 1808, las instituciones judiciales se trasladaron a Río de Janeiro, proceso en el que se perdieron documentos– en el periodo que media entre la emancipación brasileña y el fin de la trata, el número de procesos en demanda de libertad creció sustancialmente. En sólo 27 años, se dictó sentencia en 107 procesos. El número de procesos se incrementó de manera espectacular tras la prohibición de la trata en 1850. En el periodo comprendido entre el fin de la trata y la promulgación de la ley del vientre libre, los esclavos procuraron su libertad mediante el concurso de los tribunales, lo que sugiere que percibieron este periodo como una coyuntura favorable. El súbito decrecimiento del número de procesos después de 1871 es un asunto polémico; si bien resulta claro que su causa fue la promulgación de la ley del vientre libre, los historiadores no están de acuerdo en su efecto en los procesos. La ley del vientre libre estipulaba cómo debían decidir los jueces en ese tipo de procedimiento, a saber: mediante un juicio «administrativo», procedían a conceder la libertad a quienes pudieran probar su derecho y negarla a quienes no pudieran aportar evidencias que sustentaran sus demandas. Esta lógica hizo que la mayoría de los casos se resolvieran en los tribunales inferiores⁹.

9. Ver Hebe MATTOS. *Das cores...* [3], p. 207; Keila GRINBERG. *Liberata – a lei da ambiguidade: as ações de liberdade da Corte de Apelação do Rio de Janeiro no século XIX*. Río de Janeiro: Relume Dumará, 1994, p. 25; Eduardo Spiller PENA. «Resenha de Liberata: a lei da ambiguidade». *Afro-Ásia: Revista do Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia* (Salvador). 17 (1996), p. 237-243.



Negras cocinando angü. Jean-Baptiste Debret, *Voyage pittoresque et hisdtorique au Brasil* (1831).

Aunque los esclavos brasileños no participaron directamente en los conflictos asociados a la independencia¹⁰, muchos de ellos se percataron de las posibilidades de relacionar la libertad política con el fin de la esclavitud¹¹. Tras el fin del comercio trasatlántico de esclavos, el número de procesos legales en demanda de libertad creció sustancialmente. La prohibición de la importación conllevó un gran auge en el tráfico interno de esclavos, y tuvo un enorme impacto demográfico y social en la región del valle de Paraíba, donde se promovieron

originalmente la mayoría de los procesos legales en demanda de libertad. Para que se tenga una idea, antes de 1850, al menos la mitad de los esclavos eran africanos. Diez años después, sólo el 20% del contingente esclavo estaba integrado por trabajadores nacidos en África. Ese proceso de criollización de la sociedad esclavista, unido al crecimiento del mercado interno, hizo que las relaciones domésticas y comunitarias entre los esclavos de las grandes plantaciones resultara de la mayor importancia. De dichas relaciones dependía su posibilidad de acceder al mundo de los libres, y, por tanto, de obtener la libertad.

No obstante, el incremento del número de procesos legales en demanda de libertad en el siglo XIX no constituye una base suficiente para aplicar a la situación brasileña la hipótesis de Ira Berlin sobre la relación entre la incidencia de las manumisiones y el desarrollo de la sociedad esclavista en los Estados Unidos¹². Como demuestra el patrón de los procesos legales en demanda de libertad ocurridos en Brasil, incluidos los anteriores al siglo XVIII, la práctica de apelar a los tribunales para obtener la libertad se remontaba al periodo del dominio portugués¹³.

Hasta el momento no se ha realizado ningún estudio sobre la posible existencia de procesos legales en demanda de libertad en otras colonias portuguesas. No obstante, hay

10. En Brasil, sólo se produjeron conflictos asociados a la proclamación de la independencia en la provincia de Bahía, donde el gobierno local se vio obligado a huir y la ciudad de Salvador quedó aislada. Ver Kátia M. de Queirós MATTOSO. *Bahia, século XIX: uma província no Império*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992.
11. Sobre el clima político imperante durante el periodo de la independencia, ver Lúcia M.B. PEREIRA DAS NEVES. *Corcundas, constitucionais, pés-de-chumbo: a cultura política da Independência (1820-1822)*. São Paulo: USP, 1992 (tesis de doctorado), y Gladys S. RIBEIRO. *A liberdade em construção: identidade nacional e conflitos antilusitanos no Primeiro Reinado*. Campinas: Unicamp, 1997 (tesis de doctorado).
12. Ver Ira BERLIN. *Slaves without masters: The free Negro in the antebellum south*. New York: Pantheon Books, 1974.
13. Existen estudios sobre los siglos XVII y XVIII en Brasil que sustentan esta afirmación. Ver John MONTEIRO. *Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo*. [São Paulo]: Companhia das Letras, 1995; Sílvia H. LARA. *Campos da violência...* [3]; Eduardo França PAIVA. *Escravos e libertos em Minas Gerais: estratégias de resistência através de testamentos*. São Paulo: Annablume, 1995.

ciertas indicaciones de que dichos procesos tuvieron lugar en el imperio portugués al menos desde el siglo XVI, como se observa en *Pranto do Clérigo*, de Henrique da Mota, en el que «una esclava negra responde a las acusaciones de su amo y al castigo de 'la gota' (un tormento frecuente que consistía en dejar caer sobre el cuerpo del castigado gotas de grasa hirviendo y plomo derretido) amenazando con apelar al juez (a lo que se opone el clérigo, ya que para él, la esclava ... no merece tal privilegio)».¹⁴ Por tanto, incluso si se toma el periodo de la esclavitud como un todo, si bien la manumisión siguió siendo un índice de la pujanza de la esclavitud, y si bien esa pujanza creció y reflujo según las diferentes etapas, los esclavos también recurrieron a los procesos legales en demanda de libertad como un medio para oponerse a la esclavitud durante todo el periodo de vigencia del régimen esclavista en Brasil.

Ello fue posible debido al concepto de justicia imperante en los regímenes absolutistas ibéricos. Dado que el rey ocupaba la posición de mediador en los conflictos potenciales, el mantenimiento del orden social estaba vinculado a la capacidad del rey para situarse, a todos los fines y propósitos, por sobre los intereses de los grupos involucrados. Dicha posición se demuestra en un caso de 1823, en el cual las esclavas Margarida y Escolástica promovieron un proceso legal en demanda de libertad en Guaratinguetá, en la provincia de São Paulo. Alegaban que en el inventario de los bienes de

su amo, ya fallecido, el valor estimado de cada una era de 128.000 reales. Cuando estuvieron en condiciones de pagar esa cantidad para comprar su libertad, los albaceas de la herencia de su amo ordenaron que se hiciera una nueva valoración; en esa ocasión, se calculó que éste era mucho mayor, tanto, que se vieron imposibilitadas de pagar el precio de su liberación. Sospechando de la honradez de la segunda tasación, decidieron apelar a la justicia y se dirigieron directamente al emperador Don Pedro I. El emperador respondió:

«...el Estado les facilitará a las querellantes todos los recursos de la caridad, los que incluyen los servicios gratuitos de un defensor que esté de acuerdo en representarlas, y que velará por los intereses de las querellantes en el proceso legal que ya obra en poder de los tribunales, cuyo curso posterior se ajustará a lo establecido por la ley, que las servirá con justicia, de modo que no sigan alienadas de los poderes judiciales que gobiernan el Estado»¹⁵.

El mensaje del emperador era claro: los esclavos tenían derecho a procurarse justicia, lo que incluía el acceso a un abogado provisto por el Estado. Este ejemplo sería meramente interesante de haber sido inusual. Sin embargo, las peticiones de perdón y consideración que se amontonaban ante el emperador demuestran que dichas apelaciones eran un recurso habitual de la población en general, así como de los esclavos que sentían la necesidad de apelar a la más alta autoridad como último recurso para cambiar el

14. Maria do Rosário PIMENTEL. *Viagem ao fundo das consciências: a escravatura na época moderna*. Lisboa: Colibri, 1995, p. 57.

15. ARQUIVO NACIONAL (Rio de Janeiro), Tribunal de Apelaciones de Rio de Janeiro, Guaratinguetá, 1823, Proceso número 4.063, caja 1.337. Ver también Keila GRINBERG. *Liberata...* [9], p. 41. Para un análisis de la legislación bajo el absolutismo ibérico, ver Antonio Manuel HESPANHA. *As vésperas do Leviathan. Instituições e poder político - Portugal séc. XVII*. Lisboa: 1986, 2 vols., y Antonio Manuel HESPANHA. *História das Instituições: épocas medieval e moderna*. Coimbra: Almedina, 1982.

Tabla 3: Resultados de los procesos legales en demanda de libertad, Río de Janeiro, 1806-1888

| Sentencia | Número de procesos | % |
|----------------------|---------------------------|------------|
| Libertad | 158 | 39,5 |
| Libertad condicional | 28 | 7 |
| Esclavitud | 165 | 41,25 |
| No especifica | 49 | 12,25 |
| Total | 400 | 100 |

Fuente: ARQUIVO NACIONAL (Río de Janeiro), Tribunal de Apelaciones de Río de Janeiro.

curso de sus vidas¹⁶. El poder del emperador, y, por extensión, del Estado, no sólo se reflejaba en el número de procesos legales en demanda de libertad, sino también en el éxito de los esclavos.

Cuando se analizan las sentencias pronunciadas en los procesos legales en demanda de libertad llevados a cabo en el Brasil del siglo XIX, se evidencia que en los casos en que lograban acceder a los tribunales, los esclavos tenían posibilidades reales de obtener su libertad. Ésa es la conclusión principal a la que se arriba mediante el análisis cuantitativo de esas acciones legales: durante el siglo XIX, dejando a un lado los procesos que carecen de un veredicto final¹⁷, y los que establecieron condiciones para la libertad (un pago equivalente al valor estimado del esclavo, años de trabajo, etc.), casi la mitad de los procesos sentenciaron la concesión de la libertad al esclavo. Si se cuentan los juicios en que se estableció alguna condición para la concesión de la libertad, un porcentaje aún más elevado

Tabla 4: Sentencias de las apelaciones en procesos en demanda de libertad, 1806-1888

| Veredicto inicial | Apelación | | | | Total |
|--------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|--------------|
| | Ratificado | | Modificado | | |
| Libertad | 133 | 79% | 36 | 21% | 169 100% |
| Esclavitud | 108 | 64% | 60 | 36% | 168 100% |

Fuente: ARQUIVO NACIONAL (Río de Janeiro), Tribunal de Apelaciones de Río de Janeiro. Se excluyen de este total los procesos cuyos resultados no se especifican, y los que se enviaron DESPUÉS a la Corte Suprema para apelaciones posteriores.

de los procesos se decidió a favor de los esclavos; como se aprecia en los datos de la tabla 3, un 46,5% de los casos favoreció la concesión de la libertad a los esclavos, mientras que en un 41,25% de los casos, los fallos ratificaron la esclavitud. Por tanto, aun si se considera que en una buena parte de los casos los resultados de los procesos legales en demanda de libertad ratificaron la esclavitud, los datos muestran la existencia de posibilidades reales de que los tribunales consideraran legítimas las demandas de los esclavos.

El tema se hace más complejo cuando se incluyen los registros del Tribunal de Apelaciones y los casos en que se modificó el veredicto inicial del juez. En algunos casos, el juez concedió la libertad y después la Corte de Apelaciones la denegó; en otros, el juez decidió que el esclavo no tenía derecho a la libertad y, más tarde, la Corte de Apelaciones se la concedió. Resulta significativo que este último caso era mucho más frecuente que el primero, como se observa en

16. Sobre peticiones de consideraciones especiales dirigidas al rey o al emperador brasileño, ver A.J.R. RUSSELL-WOOD. *Black Man in Slavery and Freedom in Colonial Brazil*. London: Macmillan and St. Anthony's College, 1982; Arno WEHLING; Maria José WEHLING. «Cultura jurídica e julgados do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro: a invocação da boa razão e o uso da doutrina: uma amostragem». En: Maria Beatriz NIZZA DA SILVA (org.). *Cultura Portuguesa na Terra de Santa Cruz*. Lisboa: Editorial Estampa, 1995, p. 235-248.

17. Algunos procesos terminan abruptamente sin que se llegue a una solución; en otros, faltan las páginas finales.



Familia de hacendados. Johann Moritz Rugendas. *Voyage pittoresque dans le Brésil* (1835).

la Tabla 4: un 36% de los casos en los que los tribunales inferiores se pronunciaron por el mantenimiento de la esclavitud fueron posteriormente modificados, mientras que sólo en un 21% de los casos se dio el proceso inverso. Además, el 79% de los casos en que hubo un pronunciamiento en favor de la libertad fueron ratificados por el Tribunal de Apelaciones, mientras que ello sólo ocurrió en un 64% de aquellos en que los procesos se decidieron a favor de confirmar la esclavitud. La conclusión es que la Corte de Apelaciones de Río de Janeiro liberó a más esclavos que los jueces de base, ya que tendía a modificar más sentencias favorables

al mantenimiento de la esclavitud que las que otorgaban la libertad.

Ésa era la sorpresa que se escondía tras el inicio de la historia de Liberata. Muchos de los problemas entre amos y esclavos se dirimían mediante la intervención del Estado, y no mediante acuerdos privados entre las partes. De ahí que se deba considerar los procesos legales como un mecanismo efectivo que los esclavos podían emplear para lograr su libertad en contra de la voluntad de sus dueños. Esa conclusión contradice una idea muy difundida en la historiografía brasileña: la de que el Estado no intervenía en las relaciones entre amos y

esclavos, y no liberada a nadie sin el consentimiento de su dueño¹⁸. Por el contrario, durante el siglo XIX, el Estado brasileño contribuyó de manera efectiva a la liberación de esclavos, incluso oponiéndose a la voluntad de los dueños.

No obstante, ello no significa que el Estado o sus representantes hayan estado animados por principios abolicionistas. Las decisiones del Tribunal de Apelaciones no reflejan un compromiso con la abolición. Los resultados de la tabla 4 muestran todo el siglo XIX, incluyendo los periodos en los que la abolición no era un tema político o social importante, como lo llegó a ser a fines del novecientos. Pero aún más: como los juicios se desarrollaron en Río de Janeiro, la capital del imperio, los abogados y magistrados que participaron en ellos a menudo estaban profundamente implicados en la política imperial¹⁹. Sin embargo, precisamente porque estaban ubicados en Río de Janeiro, lejos del sitio donde los juicios habían comenzado, esos jueces también estaban alejados de las presiones ejercidas por los dueños de los esclavos. Los jueces de los tribunales inferiores no sólo conocían a los involucrados en el proceso, sino que formaban parte de su medio. En Río de Janeiro, los jueces tenían más autonomía para decidir sobre la base de la ley y de acuerdo con la jurisprudencia. Un

análisis de la actuación de los abogados en el Tribunal de Apelaciones de Río de Janeiro confirma esta hipótesis.

La existencia de sociedades abolicionistas y de abogados dispuestos a llevar la causa ante los tribunales era de importancia fundamental para el éxito de los esclavos. La presencia de abogados abolicionistas en Brasil durante la fase final del periodo de la esclavitud, sobre todo a partir de 1865, se evidencia en la documentación de los procesos²⁰. Pero antes de 1865, los abogados que participaban en procesos en demanda de libertad no estaban necesariamente interesados en contribuir al fin de la esclavitud. De 26 abogados que tomaron parte en más de 5 causas, ninguno defendió sólo a esclavos o a amos, y todos registraron éxitos y reveses. También resulta importante advertir que eran los jueces, y no los abogados mismos, quienes decidían quién representaría a los esclavos, ya que los abogados no podían elegir libremente a sus clientes. Por tanto, resulta difícil determinar hasta qué punto su actuación reflejaba sentimientos abolicionistas.

Estos datos le otorgan un nuevo significado a la participación de los abogados en los procesos en demanda de libertad: actuaban según criterios profesionales, no de acuerdo con sus convicciones políticas sobre la esclavitud, y traban de presentar alegatos sólidos, con inde-

18. Esta argumentación está desarrollada en Manuela CARNEIRO DA CUNHA, «Sobre os silêncios da lei: lei costumeira e positivas alforrias de escravos no Brasil do século XIX». En: *Antropologia do Brasil: mito, história, etnicidade*. São Paulo: Brasiliense/EDUSP, 1986, p. 123-144.

19. Para un perfil de los jueces que ocuparon posiciones íntimamente vinculadas a los poderes centrales durante el siglo XIX, ver Kátia M. de Queirós MATTOSO, *Bahia, século XIX...* [10]; y Eduardo Spiller PENA, *Pajens da Casa Imperial: jurisconsultos e escravidão no Brasil Imperial*. São Paulo: UNICAMP, 1998 (tesis doctoral).

20. Entre 1865 y 1870 siete apelaciones originadas en el extremo sur de Brasil se enviaron a Río de Janeiro, todas ellas relativas al mismo asunto: esclavos que habían ido a la provincia de Uruguay, donde la esclavitud no existía desde 1840, y, al regresar a Brasil, habían intentado reclamar su libertad sobre la base de la ley de 1831. En todos los casos aparecen los mismos abogados locales. Ver ARQUIVO NACIONAL (Río de Janeiro), Tribunal de Apelaciones de Río de Janeiro, Pelotas, 1865, número 11.689, caja 3.679; Pelotas, 1867, número 12.126, caja 3.694; Uruguiana, 1868, número 13.194, caja 3.680; Uruguiana, 1868, número 13.196, caja 3.685; Bagé, 1868, número 12.465, caja 3.683; Alegrete, 1869, número 13.794, caja 3.690; Uruguiana, 1870, número 3.221, grupo 216.



Negros vendedores de carbón y maíz. Jean-Baptiste Debret, *Voyage pittoresque et historique au Brasil* (1831).

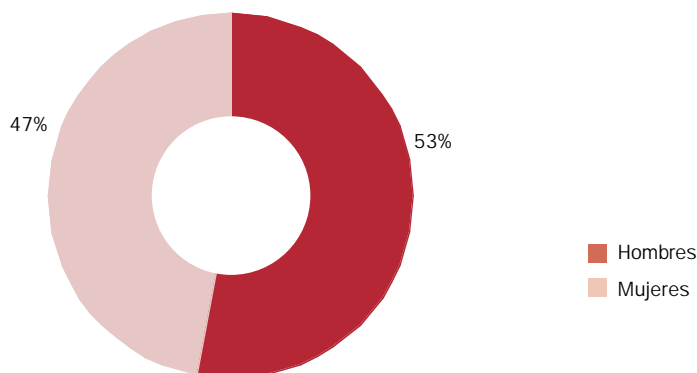
pendencia de quién era su defendido. Por tanto, incluso antes de los cambios ocurridos debido al fin del comercio trasatlántico de esclavos, y con excepción de los últimos años del régimen esclavista²¹, los abogados por lo general trataban los procesos en demanda de libertad como cualquier otro caso; a veces defendían a los amos, a veces a los esclavos; en ocasiones ganaban, en ocasiones perdían; utilizaban alegatos encaminados a ganar rápida y fácilmente

sus casos, y rara vez invocaban la emancipación general²². De ahí que las victorias obtenidas por los esclavos en procesos legales en demanda de libertad a lo largo del siglo XIX no fueran necesariamente resultado del empeño abolicionista de sus abogados. Por tanto, las sentencias demuestran hasta qué punto los estamentos superiores del Estado podían intervenir en los resultados de los procesos.

21. A partir de 1870, algunos de los abogados eran claramente abolicionistas; uno de ellos fue Luiz Gama, quien militó activamente en la causa de la abolición durante las últimas décadas de la esclavitud, defendiendo a numerosos esclavos, incluso en regiones rurales, en procesos legales en demanda de libertad. Ver Elciene AZEVEDO. *Entre escravos e doutores: a trajetória de Luiz Gama na imperial cidade de São Paulo*. tesis de maestría, UNICAMP, 1997.

22. Los jueces que tomaban parte en los casos compartían en sentido general la misma opinión. Si bien resulta imposible compilar un patrón de la conducta individual de los jueces similar al de los abogados, dado que las sentencias eran dictadas por paneles integrados por seis o siete jueces cuyos votos no se registraban por separado, en la mayoría de las sentencias la justificación para la libertad residía en el reconocimiento de que un esclavo dado había cruzado la frontera que separaba la esclavitud de la libertad.

Gráfico 3: División por géneros de los esclavos que promovieron procesos legales en demanda de libertad en Brasil durante el siglo XIX



Fuente: Arquivo Nacional (Rio de Janeiro), Tribunal da Relação do Rio de Janeiro.

El legado de Liberata

Pero el proceso iniciado por Liberata nos permite aún realizar otros análisis. Como en muchos otros casos, el mismo revela una historia esencialmente femenina: una esclava resulta seducida por su dueño con la promesa de liberarla, y al percatarse de que éste no cumplirá lo prometido, decide conquistar su libertad por medio de una acción legal.

En general no era mucha la diferencia entre el número de esclavos y esclavas que emprendían procesos en demanda de libertad, como se puede apreciar en el gráfico 3. De un total de 1.206 esclavos que iniciaron dichos procesos en el Tribunal de Apelaciones de Río de Janeiro, un 52,62% eran hombres y un 46,38%, mujeres, y el porcentaje de las sentencias favorables a la libertad se comportó de modo similar.

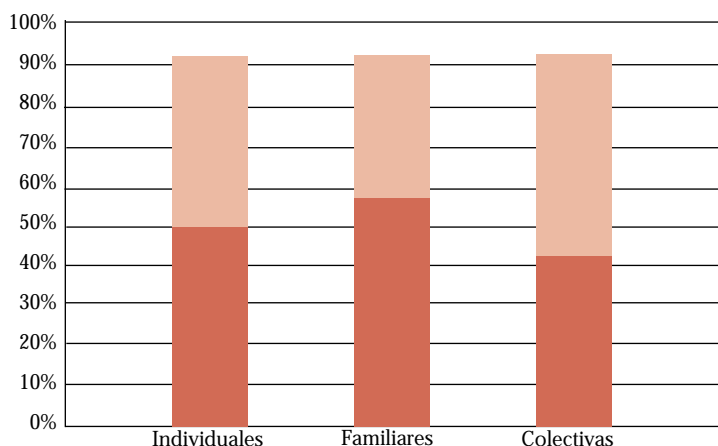
De manera similar, la participación de hombres y mujeres en los distintos tipos de procesos era equitativa, como se observa en el

Gráfico 4, y formaba parte de acciones individuales, familiares y colectivas²³.

Aunque los datos apuntan a una similitud en el comportamiento por géneros en lo relativo a promover un proceso en demanda de libertad y en lograr la misma, las razones aportadas por hombres y mujeres en el curso de esas acciones eran, por lo general, muy diferentes. En el caso de Liberata, más allá del hecho de que el curso de su vida era específicamente el de una mujer, fue el haber tenido relaciones sexuales e hijos con su amo lo que hizo posible que cambiara el destino de sus otros hijos.

En 1835, más de 20 años después de no haber logrado ganar el proceso legal en demanda de libertad promovido por Liberata, José y Joaquina, sus dos hijos menores, se dirigieron al tribunal de Desterro para solicitar que se reabriera el caso, con el fin de poder probar que eran hijos de Liberata y, por tanto, que habían sido ilegalmente sometidos a la

23. Los procesos en demanda de libertad podían ser individuales, esto es, promovidos por un esclavo; o familiares, esto es, promovidos por un esclavo en nombre de su familia; o colectivos, cuando eran promovidos por un grupo de esclavos, normalmente miembros de familias diferentes.

Gráfico 4: Relación género-tipo de proceso en demanda de libertad

Fuente: ARQUIVO NACIONAL (Rio de Janeiro), Tribunal da Relação do Rio de Janeiro.

esclavitud. José y Joaquina alegaron que durante el proceso de su madre habían sido enviados a un orfanato, y que cuando Liberata conquistó la libertad, sus certificados de nacimiento habían sido destruidos, y ellos habían sido vendidos como esclavos. Tras un proceso legal que se prolongó durante tres años, el defensor de los hijos de Liberata logró finalmente convencer al tribunal de que la venta había sido ilegal, y de que los esclavos en cuestión eran realmente hijos de Liberata.

El fin del proceso es verdaderamente sorprendente: veinte años después de que la acción inicial fuera archivada, los únicos que habían seguido siendo esclavos lograron revivir la historia de su madre y obtener la libertad. Fue la trayectoria de Liberata, y el

hecho de que buscara ayuda en los tribunales de justicia, lo que les permitió a sus hijos lograr la libertad.

De ahí que el análisis del proceso legal en demanda de libertad de Liberata resulte importante para lograr una comprensión mejor del papel de la condición de la mujer y del Estado en la contribución a la libertad de los esclavos en el Brasil del siglo XIX. Después de todo, si, por un lado, su trayectoria es específicamente femenina, por el otro actuó como innumerables esclavos, tanto hombres como mujeres, que llevaron sus disputas privadas con sus amos ante los tribunales de justicia, como un ejemplo de lo que constituía una práctica común de apelar al Estado como vía para resolver conflictos privados.

Cimarronaje y represión esclavista. Cuba, 1800-1880

GABINO LA ROSA CORZO

Introducción

Desde la llegada a Cuba de los españoles en el siglo XVI y hasta el despegue de la economía esclavista de plantación en la segunda mitad del XVIII, las referencias y noticias acerca de incidentes relacionados con la resistencia esclava tuvieron un marcado carácter coyuntural, fortuito y aislado. Las incidencias registradas en la documentación de la época siempre comentan la existencia de grupos reducidos de esclavos prófugos, englobados todos bajo la denominación común de cimarrones. Durante estos siglos, las *Leyes de Indias* sirvieron de soporte legal durante casi tres siglos a las actividades de

represión de las manifestaciones de resistencia esclava¹.

Tras la toma de La Habana por los ingleses y como consecuencia de los cambios operados en la esfera del comercio y la economía, periodo que ha sido calificado por algunos estudiosos como de transición o de despegue de la plantación esclavista, se produjo un considerable aumento en la introducción de esclavos africanos². A partir de la última década del siglo XVIII, el ritmo de crecimiento demográfico de fuerza de trabajo forzada cobró un mayor impulso con la ruina de las plantaciones cafetaleras y azucareras haitianas y la sustitución de esos productos

-
1. La resistencia esclava fue contemplada desde los primeros momentos en la legislación de Indias (Ley XIV, Libro VII, Título V) mediante las pragmáticas y reales disposiciones de Felipe II en 1568, ratificadas en diciembre de 1573. El 4 de agosto de 1574 una Real cédula de Felipe II dictaminó acerca de los esclavos que se ausentaban por cuatro días: «le sean dados en el rollo cincuenta azotes, y que esté allí atado desde la ejecución hasta que se ponga el sol; y si estuviere más de ocho días fuera de la ciudad una legua, le sean dados cien azotes, puesta una calza de hierro...» (Ley XXI, Libro VII, título V). Otra del 22 de junio del mismo año ordenaba: «...que si cualquier persona [...] prendiera negro o negra cimarrón [...] puede hacer de él de allí adelante lo que quisiere y por bien tuviere...» (Ley XXII, Libro VII, título V). Ver José Luciano FRANCO. *Apuntes para una historia de la legislación y administración colonial en Cuba 1511-1800*. La Habana: Editorial de Ciencias sociales, 1985, p. 127-130. En realidad la historiografía de Cuba le ha prestado poca atención a la resistencia esclava y menos a la legislación que contra ella se esgrimió por parte de los sectores del poder durante los tres primeros siglos de la sociedad colonial. Un importante aporte al estudio de la cuestión en Alejandro de la FUENTE. «Rebeldía esclava y represión esclavista. Cuba: siglos XVI y XVII». *Alcance a la Revista de la biblioteca Nacional José Martí*. (La Habana). 2/2 (1988), p. 3-33 en el que se revelan los documentos legales que contra la resistencia esclava se redactaron y aplicaron durante el periodo y en especial estudia las Ordenanzas que contra cimarrones dictó el cabildo habanero en ese periodo.
 2. Entre 1755 y 1791 la población esclava de Cuba se triplicó, al pasar de 28.760 a 84.590. Sobre el aumento de la población esclava durante el siglo XVIII, ver Levi MARRERO. *Cuba: economía y sociedad*. Madrid: Editorial Playor, 1975-1992, VI, p. 13-34.

en el mercado internacional con los procedentes de Cuba.

En ese marco histórico surgieron varias instituciones que responderían a las demandas impuestas por el desarrollo y el progreso alcanzado en Cuba, pero entre todas ellas existió una que aunque nacida bajo el interés del fomento de la agricultura, la tecnología y el comercio, pasaría a desempeñar un extraordinario papel como aparato represivo principal contra la resistencia esclava: el Real Consulado de Agricultura, Industria y Comercio, conocido años más tarde como Junta de Fomento, fue establecido en La Habana por Real Cédula el 4 de abril de 1794. La jurisdicción de este consulado abarcaba toda la isla y para su mejor gobierno fundó diputaciones consulares en los principales puntos del país.

Resistencia y Represión

El Capitán General asumió la presidencia del Real Consulado, institución que se financiaba a partir de una serie de gabelas y de las multas que imponía. Las juntas generales se celebraban en La Habana y a las mismas podían asistir los hacendados con propiedades valoradas en más de diez mil pesos, los comerciantes, capitanes de naves domiciliados en La Habana y otros representantes de las estructuras del poder. Por lo tanto, como institución representante de los hacendados esclavistas y la administración colonial, el Real Consulado se ocupó, entre muchas otras cosas, de optimizar la explotación de la fuerza de trabajo

esclava. Por eso encargó estudios y orientó sobre la alimentación de los esclavos, sobre la curación de sus enfermedades, así como también legisló y organizó una eficiente red de persecución, captura y restitución de los esclavos prófugos. En Cuba fue esta institución la que dictaminó, dirigió y financió las redadas de cimarrones y apalencados a lo largo de todo el archipiélago cubano entre 1796 y 1854³.

Con anterioridad de la creación del Real Consulado, y más a partir de la publicación y circulación del *Nuevo reglamento y arancel que debe gobernar en la captura de esclavos cimarrones* en diciembre de 1796⁴, estos asuntos eran atendidos por alcaldes de la Santa Hermandad y las estructuras militares de los diferentes partidos y jurisdicciones, o bien por cuadrillas montadas por los propios hacendados, lo que respondía a los indudablemente entonces poco significativos niveles del problema, así como a su dispersión e irregularidad.

A partir de estos años —con el creciente aumento que se experimentó en las fugas de los esclavos de las plantaciones, a lo que se sumó el «escandaloso» hecho de la erección de aldeas por parte de los mismos en las montañas y ciénagas— se dictaron estrictas normativas que intentaron establecer las bases *legales* y los centros encargados de la persecución y captura, pero, sobre todo, procuraban la restitución de los fugados a sus propietarios.

Entre los objetivos expresos del *Reglamento* estaba el de capturar a los cimarrones

3. A los archivos de la Junta fueron a parar cientos de expedientes, documentos y correspondencia en los que se denunciaba la fuga de esclavos, creación de cuadrillas y partidas para perseguirlos, inquietudes de los amos, denuncias de existencia y asaltos a palenques. Esto hace que dichos fondos (existentes hoy en el Archivo Nacional de Cuba) sean la fuente principal para el estudio de la resistencia esclava en la Isla.

4. REAL CONSULADO Y JUNTA DE FOMENTO. *Nuevo Reglamento y Arancel que debe gobernar en la captura de los esclavos cimarrones*. La Habana: Imprenta del Gobierno, 1796.

«antes de que merezcan el nombre de apalencados», cuestión que resulta muy ilustrativa de la preocupación del Real Consulado de evitar, a toda costa, la reunión en lugares apartados de los cimarrones.

Así, se estableció en el Real Consulado de La Habana un registro general de esclavos prófugos y cimarrones capturados⁵. Pero desde sus inicios, los informes que debían rendir los hacendados y propietarios con las relaciones de sus esclavos fugados, confrontó dificultades y provocaron continuas quejas de las autoridades del Real Consulado y determinó que sólo se cuantificaran algunos partes aislados.

En cambio, las cifras de cimarrones capturados sí fueron bien cuantificadas y conservadas, por cuanto de esto dependía en cierta medida los estados contables de la institución para el ramo de cimarrones.

Cuando un esclavo prófugo era apresado en un punto cualquiera del territorio insular, y no era devuelto de forma inmediata a su propietario debido a su no identificación, se le trasladaba a la cabecera del partido y allí se le colocaba en un cepo costado por el Real Consulado⁶. Sin embargo, con los años iniciales del siglo XIX, el aumento de los cimarrones capturados obligó a la habilitación de locales especiales, conocidos por depósitos de cimarrones.

Estando detenidos en esos locales, podían ser identificados por sus respectivos propietarios y mediante el pago correspondiente, restituidos a las propiedades desde las que se habían fugado. Pero pasados varios meses sin que se produjera la reclamación de propietario alguno, estos cimarrones eran conducidos al depósito del Real Consulado de La Habana, por lo cual, desde los primeros momentos de puesto en práctica el reglamento, la corporación se vio obligada a alquilar una casa que sirviera de depósito, originándose así la historia de un local que durante más de 50 años encarceló y utilizó en obras de construcción estatales a miles de cimarrones capturados⁷.

Con cierta periodicidad se publicaban en el *Diario del Gobierno de la Habana* las relaciones de los cimarrones existentes en el depósito central de El Cerro, con el objetivo de que fuesen identificados por sus propietarios. Estas relaciones contenían las denominaciones étnicas y algunas señas particulares que facilitarían la identificación. También esta práctica se utilizó en el interior del país, como por ejemplo en la jurisdicción de Remedios, en la región central de la isla, mediante una publicación de la tenencia de Gobierno de Remedios titulada *Boletín*⁸.

Algunas otras cuestiones de interés contenidas en el reglamento permiten hacer

5. Los depósitos de cimarrones establecieron libros de entradas y salidas de los cimarrones, en los que se registraba el nombre cristiano del capturado, la denominación étnica y señas particulares tales como estatura, tonalidad de la piel, apariencia física, rasgos particulares del rostro, estado de la dentadura, defectos físicos, enfermedades visibles, escarificaciones y señales de castigo. Cuando el capturado no hablaba español, era registrado como bozal. Todas estas señas facilitaban la identificación y restitución del prófugo.

6. Esto es muestra de que en los años iniciales de establecido el reglamento, las cifras de cimarrones capturados no eran elevadas, pues se trataba de casos aislados.

7. Los cimarrones mientras estaban en los depósitos podían ser también alquilados. Un ejemplo de esta práctica se tiene de la contrata que realizara el Real Consulado para la construcción de la calzada de Luyanó a Guanabacoa, en donde el Real Consulado facilitó 100 trabajadores de «la clase de cimarrones», además de equipos y animales. El contratista pagó 9 pesos mensuales por concepto de jornales por cada cimarrón y 6 por cada cimarrona.

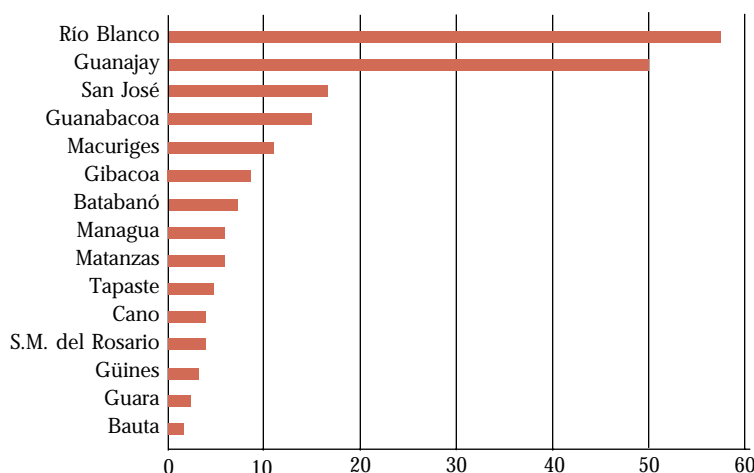
8. Las colecciones del *Diario de Gobierno de la Habana* se encuentran en la Biblioteca del Instituto de Literatura y Lingüística de La Habana y el *Boletín* en el Archivo Histórico de Remedios en Villa Clara.

algunas inferencias de valor. Según este documento, la reunión de cuatro o cinco cimarrones no era considerada apalencamiento, por cuanto «a nadie puede causar el menor susto y cuidado»⁹. Se une este criterio a otro. Por los cimarrones simples únicamente se pagaban cuatro pesos y no se establecieron pagos extras por dificultades en el proceso de captura, cuestión que sí se consideraba en el caso de los apalencados y, muy justamente, se puede pensar que, de acuerdo con la legislación, las refriegas eran más violentas habitualmente con éstos que con los cimarrones simples; aspecto que se corrobora además por los diarios de los rancheadores¹⁰.

Legislación y represión en el Centro y Occidente de la Isla

Los datos procesados por el Real Consulado en La Habana durante el primer año de la puesta en práctica del reglamento permiten comprobar dos cuestiones importantes. La primera se refiere a que la mayoría de los esclavos prófugos procedían de la región agrícola cercana a La Habana, lo que se corresponde con el desarrollo de la plantación esclavista de fines del XVIII (gráfico 1). La segunda cuestión se refiere a que en ese año, la mayoría de los prófugos habían sido capturados, pues de los 196 reportados como fugados entre enero y octubre de 1797, fueron capturados 145¹¹.

Gráfico 1: Procedencia territorial de los esclavos fugados en 1797



9. REAL CONSULADO Y JUNTA DE FOMENTO. *Nuevo Reglamento...* [4], p. 11.
10. La Fundación Fernando Ortiz en La Habana está editando un libro en el que se compilan y analizan más de diez diarios de operaciones militares contra cimarrones y apalencados. Ver: Gabino LA ROSA; M. GONZÁLEZ. *Cazadores de esclavos*. La Habana: Fundación Fernando Ortiz (en prensa).
11. De los capturados, cuatro resultaron muertos y uno logró burlar nuevamente a sus captores. Véase ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Real Consulado, Leg. 140, nº 6888. Es de destacar que los mecanismos estatales de aquella sociedad garantizaban la inserción de los cimarrones al sistema. La condición de «cimarrón», como la de «bebedor», o «respondón», formaba parte del amplio listado de «tachas» con las que eran identificados los defectos que los esclavos presentaban a la vista de los esclavistas.



Río Canimar, Matanzas. Grabado Federico Mialhe, mediados del s. XIX.

Ahora bien, entre 1797 y 1815, periodo clave para el impetuoso desarrollo de la plantación esclavista en el occidente insular y dentro del cual los demógrafos han calculado la entrada de 130.210 africanos¹², la cifra de cimarrones capturados se elevó a 15.971¹³, correspondiendo el 94% a la jurisdicción de La Habana. Del total de capturados, el 86% fue restituido a sus propietarios (gráfico 2).

Pero no todas las capturas se debieron a las autoridades y rancheadores. Como estipulaba el reglamento, cualquier persona podía capturar a un esclavo que no portara su correspondiente autorización para encontrarse fuera de los límites de la propiedad

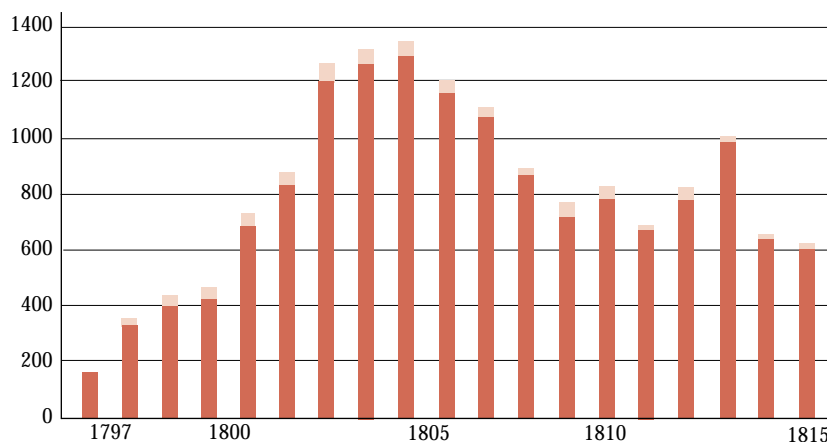
dentro de la cual trabajaba. Así, soldados, curas, comerciantes, arrieros, mayoresales, entre muchos otros, se encuentran dentro de los listados de aprehensores. Las diputaciones territoriales del Real Consulado pagaban cuatro pesos a cualquier persona que lo reclamara por tal concepto, lo que estimuló grandemente la codicia y convirtió la captura de esclavos prófugos en una actividad cotidiana para muchas personas de diferentes rangos y condiciones sociales. Así, el sistema de estímulo establecidos por el Real Consulado generó una verdadera incitación a la búsqueda de esclavos sin sus correspondientes cédulas¹⁴.

12. Juan PÉREZ DE LA RIVA. *El monto de la inmigración forzada en le siglo XIX*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 1979, p. 41.

13. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Real Consulado, Leg. 142, nº 6913.

14. El costo de la captura, que era de cuatro pesos, debía ser reembolsado por el propietario al momento de retirar su esclavo de los depósitos de cimarrones. Pero a este pago, se le agregaban los de traslado y manutención. Éstas fueron cuentas

Gráfico 2: Entradas de cimarrones capturados al depósito central entre 1797 y 1815



Para evaluar la efectividad del sistema represivo creado contra el cimarronaje como forma de resistencia esclava se elaboró el gráfico 3, que explicita el movimiento ocurrido dentro del depósito central de El Cerro, en La Habana, entre 1797 y 1815. Puede afirmarse que el 86% de los capturados fueron devueltos a sus respectivos propietarios, lo que hace una cifra significativa en cuanto a la recuperación de la fuerza de trabajo forzada.

En el año 1820 se introdujeron dos importantes modificaciones al reglamento, la primera consistió en que todo esclavo que no pudiera probar mediante documento las razones por las cuales se encontraba fuera de su área de trabajo sería considerado cimarrón, con independencia a que no hubiese

sobrepasado las tres leguas establecidas para que se le considerara como tal, principio que se había establecido desde fines del XVIII.

La segunda modificación introducida en el reglamento consistió en la obligatoriedad de la enseñanza de la doctrina cristiana para todo cimarrón capturado. Esta medida se oficializó bajo el amparo de la Real Cédula de 7 de febrero de 1829, por medio de la que se dispuso la asignación de un capellán facultado para celebrar el «santo oficio» en los días festivos en los propios locales donde se encontraban los capturados¹⁵. Esta medida se tomó con el objetivo expreso de despertar en los cimarrones los principios morales de humildad, sumisión y acatamiento de las leyes divinas y humanas¹⁶.

muy bien registradas por la contaduría del Real Consulado. Cuando un hacendado o apoderado suyo pasaba por la Habana o por los lugares donde existían depósitos de cimarrones en el interior de la isla, entre los diferentes negocios que se debían atender se encontraba el de pasar por el depósito a fin de identificar a sus esclavos prófugos.

15. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Real Consulado, Leg. 4, n° 242.

16. En noviembre de 1821 se pidió autorización al obispo diocesano para levantar una capilla y celebrar misa en el depósito central localizado en la barriada extramuros de El Cerro. El Real Consulado reglamentó las obligaciones del Capellán y le asignó un salario anual de 720 pesos. Entre las obligaciones principales de este funcionario pueden destacarse las de ser elegido por la junta del Real Consulado, vivir en la casa del depósito, llevar el control de los bautizados y bautizar a los bozales, celebrar misa los días festivos y a la salida del sol los días de trabajo, pues los cimarrones, mientras no eran reclamados se destinaban a la construcción de caminos, puentes e inmuebles del Estado.

Gráfico 3: Movimiento de cimarrones en el depósito central entre 1797 y 1815

Otras medidas que expresan el aseguramiento y perfeccionamiento de los mecanismos de control del Real Consulado nos la ofrece el establecimiento, a partir del 2 de julio del año 1823, del reintegro de los costos de captura que podían reclamar los celadores, administradores o persona bajo la que se encontrase el cimarrón capturado en caso de nueva fuga. A partir del primero de octubre de ese año, la Junta del Real Consulado autorizó el pago de un real y medio para la manutención de los cimarrones capturados y, en 1823 y 1829, se hicieron nuevas reimpressiones del reglamento.

Un aspecto interesante de legislación sobre la represión de la resistencia esclava es el referido a las edades en que un esclavo podía ser considerado cimarrón. Al respecto, no existió definición oficial alguna. Sólo era suficiente que el esclavo pudiera valerse por

sus propios pies y fuera capturado sin identificación¹⁷.

Otro registro parcial, felizmente conservado dentro de la documentación del Real Consulado, permite estimar las cifras de capturas para un periodo posterior. Entre los años 1829 y 1833, cuando desde hacía varios años la trata había sido declarada ilegal, y la introducción de africanos durante esos años se había llegado, según el demógrafo Pérez de la Riva, a la cantidad de 55.300 individuos, el Real Consulado registró la captura de 11.819 cimarrones¹⁸.

Si se presta atención a las capturas de cimarrones en relación con los meses del año, puede comprobarse que las cifras más altas se corresponden con los meses de enero, y de mayo hasta agosto. Está claro que las mismas obedecen a la frecuencia de las fugas. Pero este dato, el referente al tiempo

17. Numerosos ejemplos procedentes de los archivos del Real Consulado ponen de relieve esta práctica. En mayo de 1831 entró al depósito un cimarrón de 12 años de edad, que había sido apresado en la ciudad y descubierto porque tenía un grillete en el pie izquierdo (ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Miscelánea de libros, n° 2370) y en agosto de 1837 fue capturado otro de 10 años de edad (ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Miscelánea de libros, n° 7787).

18. Juan PÉREZ DE LA RIVA. *El monto...* [12], p. 42. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Real Consulado, Leg. 144, n° 7126.

Gráfico 4: Capturas de cimarrones por meses del año entre 1829 y 1833

Faltan valores del gráfico

que mediaba entre la fuga y el momento de captura, no siempre fue registrado. Sin embargo, de una revisión de cien aprehensiones en los que se consignó esta información, correspondientes a los años de 1831 y 1832, se pudo comprobar que más del 80% habían sido capturados antes de cumplirse el mes de la fuga. Esto permite considerar que existió cierta relación entre la fecha de la fuga el momento de la captura, todo lo cual habla del carácter efectivo del sistema represivo. Este criterio cobra fuerza al conocerse que durante la última semana del mes de diciembre, la mayoría de los cimarrones se acercaban a las plantaciones desde las cuales se habían fugado, pues existía cierta licencia para que las dotaciones esclavas festejaran las pascuas, ocasión en que aprovechaban para reunirse con amistades y familias. Esto los hacía más vulnerables¹⁹. También en ocasiones los prófugos aprovechaban las visitas de los amos absentistas para que se le

apadrinara y de esa manera reintegrarse a la dotación sin castigo.

Tampoco resulta extraño que las cifras de los meses de mayo a julio fueran las más elevadas de esos años (gráfico 4), pues la zafra concluía en mayo, que era el mes más tenso en toda plantación azucarera y durante el cual los esclavos apenas dormían y las jornadas se hacían bajo el imperativo del látigo²⁰.

Aunque seguían predominando dentro de las entradas al depósito central del Real Consulado de La Habana los cimarrones procedentes de esta jurisdicción, lo cierto es que los depósitos localizados en diferentes partidos del interior de Cuba, registraban cifras siempre superiores a los que eran remitidos hacia la capital.

Los libros del depósito de cimarrones de El Cerro entre el año de 1831 y 1854 —año en que la institución cesa en sus actividades— demostró la paulatina reducción que se produjo durante esos años en las entradas

19. Gabino LA ROSA; M. GONZÁLEZ. *Cazadores...* [10].

20. Richard R. MADDEN. *La isla de Cuba. Sus recuerdos, progresos y perspectivas*. La Habana: Editorial Consejo Nacional de Cultura, 1964, p. 175; Fredrika BREMER. *Cartas desde Cuba*. La Habana: Fundación Fernando Ortiz, 2002, p. 79.



El rancheador, *La Ilustración Cubana* (1887).

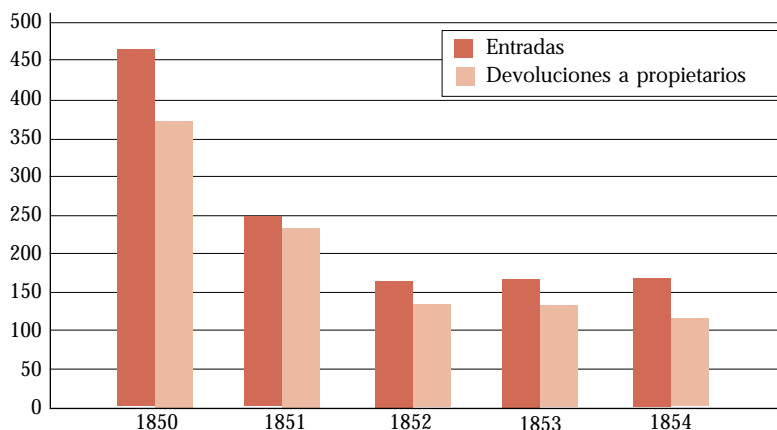
de cimarrones capturados en el territorio habanero²¹. Cuestión que contrasta con las altas cifras registradas durante las décadas iniciales del siglo XIX, situación explicable por varios factores. Entre 1790 y 1820 se produjo en las zonas rurales del territorio de La Habana el desarrollo de la plantación esclavista,

periodo que se correspondió con la implantación del sistema de acoso, captura y restitución de cimarrones establecido por el Real Consulado. Pero también fueron los años en que la vivienda de los esclavos estaba constituida en su generalidad por bohíos independientes, aunque a veces cercados de manera rudimentaria. Empero, en la misma medida que los mecanismos del sistema se ejercitaron y se establecieron depósitos de cimarrones en todas las jurisdicciones y el régimen de vivienda del esclavo se transformó en buena parte de las plantaciones del occidente insular en una forma carcelaria de vida con los barracones, las cifras de cimarrones remitidos al depósito central disminuyeron²². Sin embargo, esto no quiere decir que el cimarronaje como forma de resistencia esclava descendiese, sino que al desplazarse la plantación esclavista desde el occidente hacia la región central, el cimarronaje también lo hizo.

Los cimarrones, que entraron al depósito central de El Cerro en La Habana en las décadas de 1830 y 1840, fueron menos que los registrados en las tres primeras del siglo, a pesar de que en esos años el número de esclavos se había incrementado. Hacia 1840 la plantación agotaba sus posibilidades productivas bajo presupuestos esclavistas. Los

21. Gabino LA ROSA. *Los cimarrones de Cuba*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1988.

22. Mercedes GARCÍA. *Misticismo y capitales. La Compañía de Jesús en la economía del siglo XVIII*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2000, p. 115. Sin embargo, el barracón como vivienda de tipo carcelario no se generalizó en toda la isla. Fue una de las construcciones principales de los más grandes ingenios del occidente, pero raro en la región central y al parecer inexistente en la región oriental. Ver: Manuel MORENO FRAGINALS. *El ingenio: complejo económico social cubano del azúcar*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1978, t. 2, p. 73 y Rebecca SCOTT. *La emancipación de los esclavos en Cuba. La transición al trabajo libre 1860-1899*. La Habana: Editorial Caminos, 2001, p. 39. Tampoco es cierto que se exigiera su construcción a partir del Reglamento de Esclavos de 1842 como consecuencia de las grandes rebeliones esclavas de Matanzas. Desde varias décadas antes existieron importantes e impresionantes barracones, como por ejemplo el del cafetal Angerona, en Artemisa, La Habana, el que según una carta del reverendo Abiel Abbot ya existía en el año de 1828 para alojar 400 esclavos (Abiel ABBOT. *Cartas desde Cuba*. La Habana: Ediciones del Consejo Nacional de Cultura, 1965, p. 216 y 329). En el reglamento sobre el gobierno interior de las fincas rurales en Matanzas, de 22 de octubre de 1825, se insistió en la necesidad de construcciones de este tipo para controlar «la negrada» en todos los ingenios que contaran con más de 30 esclavos. Véase C. AYLON. *Reglamento sobre el gobierno interior de las fincas rurales*. Matanzas: 1825, p. 3.

Gráfico 5: Entradas y devoluciones de cimarrones en el depósito central entre 1850 y 1854

hacendados se desplazaban hacia los campos de la región central en busca de tierras más fértiles, y con ellos sus esclavos. También comenzaron a ensayar alternativas en la búsqueda de fuerza de trabajo no africana, tendencia que se fue intensificando en los siguientes años. Contratados provenientes de China y Yucatán, inmigrantes de diferentes regiones de España e Islas Canarias en condiciones de trabajadores libres e incluso reclutas engrosaron las filas de los braceros para las plantaciones²³.

Al fallar las fuentes proveedoras de la fuerza de trabajo procedente del continente africano, se produjo lo que muchos autores han reconocido como la política del buen trato, encaminada a incrementar el crecimiento vegetativo de las dotaciones: reducción en los castigos, el mejoramiento de la alimentación, y especiales cuidados con las gestantes y premios a las parturientas.

Todos estos factores incidieron en la disminución de las entradas de cimarrones al depósito central localizado en El Cerro. Sin embargo, los índices de recuperación por parte de los propietarios continuaron siendo elevados. El gráfico 5 ilustra las entradas y salidas de cimarrones por reclamación en dicho local. A partir de 1850 la cantidad de remitidos sufrió una mayor disminución. La transformación del depósito de El Cerro en un lugar de tránsito para chinos y yucatecos que arribaban a Cuba en calidad e contratados es muy ilustrativa de esta cuestión.

Con la incorporación de los fértiles terrenos de Matanzas a la producción de azúcar, el incremento de la mano de obra de origen no africana, el creciente proceso de mecanización, la habilitación del puerto de Cárdenas para el comercio y el desarrollo del ferrocarril; el centro de la producción de azúcar se desplazó hacia estas regiones. En 1857 las

23. Al respecto, Rebecca SCOTT. *La emancipación...* [22], p. 146 afirma que el trabajo libre y el trabajo bajo contrato fueron en un nivel económico complementarios a la esclavitud.

zonas de Colón, Cárdenas y Matanzas se colocaron a la cabeza en cuanto a las cifras de población esclava²⁴ y produjeron el 55,56% del azúcar de Cuba²⁵.

El desplazamiento concomitante de la resistencia esclava en su forma predominante en la región occidental, esto es como cimarronaje simple o en pequeños grupos, está avalado por el aumento que se produjo en los registrados en sus respectivos depósitos territoriales. En el año de 1858 en el depósito de la jurisdicción de Güines, al sureste de La Habana, se registró la entrada de 311 cimarrones²⁶.

A la par que esto ocurría en el territorio habanero, en Matanzas y Cárdenas las cifras

aumentaron visiblemente. El gráfico 6 ilustra comparativamente la disminución producida en las entradas de cimarrones al depósito central en La Habana y el consecuente aumento en Matanzas y Cárdenas.

Pero no debe escapar a este análisis uno de los rasgos más conspicuos del cimarronaje en Cuba en este periodo: la presencia de los asiáticos dentro de los grandes grupos de cimarrones. Hasta esos momentos, los africanos y sus descendientes criollos fueron el objeto de toda la legislación que sobre esclavos prófugos se había producido en la isla, pero a partir de los años finales de la década de 1840 irrumpieron los asiáticos dentro de los depósitos de cimarrones²⁷.

Gráfico 6: Comparación de los niveles de entradas de cimarrones entre La Habana, Matanzas y cárdenas

Faltan valores del gráfico

24. En 1856 Cárdenas era el territorio con mayor número de esclavos asegurados en la Compañía «La Providencia», con 5.392 esclavos y un valor asegurado en pesos de 4.716 637.70. (*Memoria leída por el director de la Sociedad La Providencia en la Junta General de 16 de mayo de 1857*. La Habana: Imprenta Spencer y Compañía, 1857). Según el padrón de esclavos correspondiente al año 1857, Cárdenas con 57.706 y Matanzas con 38.468 eran los dos territorios con mayor número de esclavos. Ver Franklin KNIGHT. *Slave society in Cuba during the nineteenth century*. Madison: University of Wisconsin Press, 1970, p. 135.

25. Manuel MORENO FRAGINALS, *El ingenio...* [22], t. 1, p. 141.

26. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Gobierno Superior Civil, Leg.1620, nº 82064.

27. La resistencia de los asiáticos se expresó además por la frecuencia de los suicidios. En las zonas centrales del país la rebelión y la resistencia de este grupo humano alcanzó niveles que preocuparon a las autoridades coloniales. Ver Juan Manuel GÓMEZ. *Camajuaní: la plantación azucarera en el siglo XIX*. Santa Clara: Editorial Capiro, 2001, p. 21.

Los orígenes de esta irrupción se remontan a la primera oleada de asiáticos contratados que entraron en La Habana el 29 de julio de 1847. A partir de ese momento continuaron arribando las cargazonas de fuerza de trabajo para las plantaciones de azúcar. Pérez de la Riva calcula que fueron 150.000 los asiáticos (chinos) introducidos en estas condiciones²⁸.

En el mes de febrero del año 1849 se registraron las dos primeras entradas de chinos cimarrones en el depósito central de La Habana. En ese año, los 24 casos contabilizados supusieron el 4% del total²⁹. Pero ya para 1853 representó el 14% y en 1854 el 17%. En el año de 1858 los asiáticos fueron mayoría dentro de los depósitos del interior. En Cárdenas, de los 120 capturados el 71% fue de asiáticos³⁰. En el depósito municipal de cimarrones de Sagua La Grande, en la región centro norte de Cuba, entraron 68 cimarrones, de ellos 37 (54%) eran de esa denominación³¹, mientras que en Cienfuegos, en la región centro sur, en ese mismo año entraron 105 cimarrones, siendo el 53% asiáticos³² y en el depósito de Tinima, en Camagüey, de los 111 casos datados el 78% tuvo el mismo origen³³.

En el propio año en el que habían irrumpido los chinos en el depósito de El Cerro en calidad de cimarrones, los indios yucatecos hicieron también su aparición. Éstos, al igual

que los anteriores, habían venido a Cuba en condiciones de contratados para trabajar en las plantaciones de azúcar³⁴.

Todo esto planteó una situación novedosa para las autoridades, por lo que se hizo necesario dictar medidas para el tratamiento del problema, ya que según los criterios de la época los culíes eran considerados libres en lo referente al gobierno y a la sociedad, pero podían «considerarse como esclavos en sus relaciones con sus patronos durante el término de su contrato», según reza una documentación oficial³⁵.

El 13 de abril de 1849 se publicó en la imprenta del Gobierno un reglamento adicional al de cimarrones sobre el tema. Este documento fue explícito en la explicación de las razones económicas que impulsaron la búsqueda de colonos asiáticos y yucatecos. Tanto para los hacendados como para las autoridades la causa del cimarronaje estaba en las duras condiciones de vida y rudeza de los castigos; sin embargo, por los propios intereses económicos, los que dictaron el reglamento adicional, además de prestarle atención a factores humanos, insistieron en las medidas coercitivas³⁶.

Estas medidas pusieron a un mismo nivel a los asiáticos y yucatecos con el resto de los esclavos que practicaban la fuga, con excepción al cuidado que se le prestó a no inferirles

28. Juan PÉREZ DE LA RIVA. *Los Culíes chinos en Cuba (1847-1880)*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2000, p. 62 y 179.

29. Los datos son resultado de la tabulación de los libros de registro de cimarrones del depósito. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Miscelánea de Libros, nº 7797 (1849); nº 7798 (1850); nº 7799 (1851); nº 7800 (1852); nº 7802 (1853) y nº 7803 (1854).

30. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Gobierno Superior Civil, Leg. 1630, nº 86063.

31. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Gobierno Superior Civil, Leg. 1630, nº 82053.

32. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Gobierno Superior Civil, Leg. 1630, nº 82060.

33. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Gobierno Superior Civil, Leg. 1630, nº 82057.

34. El primer yucateco que entró bajo la condición de cimarrón en el depósito fue Faustino Lanz, de 12 años, el 9 de agosto de 1849 remitido desde Güines. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Miscelánea de Libros, nº 7797.

35. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CUBA, Gobierno Provincial, Leg. 555, nº 9.

36. Las reglas dictadas insistieron en: la obligatoriedad de la doctrina cristiana; respeto del salario, comida y vestuario definidos para ellos; mayor control de las dotaciones (un mayoral blanco por cada 10 de ellos) y severos castigos para los que se fugaran (grilletes por dos meses, dormir en cepo o 12 «cuerazos»). ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Real Consulado, Leg. 196, nº 8779.



Africano apresado con destino a la venta. F. Ortiz, *Los negros esclavos* (1975).

los castigos físicos delante de los esclavos y de que éstos sólo les fueran aplicados por los mayores. El pago por la captura fue de dos pesos, frente a los cuatro que era lo estipulado para los esclavos africanos y sus descendientes criollos. También, a diferencia de estos últimos para quienes se había definido una permanencia de un año en los

depósitos del interior, para los chinos y yucatecos el tiempo establecido para ser remitidos al depósito central fue de 2 meses.

Pero a principios de la segunda mitad del siglo XIX las funciones represivas del Real Consulado en La Habana y su instrumento principal, el depósito de El Cerro, tuvieron su remate mediante un Real Decreto del 17 de agosto de 1854, expedido por la reina de España, por medio del que se transformó las funciones del Real Consulado y Junta de fomento de La Habana en una corporación estrictamente consultiva³⁷. Ya habían pasado los años en que hacendados y comerciantes adinerados se podían reunir, tomar decisiones, ejecutar proyectos y administrar importantes sistemas represivos. El gobernador y Capitán General monopolizaría de manera unipersonal las funciones administrativas que hasta ese momento desempeñaba este tipo de Junta³⁸.

Así, el depósito de El Cerro se transformó en un local de tránsito para los chinos y yucatecos que entraban a la Isla en condiciones de contratados; pero los restantes depósitos para cimarrones del interior de La Habana y sobre todo de Matanzas, Cárdenas y el resto de Cuba, además de continuar brindando sus servicios contra los esclavos africanos y sus descendientes, abrieron sus puertas a los chinos que practicaban la fuga desde las plantaciones donde se encontraban.

De esta manera, puede afirmarse que el Reglamento que contra cimarrones y apalencados se publicara en La Habana en 1796 tuvo una prolongada existencia de algo más

37. Raimundo CABRERA. *Cuba y sus jueces*. Filadelfia: Impresores y grabadores, 1891.

38. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Gobierno General, Leg. 512, nº 26478. A partir del 17 de agosto de 1854 se estableció la Dirección de Obras Públicas que bajo la dirección del Capitán General asumió desde entonces las tareas que realizaba el Real Consulado en cuanto a la construcción de puentes, caminos y edificios. Los cimarrones de La Habana fueron retirados de estas labores y en su lugar se situaron asiáticos contratados, jornaleros peninsulares y soldados de las tropas de La Habana.

de medio siglo, con efectivas aplicaciones en las regiones del centro y occidente.

El sistema represivo en la región oriental

En el este de la isla, la situación era totalmente diferente al occidente, en especial en el territorio comprendido por la antigua provincia de Oriente. Las características montañosas y de densidad demográfica facilitarían, durante décadas, el asentamiento de los cimarrones en magníficas y ocultas aldeas, algunas de las cuales retaron el poder colonial.

El reglamento general apenas podía aplicarse en ciudades como Santiago de Cuba, y de hecho, únicamente se aplicó durante la primera década del siglo XIX para casos de esclavos huidos que deambulaban por la ciudad o el puerto. Pero inclusive, para esta ciudad y para el resto de los núcleos urbanos, las cordilleras montañosas que los rodeaban estimulaban no sólo la fuga, sino también la unión y creación de comunidades.

Si en la región occidental las expediciones de cazadores de cimarrones, integradas siempre por menos de seis individuos, podían durar varios días, o en casos muy especiales, prolongarse durante meses, pero siempre con semanas de receso y regreso a los centros de población, en la región oriental las expediciones se emprendieron no contra cimarrones, sino contra palenques. De ahí que sus integrantes fuesen casi siempre militares de profesión, los grupos de asaltantes siempre fueron superiores a los 25 integrantes y en algunas ocasiones mayores de 50. Además, las expediciones nunca se efectuaban por menos de tres meses de forma continua.

Por lo tanto, resulta evidente que el reglamento, que tan eficientemente había defendido los intereses esclavistas en la región occidental y central de la isla, resultaba insuficiente para organizar y controlar el problema en esa región. Los hacendados orientales, junto a las estructuras del poder colonial, se encargaron de reglamentar los presupuestos de la represión teniendo en cuenta las características de la resistencia esclava en el territorio.

En 1814, bajo la administración del gobernador Antonio Mozo de la Torre se recurrió a la integración de un contingente armado, al que se le encomendó la destrucción de varios palenques que se encontraban en las montañas del este de Santiago de Cuba, la cordillera de la Gran Piedra, que había sido una de las zonas favorecidas por el desarrollo de cafetales de inmigrantes franceses³⁹.

En este mismo año, los hacendados orientales, representados en el cabildo de Santiago de Cuba, elaboraron y elevaron un reglamento que de manera especial guiaba las medidas que debían adoptarse en esa región⁴⁰. Así, se determinó la existencia de una estrategia regional contra el peligro de los palenques de esclavos prófugos. La publicación de ese reglamento, que sólo rigió en esa región, puso de manifiesto las especificidades y los niveles preocupantes del asunto en esos territorios.

El reglamento de 1796 publicado en La Habana había hecho hincapié en el sistema represivo contra los cimarrones simples, que eran calificados como la plaga que infestaba los campos de occidente y estableció recorridos mensuales de los capitanes de partidos y

39. Juan JEREZ DE VILLAREAL. *Oriente. Biografía de una provincia*. La Habana: Imprenta El Siglo XX. 1960, p. 106.

40. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Asuntos Políticos, Leg. 297, nº 102. Este expediente contiene un ejemplar impreso de ese reglamento.



Entierro de un esclavo en el ingenio Taoro, La Habana. Reconstrucción del etnólogo y dibujante cubano José Martínez.

de cuadrillas en las zonas donde existían palenques, los que sólo podían ser asaltados con autorización del capitán general. Visto así, este documento, en los años finales de la trata legal, no daba respuesta a la complejidad que había adquirido el problema en la zona oriental, donde el acceso a los lugares en que se asentaban los palenques resultaba mucho más difícil que en occidente por las distancias, alturas y desconocimiento de los lugares.

Por este motivo, las autoridades y hacendados orientales, preocupados por la alarma creciente de los vecinos y por las insistentes noticias acerca de la presencia de grupos de

esclavos prófugos en las zonas más apartadas, establecieron un sistema de persecución diferente: se desecharon las llamadas cuadrillas (6 hombres) y, en su lugar, se realizaban las operaciones a cargo de partidas (25 hombres). Estas partidas se montaban sólo en los momentos en que se coordinaba la realización de una batida en una zona determinada, y estaban dirigidas por un alto oficial y un teniente. De estas operaciones se debía llevar un diario, controlado por la comisión de hacendados de la región⁴¹.

Estas cuestiones prueban el hecho de que, en la región oriental, el apalencamiento

41. El armamento reglamentado para esas partidas era el machete, pistola y garrote para cada uno de los miembros y un trabuco para cada seis integrantes. Se estableció una mensualidad de 30 pesos para el jefe superior, 24 para el teniente y 15 para cada cuadrillero. Sobre este aspecto el reglamento de La Habana no había establecido criterios.

era la cuestión principal que se intentaba reprimir, por lo que resultaba necesario el esclarecimiento de los detalles organizativos concernientes a dicha variante. También, por dicho motivo se estableció que todos los capturados con vida fuesen remitidos a la cárcel de la ciudad de Santiago, a disposición del gobernador, acompañados de un oficio informativo de su remisión. Los propietarios que fuesen contribuyentes de la comisión recuperarían sus esclavos sin costo alguno; los demás debían costear los gastos ocasionados en el proceso de captura, incluido el «carcelaje». Para los capitanes de palenques capturados se dispuso la venta en condición de esclavos en ultramar.

Las partidas tenían que rendir informes periódicos de las operaciones realizadas, por medio de vecinos y emisarios, desde los puntos donde se encontraban operando. Al finalizar las operaciones debían entregar el diario en el que se había registrado todo el recorrido y los incidentes ocurridos. En los diarios muestran las dificultades del territorio oriental —zonas distantes y montañosas— mientras que en los occidentales eran meros resúmenes mensuales de las operaciones de las cuadrillas, que bajaban todos los días finales de mes a cobrar sus mensualidades y a entregar los informes correspondientes.

En lo que respecta al pago de las capturas, mientras que en occidente se estimulaba la captura de presos con vida, en la región oriental se estableció el pago relacionado con las distancias donde eran capturados los apalencados con vida. Así, se pagaban cuatro pesos por los capturados a una distancia inferior a cuatro leguas, pero se abonaban diez

por los capturados entre cuatro y diez leguas, y veinte pesos por los capturados entre diez y veinte leguas. Si se pasaba de esa distancia, el pago era de treinta pesos. Esto estimulaba mucho a los cuadrilleros, para que se aventuraran y rastrearán en los lugares más apartados con el objetivo de capturar sus presas con vida, pues nada se pagaba por los muertos.

El reglamento oriental de 1814 estuvo en vigencia hasta el año de 1832 en que entró a regir otro nuevo y que representó el perfeccionamiento del aparato represivo en la región. Este nuevo reglamento tuvo su antecedente en un estudio del gobernador de Santiago de Cuba Juan de Moya y Morejón, a principios del año 1831, en donde se concluyó que la situación era peligrosa y de «escandaloso el establecimiento de casas formales y labores»⁴². De manera especial se llamó la atención acerca de un palenque conocido por *Bayamito*, que había sido asaltado a principios del año 1831 por una partida integrada por cuarenta rancheadores, con un teniente y un comandante al frente. En dicho palenque habían encontrado 45 «casas», en las que vivían 160 esclavos prófugos.

Estos acontecimientos marcaron un hito importante en el perfeccionamiento de los mecanismos del sistema represivo. De manera similar a como se había hecho 16 años atrás en la propia ciudad de Santiago de Cuba, y bajo una óptica más actualizada, se redactó un nuevo documento que sustituiría el reglamento de 15 de febrero de 1814, bajo el título de: *Arreglo de las partidas para la persecución de negros cimarrones* que fue publicado el 14 de febrero de 1832 en la ciudad de Santiago de Cuba⁴³.

42. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Junta de Fomento, Leg. 150, nº 7462.

43. COMISIÓN DE LA JUNTA DE HACENDADOS DE SANTIAGO DE CUBA. *Arreglo de las partidas para la persecución de negros cimarrones en este territorio*. Santiago de Cuba: Imprenta del Colegio Seminario, 1832.

Esta comisión de hacendados orientales actuaba bajo autorización del capitán general de Cuba, quien aceptó con beneplácito las iniciativas orientales⁴⁴ y dio un vuelco importante a la cuestión al definir que las operaciones militares contra los apalencados orientales debían hacerse de forma simultánea por diferentes partidas en todas las subregiones montañosas del territorio.

Como el interés de los hacendados no era sólo la destrucción de los asentos rurales de los esclavos prófugos, sino también evitar su futura reunión, se previó la utilización de una parte de los fondos para el fomento de la población blanca en las zonas más apartadas.

De acuerdo con lo estipulado por la comisión, por cada cimarrón simple capturado se pagaban cuatro pesos, de manera similar a lo determinado en el reglamento del Real Consulado desde 1796; en cambio, por cada apalencado se pagaban ocho. De este modo se estableció una importante diferencia entre los estímulos de la región oriental y los que había dictado el Real Consulado para los departamentos del centro y occidente y, a su vez, se variaba la tarifa fijada desde 1814 en el reglamento que regía de manera especial en la parte oriental. Dos factores parecen haber incidido en esta variante: uno, que dentro de las capturas producidas por las cuadrillas y las partidas en este departamento predominaba la categoría de apalencado, cuestión que se concluye de la lectura de los diferentes diarios de operaciones. Esto facilitaba el pago de una forma muy estable. El

segundo factor estaba dado por las propias condiciones regionales: el reglamento de 1814, como señalamos antes, había establecido una forma de pago vinculada a la distancia, con el objetivo de estimular la captura de grupos asentados en lugares distantes; pero esta cuestión ya no tenía razón de ser al existir partidas que operaban en cada territorio montañoso de la región de forma simultánea. Quedó así redondeado el sistema que operó sólo en el Departamento Oriental de la isla de Cuba hasta que estalló la guerra de independencia el 10 de octubre de 1868.

El proceso de emancipación y la extinción de la resistencia esclava

Aunque no es objeto del presente trabajo estudiar en detalle el complejo cambio social producido en el proceso de abolición de la esclavitud, es necesario subrayar algunos de los aspectos más sobresalientes del mismo, ya que supone el marco histórico en el que se produjo la extinción de los palenques orientales.

En la década de 1860, periodo en el que se localizan las últimas referencias de asaltos a palenques orientales en la documentación colonial, la abolición de la esclavitud ya había sido decretada en la mayoría de los otrora países esclavistas.

Pero este proceso, a su vez, fue también prolongado y estuvo preñado de contradicciones. La emancipación, por ejemplo, de los esclavos en las posesiones francesas en América se había proclamado desde 1794 por la

44. Según el reglamento la comisión se atribuyó: 1º.- Definir los arbitrios que debían tomarse; 2º.- Definir y adoptar las medidas para la recaudación de los fondos; 3º.- Designar los sujetos encargados de recaudar y conservar lo recogido; 4º.- Definir el número de partidas necesarias para las operaciones; 5º.- Definir la cantidad y tipo de armas que debían portar los miembros de las partidas; 6º.- Tener acceso a la documentación oficial que registraba la existencia de palenques; 7º.- Proponer medidas para mejorar la policía en los campos y 8º.- Realizar un empadronamiento de la población esclava existente en cada partido de la región oriental.

Convención Nacional Revolucionaria, pero años después, en 1802, la restituyó Napoleón Bonaparte. En 1848 fue eliminada de forma definitiva. En 1838 Gran Bretaña declaró abolida la institución en sus colonias, mientras que en los territorios bajo bandera española, los movimientos independentistas nacieron indisolublemente vinculados a este movimiento emancipador.

Los países de América Central, que alcanzaron la independencia en 1823, eliminaron la esclavitud en 1824. Así, la relación entre la declaración de independencia y abolición fue una constante a lo largo de la primera mitad del siglo XIX en casi toda la América de habla hispana.

En la segunda mitad del XIX eran pocos los países en los que la esclavitud seguía vigente: Ecuador declaró la abolición en 1851, Colombia en 1852, Venezuela y Perú en 1854, las colonias holandesas y Estados Unidos en 1863 y Puerto Rico diez años después. Sólo en Cuba y Brasil continuaban manteniéndola.

En medio de este panorama mundial, los recalcitrantes esclavistas de Cuba eran objeto de ataques. Éstos se aferraban a la esclavitud no por que la consideraran insustituible como régimen sino por razones prácticas vinculadas a sus intereses económicos, pues carecían de los resortes que garantizaran el paso al trabajo libre sin que sus riquezas fueran amenazadas⁴⁵.

A la sazón, renovar las dotaciones de esclavos era una empresa además de costosa, muy arriesgada. En virtud del tratado entre

España y Gran Bretaña firmado el 27 de septiembre de 1817, que se aplicó en Cuba a partir de 1820, la trata había sido declarada ilegal, pero tratantes, hacendados y autoridades coloniales se dieron la mano para burlar los subsiguientes convenios y leyes que reafirmaban dicha política, de manera que en la práctica el sistema mantuvo su vigencia. Incidencia similar tuvieron el tratado del 28 de junio de 1835, a pesar de que estipulaba la creación de tribunales mixtos, y la legislación aprobada en 1845. Aunque en los años inmediatos a esta fecha se experimentó cierta reducción en las cifras de esclavos importados, pero esto obedeció, fundamentalmente, al temor que se apoderó de los hacendados como consecuencia de las grandes rebeliones esclavas que sacudieron a las plantaciones de la región de Matanzas en 1843-1844.

Pero de todos los tratados, uno de los más efectivos fue el firmado el 29 de septiembre de 1866, confirmado el 17 de mayo de 1867 mediante el cual se impusieron duros castigos a los contraventores, cuestión que contribuyó a partir de ese año, al acelerado descenso de las introducciones, disminución ya iniciada desde 1860.

A partir de la década de 1840, las proyecciones económicas de los grandes propietarios esclavistas de Cuba estuvieron fuertemente marcadas por la necesidad de suplir la fuerza de trabajo esclava, y aunque en su gran mayoría consideraban la abolición de la trata como necesaria y las restricciones comerciales frenaban cada día más las operaciones ilícitas, los esclavos se seguían

45. En numerosas ocasiones los hacendados se pronunciaron públicamente contra la trata, tal como fue el caso en que el capitán general O'Donnell solicitó criterios de instituciones y personalidades para el proyecto de ley penal de 1845. Entre las conclusiones principales estaban: El tráfico de negros debe cesar, debe seguirse la política de reproducción natural entre los esclavos y necesidad de incrementar la población blanca. Ver María del Carmen BARCIA. *Burguesía esclavista y abolición*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1987, p. 56.

introduciendo⁴⁶. A pesar de los numerosos ensayos para que paulatinamente se fuera sustituyendo el trabajo esclavo por el trabajo libre⁴⁷, esto era un proceso demasiado dilatado para los intereses en juego.

Así, el precio de los esclavos alcanzó cifras muy elevadas. Si en la década de 1840 se podía adquirir un esclavo joven y saludable en 350 pesos, a partir de 1860 el precio se elevó a más de 1.000⁴⁸.

Esta problemática repercutió de forma directa en dos importantes procesos de carácter social y demográfico. Entre 1840 y 1860 el porcentaje de población blanca aumentó del 41% al 57%, mientras que la población libre de color pasó del 15% al 16%. En cambio, los esclavos, que suponían el 43% del censo de 1841, eran el 27% en 1860⁴⁹.

Para el periodo intercensal siguiente, la población esclava descendió del 27% en 1861 al 14% en 1877, mientras que la población denominada negra libre, pasó del 16% al 19%⁵⁰. Pero la reducción de las cifras totales de esclavos no tenía sólo como origen la tendencia decreciente natural. Estos años fueron testigos de un aumento importante de las manumisiones. Según el Censo de 1862, entre 1858 y el año del censo, se había producido en la Isla un total de 9.462 manumisiones. Para una población esclava de 370.553 que había en ese año, esto triplicaba los índices de las décadas anteriores⁵¹.

Durante los años finales de la década de 1850 se intensificó la introducción de colonos chinos y yucatecos, así como de inmigrantes españoles y canarios, evaluándose en unos

46. En el libro de Carmen BARCIA. *Burguesía esclavista...* [45], p. 161-162, se presenta una tabla elaborada por la autora en la que se registran los cálculos de introducciones de esclavos en Cuba entre 1815 y 1872. En la misma se pueden contrastar las cifras propuestas por los autores más especializados en la materia. Si se tomaran los estimados de Curtin, por ejemplo, el descenso operado a partir de 1860 fue el siguiente:

| | |
|------|--------|
| 1860 | 24.985 |
| 1861 | 23.964 |
| 1862 | 11.524 |
| 1863 | 7.507 |
| 1864 | 6.805 |
| 1865 | 145 |

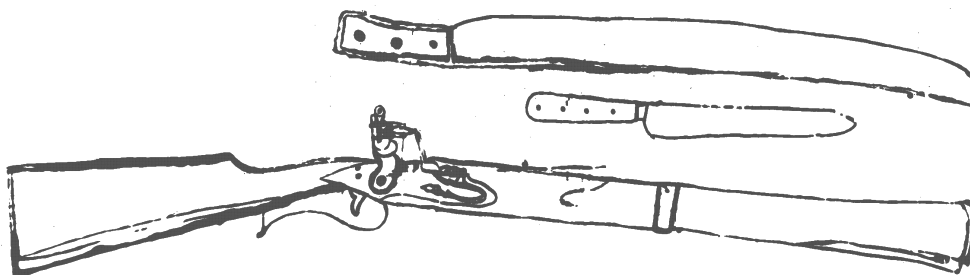
En la misma tabla se registran los estimados del demógrafo cubano Juan Pérez de la Riva:

| | | | |
|------|--------|------|-------|
| 1860 | 15.000 | 1867 | 7.000 |
| 1861 | 10.000 | 1868 | 6.000 |
| 1862 | 8.000 | 1869 | 5.000 |
| 1863 | 7.000 | 1870 | 4.000 |
| 1864 | 7.000 | 1871 | 3.000 |
| 1865 | 7.000 | 1872 | 2.000 |
| 1866 | 7.000 | | |

Según Juan PÉREZ DE LA RIVA. *El monto...* [12], p. 47, la última introducción de la que se tiene noticias se produjo en 1873.

47. Durante las décadas inmediatas anteriores se habían producido numerosos ensayos para producir azúcar con trabajadores no esclavos, pero el proceso sustitutivo no podía ser tan violento, por lo que éstos fracasaron; sin embargo, el número de trabajadores libres, alquilados y contratados fue aumentando paulatinamente en la industria. Así, se tiene por ejemplo, que en 1877 en los ingenios pertenecientes a los socios Aguirre en el occidente insular, de los 1.136 trabajadores, el 21,6% eran negros libres, y en la Gran azucarera, de los 838 trabajadores, el 58,5% eran chinos contratados, el 36,9% esclavos y el 4,6% eran negros libres. Estos índices fueron obtenidos de las tablas de H. E. FRIEDLAENDER. *Historia económica de Cuba*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1978, p. 538.

48. Un estudio amplio de los cambios operados en los precios de los esclavos vendidos en Cuba en este periodo se tiene en el libro de Carmen BARCIA. *Burguesía esclavista...* [45], y en especial en Manuel MORENO FRAGINALS; Herbert KLEIN; Stanley



Armas ocupadas a un cimarrón en los pantanos del sur de Puerto Príncipe, Camaguey en 1847.

6.000 efectivos las entradas de estos últimos. En el caso de los chinos, según Pérez de la Riva, llegaron a suplir, entre 1853 y 1857, el 50% del déficit de la fuerza de trabajo azucarera. Las ventas de chinos contratados eran de miles anuales, siendo las cifras más elevadas las correspondientes a los años 1866 con 12.391 y 1867 con 14.263. Se estima que hasta 1874 habían entrado en Cuba 150.000 chinos⁵².

La escasez de mano de obra esclava repercutió de forma directa en algunas variaciones en el carácter represivo del régimen de servidumbre. En esos años se le prestaba especial interés a las introducciones de mujeres esclavas, con el fin de facilitar la reproducción natural de las dotaciones. Se ofrecieron premios a los propietarios de más de cincuenta esclavos que logaran los mayores índices de

nacimientos y las más reducidas cifras de mortalidad dentro de sus siervos⁵³.

En medio de este proceso de cambios en el sistema esclavista de plantaciones, el movimiento independentista fue tomando cuerpo y en la década de 1850, las protestas públicas contra el despotismo colonial se hicieron sentir. Las agrupaciones y movimientos de tinte anticolonialista acapararon la atención de las autoridades, lo que se expresó en el Real Orden del 28 de mayo de 1825, mediante el cual se facultó a los Capitanes Generales de la Isla para gobernar en condiciones de plazas sitiadas.

En resumen, al estallar la guerra de independencia el 10 de octubre de 1868 en la región oriental de la Isla, los hacendados e intelectuales de la región, deseosos de obtener el apoyo de los grandes propietarios

ENGERMAN. «Nivel y estructura de los precios de esclavos de las plantaciones cubanas a mediados del siglo XIX: algunas perspectivas comparativas». *Santiago* (Santiago de Cuba). 63 (1986), p. 97-126.

49. Franklin KNIGHT. *Slave Society...* [24], 83-84.

50. H. E. FRIEDLAENDER *Historia económica...* [47], p. 58.

51. *Noticias estadísticas de la Isla de Cuba en 1861-1862*. La Habana: Imprenta del Gobierno, Capitanía General y Real Hacienda, 1862.

52. Juan PÉREZ DE LA RIVA. *El Barracón y otros ensayos*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1975, 472.

53. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Gobierno Superior Civil, Leg. 949, nº. 33549.

esclavistas de la región occidental, declararon que deseaban «la abolición gradual y bajo indemnización de la esclavitud».⁵⁴

Dos meses después de iniciada la contienda, la dirección de la República en armas prestó atención a los numerosos esclavos prófugos que vivían refugiados en diferentes palenques en las montañas de la región. Aunque no se había proclamado la abolición de la esclavitud, en el decreto del 27 de diciembre de 1868, se reconoció: «Serán declarados libres desde luego los esclavos de los palenques que se presentaren a las autoridades cubanas, con derecho bien a vivir entre nosotros ó a continuar en sus poblaciones del monte...»⁵⁵.

Sin embargo, el tema de la libertad para todos los esclavos, reflejó las contradicciones existentes dentro de la dirección del proceso insurreccional, por lo que no fue hasta el 25 de diciembre de 1870 que se declaró abolida la esclavitud en todos los territorios liberados.

Unos meses antes, en julio de 1870, el gobierno español había votado la «Ley de Vientres Libres», mediante la que todos los nacidos de mujer esclava desde el 17 de septiembre de 1868, serían declarados libres, así como los esclavos mayores de 60 años. Según las cifras oficiales registradas del proceso emancipador al abrigo de la ley, a partir de su aplicación hasta 1876 alcanzaron su libertad 50.405 esclavos por nacimiento y unos 20.000 por haber arribado a los 60 años⁵⁶.

Al concluir la Guerra de los Diez Años, con la firma del convenio del Zanjón en febrero de 1878, se estipuló la libertad de los

colonos asiáticos y esclavos que se hallasen en ese momento en las filas insurrectas. También se había reconocido la libertad de todos los esclavos que habían servido bajo la bandera española durante la contienda.

Desde hacía dieciséis años no se registraban operaciones importantes contra los apalencados orientales. Durante la contienda les fue reconocida su libertad, cuestión ratificada por los acuerdos con el Gobierno español al concluir la guerra. Los palenques orientales fueron abandonados durante estas dos décadas. Ninguno de los ochenta asentamientos conocidos y estudiados hasta el presente por la historiografía cubana pasó a la categoría de poblado a partir de un núcleo de esclavos prófugos o sus descendientes ya liberados⁵⁷. Los apalencados no permanecieron en esas inaccesibles y apartadas aldeas. Ya libres, podían ofertar su fuerza de trabajo en el mercado de una economía que no descansaba ya en el trabajo esclavo sino en el trabajador libre. En esto es necesario tener presente que al concluir la guerra la economía oriental estaba prácticamente destruida, que muchos lugares fueron deshabitados y que se produjo un gran éxodo hacia otros territorios⁵⁸.

El proceso de lo acaecido durante este periodo a los cimarrones y apalencados, cuántos se sumaron al campo insurrecto, cuántos permanecieron aislados en los montes, y su incorporación posterior a la sociedad cubana una vez abolida definitivamente la esclavitud el 7 de octubre de 1886, no ha sido estudiado aún de forma rigurosa.

54. Hortensia PICHARDO. *Documentos para la Historia de Cuba*. La Habana: Editorial Nacional de Cuba, 1965.

55. Hortensia PICHARDO. *Documentos...* [54].

56. H. E. FRIEDLAENDER *Historia económica...* [47], p. 525. La población esclava de la isla se redujo de 344.615 que había en 1867 a 199.094 en 1877. Ver Fernando ORTIZ, *Los negros esclavos*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1975, p. 38.

57. Gabino LA ROSA. *Los palenques del oriente de Cuba: resistencia y acoso*. La Habana: Editorial Academia, 1991.

58. Sobre los efectos sociales y económicos de la guerra, ver Rebecca SCOTT. *La emancipación...* [22], capítulo 4 y Franklin KNIGHT. *Slave Society...* [24], p. 154-178.

Notarios y esclavos en Cuba (siglo XIX)

MICHAEL ZEUSKE*
ORLANDO GARCÍA MARTÍNEZ

Escribir, administrar y memorar la esclavitud: escribanos, escrituras y nombres

Entre 1440 y 1888 la esclavitud atlántica fue una de las grandes estructuras económicas y comerciales del desarrollo de Occidente¹. Si uno la observa desde más cerca y desde diferentes niveles y perspectivas —tal y como pretende la microhistoria²— y se fija en los actores más importantes y en los lugares en los que se desenvuelven, apreciará pronto que, en realidad, constituía un tejido de actores y lugares comunicados por líneas comerciales; un paisaje, siempre conformándose y cambiando al mismo tiempo. Los elementos más importantes del mismo, en el caso de esclavitud azucarera, eran un puerto (o puertos), con un núcleo urbano y una llanura de tierras aptas para la agricultura de plantación de la caña de azúcar, surcada antes de la llegada del ferrocarril por una o

varias vías fluviales. Estos paisajes estaban poblados por esclavas y esclavos, ex esclavos, hombres libres, dueños, administradores, cubanos, españoles, curas, escribanos, notarios y muchos más: todo un universo de individuos con sus necesidades, identidades y sentimientos, actuando en la estructura y en el paisaje de la esclavitud.

Las fuentes de la historia escrita de la esclavitud se reducen prácticamente a discursos, textos y otros documentos producidos por los amos, funcionarios del Estado o personas provenientes de las culturas esclavistas (historiadores, maestros, literatos, intelectuales). Muchas voces desde arriba, muy escasas voces de los propios esclavos. Surgió una amplia tradición intelectual, a la que se unieron pensadores ajenos al sistema esclavista, como Alexander von Humboldt, de «pensar la esclavitud» y convertirla en literatura³. Tanto

1. Robin BLACKBURN. *The making of New World slavery: from the Baroque to the modern 1492-1800*. London, New York: Verso, 1997; Michael ZEUSKE. *Schwarze Karibik. Sklaven, Sklavereikulturen und Emanzipationen*. Zürich: Rotpunktverlag, 2004. [*Caribe negro. Esclavos, culturas de la esclavitud y emancipaciones*].
2. Jaques REVEL. «Microanalysis and the construction of the social». En Jaques Revel; Lynn Hunt (eds.). *Histoires. French constructions of the past*. Nueva York: The New Press, 1995, p. 492-502. Jaques REVEL (dir.). *Jeux d'échelles: La micro-analyse à l'expérience*. Paris: Seuil, Gallimard, 1996.
3. Manuel I. MESA RODRÍGUEZ (ed.). *Centón epistolar de Domingo del Monte*. La Habana: Impr. «El Siglo XX», 1957. 7 v.; Sophie ANDIOC TORRES. «Cartas para la historia de Cuba». En: Domingo del Monte. *Centón Epistolar*. La Habana: Imagen Contemporánea, 2002, I, p. 1-44 (Estudio introductorio, compilación y notas de Sophie Andioc); Luis WILLIAM. *Literary bondage: sla-*

los críticos como los defensores del trabajo forzado resaltaron el papel de la escritura. José Ferrer de Couto, uno de sus defensores, escribió: «Escudriñad las Escrituras», dijo Jesús a los que se atrevieron a poner en duda la santidad de su misión sobre la tierra: y yo os digo que si en las escrituras está la ciencia, y por ciencia se rigió el orden de las sociedades...»⁴.

Los notarios, a través de su actividad, daban cuenta del día a día de la esclavitud. Ponían sobre el papel, en fórmulas jurídicas acordes con las disposiciones legales del Estado, los procesos económicos subyacentes al sistema de explotación de la mano de obra. En cierta medida, y con un formato de menor belleza que el literario, también eran parte de la escritura de la esclavitud⁵ y de su memoria. Su espacio —la notaría, con su despacho y su archivo— estaba institucionalizado y hacía llegar el poder estatal a todo el territorio. En la tradición castellana del derecho romano, la esclavitud era un sistema legal regulado por el Estado y la Iglesia⁶ que, como toda legislación, trataba de regular y armonizar el conflicto social. Las normas muestran hasta dónde pueden llegar los individuos (amos y esclavos) en sus relaciones y con el Estado.

Pero era mucho más, como advierte Martin Lienhard: «En todas las sociedades provistas de sistemas de anotación oficiales, el

documento 'escrito' representa un poder»⁷. Los sistemas legales de tradición romana están basados en el poder de la escritura y de la «anotación oficial», de donde surge la *escribanía* y, más tarde, el *notariado*⁸: una institución a la vez pública y privada, que conjuga la del *letrado*, juriconsulto, archivero y copista y que con su actuación perpetúa el sistema de poder. Su tarea principal era protocolizar y archivar negocios o actos jurídicos no-contenciosos escritos a mano en cierta forma prescrita de un *compareciente* u *otorgante*, para prestarles a estos personajes jurídicos el poder (estatal) de la escritura protocolarizada, archivada y copiada, si era necesario. En casos de herencias o títulos de propiedad este poder es obvio. Los notarios eran los responsables de la anotación oficial. Además moldeaban discursos largamente discutidos en la oralidad por escrito y admitían la «delegación de la escritura» en casos de represión, pero, de vez en cuando también en casos de resistencia contra cualquier tipo de opresión. Esto es aplicable, por ejemplo, en casos como los de la «venta de finca» o «venta de ingenio» con su «dotación». Este acto legal y, por lo tanto, protocolizado, tenía incontestablemente su «verdad» dentro del sistema de normas y reglas establecidas en Cuba hasta 1886. Pero para los esclavos podía ser y, nosotros diríamos era, casi siempre, una

very in Cuban narrative. Austin: The University of Texas Press 1990; Martin LIENHARD. *Le discours des esclaves de l'Afrique à l'Amérique latine (Kongo, Angola, Brésil, Caraïbes)*. Paris: L'Harmattan, 2001; Michael ZEUSKE. *Schwarze Karibik...* [2], p. 2 0 0 - 2 0 6 .

4. José FERRER DE COUTO. *Los negros en sus diversos estados y condiciones; tales como son, como se supone que son y como deben ser*. Nueva York: Imprenta de Hallet, 1864, p. 11.
5. Jean HÉBRARD. «Les esclaves brésiliens dans la culture écrite. Effets des écritures administratives sur le statut social et juridique des esclaves (Bahia, XIXe siècle)» (manuscrito no publicado, citado con permiso del autor).
6. Manuel LUCENA SALMORAL. *La esclavitud en la América española*. Varsovia: Universidad de Varsovia, Centro de Estudios Latinoamericanos, 2002.
7. Martin LIENHARD. *La voz y su huella*. México: Ediciones Casa Juan Pablos, 2003, p. 63.
8. Juan STUYCK Y REIG. *Legislación hipotecaria y del notariado de las provincias de Cuba y Puerto-Rico*. Madrid: [s.n.], 1880. 2 v.; Jorge LUJÁN MUÑOZ. «La literatura notarial en España e Hispanoamérica 1500-1820». *Anuario de Estudios Americanos* (Sevilla). 38 (1981), p. 101-116.



Paisaje. Esteban Chartrand. Museo de Bellas Artes, La Habana.

represión. Nuestro trabajo estudia estos casos, pero también otros, cuando los esclavos ya no lo son, pero las fórmulas escritas con las que intentan describir sus nuevas realidades de hombres libres tenían reminiscencias de un pasado que creían haber dejado atrás⁹.

No disponemos todavía de ejemplos de historias de vida de notarios en Cuba. Y no sabemos, como sucedió en el sur de los Estados Unidos, si había antiguos esclavos entre los notarios. Aún así, la escasa literatura existente nos permite ofrecer un boceto de lo que era y pretendía el notariado. Por regla, hasta bien entrado el siglo XIX no se precisaban

estudios universitarios para ejercer el oficio. Luján Muñoz hace hincapié en que su «formación era eminentemente práctica», semejante a la de los artistas y artesanos¹⁰. Después de una fase de aprendizaje con otro escribano —con el que solían compartir algún tipo de vínculo familiar— heredaban su oficina o la obtenían «generalmente mediante compra»¹¹. Los notarios suplían su falta de preparación académica con la lectura de obras jurídicas de carácter general. Luján Muñoz afirma que la mayoría de los notarios y escribanos «simplemente seguían lo que habían venido haciendo, repitiendo las fórmulas establecidas, teniendo a mano

9. En cuanto al concepto de «delegación de la escritura», véase: Armando PETRUCCI. «Escribir para otros». En: *Alfabetismo, escritura, sociedad*. Barcelona: Gedisa, 1999, p. 105-116; agradecemos a Rebecca J. Scott esta observación.

10. Jorge LUJÁN MUÑOZ. «La literatura notarial...» [8], p. 102.

11. Jorge LUJÁN MUÑOZ. «La literatura notarial...» [8], p. 102.

los protocolos de sus antecesores y de ellos mismos, y algún que otro formulario notarial¹². Esto quiere decir que los notarios no solamente eran parte del sistema legal (y de poder, aunque a veces en sus periferias rurales), sino también parte de una tradición gráfica bastante estable y conservadora, una tradición de formularios de protocolo, integrada en el *corpus* del derecho romano hispanizado¹³. Además, los notarios, por su formación, y por su capacidad económica —recordemos que el notariado era un cargo que vendía el Estado— formaban parte de las oligarquías locales, lo que les llevaba a defender, en la mayoría de las ocasiones, una tradición social conservadora¹⁴.

¿Qué pasó entonces, cuando un antiguo esclavo apareció como otorgante, entre 1880 y 1886, cuando la abolición fue primero gradual y después total? Nuestras evidencias microhistóricas de la región de Cienfuegos nos dicen que desde el inicio del patronato (1880)¹⁵ los notarios de Cienfuegos, José J. Verdaguer, J. R. Villafuerte y E. Nieto y, años más tarde, él de Lajas/Cruces (una región con

los centrales más grandes y modernos del momento), Domingo Valdés Losada¹⁶, siguieron la tradición heredada en la redacción de sus protocolos. Por lo general, los pasantes preparaban la minuta (un esbozo del protocolo, comúnmente escrito por un pasante), mientras que el notario *oía* al otorgante, *comprobaba* la documentación que aportaban, o anotaba que conocía personalmente al compareciente u otorgante (esto es, con el conocimiento que tenían de su localidad, daban fe de una manera práctica sobre el estatus legal del compareciente), para finalmente *leer* los documentos que entregaban los comparecientes, antes de ratificar la nueva condición jurídica que se quería oficializar. Lamentablemente esas minutas no eran archivadas. Sólo tenemos huellas de ellas en casos de otorgantes muy viejos y/o enfermos, que habían dictado un testamento antes de morir, como la «morena» Josefa Broche:

«...en la morada de la morena Josefa Broche, que se halla en cama, la que confesó ser natural de África, de estado viuda del de su clase Eustaquio

12. Jorge LUJÁN MUÑOZ. «La literatura notarial...» [8], p. 103.

13. Eugenio RUIZ GÓMEZ. *Novísima legislación orgánica del notariado de las islas de Cuba y Puerto-Rico*. Málaga: Imp. Viuda de Gil de Montes, 1874. En la página XXII de este libro (y colección de formularios) aparece el «Artículo 47 de la Ley de 3 de Marzo de 1873 sobre organización del notariado en las provincias de ultramar; Decreto de 29 de Octubre de 1873, sobre la nueva organización del Notariado en Cuba y Puerto-Rico; Madrid, 29 de octubre de 1873 – El ministro de Ultramar, Santiago Soler». En las páginas XX-XXV el autor da una definición de «protocolo» y en las páginas 321 y siguientes aparece la colección de formularios. No se define «otorgante»; aparentemente toda persona jurídica que pudiese sufragar la actividad de un notario podía ser considerado así.

14. A partir de 1849 en Cuba les era permitido usar a todos los escribanos y procuradores el título distintivo de «don». Ver ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Gobierno Superior Civil, leg. 350, n° 12757 (1848): «La Audiencia de Puerto Príncipe adoptando sin aprobación del presidente el artículo primero del Real Decreto de 29 de agosto de 1843 publicado en la península en que se concede usar del «don» a los escribanos y procuradores»; véase también los papeles y documentos que tuvo que entregar un escribano nuevo: ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Gobierno Superior Civil, leg. 350, n° 12787 (1849): «Información promovida por don Félix Guerra para justificar su limpieza de sangre, buena vida y costumbres y la actitud en que se encuentra para desempeñar la escribanía pública y de cabildo».

15. Rebecca SCOTT. *Slave emancipation in Cuba. The transition to free labor, 1860-1899*. Pittsburgh: The University of Pittsburgh Press, 2000.

16. No podemos citar aquí todos los protocolos en extenso: ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Fondo Protocolos Notariales, Protocolos Domingo Valdés Losada, tomos 8 (enero-febrero de 1904), 9 (marzo de 1904), 10 (abril-mayo de 1904), 11 (junio de 1904), 12 (julio de 1904), 13 (agosto-septiembre de 1904), 14 (octubre-diciembre de 1904), 15 (enero-febrero de 1905), 16 (marzo-abril de 1905). Como información serial suministran: nombre y apellido(s), vecindad y naturaleza, estado civil, la fórmula «mayor de edad» como símbolo de la capacidad judicial, la ocupación y sumas de dinero.

Rodríguez, de ejercicio de su sexo de setenta años de edad y de esta vecindad [...] Declara, como antes ha expresado que fue casada con Eustaquio Rodríguez, ya difunto, de cuyo matrimonio no ha tenido sucesión [...] sus bienes un solar [...] en el que existen dos pequeñas habitaciones de guano, teja y embarro y varios árboles frutales...»¹⁷.

En estos casos la minuta del protocolo era leída enteramente al otorgante, ante testigos, en el mismo momento, justo después de ser anotada como minuta.

Los esclavos normalmente no eran personas de derecho, personas jurídicas; no debían aparecer por voluntad propia en el despacho de un notario para otorgar una escritura. Por eso las cartas de libertad siempre resaltan esa «voluntad propia». En realidad cuando un esclavo otorgaba una escritura, por ejemplo cuando compraba la libertad de un hijo o la suya propia, siempre actuaban con la autorización de sus amos y, en ocasiones, asesorado por un síndico de pobres¹⁸.

Los contenciosos de la esclavitud, su administración escrita y su control también dejaron huellas de papel en muchos niveles. Conocemos, por ejemplo, los conflictos generados entre amos y esclavos, entre éstos y los mayores, así como los producidos entre ellos mismos. También ha llegado has-

ta nosotros información sobre sus estrategias de liberación: por mediación de las autoridades, por autocompra y a través de las rebeliones. El libro de Gloria García, basado en la documentación del Archivo Nacional de Cuba, constituye una buena muestra de los distintos aspectos de la cotidianeidad de la esclavitud¹⁹.

Los protocolos notariales muestran las complejidades legales que afectaban a los esclavos. Por un lado, estaba la tradición legal que, desde las Siete Partidas, reconocía su estatuto de persona cristiana. Por otro, nos encontramos con los derechos mínimos que les denegaba o reconocía el Estado, lo último particularmente a partir de 1842²⁰ y, sobre todo ello, la consideración económica, que hacía del esclavo, a un mismo tiempo, una fuerza de trabajo y un objeto con el que se podía comerciar. No escriben y no firman, pocas veces están representados textualmente por la palabrita «dice» y casi nunca pueden introducir directamente su visión de la «verdad» en los protocolos²¹. Aunque pocas veces aparecen con voz propia, los esclavos están presentes en el trasfondo de las escrituras²². La manumisión primero y la definitiva abolición en 1886 después supusieron el cambio más radical del sistema jurídico del momen-

17. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE REMEDIOS, Escribanías y Notarías, partido judicial de Remedios, protocolos José Miguel Jiménez, fondo nº 67, 1884, t. 2 (21 de marzo - 16 de agosto), escrituras nº 98-240, f. 983r-985r, escritura nº 212: «Testamento nuncupativo», Remedios, 12 de julio de 1884.

18. Agradecemos esta precisión a Aisnara Perera y a María de los Ángeles Meriño.

19. Gloria GARCÍA RODRÍGUEZ. *La esclavitud desde la esclavitud. La visión de los siervos*. México: Centro de Investigación Científica Ing. Jorge I. Tamayo, 1996.

20. Jean-Pierre TARDIEU. «*Morir o dominar*». *En torno al reglamento de esclavos en Cuba (1841-1866)*. Madrid: Iberoamericana, 2003.

21. Casi se oye al viejo Marx, en el «18 de Brumario». Citamos aquí en la traducción de Edward Said: «They cannot represent themselves, they must be represented», EDWARD SAID. *Orientalism. Western Conceptions of the Orient*. New York: Penguin, 1995, p. XI (no citamos el original alemán o la traducción castellana porque el concepto de «vertreten» difiere bastante de los sentidos de la palabra «to represent» de la traducción al inglés). El problema, que hoy empezamos a entender, es que también por las formas largamente establecidas de formularios de escrituras de poder se puede oír la autorepresentación híbrida de los que «must be represented».

22. Michael ZEUSKE. «Hidden markers, open secrets. On naming, race marking and race making in Cuba». *New West Indian Guide* (s-Gravenhage). 76/3-4 (2002), p. 235-266.

to. Los antiguos esclavos accedieron al estatus jurídico de sus amos; ahora ellos también «dicen», «otorgan», «tratan» y contratan por «voluntad propia». La retórica de este cambio está ausente del documento que ratifica la abolición²³, pero sí adquiere presencia en los documentos individuales de manumisión:

«...ahorra y liberta de todo cautiverio y servidumbre a su esclava [...], y esta libertad es graciosamente y sin estipendio alguno por lo cual se aparta de la propiedad, posesión y demás acciones que a dicha sierva tenía y todo lo cede y traspasa en su hecho y causa propia para que como persona libre trate, contrate, otorgue poderes, testamentarias, comparezca en juicios y haga todo lo demás que practican las personas que disponen de su voluntad y le obliga a que esta libertad será cierta y segura en todo tiempo según derecho»²⁴.

Estas fórmulas nos parecen hoy barrocas, pero es la «anotación oficial» no sólo de la libertad individual y la cesión del derecho de propiedad sobre una persona, sino también del fundamento por escrito de su nueva posición y personalidad jurídica.

Los protocolos encierran una *verdad* para los historiadores, que no es el valor absoluto que se concibió en la redacción original del documento. Hay tres aspectos básicos que analizar para llegar a saber cómo los garantes de la *verdad* oficial, podían introducir su *propia verdad* parcial e interesada.

En primer lugar está cómo se realiza el traslado de la oralidad a lo escrito, a la minuta. También entre ésta y su versión final, así como entre esta última y el acceso al archivo en la que se custodia. Esto es algo que sólo

podemos mencionar y no describir aquí en extenso, pero que pone de manifiesto el poder del notario como administrador y conservador de la autenticidad de los hechos. La oralidad está representada en el protocolo por el «dice», pero no sabemos, a ciencia cierta, cuántas palabras se han perdido en el camino, cuántas palabras han salido de la boca del antiguo esclavo, probablemente analfabeto, y han llegado al escrito del notario, más cuando al final la fórmula jurídica de el «ante mí», no sea más que eso, una fórmula, pues cuando las palabras se redactan sabemos que ya no hay nadie en el despacho del notario.

Un segundo aspecto básico es el de las cantidades de dinero pagadas por la compra de la libertad, sumas que en las escrituras casi siempre se esconden detrás de la fórmula «atestigua de haber recibido a su satisfacción».

Un tercer tema fundamental a analizar en los protocolos es el de los nombres de los esclavos y ex esclavos y el de las personas que ejercen como testigos. Es significativo que a partir de 1870, cuando comenzaba a resquebrajarse la institución, cada vez son más los esclavos que delegan la escritura y la lectura de los documentos que les atañen en personas de su confianza. Los nombres que encontramos en los protocolos son muy genéricos y sin una clara especificación individual y, por ello, quizá, las personas reales que se ocultan detrás podrían ser intercambiadas. Asimismo, desconocemos hasta qué punto la versión firmada por los testigos coincide con lo expresado por los compare-

23. «Real Orden suprimiendo el Patronato», *Gaceta de la Habana* (La Habana), 29 de octubre de 1886. En: Hortensia Pichardo (ed.). *Documentos para la historia de Cuba*, La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1973, I, p. 420-421; Enrique Pérez-Cisneros. *La abolición de la esclavitud en Cuba*. Costa Rica: Litografía e Imprenta LIL, S. A., 1987.

24. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Protocolos Notariales, Protocolos José Joaquín Verdaguer (año 1875), escritura 269: «Libertad graciosa», f. 1036-1037, villa de Cienfuegos, 5 de octubre de 1875.



Negros Novos. Johann Moritz Rugendas. *Voyage pittoresque dans le Brésil* (1835).

cientes y anotado en la minuta. Desconocemos a ciencia cierta la construcción temporal del documento final y no podemos descartar la posibilidad de que los testigos firmasen una hoja vacía que con posterioridad era rellanada en la notaría.

Dado el especial carácter de los protocolos notariales para la historia de la esclavitud, analizaremos a continuación algunos de ellos conservados en varios archivos regionales cubanos, esos «lugares de la memoria», como los ha denominado Rebecca Scott²⁵.

Para nosotros, estos protocolos notariales archivan la memoria de un acto de poder dentro del tejido económico, social, cultural, psicológico y legal de la esclavitud. Quere-

mos presentar aquí seis tipos de documentos notariales que quizá no sean habituales, pero describen paradigmáticamente distintos tiempos y realidades de la esclavitud en varias ciudades de la isla (Cienfuegos, Santa Clara, Sagua la Grande, Remedios y Santiago de Cuba), prestando especial atención al problema de los nombres:

1. Documentos que se retrotraen a África, un tiempo anterior al de la esclavitud.
2. Documentos de «cargazón» (listas de barcos negreros), de compra-venta o de contrabando y del bautismo de recién llegados (o recién nacidos en la esclavitud), es decir, que reflejan espacial o temporalmente la entrada en la esclavitud.
3. Documentos de reventa y herencia de esclavos o dotaciones enteras (el «gran negocio de los notarios»).
4. Documentos sobre manumisión, «libertad» individual (coartación) o patronato, es decir, documentos que reflejan las posibilidades de adquirir la libertad dentro de una sociedad esclavista.
5. Documentos sobre el patronato y la emancipación final (con cédula).
6. Documentos sobre la memoria de la esclavitud, es decir, testamentos o protocolos sobre herencias que mencionan el estado de servidumbre.

Memorias de África: Antonio Pérez y su recuerdo de Yisá

El testimonio de Esteban Montejo, el de un hombre que vivió su esclavitud en su propia carne, comienza con una reflexión sobre Áfri-

25. Rebecca J. SCOTT. «The provincial archive as a place of memory: confronting oral and written sources on the role of former slaves in the Cuban War of Independence (1895-98)». *New West Indian Guide* ('s-Gravenhage). 76/3-4 (2002), p. 191-209.

ca. También la historia de Reyita se inicia rememorando la vida de su abuela «antes de ser esclavizada»²⁶. Aunque no sabemos a ciencia cierta si esta estructuración temporal fue verdaderamente el comienzo de sus narraciones cuando las hicieron a los escritores, es un importante punto de partida.

En los últimos años de la esclavitud, en los documentos oficiales algunos ex esclavos intentaban introducir sus propias genealogías, sólo existentes en forma oral antes de la «anotación oficial». Esta memoria —como otras alusiones a África por parte de otorgantes afrocubanos— los conectaba con sus orígenes. La razón jurídica de la protocolización o «anotación oficial» era el reconocimiento de un hijo natural. No sabemos por qué el notario aceptó esta genealogía y su «verdad» propia, tal vez porque simpatizaba con la abolición o porque aceptó el «linaje» africano para reforzar la patria potestad del otorgante. Tal vez para Antonio Pérez la razón de mencionar e inscribir su genealogía suponía un valladar cultural contra la abrumadora presión de las genealogías hispanas de dos apellidos²⁷. Con un sentido fuerte de resistencia cultural, de una *verdad* propia y de reconocimiento de sus raíces africanas²⁸ en 1885 Antonio Pérez declara que Julio Domingo es su hijo natural:

«...el moreno Antonio Pérez, sin segundo apellido, natural del pueblo de Yisá, de nación Lucumí, en África, soltero, de edad de cincuenta y

un años, labrador de campo [...] para que desde luego pueda usar su apellido [esto es, que pudiera usar dos apellidos: Julio Domingo Pérez Pared, M. Z. y O. G. M.]; queriendo dejar consignado a los efectos oportunos que los abuelos paternos del niño reconocido eran Yicocun Hova y Fá Chipe, ambos naturales de dicho pueblo de Yisá, y ya difuntos, y que el compareciente fue bautizado por el de mil ochocientos cincuenta [a los dieciséis años, M. Z. y O. G. M.] en la iglesia parroquial del poblado de Guaracabuya, como perteneciente a la dotación del potrero, titulado El Platanal»²⁹.

Yisá parece ser una población, villa o ciudad en el norte islámico de la actual Nigeria; también los nombres de Yicocun Hova y Fá Chipe parecen ser nombres de esta región.³⁰ En cuanto a la memoria, Antonio Pérez va directamente a lo esencial, construyendo una línea directa de su barrio cienfueguero (y el potrero, donde había sido esclavo) a una África de su memoria personal, dejando al silencio todo lo que concierne a la trata y al cruce del Atlántico.

«Una persona con precio»: comercio de esclavos y curas

La entrada a la esclavitud: el silencio y los escribanos (notarios y curas)

Hay otras lagunas en la historia escrita de la esclavitud. La mayoría de los esclavos asentados en suelo cubano, alrededor de 800.000, desde el siglo 1511 hasta 1886, nacieron fuera de Cuba. Antonio Pérez, por ejemplo, «entró»

26. Miguel BARNET. *Biografía de un cimarrón*. La Habana: Instituto de Etimología y Folklore, 1966; Miguel BARNET. *Cimarrón*. La Habana: Gente Nueva, 1967; Daisy RUBIERA CASTILLO (ed.). *Reyita, sencillamente. (Testimonio de una negra cubana nonagenaria)*. La Habana: Instituto Cubano del Libro, World Data Research Center, 1997.

27. En cuanto a la importancia de los dos apellidos, ver Michel ZEUSKE, «Hidden markers...» [22], p. 235-266.

28. Sobre el sentido cultural más amplio y más oculto de inscribir el niño en la cadena de sus antepasados (una de las figuras más importantes en formaciones religiosas de procedencia africana), sólo se puede especular aquí.

29. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Protocolos Notariales, Protocolos José Rafael de Villafuerte y Castellanos, 1885, t. 1 (enero-abril), f. 164r-166v, escritura n° 27: «Acta de reconocimiento de hijo natural por el moreno Antonio Pérez», en la Ciudad de Cienfuegos, 28 de febrero de 1885.

30. Agradecemos la sugerencia a Paul Lovejoy y a Mamadou Dióf.

en una edad muy temprana en la esclavitud, con más o menos dieciséis años. Walter Johnson, el mejor conocedor de los mecanismos concretos de los mercados de esclavos en New Orleans, acuñó la frase de que el esclavo en venta era una «persona con un precio»³¹. ¿Cómo ingresaron las mujeres, hombres y niños a la esclavitud?, ¿cómo fueron hechas en Cuba «personas con un precio» y pasaron a formar parte de la sociedad esclavista de Cienfuegos? Lo más asombroso es que a través de la documentación notarial de Cienfuegos y su *hinterland* sabemos muy poco. Carecemos de vestigios textuales sobre la entrada de esclavos recién llegados de África; únicamente contamos con informaciones sobre ventas e impuestos sobre compra-ventas en general³². Tenemos aquí, en la memoria de la esclavitud escrita, y registrada por el Estado, una laguna y un gran silencio. La historia de Cienfuegos como núcleo poblacional en su primer tiempo (1819-1870) coincide con la etapa del comercio clandestino de esclavos³³. Por eso, los notarios no pueden protocolizar la compra-venta de aquellos que acababan de llegar de África. Sólo cuando ya estaban en Cuba y por mecanismos semi-legales eran «oficializados» como tales³⁴. Y tenemos pruebas de este «comercio sucio». Un caso muy

conocido fue el del acaudalado comerciante, devenido en hacendado, Tomás Terry Adams³⁵.

Aquí se abren vastos territorios para la investigación en el campo de la nueva historia legal de la esclavitud. De las muchas posibles pautas únicamente mencionamos una: la legitimación por escrito realizada por la Iglesia³⁶. El papel de la «anotación oficial» en este terreno lo cumplieron los curas locales bajo cuya jurisdicción quedaban la plantación o el ingenio y demás fincas que recurrieron a la mano de obra esclava durante esta etapa de expansión económica. Estos *notarios de la eternidad* asumían por disposiciones coloniales un rol sumamente importante para la historia escrita de la esclavitud, ya que por el patronato real eran prácticamente funcionarios del Estado³⁷, en un tiempo en que la separación entre la Iglesia y el Estado era prácticamente inexistente. En los libros de bautismos sí están registrados los recién llegados, dando así fe de su entrada en la economía real y espiritual de la esclavitud. De esta manera, el bozal inexistente en la notaría, devenía en un nuevo cristiano en los libros sacramentales de la jurisdicción parroquial en la que estaba ubicada su plantación.

31. Walter JOHNSON. *Soul by soul. Life inside the antebellum slave market*. Cambridge.: Harvard University Press, 2000, p. 1-18.

32. «Sources and methods of data collection». En: Laird BERGAD; Fe IGLESIAS GARCÍA; María del Carmen BARCIA. *The Cuban slave market, 1790-1880*. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1995, p. 15-22.

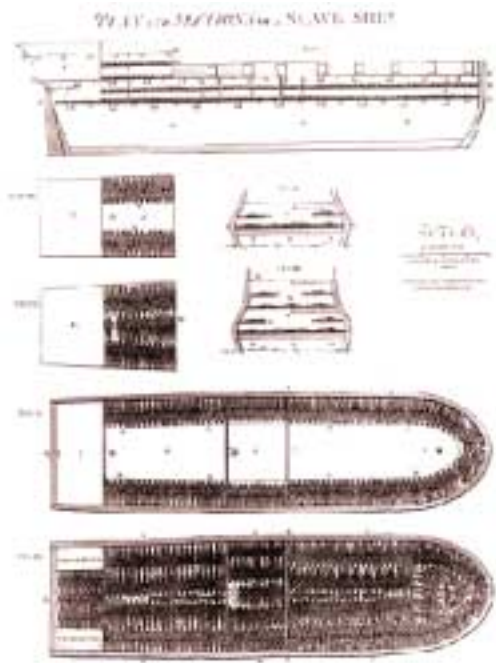
33. José Luciano FRANCO. *Comercio clandestino de esclavos*, La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1980; David R. MURRAY. *Odious commerce: Britain, Spain and the abolition of the Cuban slave trade*. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.

34. Laird BERGAD; Fe IGLESIAS GARCÍA; María del Carmen BARCIA., *The Cuban slave market...* [32].

35. Manuel MORENO FRAGINALS. *El Ingenio. Complejo económico social cubano del azúcar*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1978, II, p. 48.

36. Véase la visión del bautismo por parte de los esclavos africanos en James SWEET. *Recreating Africa: Culture, Kingship, and Religion in the African-Portuguese World, 1441-1770*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, p. 196-197.

37. Javier LAVIÑA (ed.). *Doctrina para negros*. Barcelona: Sendai Ed., 1989, p. 13-59. Una posición oficialista de la Iglesia Católica en Cuba y la esclavitud presenta Manuel MAZA MIQUEL. «Clero católico y esclavitud en Cuba en los siglos XVI al XIX. Ensayo de síntesis». *Estudios Sociales* (Santo Domingo). 79-80, (1990), p. 17-61.



Plano y sección de un barco negrero (1788).

Nacer esclavo y escritura: la función administrativa de la iglesia católica

Un certificado de bautismo³⁸, *fe de bautismo*, de un niño que realmente nació esclavo lo encontramos en los libros sacramentales en la iglesia mayor de Sagua la Grande:

«Nº. 188 Esteban Santa Teresa Mº. Eº. Libre por beneficio de la Ley de 23 de junio de 1870 por autorización de S. S. I. Jueves cinco de

agosto de mil ochocientos sesenta y nueve años:

Yo D. Francisco Sirola, cura beneficiado de la iglesia parroquial de ascenso de la Purísima Concepción de Sagua la Grande y vicario foráneo de ella y su jurisdicción, bauticé solemnemente y puse por nombre *Esteban*³⁹ a un niño que nació el día veintiséis de diciembre del año próximo pasado, hijo de la morena Dionisia conga, perteneciente al ingenio Santa Teresa, de D. Tomas Ribalta. Fue su padrino Quintín criollo⁴⁰, a quien advertí el parentesco espiritual y obligaciones que contrajo; y lo firmé = Francisco Sirola»

Este *Esteban Santa Teresa*, como esclavo recién nacido, fue bautizado por el párroco Francisco Sirola con el nombre del lugar de su nacimiento, es decir, la plantación Santa Teresa. Parece que este niño esclavo que más tarde va a ser —con alguna probabilidad— Esteban Montejo y Mera nunca llevó el apellido de su primer dueño, Tomás Ribalta. Recordamos que otros esclavos de Ribalta llevaron apellidos parecidos como Mena o Mera, como por ejemplo: «el moreno Elías Mena conocido por Elías Ribalta» (véase más abajo)⁴¹.

También los curas y párrocos recurrían a una fórmula protocolaria en los libros sacramentales. En el texto de la fe de bautismo que reproducimos aquí aparecen tres informaciones fundamentales: la fecha de nacimiento

38. Registros parroquiales de bautizo, parroquia Inmaculada Concepción, Sagua la Grande, diócesis Santa Clara (Registros Sagua la Grande); Libro de bautismos de color 4 (domingo, 1 de marzo de 1868 hasta domingo, 31 de mayo de 1874), f. 66, n° 188.

39. Subrayado en el original.

40. La gran mayoría de los otros bautizados tiene también madrina, Esteban Santa Teresa no.

41. FUNDACION GOYTISOLO (Cádiz), subfondo Agustín Goytisolo Lezarzaburu, correspondencia, caja 107, exp. 17: «Carta de Agustín Fabian Goytisolo Digat a su hermano Antonio, fechada en Cienfuegos a 9 de noviembre de 1882». Enrique Ebo y LLOP. *Memoria histórica de la villa de Cienfuegos y su jurisdicción*. Cienfuegos: Imprenta El Telégrafo, 1861, apéndice, p. 54-60, Tomas Ribalta ya aparece como propietario del Santa Teresa; un propietario con apellido Mena se menciona en el documento: «Extractos del auto otorgado en Sagua la Grande, en 28 de abril de 1864, contra Andrés Mena y su hijo Justo por sevicia». En: Gloria GARCÍA RODRÍGUEZ. *La esclavitud desde la esclavitud...* [19], p. 184-186.

(en el santoral católico, día de san Esteban), el nombre cristiano (Esteban) y el lugar (ingenio Santa Teresa)⁴². Además aparecen, lo que en relación con la protocolización es sumamente importante, las apuntaciones del margen izquierdo: «M^o. E^o.», que significa «moreno esclavo», escrito en el mismo momento del registro del bautismo y la anotación posterior, en la que se aprecia la misma letra, pero con distinta tinta: «Libre por beneficio de la Ley de 23 de Junio de 1870 por autorización de S. S. I.»⁴³; esto es que Esteban Santa Teresa fue uno de los niños liberados por la ley Moret de 1870⁴⁴. Sobre Francisco Sirola, el cura párroco, sabemos, por protocolo notarial de 1870 que fue elevado a cura en propiedad de la iglesia mayor de Sagua en 1870:

«En la villa de Sagua la Grande diez y siete de enero de mil ochocientos setenta, ante mi el Escno [escribano] y testigos compareció el presbítero D. Francisco Sirola, de este vecindario a quien doy fe conozco y dijo: Que confiere poder amplio y bastante a D. Isidro de la Peña, vecino de la Habana para que cobre y perciba de la Hacienda sus asignaciones como cura párroco de esta villa...»⁴⁵.

Los libros de bautismo de Sagua la Grande, los cuales tomamos aquí de ejemplo (existen

prácticamente en cualquier parroquia en Cuba), reflejan la función de «anotación oficial» por parte de la Iglesia. Aparecen muchas inscripciones como ésta: «Esteban Ribalta [...] puse por nombre *Esteban* a un moreno congo, de treinta y cuatro años de edad, esclavo de D. Tomás Ribalta, vecino de esta feligresía. Fue su padrino Francisco Congo»⁴⁶. Estos formularios ponen de manifiesto la diferencia entre un esclavo criollo, como Esteban Santa Teresa, y un bozal: a uno le dieron el nombre del lugar, al otro lo bautizaron con el nombre del propietario que había adquirido al «esclavo congo» en una compra-venta. Lo de darle el apellido al negro bozal recién llegado era o voluntad del amo o del párroco que anotaba el bautismo, pues en la gran mayoría de los casos no se ponía apellido, ni mucho menos, la procedencia cultural escrita, casi siempre en minúsculas, «congo», «mandinga», «lucumí», «gangá» o «carabalí», etc. De modo que, una vez más, están por medio de esta afirmación diferencias individuales y regionales que sólo la microhistoria puede ratificar.

En los libros de bautismo de Sagua la Grande, una población fundada en 1812, aparecen en los años 1859 hasta 1882 mayoritariamente menciones de «esclavos» o «emancipados»⁴⁷,

42. Miguel BARNET. *Cimarrón...* [26], p. 13-14.

43. La abreviación «S. S. I.» significa «Su Santidad Ilustrísima» se refiere al obispo de la diócesis que autorizó a realizar dicha anotación al margen, todas las anotaciones de derecho civil (matrimonios, la aclaración de un apellido o el reconocimiento de un hijo natural) tenían que ser autorizada por el gobierno del arzobispado. Agradecemos la información a María de los Angeles Meriño.

44. Hortensia PICHARDO. *Documentos...* [23], I, p. 383-388; Rebecca SCOTT. *Slave Emancipation in Cuba...* [15]; Concepción NAVARRO AZCUE. *La abolición de la esclavitud negra en la legislación española, 1870-1886*. Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica, 1987.

45. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE VILLA CLARA, Protocolos Notariales, Protocolos Antonio Palma Espinoza, Sagua la Grande, 1870, t. 1 (enero-julio), f. 39v - 44r, escritura nº 34, «Poder especial», 17 de enero de 1870.

46. Registros parroquiales de bautizo, parroquia Inmaculada Concepción, Sagua la Grande, diócesis Santa Clara (Registros Sagua la Grande); Libro de bautismos de color, libro 3 (domingo, 24 de abril de 1859 hasta lunes, 20 de abril 1868), f. 47, nº 337.

47. Inés ROLDÁN DE MONTAUD. «Origen, evolución y supresión del grupo de negros 'emancipados' en Cuba 1817-1870». *Revista de Indias* (Madrid). XLII/169-170 (1982), p. 559-641. Tal vez aparecen tantos emancipados, porque el Estado ya perseguía los negreros de forma bastante dura o porque se hizo la legalización de los esclavos de contrabando por este concepto.

muy jóvenes y «congos»⁴⁸, un grupo al cual aparentemente también perteneció la madre de Esteban Santa Teresa, Dionisia conga (véase la lista de «emancipados» de dos días en 1868 en el anexo).

Un caso especial representa el contrabando de esclavos, en nuestro contexto sobre todo porque es difícil de demostrar en textos o discursos oficiales. Sí se puede hacer en las compras, aunque es difícil diferenciar entre «entrada» en la esclavitud y «compra-venta» dentro de ella. El contrabando de esclavos por la costa de la jurisdicción de Cienfuegos fue una práctica bastante común durante la primera mitad del siglo XIX y hasta las vísperas de la guerra de los Diez Años (1868-1878). Durante toda la época del «boom» azucarero de la región de Cienfuegos, de 1830 a 1886 — fecha de la abolición—, muchos esclavos fueron importados desde Santiago de Cuba, Manzanillo, Trinidad y Batabanó para engrosar las dotaciones de los ingenios recién fomentados en las tierras cercanas a la Bahía de Jagua. La expansión hacia el interior demarcado por los poblados de Cruces, Lajas, Cartagena y La Esperanza generaba una demanda de mano de obra aún más grande. Esto favoreció el comercio de contrabando negrero en gran escala. Por la zona de la Ciénaga de Zapata entraron importantes expediciones de negros bozales entre 1853 y 1866 con el apoyo de los comerciantes locales

Julio Leblanc y Tomas Terry. Éstos, y algunos otros, supieron aprovechar los vínculos y experiencias en estos menesteres de Julián Zulueta. Desde la Bahía de Cochinos y por intrincados y pantanosos caminos de la parte sur occidental de Cienfuegos eran trasladados los negros africanos hasta el barracón del ingenio Caridad de Juragua, propiedad de Terry. Desde aquí eran distribuidos, seguramente con la documentación legal necesaria, tal vez por mecanismos parecidos al caso de los «niños de la goleta Batans»⁴⁹, a distintas zonas azucareras con la anuencia de las autoridades coloniales hispanas, algunas de las cuales debieron ser destituidas por su probada participación en el tráfico negrero como sucedió, entre otros funcionarios, con el Teniente Gobernador de Cienfuegos en 1854⁵⁰.

Esclavos, dotaciones y herencias

El gran negocio de los notarios entre 1830 y 1880 fueron las escrituras de compra, venta, reventa, hipotecas, herencias y demás actos económicos y legales que incluían a los esclavos. La esclavitud y los esclavos eran los actores principales de una economía rural y, en consecuencia, objetos del entramado legal que legitimaba el sistema.

Y, textualmente, eran parte de listas de herencias de bienes agrícolas. El gran *corpus* documental de las escrituras de la esclavitud

48. El bautizo de «congos» era una cosa teológicamente muy discutida, porque el Congo era el centro del cristianismo en África, así que a veces se trataba de un re-bautizo, véase: John K. THORNTON. «Religious and ceremonial life in the Kongo and Mbundu Areas, 1500-1700». En: Linda Heywood (ed.). *Central Africans and cultural transformations in the American diaspora*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p. 71-90.

49. Arturo ARNALTE. *Los últimos esclavos de Cuba. Los niños cautivos de la goleta Batans*. Madrid: Alianza Editorial, 2001.

50. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Asuntos Políticos, 1853, legajo 48, n° 24: «Expediente sobre denuncia de contrabando en la zona de bahía de Cochinos con fecha 12 de junio de 1853»; ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Asuntos Políticos, 1854, legajo 220, n° 13: «Expediente sobre la introducción de negros bozales por la ensenada de Cochinos»; ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Asuntos Políticos, 1859, legajo 224, n° 1: «Informe sobre contrabando de esclavos en la zona de bahía de Cochinos fechado el 16 de marzo de 1859»; ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Fondo Miscelánea, 1866, legajo 3774, n° 11: «Denuncia de un alijo de negros bozales por la ensenada de Cochinos».



Ingenio Guinía de Soto. Justo G. Cantero, *Los ingenios* (1857).

está formado por protocolos de compra-venta de esclavos y de herencias que incluían, como una propiedad más, a los esclavos; son un número y un nombre propio: María lucumí, Margarita gangá, José arará, Juan mandinga, Juan bibí o Manuel carabalí. En pocas ocasiones, cuando suponen un desafío al sistema y su rastro salta del registro del notario, al de la policía y al de las fuerzas armadas, los esclavos recuperan el nombre africano: «Ayusó en su tierra, aquí Guillermo», «Eguiyove en su tierra, Matías aquí», «nombrados en su tierra Ayai, Churipe, Bale y Agó» o «Fanguá en su tierra, Prudencio aquí»⁵¹.

Para documentar los procesos de herencia con esclavos incluidos, hemos seleccionado un protocolo típico⁵². No lo es para la gran propiedad azucarera o ganadera, pero sí para el mediano propietario rural. Conviene recordar que los grandes sacarocrátas casi siempre tienen como base, tanto histórica-jurídica como mental, la propiedad «hatera»; un ejemplo típico es José Antonio Saco. Como se reconoce en este documento, la propiedad, después de la muerte de los padres, fue dividida entre varios hijos. El protocolo está fechado en 1870, un poco antes de la promulgación de la Ley Moret — 4 de junio de 1870—, y, por ello, la mayoría de los esclavos

51. Gloria GARCÍA RODRÍGUEZ. *La esclavitud desde la esclavitud...* [19], p. 205-209. Puede ser que el que escribió esto quiso demostrar que eran siempre los bozales que hacían rebeliones.

52. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Protocolos Notariales, Protocolos José Joaquín Verdaguer, 1870, tomo 1, escritura n.º. 73 «División y adjudicación», f. 93r-102v, Cienfuegos, 23 de febrero de 1870.

son adultos. Pocos meses después fueron liberados por esta ley. Y al final de este documento es obvio que la «verdad» histórica de la Guerra de los Diez Años con las palabras «*por hallarse en la insurrección*»⁵³ dejó su huella dentro de una escritura con su «verdad» documental-notarial, estatal y económica.

Al final de la esclavitud, cuando la presión de la Guerra de los Diez Años hizo que el proceso abolicionista dejase de ser el deseo de unos pocos, o una aspiración teórica, para convertirse en un principio reconocible en la política y retórica estatal, se vendieron esclavas con hijos o hijas «libres» (que fue también el estatus de Esteban Santa Teresa):

«...comparece doña Cándida García [...] casada con D. José Llovió, del comercio, natural de Asturias [...] que es dueña de una parda Mercedes, natural de Cartagena, oficio de campo, de veinte y un año, cedulada en el partido de Camarones [...] teniendo dicha sierva una hija liberta llamada Sabina de cuatro o cinco años. Segundo: que obtenido el

permiso de la autoridad local en la forma prevenida vende realmente y con efecto a D^a. Julia Valdío natural y vecina de Santa Clara la expresada parda Mercedes, por cautiva sujeta a servidumbre, en precio de seiscientos pesos que en oro Español confiesa haber recibido [...] y otorga eficaz resguardo, —transmitiendo así mismo el patronato de la citada liberta, gratuitamente y a los efectos que procedan con arreglo a disposiciones referentes al alimento, vestido y educación que ha de darse a la misma...»⁵⁴.

Si en los pocos documentos que podemos presentar aquí, este problema aparece varias veces ya, ¿cuán grande sería, entonces, su peso cuantitativo?

¿Libertad graciosa?: Manumisión, patronato y escrituras de libertad

Existe ya una variada y amplia literatura sobre la manumisión que demuestra, en primer lugar, las muchísimas variantes concretas de este proceso⁵⁵. Las relaciones entre «otorgante» (o «poderdante», es decir, el propietario) y esclavo (siervo) son representadas en formas escritas casi barrocas:

53. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Protocolos Notariales, Protocolos José Joaquín Verdaguer, 1870, tomo 1, escritura n.º 73 «División y adjudicación», f. 93r-102v, Cienfuegos, 23 de febrero de 1870., f. 101v.
54. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Protocolos Notariales, Protocolos José Rafael de Villafuerte y Castellanos, 1877, f. 49r-50v, escritura n.º 18: «Venta de esclava», Cienfuegos, 8 de febrero de 1877.
55. Rafael Antonio DÍAZ DÍAZ. «La manumisión de los esclavos o la parodia de la libertad. Santafé de Bogotá, 1700-1750». *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura* (Bogotá). 223 (1996), p. 49-72; Emilio HARTH-TERRE. *Negros e indios. Un estamento social ignorado del Perú colonial*. Lima: Librería-Editorial Juan Mejía Baca, 1973; Stuart B. SCHWARTZ. «The manumission of slaves in colonial Brazil: Bahia, 1684-1745». *Hispanic American Historical Review* (Durham). 54/4 (1974), p. 603-635; Lyman L. JOHNSON. «Manumission in colonial Buenos Aires, 1776-1810». *Hispanic American Historical Review* (Durham). 59/2 (1979), p. 258-279; Antonio José GALVIS NOYES. «La abolición de la esclavitud en la Nueva Granada, 1820-1832». *Boletín de Historia y Antigüedades* (Bogotá). 67/730 (1980), p. 469-572; Margarita GONZÁLEZ. «El proceso de manumisión en Colombia». En: *Ensayos de historia colonial colombiana*. Bogotá: El Ancora, 1984, p. 162-296; Vicenta CORTÉS ALONSO. «La manumisión y la sociedad hispanoamericana». Francisco de Solano; Agustín Guimerá (eds.). *Esclavitud y derechos humanos. La lucha por la libertad del negro en el siglo XIX*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990, p. 33-41; Carlos AGUIRRE. «Agentes de su propia emancipación: manumisión de esclavos en Lima, Perú, 1821-1854». *América Negra* (Bogotá). 4 (diciembre de 1992), p. 101-134; Keila GRINBERG. *Liberata a lei de ambigüidade. As ações de liberdade da Corte de Apelação do Rio de Janeiro no século XIX*. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994; Adriana NAVEDA CHÁVEZ-HITA. «Denominaciones raciales en archivos locales». En: *Pardos, mulatos y libertos. Sexto encuentro de afromexicanistas*. Xalapa: Universidad Veracruzana, 2001, p. 195-205; Kátia M. de QUEIRÓS MATTOSO. *To be a slave in Brazil*. New Brunswick: Rutgers University Press, 1986; Marisol RODRÍGUEZ ARRIETA. «La ley sobre aprendizaje de manumisos en la provincia de Maracaibo y sus efectos en el proceso de manumisión (1840-1848)». *Tierra Firme* (Caracas). 17/67 (1999), p. 403-414; Marisol RODRÍGUEZ ARRIETA. *Manumisión y abolición en la provincia de Maracaibo (1810-1864)*. Maracaibo: Gobernación del Estado Zulia, Acervo Histórico del Estado Zulia, 2001.

«Mediante lo cual aparta y separa a su poderdante de la propiedad, posesión y demás acciones que al indicado siervo Lucas había y tenía, transfiriéndolo todo en su hecho y causa propia para como persona libre, trate, contrate, otorgue poderes, testamentos y haga todo lo demás que pueden y deben las personas no sujetas a la esclavitud. Y a la firmeza que esta libertad le será cierta y segura en todo tiempo, obliga los bienes de su representada en la mejor forma de derecho»⁵⁶.

Aún más claro se hacen estas formas barrocas del lenguaje legal en la carta de libertad de Andrés, un esclavo de Santiago de Cuba:

«Que en su consecuencia le da y concede plena libertad, a fin de que desde hoy, en adelante y para siempre, la goce y disfrute como si fuese naturalmente libre; desistiéndose y apartándose del derecho de posesión, propiedad y dominio que sobre dicho moreno tenía adquirido a favor a quién lo cede y renuncia todo para que no vuelva a estar sujeto de servidumbre; y confiriéndole poder irrevocable para que trate y contrate, teste, comparezca en juicio por sí o por medio de sus apoderados y practique sin intervención de persona alguna cuanto está permitido a los que nacen libres, usando de su espontánea voluntad...»⁵⁷.

Había muchas formas de libertad individual y muchas veces aparece así, como en el caso del ama doña Isabel Hernández: «con el

fin de premiar la fidelidad y buenos servicios prestados por su esclava morena Andrea, natural de África, de cincuenta años»⁵⁸.

Mientras sobre cómo llegaba a esclavizarse un individuo son pocos los testimonios escritos, salvo los registros de los libros de bautismo, las diferentes formas de manumisión, una práctica ampliamente documentada, fue un gran negocio para los notarios⁵⁹, que quizás pudieron aprovechar las necesidades de los antiguos esclavos para enriquecerse: «...por haberle entregado [la esclava que compra su libertad] la suma de quinientos diez pesos en moneda corriente a su entera satisfacción, dándole auténtico resguardo, con renuncia de leyes del caso, de prueba y término. En consecuencia se separa de la propiedad...»⁶⁰. No sabemos a ciencia cierta si las sumas de dinero aquí mencionadas son reales, secreto que, en algunas ocasiones, podían compartir: José Manuel Sarriá, vende la libertad a «...la morena esclava Ascensión, criolla de veintiocho años de edad... esta libertad es por el precio de cuatrocientos cincuenta y nueve pesos que de la referida sierva confiesa haber recibido en oro...»⁶¹.

La coartación, es decir, la autocompra por parte del esclavo, requería una administración escrita especial⁶². En los años setenta del

56. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Protocolos Notariales, Protocolos José Joaquín Verdaguer, 1875, escritura 313: «libertad», f. 1152r-1153v, en la villa de Cienfuegos a 18 de noviembre de 1875.

57. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CUBA, Protocolos de Giró, Escribanía Real Pública de Gobierno y de Guerra, leg. 312, a cargo de Orestes Ferro y Domingo, 1880, f. 257r-258r, escritura nº 116 «Carta de Libertad», Santiago de Cuba, 1 de mayo de 1880.

58. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Protocolos Notariales, Protocolos José Rafael de Villafuerte y Castellanos, Cienfuegos, 1874, f. 2v, escritura nº 3 «manumisión»: Cienfuegos, 20 de enero de 1874.

59. Véase como trasfondo general: «Coartación and letters of freedom». En: LAIRD BERGAD; FE IGLESIAS GARCÍA; María del Carmen BARCIA., *The Cuban slave market...* [32], p. 122-142.

60. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Protocolos Notariales, Protocolos José Joaquín Verdaguer, 1875, f. 43r, escritura núm. 30: «manumisión»: Cienfuegos, 8 de abril de 1874.

61. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Protocolos Notariales, Protocolos José Joaquín Verdaguer, 1875, f. 237r-237v, escritura nº 86 «Libertad por precio», Cienfuegos, 11 de julio de 1874.

62. Manuel LUCENA SALMORAL. «El derecho de coartación del esclavo en la América Española». *Revista de Indias* (Madrid). LIX/216 (1999), p. 357-374.

siglo XIX los esclavos interesados tuvieron que llegar al despacho de un síndico de pobres y entregar una copia de su fe de bautismo, a la vez que demostrar cierta capacidad económica. Además había que hacer una tasación de su valor antes de otorgar una escritura. En los documentos previos a un protocolo notarial que presentamos se reconocerá que si bien los esclavos tenían un tipo de personalidad jurídica y económica (lo que les permitía intentar comprar su libertad), también el amo podía manipular el proceso en varios puntos esenciales (aceptación o no-aceptación, la cuestión de los peritos de tasación, la suma y tipo de dinero).

Inscrito en la libertad y el honor de ser ciudadano: abolición, post-emancipación y nombres

Con el proceso de la abolición final desapareció de las escrituras el concepto de «liberto» o «moreno libre», ya que ahora todos eran libres. Sus nombres propios perdieron el carácter genérico de los tiempos de la esclavitud, pero en la mayoría de los casos todavía conservaban rasgos que les ligaban a su pasado y, por lo tanto, cuestionaba su ciudadanía. Al final de este proceso los nuevos súbditos del rey de España recibieron una cédula personal con su nuevo nombre. Las cédulas personales de la libertad reunieron en cierta forma toda la información en

cuanto al individuo: nombre en la forma legal, la edad del inscrito y su estatus como vecino con residencia en una dirección especificada. En los primeros documentos de este tipo u otros papeles oficiales antiguos esclavos y hombres libres de color aparecen de esta forma: «Alfonso moreno Valentín» o «Alvisu pardo Leopoldo»⁶³. Al registrarles de esta manera era una forma de perpetuar su antigua condición; una forma de racismo burocrático: los afrocubanos eran los únicos ciudadanos que al lado del nombre se indicaba «sin segundo apellido» o «sin otro apellido»⁶⁴. No sabemos todavía a ciencia cierta si los notarios eran sólo los divulgadores de este nuevo y bastante sofisticado concepto de racismo sin mencionar la raza (*race-blind* según el concepto de «silencio» de Ada Ferrer)⁶⁵.

El nuevo «nombre civil» comprende el viejo de la esclavitud (María, Esteban, Quintín o Dionisia) y como primer (y único) apellido uno de los primeros apellidos de los anteriores propietarios. Es decir, este nuevo apellido único los ata, los liga, los sujeta en cierto sentido al antiguo estatus de la esclavitud. Tal vez porque no querían aceptar los viejos nombres de la esclavitud y los nuevos apellidos que todavía los ataban al antiguo propietario o al lugar de la servidumbre, los ex esclavos utilizaron entre ellos apodos o «conocidos por».

63. *Boletín Oficial* (Santa Clara). 63, 15 de marzo de 1898.

64. Michel ZEUSKE, «Hidden markers...» [22], p. 235-266.

65. El Estado español a partir de 1893 oficialmente ya no permitió la utilización de los viejos conceptos raciales de «morena/o», «pardo/o»; todos los nuevos ciudadanos tenían oficialmente derecho al título honorífico de don o doña, véase: Rebecca SCOTT. *Slave Emancipation in Cuba...* [15], p. 274-78; Oilda HEVIA LANIER. *El Directorio Central de las Sociedades Negras de Cuba, 1886-1894*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1996; Ada FERRER. «The silence of patriots: race and nationalism in Martí's Cuba». En: Jeffrey Belnap; Raúl Fernández (eds.). *José Martí's 'Our America': from national to hemispheric cultural studies*. Durham, N.C.: Duke University Press 1998, p. 228-249; Ada FERRER. *Insurgent Cuba. Race, nation, and revolution, 1868-1898*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1999; Alejandro de la FUENTE. *A nation for all: race, inequality, and politics in Twentieth-Century Cuba*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2001.



El mayoral. Víctor Patricio Landaluze. Museo de Bellas Artes, La Habana.

En la región del *hinterland* de Cienfuegos alrededor de Lajas/Cruces los «grandes» *apellidos esclavos* sobre todo son: Terry, Moré, Goytisolo, Abreu, Palacios, Apezteguía, Mora (más al norte también, en Sagua, Ribalta y Mesa). Hasta el éxito del movimiento civil liderado por Juan Gualberto Gómez estos nombres aparecen escritos con los viejos marcadores «morena/o» o «parda/o».

Hay excepciones en esta regla general en historias personales de aquellos que se trasladaron a las ciudades y aprendieron a escribir, como Ricardo Batrell: «Ricardo Batrell, conocido por Ricardo Oviedo»⁶⁶, José Isabel Herrera (Mangoché) o las «memorias del futuro» de Esteban Montejo y Mera, así como de Reyita (María de los Reyes Castillo Bueno, 1902-1997)⁶⁷. Reyita explica cómo la

66. «Oviedo» es otro nombre del Ingenio Santísima Trinidad cerca de Matanzas, llamado según uno de los propietarios (Esteban Santa Cruz de Oviedo). Bajo el nombre «Oviedo» este ingenio pertenecía al clan de los Del Monte. A la dotación se la llamaba «esclavos de Oviedo». Ricardo Batrell conquistó en 1906, después de la llamada «Guerrita de Agosto», con un rango de oficial y cuando había aprendido leer y escribir, el derecho de llevar «Oviedo» como segundo apellido, véase: Fernando MARTÍNEZ HEREDIA. «Ricardo Batrell empuña la pluma». En: Fernando Martínez Heredia; Rebecca J. Scott; Orlando García Martínez. *Espacios, silencios y los sentidos de la libertad: Cuba entre 1878 y 1912*. La Habana: Unión, 2001, p. 295-313.

67. Ricardo BATRELL OVIEDO. *Para la historia. Guerra de independencia en la provincia de Matanzas*. La Habana: Seoane y Álvarez Impresores, 1912; José I. HERRERA [Mangoché]. *Impresiones de la guerra de independencia*. La Habana: Editorial Nuevos Rumbos, 1948; Daisy RUBIERA CASTILLO (ed.). *Reyita...* [26]; Michael ZEUSKE. «Schwarze Erzähler – weiße Literaten.

guerra revolucionaria de 1895-1898 fue una fuente de derecho de elegir un apellido propio, es decir, de definirse una identidad como familia⁶⁸.

Los apellidos del anterior Esteban Santa Teresa son un enigma. El Esteban Montejo de *Cimarrón* nos narra que quien lo crió «después de haber nacido» era un tal Pancho Mesa de Rodrigo. Eso no es cierto. Más bien fue Tomás Ribalta, porque obviamente, hasta la edad de ocho meses Esteban Santa Teresa se encontraba en la plantación donde había nacido. No obstante, Montejo mismo narra en *Cimarrón* que lo «vendieron enseguida»⁶⁹. Los protocolos parecen confirmar esta aseveración. Muchas veces los niños (legalmente ya libres) fueron vendidos junto a sus madres como un premio extra para el comprador⁷⁰. Montejo era de la opinión, formada a partir de las informaciones de sus «padrinos», que su madre había sido «...una esclava de origen 'francés', del nombre 'Emilia' (o 'Herminia')

Montejo» y que su padre «se llamaba Nazario y que era un lucumí de Oyó»⁷¹. Si tomamos este apellido con el positivismo necesario en casos como este, no queda más remedio que concluir que durante su etapa en el Ejército Libertador Montejo todavía estaba en el proceso de buscarse un apellido⁷². O, mejor dicho, tenemos otro caso del «campo insurrecto» como fuente de derecho positivo, como lo narra también Reyita. Esto ocurrió entonces, entre 1898 y 1904, porque para este último año tenemos una información bastante clara. En una relación policiaca de 1904 por «juego prohibido», se presenta a Montejo de la siguiente manera: «Esteban Montejo [sin otro apellido, pero no escrito expresamente —M. Z. y O. G. M.] [...] natural de Sagua la Grande de 24 años de edad [claramente miente, pues significaría que nació en 1880— M. Z. y O. G. M.] e hijo de Nazario y Herminia, soltero, campo, raza negra sin instrucción ni antecedentes»⁷³.

Erinnerungen an die Sklaverei, Mimesis und Kubanertum» [Narradores negros – literatos blancos. Memorias a la esclavitud, mimesis y cubanidad]. En: Daisy Rubiera Castillo (ed.). *Ich, Reyita. Ein kubanisches Leben*. Zürich: Rotpunktverlag, 2000, p. 211-262.

68. Reyita recuerda que sus apellidos «debían ser Castillo Hechavarria, porque mi mamá tenía el apellido del amo de mi abuelita, quien, además fue su padre. Pero todos sus hijos sentíamos tanto odio por aquella familia –que ni conocimos– que mi hermano Pepe decidió que nos lo cambiáramos y nos pusimos Bueno». Véase: Daisy RUBIERA CASTILLO (ed.). *Reyita...* [26], p. 18. La nota al pie dice que la fuente de tomarse el derecho de elegir un apellido fue el «campo insurrecto»: «Según plantea Reyita, su hermano Pepe oía hablar en el campo insurrecto a los mambises negros que habían sido esclavos, quienes decían que al terminar la guerra se iban a quitar el apellido de los amos. Por el odio que él sentía hacia los que fueron dueños de su mamá y de su abuela, al instaurarse la República y ayudado por un primo abogado, hijo de una tía abuela, cambia el de Hechavarria que llevaba Isabel por el de Bueno, el que a partir de aquel momento usarían los hijos de ella como primero o segundo apellido, según fueran hijos naturales o reconocidos. El apellido Bueno podría ser el del primo abogado...». Daisy RUBIERA CASTILLO (ed.). *Reyita...* [26], p. 173.

69. Miguel BARNET. *Cimarrón...* [26], p. 14.

70. Michael ZEUSKE. «Two stories of gender and slave emancipation in Cienfuegos and Santa Clara, central Cuba. Microhistorical approaches to the Atlantic world» En: Pamela Scully; Paton, Diana (eds.). *Gender and Slave Emancipation in the Atlantic World*. Durham: Duke University (en prensa).

71. Miguel BARNET. *Cimarrón...* [26], p. 13.

72. Rebecca J. SCOTT; Michael ZEUSKE. «The right to have rights: the Symbolic and juridical power of the oral and the written in the claims-making of former slaves, Cuba 1872-1907». *Comparative Studies in Society and History* (London; New York). 44/4 (2002), p. 669-699; Rebecca J. SCOTT; Michael ZEUSKE. «Le 'droit d'avoir des droits'. Les revendications des ex-esclaves à Cuba (1872-1909)». *Annales histoire sciences sociales* (Paris). 59/3 (2004), p. 521-545.

73. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Secretaría de Gobernación, leg. 205, n° 8714: Expediente del Penado Correccional Esteban Montejo, Cienfuegos, 2 de junio de 1904 - La Habana, 6 de junio 1904 [fecha de entrada]. Agradecemos a Fe Iglesias esta información.



Ingenio Armonía. Justo G. Cantero, *Los ingenios* (1857).

En este año Montejo ya tenía un apellido. Pero no era un apellido como debía ser según las reglas de imposición /elección de un apellido de uno de los últimos amos para los ex esclavos. Parece que el futuro Montejo, Esteban Santa Teresa, en el momento de la abolición no estaba bajo el control de un dueño o un administrador. Recordamos otra vez al «moreno Elías Mena conocido por Elías Ribalta»⁷⁴.

A Montejo le gustó presentarse como «negro criollo» de ascendencia lucumí. Como nombre de su padre siempre ha utilizado varios y nunca nos da una genealogía com-

pleta. Después de la guerra de 1895, Montejo mantuvo buenas relaciones clientelares con Martín Morúa Delgado⁷⁵ el escribano responsable de las listas del famoso «Índice»⁷⁶, una lista de honor de los soldados y oficiales del Ejército Libertador Cubano que le inscribieron simbólicamente en el campo insurrecto. Morúa parece haber sido un tipo de experto en los menesteres burocráticos:

«Allí se unió a nosotros Martín Morúa Delgado. A ése sí lo vide bien. Era trigueño medio jabao él y muy alto. No peleó. Fue teniente sin haber cogido el machete. Pero era un hombre de librería. Se pasaba la vida en los archivos del cuartel. Arregló los

74. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE VILLA CLARA, Protocolos Calixto María Casals y Valdés, Sagua la Grande, 1888, t. 2 (julio-diciembre), f. 1476r-1477v, escritura n° 365: «Testamento», en la villa de Sagua la Grande, 26 de octubre de 1888.

75. Michael ZEUSKE. «El «Cimarrón» y las consecuencias de la guerra del 95. Un repaso de la biografía de Esteban Montejo». *Revista de Indias* (Madrid). LVIII/212 (1998), p. 65-84; Michael ZEUSKE. «Novedades de Esteban Montejo». *Revista de Indias* (Madrid). LIX/216 (1999), p. 521-525.

76. Carlos ROLOFF y MIALOFKY. *Índice alfabético y defunciones del Ejército Libertador de Cuba*. Habana: Imprenta de Rambla y Bouza, 1901.

estantes y ordenó papeles. Era hombre de ésos. La Guerra para él era con palabras»⁷⁷.

Este hombre que luchó —según el testimonio de Montejo— «con palabras», de todas formas fue muy importante para el propio Montejo, no sólo porque fuese uno de los pocos intelectuales afrocubanos que participaron en la definición del imaginario nacional, sino porque en la época cuando Montejo estaba buscando sus dos apellidos civiles definitivos, Morúa era el responsable de completar las listas del Ejército Libertador Cubano⁷⁸. Aquí podemos plantear la siguiente hipótesis: ¿Inventó Esteban Santa Teresa, que «normalmente» hubiera tenido que llevar el apellido esclavo de «Ribalta» (el del último o uno de sus últimos dueños), junto con Morúa, su primer apellido (Montejo) y empleó uno de los posibles «apellidos esclavos» de Esteban Santa Teresa (Mera en vez de «Mesa», por Francisco Mesa de Rodrigo, uno de sus dueños) como segundo apellido? Un detalle de su narración demuestra que Montejo, aunque era sumamente independiente, supo manejar esas relaciones clientelares muy bien, ya que Morúa en estos tiempos era miembro del Gobierno Provincial de Santa Clara:

«Siempre anduve suelto. No me casé hasta después de viejo; soltero estuve en muchos sitios. Conocí mujeres de todos los colores. Soberbias y buenas. En Santa Clara tuve una negra vieja después de la guerra. ¡Se hizo tantas ideas conmigo...! Me llegó a pedir que me casara con ella. Le dije un no

redondo. Eso sí, nos juntamos y ella me decía: 'Yo quiero que tú heredes mi casa'. Era dueña de una casona de muchos cuartos en el barrio del Condado, en la calle San Cristóbal. Pocos días antes de morir, me llamó y me dijo que yo lo iba a tener todo. Me hizo una escritura para dejarme el cabildo; en esos años la casa era un cabildo lucumí, porque la madre de ella había sido famosa santera en Santa Clara. Cuando murió, yo fui a legalizar la propiedad. Entonces me encontré con tremendo brete. Dio por resultado que el padrino de ella quiso apoderarse de la casa. Me hizo eso porque la mujer que él tenía entonces vivía en la casa; era la que cuidaba el cabildo. Pero cuando yo me enteré de la maraña corrí y lo arreglé todo. Me dirigí a unos amigos que tenía en el Gobierno Provincial [Morúa? —M. Z. y O. G. M.]. Por fin me quedé con la casa. Era más grande de lo que me figuraba. No había alma que viviera en ella. Y menos sola. Era una casa llena de espíritus y de muertos; estaba maliciada. Se la vendí a un tal Enrique Obregón, que era un viejo garrotero. Después me di a pasear con el dinero»⁷⁹.

Como Montejo, muchos ex esclavos entraron en lo que se podría llamar un juego de nombres y apodos («conocido por», hija de, hijo de, Álvarez *llamado* Blanco). En los alrededores de Santa Clara encontramos hasta en el mismo año de la fundación de la república, 1902, todos los requisitos de ascendencia africana (*lucumí*), esclava, adjudicación de apellido del amo y el famoso «conocido por», en este caso utilizando un etnónimo africano: «En el pueblo de Calabazar [...comparece] de una parte el moreno Luis Rodríguez sin otro apellido natural de África conocido familiarmente por Luis Lucumí, vecino de este barrio, soltero, de ochenta años de edad y propietario»⁸⁰.

77. Miguel BARNET. *Cimarrón...* [26], p. 150; Rafael FERMOSELLE. *Política y color en Cuba. La Guerrita de 1912*. Montevideo: Ediciones Géminis, 1974, p. 86-88. (2ª edición: [Madrid:] Editorial Colibrí, 1998).

78. Leopoldo HORREGO ESTUCH. *Martín Morúa Delgado. Vida y Mensaje*. La Habana: Ed. Sánchez, S.A., 1957, p. 144.

79. Miguel BARNET. *Cimarrón...* [26], p. 78-79; Miguel BARNET. *Biography of a runaway slave*. Willimantic: Curbstone Press, 1994, p. 97. Nos parece significativo que Montejo se dirigiera al «gobierno provincial» y no a ninguna otra institución (juez, municipio, etc.), porque Morúa por estos tiempos era miembro del grupo de José Miguel Gómez en Santa Clara.

80. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE VILLA CLARA, Protocolos Eduardo Domínguez Consuegra, Tomo 2, 1902, Término Municipal de Calabazar partido judicial de la ciudad de Santa Clara, No. 96 «Venta de finca urbana», Calabazar, 12 de diciembre de 1902, fols. 472r.-475r. Luis no sabe firmar.

En la cédula personal de liberto que presentamos (ver el apéndice documental) se reconocen también las varias formas de nombramiento: la denominación de «criolla» se ha transformado en el primer apellido «Criolla» y uno de los apellidos de uno de sus antiguos propietarios aparece como segundo apellido. Por delante le pusieron simplemente la designación racial de «morena», ahora sin el «libre», porque ya no hacía falta. Y, como se ve, los alcaldes (o sus secretarios) eran las personas que «inscribían» a los ex esclavos en la libertad.

Los vestigios del problema de los nombres y del estatus como ciudadano no se limitan al sector de las pequeñas villas en el campo o *hinterland* cienfueguero. También se encuentran en el ámbito urbano y, más concretamente, en el movimiento obrero⁸¹. Este es el caso de Alfredo López, nacido de una «relación extramatrimonial del español Luis Felipe López y la bella mestiza cubana Julia Arencibia». López, anarquista, sindicalista, líder del movimiento obrero, utilizó siempre el apellido de su padre, oficialmente «no conocido»⁸². También encontramos estos vestigios entre la elite afrocubana del Oriente, por ejemplo en la biografía de Antonio Maceo⁸³.

Creemos que podemos arriesgar la tesis, abriendo un vasto campo para la nueva historia cultural y legal de la esclavitud, que se

trata de un fenómeno que con alguna razón se puede llamar «el nombre esclavo» de Cuba como núcleo de una «cultura del olvido y de la vergüenza» (y el intento de borrar la esclavitud de la historia de Cuba; en cierto sentido una deshistorización de la esclavitud) en la sociedad cubana de finales del siglo XIX y comienzos del XX. «Cubanos hay ya en Cuba de uno y otro color, olvidados para siempre —con la guerra emancipadora y el trabajo donde unidos se gradúan— del odio en que pudo dividir la esclavitud», escribió José Martí en el «Manifiesto de Montecristi»⁸⁴.

La fijación, forzada y en cierto sentido etnográfica, del apellido materno heredado en línea «materna-esclava» en una sociedad esclavista protege la patriarcalidad que se rige por leyes hereditarias. Amparo Loy Hierro, la protagonista de otra novela testimonio dice que su madre le contó: «Mi papá me dio color y pelo, no me dio el apellido, me lo dio mi madre»⁸⁵. Era una práctica que protegía el honor de los antiguos dueños, a los administradores, mayoresales y médicos de ingenios (y sus esposas y familias) ante la irrupción de sus hijos ilegítimos⁸⁶. Salvaguardaba a la sociedad ante una ola de conflictos legales en cuanto a reparaciones individuales. Al mismo tiempo, esta práctica era en cierta forma legitimada ante las madres por el carácter fantasma de muchos padres esclavos o ex

81. Joan CASANOVAS CODINA. «Slavery, the labour movement and Spanish colonialism in Cuba (1850-1898)». En: Tom Brass; Marcel van der Linden (eds.). *Free and unfree labour: the debate continues*. Verna: Peter Lang Verlag, 1997, p. 249-264.

82. Olga CABRERA. *Alfredo López. Maestro del proletariado cubano*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1985, p. 7-10.

83. Olga PORTUONDO ZÚÑIGA. «Marcos Maceo, el Santiaguero». En: *Visión Múltiple de Antonio Maceo*. Santiago de Cuba: Editorial Oriente, 1998, p. 19-37; Olga PORTUONDO ZÚÑIGA; Manuel FERNÁNDEZ CARCASSÉS. «Ascensio Asencio, un padrino común». En: *Visión Múltiple...*, p. 38-59; Olga PORTUONDO ZÚÑIGA. «Ascendencia paterna de Antonio Maceo». *Del Caribe* (Santiago). 35 (2001), p. 88-94.

84. Hortensia PICHARDO. *Documentos...* [23], I, p. 483-491, en especial 487.

85. Jorge CALDERÓN GONZÁLEZ. *Amparo: millo y azucenas*. La Habana: Casa de las Américas, 1970, p. 28 (agradecemos la información a Marial Iglesias Utset, Universidad de la Habana).

86. Véase el caso del propietario del ingenio «Oviedo» (y otros), Esteban José Santa Cruz de Oviedo y Hernández, y los procesos de sus 26 hijos mulatos, en: Manuel MORENO FRAGINALS. *El Ingenio...* [35], II, p. 48-50.



Entierro de un esclavo. Johann Moritz Rugendas. *Voyage pittoresque dans le Brésil* (1835).

esclavos. A lo largo de los últimos años del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, las víctimas de este «nombre esclavo» dentro de una cultura de olvido y vergüenza no eran sólo esclavos, ex esclavos o personas de color. Son muchos más. Con alguna razón se puede decir que en cuanto al problema de los apellidos, es decir a la deshonra y vergüenza que acarreaba la falta de un segundo apellido, la etapa de la posterior a la emancipación se cierra sólo con la constitución de 1940, más de cincuenta años después de la abolición de la esclavitud.

Testar y «poder»: heredando, memorizando y combatiendo la esclavitud

En los años finales de la esclavitud tenemos crecientes vestigios en papel de protocolo,

con inscripciones de herencias, testamentos y otorgando «poder» (o «poder para pleitos») a notarios o abogados por parte de ex esclavos. Son la representación dramática del uso que hicieron de su voluntad individual, de sus «verdades» y de su poder sobre sus bienes. A pesar de su pobreza y escaso patrimonio del que disponían, muchos de ellos precisaron de los servicios de un notario, aunque, lamentablemente, no podemos determinar el porcentaje que suponían. El modelo típico de estos testamentos, sin mencionar expresamente la esclavitud, pero sí la procedencia africana, es el siguiente:

«...ante mí [...] en su casa morada situada en la calle San Elías el moreno Eusebio Norriella, sin segundo apellido, natural de África, soltero, mayor

de edad y vecino de esta villa [...] dijo que encontrándose delicado de salud desea tener designadas las disposiciones de su última voluntad [...] Nombra por albacea de sus bienes en primer lugar a la morena María Pesant sin otro apellido y para los casos que no pueda serlo séalo José de los Santos Cobos, hijo de ésta. [...] Nombra y señala por administradora de todos sus bienes a la citada morena María Pesant. [...] Declara ser soltero y no haber por consiguiente tenido hijos naturales ni legítimos; pero haber vivido muchos años maridablemente con la morena María Pesant quien le ha ayudado a reunir su pequeña fortuna. [...] Declara por sus bienes un solar de veinte y siete varas de frente por cuarenta de fondo que adquirió de D. Julio Bidot, situado en la calle de San Elías con frente al oeste y lindando al norte con la morena Candelaria Lacene al sur con la parda Constanacia Alfonso y al fondo o sea éste con el moreno Wenceslao Pesant [...] no firmó por no saber...»⁸⁷.

Un bello testamento que en cierto sentido también omite la mención directa a un pasado de servidumbre, pero en el que todos tienen los nombres de esclavo y además esclarece un poco los mecanismos del nombramiento durante la esclavitud, es el de «Elías Mena, conocido por Ribalta» (las dos variantes de apellidos que Esteban Santa Teresa, más tarde Esteban Montejo, debería llevar legalmente, si hubiera sido un esclavo «normal»):

«...fui llamado expresamente para este acto el moreno Elías Mena conocido por Ribalta, vecino de esta villa, natural de África de setenta y seis años de edad de estado casado [...] dijo: [...] Declara haber contraído matrimonio por ante la Santa Madre la Iglesia Católica en diez de diciembre de mil ochocientos ochenta en esta villa con la morena Josefa Ribalta con la cual tuvo y procreó por sus

legítimos hijos a María, Micaela, José y Pedro; pues si bien es verdad que tuvo otros de éste su único matrimonio todos fallecieron sin dejar sucesión alguna, contando María diez y nueve años, Micaela diez y siete años, José trece años y Pedro siete, todos los cuales son solteros y a su abrigo. [...] Nombra por sus albaceas, tenedora y administradora de sus bienes y tutora de los dos últimos hijos[...] a su legítima esposa la morena Josefa Ribalta [...] Declara que no conoció a sus padres ni sabe como se llamaron al venir de África por lo cual usa y ha usado el apellido de sus primeros dueños [después fue esclavo de Ribalta] y no sabe por consiguiente si son muertos o vivos [sus padres —M. Z. y O. G. M.]»⁸⁸.

Una mujer ex esclava de «nación gangá», Juana Beronda, esclarece los mecanismos de los nombres de esclavos:

«...a las doce del día [apareció] [...] la morena Juana Beronda, sin segundo apellido, natural de Gangá, en África, soltera, de ochenta años de edad y de campo [...] Declara ser natural de África, y haber muerto sus padres, a los cuáles no conocía ni recuerda sus nombres, llevando por este motivo el apellido de uno de sus amos, según costumbre; no habiendo hijos naturales ni legítimos y haber permanecido siempre en estado de soltera [...] Declara poseer algunos bienes que no describe por no juzgarlo indispensable y conveniente pasarlos en silencio, pero los que conoce perfectamente el heredero universal [...] Instituye, nombra y señala por su único y universal heredero de todos sus bienes, derechos y acciones, que por cualquier concepto le pertenezcan o en lo adelante pudieran pertenecerle, al moreno Juan Bautista Bernal y Soto, conocido por Juan Ajuria, natural de Puerto Príncipe...»⁸⁹.

Juana tampoco sabe firmar. El testamento de Eduardo Norniella sin otro apellido que

87. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE VILLA CLARA, Protocolos Calixto María Casals y Valdés, Sagua la Grande, 1886, t. 2, fols. 783r-784v, escritura n° 197 «Testamento», Sagua, 26 de julio de 1886.

88. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE VILLA CLARA, Protocolos Calixto María Casals y Valdés, 1888, t. 2 (julio-jic.), fols. 1476r-1477v, escritura n° 365 «Testamento», Sagua, 26 de octubre de 1888.

89. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE VILLA CLARA, Protocolos Calixto María Casals y Valdés, Sagua la Grande, 1889, f. 1076r-1077v, escritura n° 300 «Testamento», Sagua, 22 de noviembre de 1889.

citamos en el anexo nos lleva hasta la fecha temprana de 1863. Demuestra que en los nuevos barrios de antiguos esclavos que se desarrollaron en el proceso de emancipación en las márgenes de las ciudades existieron casi siempre centros culturales afrocubanos.

En cuanto a los sentidos de la libertad por parte de los ex esclavos encontramos también conflictos entre ellos, anotados y tal vez regulados y administrados por notarios:

«En la Ciudad de San Juan de los Remedios [...] comparece la morena libre María Antonia Josefa Alcántara natural de África de estado viuda de ochenta y cinco años de edad sin ocupación por su avanzada edad y de esta vecindad [...] dice: [...] Que en diez y siete de abril de mil ochocientos ochenta y dos [...] por ante mí, hizo su testamento [...] por el que instituyó por su única universal heredera a la morena María de la Ascensión Balmaceda, su ahijada e hija de la de su clase Manuela del propio apellido, perteneciente aquella entonces a las señoritas Balmaceda [...] Que habiendo sobrevenido después justa causas que la impelen a dejar sin efecto dicha disposición [...] otorga: Que revoca y anula el testamento [...] no firmando por que expuso no saber, siendo además bastante escasa de vista»⁹⁰.

Este sentido de la libertad aparece también en un proceso que enfrentó al propietario del ingenio Santa Rosalía, próximo a Cienfuegos, con un grupo de quince ex esclavos (nueve de ellos bozales y seis criollos). Todos usan dos apellidos (menos cuatro, que son «sin otro apellido»), pero cuidaban que en el «poder» escrito aparecieran sus nombres cotidianos de la plantación, tal y como figuraban en lista de trabajadores del ingenio. Es decir, aquí tenemos casi todas las formas de usar los apellidos: sólo uno, dos apellidos formales, sobrenombres (apodos, motes). Esto nos parece lo verdaderamente nuevo de la postemancipación: los ex esclavos acuden a un notario para dar un poder que les permita pleitear. El proceso mismo no se encuentra en los protocolos notariales. No es un ataque directo a la esclavitud pasada, porque ésta era legal durante su existencia; es una incriminación al propietario acusando al amo de injusto y cruel y amparándose en la tradición legal castellana⁹¹. Pero es algo muy importante para entender los sentidos de la libertad: ex esclavos con sus nuevos derechos de hablar legalmente, de tratar y contratar, así como de otorgar escrituras, prueban los límites de la libertad.

90. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE REMEDIOS, Escribanías y Notarías, partido judicial de Remedios, protocolos José Miguel Jiménez, fondo n° 67, 1884, t. 1 (enero-marzo), f. 418r-419v, escritura n° 88: «Revocacion de testamento», en la Ciudad de San Juan de los Remedios a 18 de marzo de 1884.

91. Rebecca SCOTT. «Reclamando la mula de Gregoria Quesada: el significado de la libertad en los valles del Arimao y del Cao-
nao, Cienfuegos, Cuba (1880-1899)». En: Fernando Martínez Heredia; Rebecca Scott; Orlando García Martínez (eds.). *Espacios...* [66], p. 23-52; David SARTORIUS. «Conucos y subsistencia: el caso del ingenio Santa Rosalía». En: Fernando Martínez Heredia; Rebecca Scott; Orlando García Martínez (eds.). *Espacios...* [66], p. 108-127; ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Protocolos Notariales, Protocolos Felipe Silva, f. 887, Escritura n° 120: «Poder», Cienfuegos 23 de mayo de 1906; ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Protocolos Notariales, Protocolos Felipe Silva, f. 1208, escritura n° 174 : «Poder para pleitos», Cienfuegos 26 de julio de 1906; véase Rebecca J. SCOTT; Michael ZEUSKE. «The Right to have Rights...» [72].

Anexos documentales

*Memorizando África**Acta de reconocimiento de hijo natural por el moreno Antonio Pérez (*)*

En la ciudad de Cienfuegos, provincia de Santa Clara a veinte y ocho de febrero de mil ochocientos ochenta y cinco. Ante mí, D. José Rafael de Villafuerte y Castellanos, vecino y notario público de la misma y su distrito, correspondiente al colegio del territorio de La Habana y de los testigos que al final expresaré, comparece el moreno libre Antonio Pérez, sin segundo apellido, natural del pueblo de Yisá, de la nación Lucumí, en África, soltero, de edad de cincuenta y un años, labrador de campo y de este domicilio; quien me exhibe su cedula personal, que le devuelvo, expedida para el actual año económico, por la alcaldía del barrio de Pueblo Nuevo, en esta localidad con el numero quinientos cincuenta y ocho, y tiene la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura por ser de edad competente, hallarse en el goce de sus derechos civiles, libre administración de sus bienes y a mi juicio en el pleno uso de sus facultades intelectuales, y dice: que con motivo de las relaciones amorosas que llevó con la de su clase, morena libre Regina Pared, natural y vecina de esta ciudad, soltera, mayor de edad, y ya difunta; de sus resultas dio a luz la misma el día veinte de diciembre de mil

ochocientos setenta y ocho [1878] un niño, que cual hijo de ella y de padre no conocido, fue bautizado en la iglesia parroquial de ascenso de la Purísima Concepción de esta ciudad, con el nombre de Julio Domingo, el treinta del siguiente mes de enero [de 1879], consignándose que su abuela materna era Ascensión Pared, de la misma naturalidad de la madre, como aparece de su respectiva partida bautismal, asentada con el numero trescientos noventa y dos, al folio ciento cuarenta vuelto del libro catorce de bautismo de personas de color. Y deseando cumplir con los deberes que la naturaleza y la moral le imponen, respecto a dicho niño, por la presente en la vía y forma que más haya lugar en derecho, otorga: que declara y reconoce por su hijo natural al nombrado Julio Domingo, pues ni al tiempo de su concepción, ni al de su nacimiento, tenían sus padres impedimento alguno para contraer matrimonio sin dispensa y por lo tanto le corresponde el derecho a los alimentos y educación, y a sucederle como heredero forzoso a falta de legítimos o legitimados por rescripto soberano, si tuviere a bien instituirlo heredero, cuando ordene su última voluntad; facultándole para que desde luego pueda usar su apellido [esto es, que pudiera usar dos apellidos: Julio Domingo Pérez Pared. M. Z. / O. G. M.]; queriendo dejar consignado

* ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Protocolos Notariales, Protocolos de José Rafael Villafuerte y Castellanos, 1885, 1 (enero-abril), f. 164r-166v, escritura nº 27: «Acta de reconocimiento del hijo natural por el moreno Antonio Pérez», Cienfuegos, 28 de febrero de 18815.

a los efectos oportunos que los abuelos paternos del niño reconocido eran Yicocun Hova y Fá Chipe, ambos naturales de dicho pueblo de Yisá, y ya difuntos, y que el compareciente fue bautizado por él de mil ochocientos cincuenta [a los dieciséis años. M. Z. / O. G. M.], en la iglesia parroquial del poblado de Guaracabuya, como perteneciente a la dotación del potrero, titulado El Platanal.

Así lo otorga el referido moreno. Antonio Pérez, a quien yo el notario conozco, a mi presencia y la de D. José Gregorio Suárez y Artilles y D. Francisco Ginori y Plascencia, también de esta vecindad, que asisten como testigos y firmarán, no haciéndolo el otorgante, por que expuso ignorar el arte de escribir, por cuyo motivo y en su defecto, lo

efectuara a su ruego y presencia D. Francisco Arias y Ángel. Habiendo advertido el otorgante y testigos del derecho que cada uno de ellos tiene a leer por si esta escritura, lo renuncian, expresando todos su deseo de que yo la lea. Y leída por mí, en un solo acto, continuando éste, manifiestan quedar bien enterados y conforme con lo que resulta; de cuya circunstancia, así como de lo demás que en el mismo instrumento se contiene y por consiguiente del conocimiento del otorgante, del que firma por éste y de los testigos, doy fe.

A ruego del moreno Antonio Pérez
Francisco Arias
José Gregorio Suárez
Francisco Ginori
Rafael Villafuerte

Entrar en la esclavitud con apoyo de la iglesia

Rutina de curas: lista de emancipados bautizados en masa en la parroquia de Sagua la Grande ()*

Nº 468. Pedro. Emancipado

Domingo, 19 de enero de 1868 «...bauticé solemnemente y puse por nombre *Pedro* a un moreno emancipado, nº 5829, de nación congo, de quince años de edad [...] Fueron sus padrinos Rafael criollo y Paula lucumí»

Nº 469. Pio. Emancipado

Domingo, 19 de enero de 1868 «...puse por nombre *Pío* a un moreno emancipado, nº 5804, de nación congo, de diez y seis años de edad [...] Fueron sus padrinos Nicario gangá y Agustina criolla»

Nº 470. Santiago. Emancipado

Domingo, 19 de enero de 1868 «...puse por nombre *Santiago* a un moreno emancipado, nº 5321, de nación congo, de quince años [...] Fueron sus padrinos José Eligio criollo y Margarita conga»

Nº 471. Camilo. Emancipado

Domingo, 19 de enero de 1868 «...puse por nombre *Camilo* a un moreno emancipado nº 5807, de nación congo, de catorce años [...] Fueron sus padrinos Fernando mina y Teresa carabalí»

Nº 472. Narciso. Emancipado

Domingo, 19 de enero de 1868 «...*Narciso* [...] moreno emancipado, nº. 5823, de nación congo, de trece años [...] padrinos Laureano y Rita lucumíes»

Nº 473. Francisco. Emancipado

19.1.1868 «...*Francisco* [...] moreno emancipado, nº 4829, [...] congo, de doce años [...] padrinos Miguel lucumí y Concepción conga...»

Nº 474. Cayetano. Emancipado

Domingo, 19 de enero de 1868 «...*Cayetano* [...] moreno [...], nº 4838, [...] congo, de doce años [...] padrinos Nicolás é Ines carabalíes...»

Nº 475. Mariano. Emancipado

Domingo, 19 de enero de 1868 «...*Mariano* [...] moreno [...], nº [...] de nación congo, de diez y seis años [...], padrinos Agustín gangá y Mónica conga...»

Nº 476. Dorotea. Emancipada

Domingo, 19 de enero de 1868 «...*Dorotea* a una morena emancipada, nº 5514, [...] conga, veinte y ocho años [...], padrinos Dionisio y Josefa criolla...»

Nº 477. Andrea. Emancipada

Domingo, 19 de enero de 1868 «...*Andrea* [...] morena [...], nº 5042, de nación conga, de veinte y nueve años [...] padrinos Miguel carabalí y Juana gangá...»

Nº 478. Leocadia. Emancipada

Domingo, 19 de enero de 1868 «...*Leocadia* [...] morena..., nº [...] conga, de treinta y seis años [...], padrinos Nicolás arará y Rita conga...»

Nº 479. Blasa. Emancipada

Domingo, 19 de enero de 1868 «...*Blasa* [...] morena [...], nº 4555 [...] conga, de catorce años [...] padrinos Agustín gangá y Mónica conga...»

* Registros parroquiales de bautizo, parroquia Inmaculada Concepción, Sagua la Grande, diócesis Santa Clara (Registros Sagua la Grande); Libro de bautismos de color 3, f. 64v-66v, nos. 468-479 [«Emancipados», año de 1868, todos bautizados en Cuba, no en África, ¿tal vez en África primero y en Cuba otra vez?]. Se trata de uno de los conocidos bautizos en masa; la lista demuestra también (véase la relación entre ascendencia cultural de bautizado y la de los padrinos) que las diferencias culturales no jugaron papeles tan relevantes.

Vender y heredar esclavos, ceder derechos sobre esclavos y sus hijos

Venta de esclavos ()*

En la villa de Cienfuegos a siete de septiembre de mil ochocientos cincuenta y siete yo, D. Ambrosio Borroto, de este vecindario como apoderado sustituto de D^a. Francisca Pidra, D. José Benito, D. José de Jesús, D^a. María del Carmen, D^a. María Josefa, D^a. María Inés, D^a. María Micaela y D^a. María Felipa Hernández y Piedra según la que a mi favor otorgo D. Rafael María Collazo el veinte y nueve de agosto último en la villa de San Antonio y ante el público D. Pedro Acebedo, del poder que le confirieron en el partido de la Guira Melena a veinte y cuatro de julio de este año ante el propio escribano; asimismo como apoderado también de D. Domingo Hernández, D. Miguel de Castro Palomino y D^a. María de Jesús Hernández como lo evidencia el que me confirieron, el primero como curador de los menores D^a. María de Jesús, D^a. Francisca María, D. Francisco María, D. Pedro María, D. Juan Bautista, D. Joaquín y D^a. Leocadia Hernández y con autorización judicial los otros dos por sí en el pueblo de Alquizar el veinte y siete de agosto citado y ante su capitán juez local: igualmente como apoderado sustituto de D. Antonio Cabezas, D. José Fernández Licor y de la morena libre Dionisia Respeto como lo evidencia los que a mi favor también otorgaron el referido Collazo y D. Enrique Betancourt, éste en la ciudad de

La Habana el veinte y siete del indicado mes de agosto ante el público D. Joaquín Trujillo del poder que el diez del mes anterior en el narrado partido de Alquizar y ante dicho pedáneo le confirieron el segundo; y aquel en el mencionado pueblo de Alquizar el veinte y seis del repetido mes de agosto y ante el citado juez local del que el catorce y nueve de dicho mes le confiriese el primero y la tercera, esto es del mes de julio último ante el propio capitán pedáneo y en el expresado pueblo, cuyos poderes y sustitución juro ser bastantes, no estarme revocado ni limitados y en testimonio el primero y originales los demás con certificación de la autorización judicial expedida por el mencionado ministro Acebedo recibo al presente escribano para que lo agregue todo a continuación otorgo:

Que vendo realmente a favor de D^a. María del Rosario Albis y D. Joaquín Sarria madre e hijo legítimos y vecinos de ésta trece negros correspondientes a mis poderdantes en este orden: nueve a los ocho primeros nombrados Salvador como de treinta y seis años de edad, Marcial de treinta y dos, y José Dolores como de setenta, lucumíes, Francisco de Paula como de diez, Carlos de siete y Secundina, criollos, ésta como de quince años, Pablo como de treinta y tres, y Facundo como de treinta y dos, congos y Teresa gangá de treinta y dos: a los segundos la negra criolla llamada María de la O de diez y seis años de edad: a cabezas la de igual clase Filomena también criolla y de trece años:

* ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Protocolos Notariales, Protocolos José Joaquín Verdaguer, año de 1857, tomo 2, escritura sin número: «Venta de esclavos», f. 658r-659v, Cienfuegos, 27 de septiembre de 1857.

a Fernández Licor otra de la misma clase nombrada Valentina criolla y de veinte y seis años y a la Ruperta el negro Julio carabalí, como de cuarenta y dos años, cuyos títulos de adquisición constan citados en los referidos poderes y de ellos están satisfechos y conformes los compradores; y les vendo los enunciados negros por cautivos, sujetos a servir y libres de gravámenes según las adjuntas certificaciones; pero sin acción redhibitoria ni *cuanti minoris* para que jamás se intente contra mis representados en razón de haberlo así estipulado y ser esta venta en precio y cantidad de seis mil quinientos pesos al respecto de quinientos cada uno, cuya suma total me han exhibido los compradores en reales efectivos moneda corriente de que me doy por entregado a mi entera satisfacción, renuncio la prueba, leyes de la entrega recepción del dinero no contado y demás del caso y otorgo el más solemne recibo; declarando que el precio justo y verdadero valor de los enarrados trece negros, es el mismo en que van vendidos y si algo más valen o valor pudieren, del [ilegible] cualquiera que sea en mucha o poca parte hago donación graciosa a los compradores, jura perfecta e irrevocable de las que el derecho titula intervenir con insinuación en forma y expresa renuncia de las leyes relativas a los contratos en que hay lesión en más o en menos de la mitad del justo precio y término señalado para pedir la rescisión o suplemento. Mediante lo cual aparto de mis poderdantes de la

propiedad, posesión y demás acciones que a los enunciados siervos tenían, que todos sin la menor reserva lo cedo y tras-paso en los compradores para que como suyos en pleno dominio lo posean o ena-gene a su voluntad en virtud de esta escritura que les otorga en señal de real entre-ga sin otra prueba de que les relevo; estando presente yo D. Pedro Borroto, padre del apoderado de los vendedores bien cierto de mi derecho y de lo que en este caso aventuro, y yo el expresado Borroto el expresado Borroto hijo, nos obligamos a la concreción y saneamiento de la expresada venta con los poderdantes de mi el segundo, de *mancomun et inso-lidum* con nuestros bienes y los suyos presentes y futuros según derecho. Y estando asimismo presente yo José María Álvarez como encargado expresamente por los compradores, vecino de ésta, acepto a su favor esta escritura en los términos, cláusulas y garantía en ella constituida y tal como se redacta para que usen de su contenido siempre y cuando les convenga. Yo el escribano público doy fe conozco a los otorgantes que así [ilegible] ratificaron y firmaron siendo testigos D. Francisco Valdés, D. Ángel Prieto Solís y D. Serafin Fernández Pellón.

Antonio M Borroto

Pedro N. Borroto

José María Álvarez

Ante mí:

Cipriano de Villafuerte

Vender y heredar esclavos, ceder derechos sobre esclavos y sus hijos

Division y adjudicación ()*

En la villa de Cienfuegos a veinte y tres de febrero de mil ochocientos y setenta. Ante mí, el escribano público y testigos que al final se expresarán, comparecieron D. José Anselmo, D. Ramón, D. Juan José, D^a. María Leandra de la Caridad y D^a. María de la Concepción Capote [...] a quienes doy fe conozco y dijeron aquello: que en los días veinte y dos de octubre a dos de noviembre del año próximo pasado, fallecieron en esta villa D. José Antonio Capote y D^a. Dolores del Valle padres legítimos y políticos de los comparecientes, habiendo aquel otorgado testamento [...] Que estando los comparecientes en la mayor edad y expeditos, según las leyes, para dividir y adjudicarse los bienes que sus citados padres les hayan dejado...

Que según los inventarios que se agregan, los comparecientes de común acuerdo han avalorado los bienes por si propios, sin agravio alguno, y satisfechos del caudal hereditario y con arreglo aquella memoria de hacer las adjudicaciones que sign. toda la vez que dicho caudales es líquido divisible =Corresponde al heredero Don José Anselmo por el quinto que le legó D. José Antonio su padre = veinte y un mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos = por su haber paterno = diez/mil ciento siete = Componiendo un total de treinta y un mil quinientos setenta y seis

pesos = se adjudica para su pago las especies siguientes = Primeramente el potrero la *Unión* y el negro George de sesenta años de edad, de nación, avaluados en seis mil trescientos pesos = Otro potrero nombrado *El Indio* de caballerías de tierra en dos mil = Ciento cincuenta y cuatro vacas y dos toros a veinte y cinco pesos cuatro reales cada uno = tres mil novecientos diez y ocho = Setenta y siete reses de dos años, machos y hembras a diez y seis pesos una [...siguen algunos pagarés] = El negro Donato de cuarenta y cinco años, de nación, sano y sin tachas, en ochocientos = Otro negro de nación de igual edad, con una hernia, llamado José Caridad, en setecientos = Otro llamado Félix de nación, de cuarenta años en ochocientos cincuenta = Otro nombrado Gerónimo criollo, tuerto de cuarenta y cinco años sano y sin tachas, en quinientos [...] Cuenta y haber con la heredera D^a. María de la Concepción = Ha de haber por su legítima la cantidad de diez mil ciento siete pesos = Se adjudica para su pago [...] una negra nombrada Josefa, criolla, de veinte y cinco años, sana y sin tachas, en setecientos = Un pardo nombrado Silverio de diez y ocho años de edad, criollo, sano y sin tachas en setecientos = Un negro de nación, nombrado Javier de sesenta años con un dedo de menos en cuatrocientos...

Cuenta y adjudicación con el heredero don José Ramón = Le corresponde por su legítima la suma de diez mil ciento siete pesos [parte del potrero *La Unión*] [...] Ha de haber D. Juan José por su haber diez

(*) ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Protocolos Notariales, Protocolos José Joaquín Verdaguer, 1870, tomo 1, escritura no. 73 «División y adjudicación», f. 93r-102v, Cienfuegos, 23 de febrero de 1870 (el inventario f. 97r-101v).

mil ciento siete pesos = se adjudica para su pago = El potrero la *Esperanza* y el negro Joaquín de nación, en siete mil ochocientos pesos [...] La negra Dorotea de sesenta años, de nación, sana y sin tachas, trescientos...

Cuenta con D^a. María Leandra de la Caridad = Le corresponde por su haber paterno y materno = cuarenta y cinco mil ciento doce pesos; según dicha memoria testamentaria – Se adjudica para su pago = El potrero *Santa María* de treinta y tres caballerías de tierra, avaluado en treinta mil quinientos = La negra Elena, criolla de cuarenta y seis años en setecientos = José Chiquito, criollo, sambo, sano y sin tachas = setecientos = Casimiro, criollo, veinticinco años, cojo, en cuatrocientos. = Benbenuto, criollo, de diez y seis años = en quinientos = José caralabí [sic] África [sic] de setenta años, sano y sin tachas, en trescientos = Sebastián, africano, de ochenta años inútil en cien = Pablo criollo, de nueve años sano y robusto en trescientos cincuenta = Domingo criollo, de seis años, sano y robusto en trescientos = Celedonio criollo, de cuatro años. id id en ciento cincuenta = Cristina mulata, de treinta años, sana y sin tachas, en Ochocientos – Apolonia criolla, de veinte y cinco años, sana y con tachas en seiscientos = Lugarda, criolla, de trece años, padece de accident^s.

en cuatrocientos = Siete yuntas de bueyes de todas clases en cuatrocientos setenta y seis = Dos vacas madres con tres añojos en ochenta y uno = Una cría de puercos [...] tres caballos, dos moros azules y el otro bayo en ochenta y cinco = Todos los muebles existentes en mil ochenta y cinco = El negro José y el quitrín con sus arreos en mil [...]

Así mismo los otorgantes aprueban y ratifican las tasaciones que de los bienes han practicado [...] dando fe [...] siendo testigos D. Mariano Alberich, D. Juan y D. Mariano Hernández, de este vecindario.

Juan J Capote
José Ramón Capote
Secundino Capote
Concepción Capote
José de Jesús Capote
José Anselmo Capote
Caridad Capote
Juan J. Capote
José J. Verdaguer

[Inventario adyacente] [...]

Nota – Hacemos constar, que no se le ha puesto precio al mulato Leonaldo por hallarse en la insurrección, y se verificará estando de presente: que se olvidó poner en el inventario las prendas siguientes:

Un reloj de oro que avaluamos en \$ 60 =
Y otras varias prendas de oro y plata = 69

Vender y heredar esclavos, ceder derechos sobre esclavos y sus hijos

Venta de esclavos y cesión de patronato ()*

En la villa de Cienfuegos, a once de diciembre de mil ochocientos setenta y cinco. Ante mí, D. José Joaquín Verdaguer, vecino de la misma, notario público de ella y su distrito, e individuo del colegio territorial de la Excma Audiencia de la Habana y de los testigos que al final nombraré, comparecen D. Pedro Paulino Hernández, natural del Partido de Cumanayagua en esta jurisdicción, de este vecindario, casado, mayor de edad y hacendado y D. Francisco López Macías que lo es de Camarones, de esta vecindad, también casado, de edad competente y del comercio; asegurando y apareciendo hallarse en pleno goce de sus derechos civiles y tener la capacidad legal necesaria para la formación de esta escritura y dice el primero: que vende realmente y con efecto al segundo compareciente seis esclavos de su pertenencia, nombrados José Ramón, de diez y seis años de edad, Prudencio, de nueve años, Tomasa, de treinta y siete, Isabel, de doce, Nicasio, de once y Trinidad, de nueve, todos criollos, de oficio campo y empadronados en el partido de Padre de las Casas de esta jurisdicción; cediendo a la vez al indicado comprador el patronato de tres hijos de la esclava Tomasa y nombrados Agapito de siete años, Patricio de dos y Antonio de siete meses de nacido, también criollos y

empadronados asimismo en el indicado partido; y procede a la venta de los citados seis esclavos por cautivos, sujetos a servir en precio y cantidad de dos mil doscientos cincuenta pesos oro, que del comprador confiesa haber recibido en dinero efectivo, moneda corriente de se da por entregado a su satisfacción con renuncia de la prueba, leyes de entrega, excepción del dinero no visto ni contado y demás del caso y le otorga el más eficaz resguardo: mediante lo cual se aparta y separa de la propiedad, posesión y demás acciones que a dichos siervos, así como al patronato de los libertos había y tenía; cediéndolo todo y traspasándolo a favor del comprador para que como dueño de unos y patrono de otros adquiridos con justo título, los posea o enajene a su voluntad en fuerza de esta escritura que le otorga en señal de real entrega, sin que necesite de otra prueba de que le releva; y a la evicción y saneamiento de esta venta obliga a sus bienes según derecho. El segundo compareciente manifestó: que acepta a su favor esta escritura de venta y cesión en los términos en que va redactada para usar de su contenido cuando le convenga. En cuyo testimonio así lo dicen, ratifican y firman siendo testigos D. José Gutiérrez y D. Rafael González, de este vecindario, después de haberles leído integro este documento, cerciorados antes del derecho que tienen de leerlo por sí. De haber obtenido el correspondiente permiso gubernativo para otorgar esta escritura, así como del conocimiento de los otorgantes, testigos y demás referido doy fe.

(*) ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Protocolos Notariales, Protocolos José Joaquín Verdaguer, año de 1875, escritura n° 342: «Venta de esclavos y cesión de patronato», f. 1226r-1227v, Cienfuegos, 11 de diciembre de 1875.

Pedro P. Hernández
Francisco López Macías
José J. Verdaguer

[Observación: Al folio 1134 aparece la
NOTA MARGINAL siguiente:]

En la fecha y para entregar a la sierva
Juliana Padilla expedí una primera copia
en un pliego del sello de pobres; doy fe.
Hernández Castiñeiras

Manumisión (coartación) individual y los sentimientos de la «libertad» durante la esclavitud

Tasación y preparativos para la coartación ()*

Domingo veinte y siete de octubre de mil ochocientos sesenta y siete años. Yo, presbítero licenciado D. José Anastasio Miyaya, cura párroco de esta Iglesia San Pedro Apóstol, partido de Quivicán en el obispado de la Habana, bauticé solemnemente y puse los Santos Oleos a una párvula, que nació el día trece del presente mes, hija de Apolonia criolla, natural del partido de Alquizar, vecina de esta feligresía, esclava de D. Juan Valdes Mumpierres y de padre no conocido: en dicha párvula ejercí las sagradas preces y ceremonias y le puse por nombre Eduarda Josefa; nieta materna de Hilario y de Andrea, de nación congos: fue su padrino Juan Espinosa, a quien advertí el parentesco espiritual y obligaciones que contrajo, y lo firmé.

Certifico: que en el libro de actas que se lleva en esta sindicatura al folio ciento treinta y seis; y ciento treinta y siete inclusive se halla la que a letra dice así:

En la Ciudad de Bejucal a treinta de Julio de mil ochocientos setenta y siete previa citación ante el caballero síndico se presentó la morena Josefa criolla esclava de D. Juan Valdés Monpierre manifestando la esclava que su presentación era que se

proceda a su coartación y no tenía otra reclamación: presente el Monpierre digo que no tenía el menor inconveniente en que se proceda a la coartación de su esclava toda la ley que su solicitud era justa: en ese estado el caballero síndico dijo: Que para la tasación de la esclava nombraba por su parte como perito a D. Lorenzo González, y Monpierre por la suya a D. Joaquín Porrua quienes estando presente, aceptaron dicho cargo y después de examinar a la esclava atendida a edad de diez a once años, sana y de campo, la tasaron en trescientos pesos oro: y habiendo exhibido la esclava ciento diez pesos en billetes que reducido a oro hacen cincuenta pesos oro de los trescientos pesos oro queda reducida su coartación definitiva en doscientos cincuenta pesos oro. Conforme el caballero síndico como Monpierre con lo convenido dio por terminado el acto recibiendo Monpierre los ciento diez pesos papel exhibidos por la esclava quedando Monpierre en la obligación de otorgar a la esclava la escritura de coartación antes del notario firmando p^a. constancia – Juan Penichet = Juan Monpierre = Lorenzo González = Joaquín Porrua. =

A petición de la interesada doy la presente en Bejucal a 31 de julio de 1877

Juan Penichet
Gratis

(*) Ambos documentos son copias. Citamos estos dos documentos previos a un protocolo notarial por ser casi clásicos. Primero, por ser etapas previas a una «escritura»; segundo, por el conflicto que surge en esta etapa previa a la escritura. Parece que en el lapso de tiempo entre la tasación y el otorgamiento de la escritura de coartación pasó algo que hizo que la madre de Eduarda Josefa criolla, Apolonia, ya libre, se quejó y solicitó un cambio de amo.

ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Gobierno General, leg. 519, n° 26885 (1877): «Expediente promovido por la morena libre Apolonia Criolla, madre de la de igual color Eduarda Josefa proponiendo se dé papel a la última para variar de dueño, que lo es hoy D. Juan Valdés Mumpierres [Monpierre].

Manumisión (coartación) individual y los sentidos de la «libertad» durante la esclavitud

Coartaciones ()*

En la Villa de Cienfuegos a catorce de julio de mil ochocientos setenta. Yo, D^a Regla Ramos, viuda mayor de edad y de este vecindario digo que mi esclavo Felipe, moreno lucumí, de cincuenta años de edad me ha entregado la cantidad de *setecientos catorce escudos* en dinero efectivo, moneda corriente a mi satisfacción dándome por recibida con renuncia de la prueba leyes de la entrega, excepción del dinero no visto ni contado y demás del caso y le otorgo autentico recibo: mediante el cual y considerando que el valor de dicho siervo en la actualidad es de *mil cuatrocientos escudos*, a fin de hacerle una gracia por sus buenos servicios, en la forma que mejor proceda otorgo: que coarto al expresado esclavo Felipe Lucumí, en la cantidad de *seiscientos ochenta y seis escudos* a fin de que no pueda ser vendido en más suma que ésta; y que goce de los derechos y demás prerrogativas que las leyes conceden a los coartados. Y me obligo a la seguridad de este documento con mis bienes según derecho. Yo el escribano doy fe conozco a la otorgante que así lo dijo y después de haber leído por sí misma este documento ratificó y firmó siendo testigos D. Juan y D. Mariano Hernández y D. José Flores vecinos presentes.

Ante mí
Regla Ramos
José J. Verdaguer

Coartaciones ()*

En la Villa de Cienfuegos a catorce de julio de mil ochocientos setenta. Yo, D^a. Regla Ramos, viuda de este vecindario y mayor de edad digo: que he recibido de mi esclavo, el moreno Justo Macuá, de cuarenta años de edad la suma de *novecientos treinta y seis escudos* en dinero efectivo, moneda corriente a mi satisfacción, dándome por entregado con la renuncia de la prueba leyes de la entrega, excepción del dinero no visto ni contado y demás del caso y le otorgo eficaz recibo; advirtiéndome, que de esta suma le había dado pagarés que también recibo en este acto. Mediante lo expuesto y considerando que el valor de dicho siervo Justo, en las actuales circunstancias, es de *mil quinientos escudos*, a fin de hacerle una gracia por sus buenos servicios, en la forma que mejor proceda otorgo: que coarto al expresado esclavo Justo, en la cantidad de *quinientos setenta y cuatro escudos*, a fin de que no pueda ser vendido en más suma que ésta, y que goce de los derechos y demás prerrogativas que las leyes conceden a los coartados. Y me obligo a la seguridad de este documento con mis bienes según derecho. Yo el escribano público doy fe conozco a la otorgante que así lo dijo y después de haber leído por sí misma este documento ratificó y firmó siendo testigos D. Juan y D. Mariano Hernández y D. José Flores vecinos presentes.

Ante mí
Regla Ramos
José J. Verdaguer

(*)ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Protocolos Notariales, Protocolos José Joaquín Verdaguer, año de 1870, tomo 1, escritura n° 317 «Cuartación», f. 310r-310v, Cienfuegos, 14 de julio de 1870.

(*)ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Protocolos Notariales, Protocolos José Joaquín Verdaguer, año de 1870, tomo 1, escritura n° 318 «Cuartación», f. 310v, Cienfuegos, 14 de julio de 1870.

Manumisión (coartación) individual y los sentidos de «libertad» durante la esclavitud

Libertad graciosa ()*

En la villa de Cienfuegos a cinco de octubre de mil ochocientos setenta y cinco. Ante mí, D. José Joaquín Verdaguer, vecino de la misma, notario público de ella y su distrito e individuo del colegio territorial de la Excmá Audiencia de La Habana y de los testigos que al final nombrare comparecen D. José Elías Castañeda natural de Bayamo, vecino de esta villa, de estado viudo, mayor de edad y del campo, cuyo compareciente asegura y aparece hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles con la capacidad legal necesaria para la formación de esta escritura y dice que ahorra y libera de todo cautiverio y servidumbre a su esclava la mulata Celestina criolla, de cuarenta y tres años de edad, de oficio domestico empadronada en Manzanillo y avecindada en esta villa, y esta libertad es graciosamente y sin estipendio alguno por lo cual se aparta de la propiedad, posesión y demás acciones que a dicha sierva tenía y todo lo cede y traspasa en su hecho y causa propia para que como persona libre trate, contrate,

otorgue poderes, testamentarias, comparezca en juicios y haga todo lo demás que practican las personas que disponen de su voluntad y le obliga a que esta libertad será cierta y segura en todo tiempo según derecho. En cuyo testimonio así lo dice, ratifica y no firma por haberse cegado de la vista de algún tiempo a esta parte y a su ruego lo hace su hijo D. José de los Santos que fue testigo con D. José Gutiérrez y D. Rafael González, de este vecindario. Yo, el notario público, en virtud de no ser de mi conocimiento el otorgante exigí la presentación de dos testigos que lo fueran del suyo, lo cual verifiqué compareciendo D. Ángel Benigno Romero y D. Victorio Romero quienes doy fe conozco y que también suscriben ante mí y los testigos instrumentales. Leída íntegramente esta escritura a las partes y a los testigos instrumentales y de conocimiento por haber renunciado todos el derecho que les advertí tienen de leerlo por sí de todo ello así como del conocimiento de los otorgantes y testigos doy fe.

José de los Santos Castañeda
Victorio Fernández
Ángel Benigno Romero
Rafael González
[firma ilegible]
José Joaquín Verdaguer

(*) ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Protocolos Notariales, Protocolos José Joaquín Verdaguer, año de 1875, escritura n° 269: «Libertad graciosa», f. 1036r-1037r, Cienfuegos, 5 de octubre de 1857.

*Manumisión (coartación) individual y los sentidos de la «libertad» durante la esclavitud**Cesión de patronato (*)*

En la villa de Cienfuegos a once de noviembre de mil ochocientos setenta y cinco. Ante mí, D. Juan Hernández Castiñeira, vecino de la misma, notario público de este distrito y delegado del colegio territorial de la Excm. Audiencia de la Habana por enfermedad de mi compañero D. José Joaquín Verdaguer ante los testigos que al final nombraré, comparece D^a. Concepción Bacallao de López natural de la villa de Colón vecina de ésta, casada y mayor de edad, asegurando y apareciendo hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles y tener la capacidad legal necesaria para la formación de esta escritura y dice: que con anuencia y consentimiento de su legítimo consorte D. Antonio López Soler, como se comprueba con su firma al final, que de haber sido pedida aquella, concedida y aceptada yo el notario doy fe por la presente y en la más solemne forma que firme sea otorga: que cede a la morena Juliana Padilla, su esclava, el patronato de una hija de esta nombrada Tomasa del Carmen, de tres años de edad y empadronada en esta villa; y esta cesión es graciosamente y sin estipendio alguno, en mérito de los buenos servicios de la citada madre Juliana Padilla, mediante lo cual se aparta y separa de la propiedad, posesión y demás acciones que a dicha Tomasa del Carmen había y tenía; cediéndolo todo y

traspasándolo en favor de su madre para que como patrona de aquella disponga a su voluntad y la atienda en virtud de esta escritura que le otorga en señal de real entrega, sin que necesite de otra prueba de que le releva; declarando bajo el más solemne juramento que para la realización de este contrato no ha mediado miedo, violencia, persuasión marital ni coacción alguna respecto del citado su marido ni de otro tercero a su nombre, sino que lo hace de su libre y espontánea voluntad porque sus efectos se convierten en su beneficio y utilidad; que no tiene hecha promesa de no vender ni gravar sus bienes ni protesta alguna contra el tenor de este instrumento y que del juramento prestado no ha pedido ni pedirá relajación a ningún señor juez eclesiástico y si se le concediese aunque sea de *motu proprio* no usara de ella so pena de perjury, y que tantas cuantas veces se le conceda serán otros tantos juramentos que añada al prestado para que siempre quede uno vigente; a cuyo fin renuncia todas las leyes, fueros, derechos y privilegios de su favor y defensa con la general en forma que lo prohíbe y con especialidad la Ley sesenta y una del Foro y el Senado Consulto Veleyano de los cuales y sus efectos ha sido instruida por mí, el notario, y cuántas más disposiciones pueda favorecerla por razón de su sexo y estado. En cuyo testimonio así lo dice, ratifica y firma con su consorte, siendo testigos D. José Gutiérrez y D. Rafael González, de este vecindario, después de haberles leído íntegro este documento,

(*) ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Protocolos Notariales, Protocolos José Joaquín Verdaguer, escritura nº 306: «Cesión de Patronato», f. 1134r-1135v, Cienfuegos, 11 de noviembre de 1875.

cerciorados antes del derecho que tienen de leerlo por sí. Y de conocer a la otorgante, testigos y demás referido doy fe.

Concepción Bacallao de López
Antonio López Soler.
Juan Hernández Castiñeira

Inscripciones de libertad

Libertad y Contrato ()*

Libertad

En la villa de Cienfuegos a veinte de abril de mil ochocientos setenta. Yo, D. Agustín Goytisolo, de este vecindario: otorgo: que ahorro y liberto de toda sujeción y cautiverio y servidumbre a las esclavas de mi propiedad Petrona, morena de cuarenta años de edad y a su hija la mulata María de veinte años, ambas criollas empadronadas en esta villa donde residen. Y esta libertad es graciosa en recompensa de los buenos servicios que dichas criadas han prestado a mi familia. Mediante lo expuesto me aparto y separo de la propiedad posesión y demás acciones que a dichas siervas había y tenía...

Agustín Goytisolo

Ante mí

José J. Verdaguer

Contrato

En la Villa de Cienfuegos a veinte de abril de mil ochocientos setenta. Ante mí el escribano público y testigos comparecieron la morena libre Petrona y su hija la parda María de cuarenta y veinte años de edad de este vecindario y la segunda con asistencia de su referida madre a quien doy fe

conozco, dijeron: que queriendo dar una prueba del agradecimiento que deben al que fue su dueño D. Agustín Goytisolo, por el buen trato y cuidado que con las mismas ha tenido dicho señor y su familia hasta el extremo de concederles su libertad graciosamente, han determinado y se comprometen de su libre y espontánea voluntad y en la forma que mas haya lugar en derecho a servir la primera por cuatro años y la segunda por ocho al expresado D. Agustín Goytisolo y su familia obligándose a ir con aquellos a donde quieran que se dirijan; queriendo que si se niegan a ello se les obligue con todo el rigor de la ley a cumplir dicho término en poder y al servicio del que les ha dado su carta de libertad pues al efecto renuncian las leyes que puedan favorecerles. Presente D. Agustín Goytisolo aceptó este documento para usar de él cuando convenga así lo dijeron y firmó Goytisolo y por Petrona y María que expusieron no saber lo hicieron a su ruego dos de los testigos que lo fueron D. José Flores y D. Juan y D. Mariano Hernández vecinos presentes. Entre l^s = D. Mariano vale.

Juan Hernández

Agustín Goytisolo

Ante mí

José Flores

José J. Verdaguer

(*) ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Protocolos Notariales, Protocolos José Joaquín Verdaguer, tomo 1, escritura nº 167 «Libertad», f. 183r, villa de Cienfuegos, 20 de abril de 1870.

(*) ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Protocolos Notariales, Protocolos José Joaquín Verdaguer, escritura 168 «Contrato», f. 183r- 183v, villa de Cienfuegos, 20 de abril de 1870.

Inscripciones de libertad

Libertad ()*

En la Villa de Cienfuegos a treinta de abril de mil ochocientos setenta. Yo, D. Fernando I. Avilés y Dorticós, natural de esta ciudad donde me hallo con residencia accidental, vecino de la ciudad de La Habana digo: que el quince de octubre de mil ochocientos sesenta y seis compre una morena criolla nombrada María Ernesta Orre que ha permanecido a mi servicio, a la cual por sus buenas cualidades prometí otorgarle la libertad como aparece del documento privado de tres de febrero de mil ochocientos sesenta y nueve que le entregué para su resguardo.

Que sin embargo de mi ofrecimiento [h]a continuado a mi lado hasta hoy con la misma fidelidad que si fuese de mi propiedad sin retribución alguna y sin exigirme la formación de la carta de manumisión pues según el tenor de dicho documento quedaba desde ese día en habilidad para disponer de su voluntad: que teniendo que pasar a la península en unión de mi hermano D. Juan y la familia de éste, ha manifestado la citada María el deseo que tiene de acompañarnos y como para ello necesita acreditar su condición, en la forma que firme y eficaz sea, otorgo: que ahorro y libertó de todo cautiverio y servidumbre a la expresada María Ernesta Orre graciosamente según

lo tengo ofrecido, quedando como lo cito desde la fecha indicada separado de la propiedad y de sus acciones que ella tenía, pues le quedan trasmitidas en su hecho y causa propia, para que practique en cualquier tiempo cuantos actos queden y deben las personas por todos conceptos.

Presente yo María Ernesta Orre, soltera, mayor de edad digo: que agradecida de la acción generosa de dicho señor que pasa a la península en unión de su hermano Juan y de la familia de éste, por el cariño que les profeso he determinado de mi libertad y espontánea voluntad acompañarlos no sólo en este dicho punto sino a cualquier otro que tenga por conveniente dirigirse, pues mi deseo no es otro que permanecer a su lado, y para patentizar cuanto ha manifestado el señor don Fernando, entrego al escribano para que lo agregue a continuación y se tenga como parte íntegramente de este instrumento, el documento original que conservaba en mi poder y a que se ha referido. Yo, el escribano público, y de Marina doy fe conozco a los otorgantes que así lo dijeron y ratificaron, firmando Avilés y por la Orre que expreso no saber lo hace a sus ruegos uno de los testigos que lo fue D. Antonio Ravella, D. Juan M. Rodríguez y D. Ángel P. Solís de este vecindario.

Firmado.- Fernando Avilés

Ante mí

Ramón Hernández Medina

(*) ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Protocolos Notariales, Protocolos notariales de José Joaquín Verdaguer, año de 1870, escritura 272: «Libertad», f. 400v-402r, Cienfuegos, 30 de abril de 1870.

Libertad ()*

En la villa de Cienfuegos a dos de mayo de mil ochocientos setenta. Yo D. Venancio Solazábal, natural de Tracio, vecino de ésta otorgo: ahorro y liberto de toda sujeción cautiverio y servidumbre a una mulata nombrada Serafina, como de treinta y cinco años de edad, graciosamente y sin estipendio alguno en remuneración a sus buenos servicios. En este concepto me aparto de la propiedad y demás acciones que a la mencionada mulata tenía, transfiriéndolas en su hecho y causas propias para como libre desde hoy y para siempre, trate, contrate, compre, venda, comparezca en juicio, otorgue poderes, testamentos y haga todo lo demás que practican las personas que disponen de su voluntad. Y me obligo con mis bienes a que ésta le será de todo tiempo cierta y segura. Yo, el escribano público de marina, doy fe conozco al otorgante que así lo dijo y firma siendo testigos D. Francisco Morejón, D. José D. Rivero y D. Ángel P. Solís de este vecindario.

Venancio Solazábal

Ante mí

Ramón Hernández Medina

Libertad ()*

En la villa de Cienfuegos a diez y ocho de noviembre de mil ochocientos setenta y cinco. Ante mí, D. José Joaquín Verdaguer, vecino de la misma, notario público de este

distrito e individuo del colegio territorial de la Excma. Audiencia de la Habana y de los testigos que al final nombraré, comparece D. Francisco Rodríguez, natural de Asturias, vecino y del comercio del partido de Yaguaramas en esta jurisdicción, accidentalmente en esta villa, de estado casado y de edad competente, asegurando y apareciendo hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles y tener la capacidad legal necesaria para la formación de esta escritura y dice: que como apoderado especial de D^a Catalina Albelo, de su misma vecindad, según el que le confirió en veintidós de julio último ante el juez de paz y en el citado partido de Yaguaramas; cuya personería jura ser bastante, no estarle revocada ni limitada en manera alguna y original me exhibe para su agregación a esta escritura, otorga: que ahorra y liberta de todo cautiverio, sumisión y servidumbre a un esclavo de la pertenencia de su poderdante, nombrado Lucas Albelo, criollo, de veinticinco años de edad, de oficio de campo y empadronado en el mismo punto de Yaguaramas; y esta manumisión es graciosamente y sin estipendio alguno, conforme a las instrucciones que le ha comunicado su representada. Mediante lo cual aparta y separa a su poderdante de la propiedad, posesión y demás acciones que al indicado siervo Lucas había y tenía, transfiriéndolo todo en su hecho y causa propia para como persona libre, trate, contrate, otorgue poderes, testamentos y haga todo lo demás que pueden y deben las personas no sujetas a la esclavitud. Y a la

(*) ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Protocolos Notariales, Protocolos de José Joaquín Verdaguer, escritura 277: «Libertad», f. 405r-405v, Cienfuegos, 2 de mayo de 1870.

firmeza que esta libertad le será cierta y segura en todo tiempo, obliga los bienes de su representada en la mejor forma de derecho. En cuyo testimonio así lo dice, ratifica y firma siendo testigos instrumentales D. José Gutiérrez y D. Rafael González, de este vecindario, después de haberse

leído íntegro este documento, cerciorados antes del derecho que tienen de leerlo por sí. Y de conocer al otorgante, testigos y demás referido: doy fe.

Francisco Rodríguez

José Joaquín Verdaguer

Inscripciones de libertad

Carta de libertad ()*

«...comparece don Carlos Guibert o Duval-lon, viudo, mayor de sesenta y cinco años, propietario, de este vecindario, en la calle del Rastro número treinta y cinco, según cédula que presenta de número mil trescientos trece, librada en la ciudad de La Habana el cinco de marzo último por el señor Secretario del Gobierno General de la Isla, en virtud de ser ciudadano francés el compareciente [...] dice [...] que tiene por esclavo de su propiedad, un moreno nombrado Andrés, criollo y de treinta y tres años de edad, que asegura no se halla afecto a gravamen alguno [...] que dicho esclavo le ha entregado por su libertad, la

cantidad de ciento veinte y ocho pesos diez centavos oro, en que está coartado y confiesa haber recibido a su satisfacción [...] Que en su consecuencia le da y concede plena libertad, a fin de que desde hoy, en adelante y para siempre, la goce y disfrute como si fuese naturalmente libre; desistiéndose y apartándose del derecho de posesión, propiedad y dominio que sobre dicho moreno tenía adquirido a favor a quien lo cede y renuncia todo para que no vuelva a estar sujeto de servidumbre; y confiriéndole poder irrevocable para que trate y contrate, teste, comparezca en juicio por sí o por medio de sus apoderados y practique sin intervención de persona alguna cuanto está permitido a los que nacen libres, usando de su espontánea voluntad...».

(*) ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Protocolos Notariales, Protocolos José Joaquín Verdaguer, año 1875, escritura 313: «Libertad», f. 1152-1153, Cienfuegos, 18 de noviembre de 1875.

(*) ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CUBA, Protocolos de Giró, Escribanía Real Pública de Gobierno y de Guerra, leg. 312, a cargo de Orestes Ferro y Domingo, 1880, f. 257r-258r, escritura 116 «Carta de Libertad», Santiago de Cuba, 1 de mayo de 1880.

Inscripciones de libertad

Cédula Personal ()*

| | | |
|---|---|------------------|
| [un sello de «12 Centavos de Peso»] | Cédula Personal Libertos Año de 1884-85 | F.º 1 N.º 100 |
| Señas Generales Edad <i>51 años</i> Estatura ——— Cara ——— Color ——— Pelo ——— Ojos ——— Nariz ——— Barba ——— Particularidades <i>Liverta del 1^{er}</i> <i>Sorteo 4 de mayo/885</i> | Provincia: <i>de Sta. Clara</i> Término <i>Mpal. De Trinidad</i> Pueblo: <i>Río de Ay Barrio Id</i> A favor de: <i>la morena Juana Criolla Zulueta</i> Natural de <i>Río de Ay</i> Provincia de <i>Sta. Clara</i> De estado <i>solt.^a</i> Profesión <i>campo</i> Vive <i>calle de Ing.^o Sta. Elena</i> num ——— | |
| <i>Manaca Armenteros 8 de mayo de 1885</i> Recargo Municipal \$12/\$. El interesado El Alcalde <i>Rafael Suárez</i> | | |

(*) MUSEO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Fondo Documental, sin procesar. Todo lo cursivo está inscrito a mano. Hemos utilizado una tabla para demostrar la estructura de formulario preimpreso que se utilizó para estas cédulas de libertos.

Testamentos de ex-esclavos

Testamento ()*

En la villa de Cienfuegos a nueve de enero de mil ochocientos cincuenta y uno. Ante mí, el presente escribano público y testigos, compareció el moreno libre Pedro Arguindegui de nación carabalí a quién doy fe conocer y dijo: Que estando enfermo en la epidemia [ilegible] colera morbo asistido pero con el entero juicio y cabal memoria que Dios nuestro señor se ha servido darle y creyendo como firmemente [ilegible] madre la Iglesia Católica Apostólica Romana, en el Santísimo misterio de la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en todos los demás misterios que cree y confiesa por ella que se registrá y gobernará por el Espíritu Santo quiere hacer su testamento para lo que invoca por [ilegible] a nuestra Señora María santísima para su mayor acierto en la forma siguiente:

Primeramente.- Encomiendo mi alma a Dios que lo creó y redimió con su preciosa sangre, y el cuerpo mande a la tierra en que fue formado, y cuando suceda mi fallecimiento quiero ser enterrado en el cementerio general bajo las disposiciones que tengan a bien mis albaceas.

Ítem.- Mando se me digan las tres misas del alma y se paguen los [montos] forzosos establecidos por Reales Ordenanzas.

Ítem.- Declaro no haber sido casado, ni tampoco reconocer sucesión por ninguna línea.

Ítem.- Declaro por mis bienes una casa de tabla y teja situada en Pueblo Nuevo, calle de Padre las Casas cuyo solar donde se hallan las fabricas es a tributo cuyas sumas las pago a D. Félix Lanier como señor del dominio de esto.

Ítem.- Nombro por mi albacea tenedor de bienes a D. Juan Digat.

Ítem.- Nombro por mi único y universal heredera de todos cuantos bienes se reconocen como pertenencia a la morena Helena Arguindegui esclava de D. Salvador Arguindegui para que lo goce con la bendición de Dios.

Ítem.- Declaro que a nadie debo ni a mi tampoco me deben cosa alguna.

Y por el presente anulo y revoco cualquier testamento, codicilio, memoria o poder para otorgar que halla hecho que genero no valga, ni hagan fe, sólo el presente que mando se cumpla y ejecute como mi última voluntad. Yo, el presente escribano, certifico que el testador se halla en su entera memoria y entendimiento natural y que así lo dijo otorgo y no firma porque expresó no saber y lo hizo a su ruego uno de los testigos que lo fueron el Ldo. don Mariano Aguilar, D. Francisco Cortes y D. Guillermo Parné, vecinos y presentes.

Mariano Aguilar
Francisco Cortes
Guillermo Parné

Ante mí
Santiago M. Escarra

(*) ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIENFUEGOS, Protocolos Notariales, Protocolos notariales José Joaquín Verdaguer, año 1851, escritura n° 11 «Testamento», f. 5r-5v

Testamentos de ex esclavos

Un Testamento y su trasfondo en 1886 ()*

...compareció el moreno Eusebio Nornie-lla, sin segundo apellido, natural que expresa ser de África, vecino de esta villa, soltero, de cincuenta y ocho años de edad y agricultor [...] Que es dueño de una finca urbana, casa baja de madera y tejas [...] calle de la Amistad [...] un cuarto de solar equivalente a ciento noventa y cuatro metros lindante por derecha con casa [...] que antes perteneció a la morena Josefa Ribalta [...] y por la espalda con solar yermo del cabildo africano de la nación Lucumí [...] lo hubo por compra [...] que hizo á la citada morena Josefa Ribalta [...] el dos de julio de mil ochocientos sesenta y tres.

...ante mí [...] en su casa morada situada en la calle San Elías el moreno Eusebio Nornie-lla, sin segundo apellido, natural de África, soltero, mayor de edad y vecino de esta villa [...] dijo que encontrándose delicado de salud desea tener designadas las disposiciones de su última voluntad [...]

Segundo: Nombra por albacea de sus bienes en primer lugar a la morena María Pesant sin otro apellido y para los casos que no pueda serlo séalo José de los Santos Cobos, hijo de ésta.

Tercero: Nombra y señala por administradora de todos sus bienes a la citada morena María Pesant.

Cuarto: Declara ser soltero y no haber por consiguiente tenido hijos naturales ni legítimos; pero haber vivido muchos años maridablemente con la morena María Pesant quien le ha ayudado a reunir su pequeña fortuna.

Quinto: Declara por sus bienes un solar de veinte y siete varas de frente por cuarenta de fondo que adquirió de D. Julio Bidot, situada en la calle de San Elías con frente al oeste y lindando al norte con la morena Candelaria Lacene al sur con la parda Constancia Alfonso y al fondo o sea éste con el moreno Wenceslao Pesant [...] no firmó por no saber... [Tiene un pagaré a su favor de los Sres. Casas Aulet y Comp.^a en cantidad de 2.992 pesos].

...la Morena María Pesant, sin segundo apellido, vecina de esta villa, soltera, de cuarenta y cinco años de edad y de profesión campo [...] que fue declarada heredera del moreno Eusebio Nornie-lla [...] no firmó por que expuso no saber, haciéndolo a sus ruegos su hijo el moreno Santos Cobos [...] Por mi Señora Madre:

Santos Cobos... [Solicita que se le paguen las deudas de los pagarés].

(*) Sobre la compra de Josefa Ribalta, ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE VILLA CLARA, Protocolos Calixto María Casals y Valdés, Sagua la Grande, 1883, tomo 1 (enero-marzo), f. 29r.-30v., escritura 10: «Venta de finca urbana», Sagua, 10 de enero de 1883. Sobre el testamento de Eusebio Nornie-lla, ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE VILLA CLARA, Protocolos Calixto María Casals y Valdés, Sagua la Grande, 1886, tomo 2, f. 783r.-784v, escritura nº 197 «Testamento», Sagua, 26 de julio de 1886. Sobre la aceptación de la herencia por María Pesant, ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE VILLA CLARA, Protocolos Calixto María Casals y Valdés, Sagua la Grande, 1886, tomo 2, f. 997r.-998r., escritura nº 255: «Aceptación de herencia, esto es, recibo», Sagua, 21 de septiembre de 1886.

Derechos y honra públicos: Louis Martinet, Plessy contra Ferguson y el acceso a la ley en Luisiana, 1888-1917

REBECCA J. SCOTT

«Los ciudadanos de este estado... disfrutarán de los mismos derechos y privilegios civiles, políticos y públicos, y estarán sujetos a los mismos castigos y penas.»
Título I, art. II, Constitución de Luisiana de 1868

«Es bueno que el pueblo conozca sus derechos aun si se le niegan', y añadimos que es conveniente y sabio que las personas ejerzan dichos derechos con la mayor inteligencia posible, aun si se les despoja de sus beneficios.»
R. L. Desdunes, Daily Crusade (junio de 1895)

Un corto viaje en tren realizado en el verano de 1892 por el zapatero de Nueva Orleans Homère Plessy dio origen a una impresionante batalla legal, a la que siguió un fallo judicial emblemático¹. En *Plessy v. Ferguson* (1896), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos falló contra la reivindicación de Homère Plessy de su derecho a viajar en el vagón de primera clase del ferrocarril de Nueva Orleans a Covington, en Luisiana. Al hacerlo, el Tribunal ratificó la constitucionalidad de

la Separate Car Act promulgada en Luisiana en 1890, que les exigía a las compañías ferroviarias asignar a los viajeros blancos y negros vagones «iguales pero separados»². Cuando Plessy respondió «sí» a la pregunta del conductor: «¿Es usted un hombre de color?», éste se vio obligado por ley a ordenarle que abandonara el vagón, y Plessy quedó expuesto a un proceso penal por permanecer en su asiento. Merced al fallo del Tribunal Supremo, uno de los rasgos más distintivos del naciente

1. La autora desea expresar su agradecimiento a Silvia Frey, Mary Niall Mitchell, Lawrence Powell, Lester Sullivan, Marie Windell y el desaparecido Joseph Logsdon, todos de Nueva Orleans. Caryn Cossé Bell, Sueann Caulfield, Sherri Harper, Jean Hébrard y Martha Jones compartieron con ella generosamente su tiempo y le aportaron varias referencias históricas. Susanna Blumenthal, James Forman, Robert Gordon, Hendrik Hartog, Donald Herzog, Ellen Katz, Earl Lewis, Fernando Martínez Heredia, Johannes Massing, Sallyanne Payton, Esther Pérez, Richard Pildes, Richard Primus, Peter Railton, Daría Roithmayr y Michael Zeuske le brindaron su aliento para llevar a cabo esta indagación sobre los modos vernáculos de entender los derechos y la ley, aunque sólo ella es responsable de la línea de interpretación adoptada. El personal del Notarial Archive Research Center de Nueva Orleans le proporcionó una ayuda indispensable. Una versión previa de este artículo se debatió en el Taller de Historia Legal de la Facultad de Derecho de Columbia University en octubre del 2003. Los comentarios realizados durante esa sesión por Barbara Black, Paul Brand, Ariela Dubler, Katherine Franke, Alice Kessler-Harris, Richard Pildes, Deborah Malamud y John Witt le resultaron de suma utilidad.

2. 163 U.S. 537 (1896).

«orden racial» del periodo que siguió a la emancipación en el sur de los Estados Unidos —la segregación por ley en el transporte público— quedó instalado en la jurisprudencia de la nación.

El fallo final de *Plessy* aceptó la sentencia del Tribunal Supremo de Luisiana de que al ocupar un asiento en el vagón de primera clase, el querellante mostraba «una insistencia irrazonable en imponerle a una raza la compañía de la otra, sin un motivo adecuado»³. Ambos tribunales alegaron que la ciudadanía otorgada por la Decimocuarta Enmienda a la Constitución no constituía una base sobre la que se pudiera sustentar un reclamo al derecho a la «igualdad social» que afirmaban estaba implicado en las acciones de *Plessy*. Es más, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos insistió en que ninguna ley podía conferir dicha igualdad⁴. De ahí que fracasara la reivindicación de *Plessy* de que el estatuto en cuestión establecía «una distinción y una discriminación insidiosas sobre la base de la raza entre los ciudadanos de los Estados Unidos, que resultan ofensivas para los principios fundamentales de la ciudadanía nacional»⁵.

Precisamente porque vista en retrospectiva la decisión nos parece repulsiva y tan preñada de consecuencias, ocupa un lugar incómodo en el canon del derecho constitucional⁶. De hecho, parece tentar a los analistas del derecho constitucional a trasladar una parte del peso de sus aspectos más repulsivos al «contexto histórico». Al volverse al registro histórico para arrojar luz sobre el caso *Plessy*, los estudiosos del derecho han solido plantearse una serie de preguntas generales que, no obstante, se acercan bastante al lenguaje en que se formuló el voto de la mayoría: ¿Los autores de la Decimocuarta Enmienda se proponían realmente incluir la «igualdad social» y/o la integración racial como un componente de la ciudadanía? ¿Era quizás ya la segregación racial una norma bien establecida, y esto hacía de la decisión una mera formalidad? ¿Podía esperarse otro resultado de un Tribunal que funcionaba en el seno de una sociedad tan permeada por diversos tipos de racismo? ¿La mejor forma de caracterizar a los organizadores del caso *Plessy* es de «visionarios», tan adelantados a sus tiempos que sus esfuerzos resultaban quijotesco⁷?

3. Ex parte Homer A. *Plessy*, 45 La. Ann. 80 (1892) p. 951. La fundamentación del voto de la mayoría, firmada por el magistrado Charles E. Fenner, también está recogida en Otto H. OLSEN (ed.). *The thin disguise: turning point in negro history, Plessy v. Ferguson. A documentary presentation (1864-1896)*. Nueva York: Humanities Press, 1967, p. 71-74.

4. «[La Decimocuarta Enmienda] no puede haber tenido como intención abolir las diferencias que tienen como base el color de la piel, ni implantar la igualdad social, a diferencia de la política, ni una confusión de las dos razas en términos insatisfactorios para ambas.» 163 U.S. 537 (1896).

5. Ex parte Homer A. *Plessy*, 45 La. Ann. 80 (1892) p. 949.

6. Ver, por ejemplo, el título del capítulo «*Plessy, Alas*» (*Plessy*, qué desgracia). Owen M. FISS. *Troubled beginnings of the modern state, 1888-1910*. Nueva York: Macmillan Publishing Company, 1993.

7. William E. Nelson traza un cuadro matizado de las intenciones del Congreso, sobre la base de la complejidad de los debates y las maniobras en torno a la Enmienda, y llega a la conclusión de que «El Congreso de la Reconstrucción no resolvió la cuestión de si la Decimocuarta Enmienda permite o prohíbe la segregación...» Sostiene, por tanto, que al ratificar la segregación «los tribunales no fueron racistas», porque al tiempo que aceptaron las demandas de los blancos de «libertad de reunión», insistieron en la igualdad de las instalaciones. Véase William E. NELSON. *The fourteenth amendment: from political principle to judicial doctrine*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988, p. 187. El recuento histórico clásico, Charles A. LOFGREN. *The Plessy case: a legal-historical interpretation*. Nueva York: Oxford University Press, 1987, trata la decisión final como un resultado previsible de la doctrina y las circunstancias. Michael KLARMAN. «The *Plessy* era». En Hutchinson, Dennis J.; David A. Strauss; Geoffrey R. Stone (eds.). *The Supreme Court Review 1998*. Chicago: University of Chicago Press Journals Division, 1999, p. 303-414, adopta una variante muy marcada del punto de vista determinista, al plantear que el resultado de *Plessy* era inevitable dados el clima imperante y lo que apreciaba como la ausencia del movimiento social que habría resultado necesario para apoyar un fallo opuesto. Owen FISS caracteriza al abogado de *Plessy* como un visionario y un Don Quijote legal cuya «concepción de la ciudadanía»



Una discusión política. *Harper's Weekly* (1869).

Sin embargo, este tipo de indagaciones tiende a considerar la «historia» como una narrativa independiente, que debe explorarse por fuera del caso mismo, en busca de un

contexto histórico adecuado que pueda contribuir a determinar, paralelamente al análisis doctrinal, si la decisión «tenía que ser» la que fue, o si «verdaderamente» estableció una real

era «discutible», a la vez que afirma que el resultado del caso era como «una conclusión predeterminada» doctrinalmente. Ver: Owen FISS. *Troubled beginnings...* [7], p. 354, 357 y 362. Para un análisis cuidadoso del fallo, ver también Paul OBERST. «The strange career of *Plessy v. Ferguson*». *Arizona Law Review* (Tucson). 15 (1973-1974), p. 389-418.

diferencia. Ésta parece ser una manera innecesariamente pobre de pensar acerca de las relaciones entre las investigaciones históricas y el derecho. No obstante, la charca pantanosa del determinismo contra la contingencia tiene fama de honda, y por lo general es mejor dar un rodeo que hundirse en ella⁸. Pasado cierto punto, la mayoría de las cosas «tenían» que ser más o menos como fueron, pero esto de ningún modo quiere decir que estamos obligados a aceptar que los términos de la decisión real definen los parámetros más generales de lo posible en una sociedad dada. Además, invocar el «contexto histórico» más general para argüir que los fallos de los tribunales que dieron por resultado la denegación de derechos son en buena medida epifenoménicos parece curiosamente ahistórico: el derecho fue un componente absolutamente decisivo de la segregación formal, y ésa es la causa de que la batalla legal de Plessy concitara las energías de numerosos activistas durante seis largos años.

El diálogo entre los historiadores y los estudiosos del derecho es potencialmente productivo, precisamente porque el contexto histórico no es un paisaje, un telón de fondo o una fuerza externa que presiona sobre los eventos judiciales en un sentido o en otro. El contexto histórico supone interacciones entre una vasta red de actores, y un continuo ir y

venir entre el derecho y otras formas de acción, todas actuantes en el seno de estructuras de discurso compartidas y en pugna⁹. Conocer que la década de 1890 estaba signada por una profunda impronta de racismo, o que el Partido Republicano se tornaba más conservador, o que la «opinión pública» no respaldaba la «igualdad social», no nos dice en realidad qué se jugaban Homère Plessy, sus aliados y sus enemigos. La batalla legal promovida por el Citizens' Committee for the Annulment of the... Separate Car Law de Nueva Orleans, también conocido como el Comité des Citoyens, era en sí misma un acontecimiento creador de contexto que se sustentaba sobre un conjunto de prácticas públicas, valores compartidos y redes sociales cuya reconstrucción demanda considerable investigación. Rastrear esas ideas y prácticas puede contribuir a ubicar el caso en un «contexto histórico» más rico, poblado por pensadores y actores que partían de sus interpretaciones del pasado, y no por quijotes y visionarios¹⁰.

De igual importancia resulta el hecho de que los términos en los que el Tribunal Supremo decidió formular el asunto han tendido a eclipsar los términos conceptuales en los que ambas partes en pugna consideraban la cuestión en la que se encontraban envueltas. Todo estudioso de lo judicial concordará

8. John Witt fue quien llamó mi atención sobre la introducción de la metáfora del «ago Serbonio», que tiene su origen en el *Paraíso perdido* de John Milton, en el discurso legal merced al voto particular del magistrado Cardozo en *Landress v. Phoenix Mutual Life Ins. Co.*, 291 U.S. 491, 499 (1934). Ver John Fabian WITT. *The accidental republic: crippled workingmen, destitute widows, and the remaking of American law*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004, p. 20-21.

9. En ocasiones se emplea la expresión «mutuamente constitutivos» para denotar este ir y venir, en donde la distinción entre «el derecho» y «la sociedad» se difumina intencionalmente. Un elegante manifiesto en pro de una variante de ese enfoque es el de Robert GORDON. «Critical legal histories». *Stanford Law Review* (Stanford). 36 (1984), p. 57-125. Ver también los análisis realizados en el dossier sobre la historia y el derecho en *Annales* (Paris) 57 (2002), en especial Alain BOUREAU. «Droit naturel et abstraction judiciaire. Hypothèses sur la natural du droit médiéval», p. 1463-1488.

10. Para un acercamiento comparable a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en lo relativo al trabajo, ver la parte III del artículo de William E. FORBATH. «The ambiguities of free labor: labor and the law in the gilded age». *Wisconsin Law Review* (Madison). (1985), p. 767-817, en el cual el autor rastrea un proyecto nacido de la clase obrera para «redimir» la constitución de la república norteamericana en busca de una nueva visión de los derechos laborales.



Caricatura ridiculizando la participación de los negros en la legislatura de Carolina del Sur. *Harper's Weekly* (1874).

en que la formulación constitucional formal difiere de otras formas de razonamiento. Pero no siempre resulta claro cómo (y cuándo) se debe romper con la lógica del lenguaje en que se formulara el fallo. En el presente trabajo sostengo que la batalla legal de *Homère Plessy* era considerado por sus seguidores — y también por sus contrincantes, aunque sólo

después lo reconocieron— como un reclamo de *derechos públicos*. Para el Comité des Citoyens, «los derechos y privilegios públicos» eran sustantiva y simbólicamente emblemáticos de la dignidad igual de los ciudadanos en la esfera pública. No se trata meramente de un asunto de nombres o clasificaciones. El reclamo de honra pública, y su correlato de

derecho a la dignidad, debe distinguirse conceptualmente del reclamo a la igualdad social, sea como fuere que ésta se defina¹¹. Rastrear la idea de los derechos públicos, por tanto, nos permite entender la batalla legal librada por *Plessy* en su propio contexto, esto es, en Luisiana.

Esta línea de argumentación está relacionada con un aspecto doctrinal. La ideología de la supremacía blanca tomó mucha de su fuerza retórica del acto de prestidigitación mediante el cual los *derechos públicos* fueron redefinidos como *reclamos sociales*, y éstos, a su vez, asociados con la «igualdad social», con todo lo que esa frase podía evocar de fronteras inviolables, sexualidad y peligros de trasgresión¹². Persuadir al Tribunal de que participara en la omisión retórica clave de la ideología de la supremacía blanca fue quizás la victoria más trascendente del estado de

Luisiana en *Plessy*, tanto en el terreno del discurso como en el de la doctrina. La elección por parte del Tribunal de la formulación de la «igualdad social» ha hecho que los estudiosos a menudo emprendan el camino de tratar de diferenciar entre derechos civiles y sociales, empresa casi inútil¹³. Recuperar el concepto concurrente de derechos públicos, y rastrear su historia y su significado en Luisiana, nos permite ver cómo el concepto de la «igualdad social» ha impedido llevar a buen término investigaciones alternativas sobre las dimensiones de la dignidad en la ciudadanía¹⁴.

Analizar en este marco la batalla legal de *Plessy* no es, decididamente, un anacronismo, un mero artefacto de nuestra propia conciencia posterior a *Brown v. Board of Education*, el importantísimo fallo de 1954 que declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas públicas¹⁵. La declaración de

11. Para un sugerente análisis de la interacción entre honra pública y condición social en el pensamiento conservador británico después de la Revolución francesa, ver Don HERZOG. *Poisoning the minds of the lower orders*. Princeton: Princeton University Press, 1998, parte III. Una elegante explicación del contenido atinente a la dignidad del caso *Plessy*, desde el punto de vista de la filosofía política normativa y no de la historia, es la introducción de Gerald Postema a un número especial de *Law and Philosophy* de mayo de 1997. Postema plantea que la maldad visceral de la segregación reside en negar públicamente al individuo el bien fundamental de la «condición u honra de miembro pleno e igual de su sociedad» (p. 241). Ver: Gerald POSTEMA. «The sins of segregation». *Law and Philosophy* (Dordrecht, Boston). 16 (1997), p. 221-244.
12. Uno de los pocos observadores sureños blancos que se percató con claridad de ese acto de prestidigitación fue George Washington Cable, de Nueva Orleans. Véase: George Washington CABLE. «The silent South». En: Arlin Turner (ed.). *The Negro question: a selection of writings on civil rights in the South by George W. Cable*. Nueva York: W. W. Norton, 1958, p. 83-131 (publicado originalmente en 1885), citado por David BLIGHT. *Race and reunion: the Civil War in American memory*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2001, p. 295.
13. Entre los autores que analizan *Plessy* como un caso de «derechos sociales» están Brook THOMAS (ed.). *Plessy v. Ferguson. A brief history with documents*. Nueva York: Bedford Books, 1997, p. 13; y Michael KLARMAN, «The Plessy era» [8], p. 325 (diferenciando derechos civiles de derechos sociales en el caso de la integración escolar). Para demostraciones convincentes de que el triunvirato de los derechos civiles, políticos y sociales supone un continuo desplazamiento de fronteras, ver Mark TUSHNET. «The politics of equality in constitutional law: The equal protection clause, Dr. Du Bois, and Charles Hamilton Houston». *The Journal of American History* (Bloomington). 74 (1987), p. 884-903 y Richard PRIMUS. *The American language of rights*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
14. Richard Pildes ha llevado a cabo una tarea paralela en su trabajo sobre los casos de *Giles v. Harris* y *Giles v. Teasley*, en los que se evidencia un acto de prestidigitación similar en lo que toca a los derechos políticos y las «cuestiones políticas». Es sólo en la actualidad que los casos de *Giles* se están incorporando al canon constitucional, después de un largo periodo de tiempo en que fueron confinados al mismo cesto de la inevitabilidad que *Plessy*, aunque sin la notoriedad y el relieve de este último. Ver Richard H. PILDES. «Democracy, anti-Democracy, and the canon». *Constitutional Commentary* (Twin Cities). 17 (2000), p. 295-319.
15. Klarman considera culpables de anacronismo a la mayoría de las críticas al fallo en *Plessy*, porque «sería ilusorio esperar que los magistrados defendieran los derechos civiles de los negros en medio de actitudes y prácticas raciales tan abismales como las de fines de siglo». Ver Michael KLARMAN, «The Plessy era» [8], p. 304-5.



Rodolpho L. Desdunes, ilustración de *Nos hommes et notre histoire* (1911).

Derechos de la Constitución de Luisiana de 1868 les había concedido la condición de ciudadanos del estado a todos sus habitantes, con independencia de su raza, y les garantizaba a todos los ciudadanos «los mismos derechos y privilegios civiles, políticos y *públicos*»¹⁶. La elección de ese lenguaje no fue accidental, sino que reflejaba décadas de debates sostenidos por personas de color libres en Luisiana, vigorizados por las energías emancipadoras de la Guerra Civil. En 1892, cuando Plessy ocupó su asiento en el vagón de primera clase del ferrocarril, él y sus colegas ya habían ejercido

importantes derechos públicos en muchas esferas de la vida cotidiana de Nueva Orleans durante varias décadas, a pesar de que existieran prácticas de segregación impuestas de manera informal. Según ellos mismos expresaran, los organizadores de la batalla legal en pro de la impugnación de la Separate Car Act pusieron en juego sus identidades personales y políticas en el reclamo de igual dignidad pública, y concibieron el caso como un ensayo para tratar de subrayar de qué forma la Separate Car Act afrentaba esa dignidad, pues, a su juicio, «tenía el propósito de hacer nula la Decimocuarta Enmienda a la Constitución Federal, y subordinar la dignidad del ciudadano a la perfidia y el capricho de unos pocos tiranos y demagogos»¹⁷.

Asumir con seriedad el concepto de los derechos públicos nos permite indagar en *Plessy* en tres sentidos diferentes. Primero, como ya se ha dicho, nos ayuda a reconocer una construcción de derechos que era crucial para el querellante (*Plessy*) y sumamente inaceptable para el acusado (el estado de Luisiana). Segundo, contribuye a explicar la persistencia aparentemente quijotesca del Comité des Citoyens. Defender los derechos públicos ante la ley equivalía, en efecto, a otra manera de ejercerlos en la práctica. Incluso a medida que se alejaban las posibilidades de victoria, la campaña del Comité des Citoyens se mantuvo, ya que sus miembros y simpatizantes intentaban demostrar que los derechos que reclamaban les eran inherentes, fuera cual fuese el fallo judicial. Tercero, explorar el concepto de derechos públicos como encarnó en la batalla legal de *Plessy* nos conduce a toparnos con un

16. «Luisiana, Constitutional Convention 1867-68». En: *Official Journal of the Proceedings of the Convention for Framing a Constitution for the State of Louisiana*. Nueva Orleans: J.B. Roudanez and Co., 1867-68. El énfasis es mío.

17. Rodolphe Desdunes, en el *Crusader*, citado por Keith Weldon MEDLEY. *We as freemen: Plessy vs. Ferguson*. Gretna, Louisiana: Pelican Publishing Company, 2003, p. 167.

conjunto de sugerentes prácticas vernáculas de la escritura y el razonamiento legal. Como esas prácticas tenían lugar en sitios como la notaría pública local, han resultado invisibles para los radares usuales de los análisis de la jurisprudencia. Pero no hay dudas de que formaban parte de una cultura pública en la que el concepto de derechos públicos tenía sentido.

El nexa entre el famoso caso y esas prácticas cotidianas de la escritura es un individuo interesante: Louis A. Martinet, carpintero, notario público y organizador cardinal del Comité des Citoyens. La madre de Martinet era una mujer de color ex-esclava, nativa de Luisiana, y su padre era un carpintero inmigrante belga. Tras el fin de la Guerra Civil, Louis Martinet asistió a la Facultad de Derecho de Straight University, fue admitido en el foro, y una década después recibió el certificado que lo acreditaba como notario¹⁸. Por ley, el notario, cuyo deber era atender a todos los que solicitan sus servicios, ponía la escritura formal al alcance de la gente común, y estaba legalmente obligado a transcribir y guardar para referencias futuras el texto íntegro de la mayoría de los documentos que autentificaba¹⁹. En el caso de Louis A. Martinet, ello suponía crear un registro público de las transacciones realizadas por una vasta clientela multirracial.

Por tanto, poner por escrito los derechos mediante ese expediente no era cosa exclusiva de los activistas urbanos; era asunto de

importancia para miles de descendientes de africanos que residían en Luisiana y que tenían acceso al notario. Puede parecer difícil alimentar un movimiento de oposición centrado en derechos formales y demandas legales en una sociedad postesclavista en la cual un gran número de ex esclavos y sus descendientes no sabía leer y escribir. Pero mediante lo que Armando Petrucci denomina la «delegación de la escritura», las demandas orales de muchos miembros de la comunidad de los libres y los libertos comenzaban ya a transformarse, como cosa de rutina, en palabra escrita, gracias a los miembros de esa misma comunidad que poseían las habilidades necesarias para hacerlo, y que actuaban en nombre de quienes no las tenían. De ahí que los volúmenes que contienen la transcripción íntegra de los documentos que Louis A. Martinet autentificó en su condición de notario, y que abarcan el periodo entre 1888 y 1917, constituyan un registro extraordinario de reclamaciones y entendidos legales convertidos en públicos²⁰. Tanto el contenido de esas palabras como el acto de escribirlas se habían convertido en parte de un amplio reclamo general de dignidad pública.

Por tanto, para crear un «contexto histórico» dinámico para la batalla legal de Plessy, conviene tomar a Nueva Orleans como punto de partida. Desde esa notable ciudad portuaria, podemos mirar directamente a Francia y el Caribe, y también al derecho consuetudinario

18. Para información biográfica de Martinet, ver Keith Weldon MEDLEY. *We as freemen...* [18], p. 150-158, y la biografía inédita de Martinet preparada por Judy Bethea, copia en manos de Brian Martinet.

19. Para las regulaciones generales que reglamentaban las notarías y sus registros, ver los artículos 2.234 y 2.251-2.266, Luisiana, Joseph DAINOW (ed.). *Civil code of Louisiana. Revision of 1870 with amendments to 1947*. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1947.

20. Para el concepto de «delegación de la escritura», ver «Escribir para otros», en Armando PETRUCCI. *Alfabetismo, escritura, sociedad*. Barcelona: Gedisa, 1999, p. 105-116. Los ocho volúmenes de los registros de Martinet se conservan en el Notarial Archives Research Center de Nueva Orleans. Les agradezco a Sally Reeves y Howard Margot, del Notarial Archives Research Center de Nueva Orleans, su ayuda para la utilización de esos documentos.

inglés, en busca de las raíces de la idea de igualdad de derechos públicos. Después podemos ir andando hacia el centro de la ciudad, hasta Exchange Alley, para ver qué sucede en la notaría de Louis Martinet Esq. Una vez hecho esto, comprenderemos mejor por qué, para decirlo con palabras de Rodolphe Desdunes, el aliado de Martinet, el Comité des Citoyens trató, con el caso *Plessy*, de obligar al gobierno de los Estados Unidos a mostrar todas sus cartas, y lo hizo «actuando a través de una de sus ramas constitutivas», aun cuando el riesgo de perder el juicio se hacía cada vez mayor.²¹

Igualdad de derechos públicos

El concepto amplio de derechos públicos incluido en la Constitución de Luisiana de 1868, que abarcaba los derechos de los individuos privados en la esfera pública, parece haber tenido raíces múltiples. Para algunos de los legisladores de Luisiana del periodo de la Reconstrucción, entre ellos muchos hombres de color bilingües francófonos, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de Francia (1789) era un texto fundacional. Las afirmaciones contenidas en esa declaración sobre una comprensiva igualdad civil y amplias libertades eran una arremetida consciente contra las asignaciones diferenciadas de derechos y privilegios según

el nacimiento, el rango y las propiedades. Su embestida contra las distinciones de condición establecidas por ley era clara:

Artículo 6. La Ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en su elaboración, personalmente o por intermedio de sus representantes. Debe ser la misma para todos, sea que proteja o que castigue. Todos los ciudadanos, al ser iguales a sus ojos, podrán ser igualmente electos para todos los honores, cargos y empleos públicos [*toutes dignités, places et emplois publics*], según su capacidad, y sin otras distinciones que no sean las de su virtud y talento.

El artículo 6 no planteaba directamente la cuestión del acceso igual a los lugares y el transporte públicos, que se detallaría en la Constitución de Luisiana. Pero además de tener un contenido explícitamente político, captaba la dimensión de la dignidad de los derechos públicos, al declarar que todos los ciudadanos podían ser electos a cargos públicos²². De hecho, en Luisiana se produjo en 1872 una importante batalla política en torno a la nominación de Aristide Mary, un hombre de color, para el cargo de gobernador. Como enfatizara posteriormente Rodolphe Desdunes, lo que estaba en juego en ese caso no era una nominación específica, sino el *derecho* de un hombre como el propuesto a ser candidato a un cargo público²³.

21. Ver Rodolphe DESDUNES. *Nos hommes et notre histoire*. Montreal : Arbour & Dupont, 1911, pp. 192-194. En su texto utiliza una figura del lenguaje difícil de traducir: «Les tribuneaux, il est vrai, ont repoussé nos prétensions, mais grâce aux bons et loyaux offices de M. Bonseigneur, notre peuple a eu la satisfaction de pousser au pied du mur le gouvernement américain agissant par le ministère de l'une de ses branches constitutives».

22. Para un análisis de mediados del siglo XIX sobre la idea de los derechos públicos en Francia, ver Denis SERRIGNY. *Traité du droit public des français, précédé d'une introduction sur les fondements des sociétés politiques*. Paris: Joubert, 1846, I, p. 287-88. Serrigny propone una definición especializada de «igualdad social» (que comienza con «l'absence de castes qui parquent une partie des membres de l'Etat dans des ordres ou classes d'où il ne peuvent sortir»), que abarca un amplio conjunto de libertades básicas, que, en conjunto, constituyen una suma de «derechos públicos» absolutos e inherentes a todos.

23. Rodolphe DESDUNES. *Nos hommes...* [22], p. 183-184 («...je dirai que les partisans d'Aristide Mary ont revendiqué le droit d'aspirer au poste de gouverneur, mais qu'ils n'ont pas convoité le poste même.») El énfasis es del original.

La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano ubicaba los derechos en la naturaleza esencial de los seres humanos, pero en un sentido práctico tenía como objetivo crear un nuevo estado de cosas en la esfera pública, no describir el existente. A fines del siglo XVIII en Francia, como a fines del XIX en Nueva Orleans, la afirmación de que la dignidad de todos los hombres en la sociedad civil era la misma no constituía una descripción de la vida social cotidiana. Era, por el contrario, una enérgica declaración sobre el respeto que se debía dispensar a los ciudadanos en la esfera pública, y sobre el papel del Estado en la protección de los derechos básicos²⁴.

Cierto que la Francia revolucionaria había vacilado en lo relativo a la aplicabilidad de los Derechos del Hombre en las colonias, primero retrayéndose de extender la igualdad civil a los hombres de color libres, después concediéndola y consintiendo en la abolición de la esclavitud, para más tarde volver a imponer la esclavitud durante el reinado de Napoleón. En realidad, fue en las colonias donde se defendió de modo más insistente y

vívido la universalidad de los derechos del hombre, especialmente en St. Domingue (posteriormente Haití). Para los hombres y las mujeres de color de Nueva Orleans, muchos de los cuales sostenían vínculos estrechos con el Caribe, la ideología de los revolucionarios de color de Saint Domingue de la década de 1790, y del propio Toussaint Louverture, constituía una extensión y una ampliación claves del concepto original²⁵.

En 1868 el concepto de la igualdad de derechos públicos ya estaba íntimamente vinculado a la idea de una ciudadanía amplia e inclusiva. El reclamo formal de una ciudadanía estadounidense igual para las personas de color de Luisiana se remontaba al Tratado de Compra de Luisiana de 1803, cuyo artículo tercero les garantizaba a quienes habían permanecido bajo el dominio francés el acceso a todos los derechos y privilegios de que gozaban los ciudadanos de los Estados Unidos.²⁶ En esa época, el presidente Jefferson intentó ignorar esa promesa, y maniobró para derrotar los reclamos de ciudadanía de los hombres de color que prestaban servicio en las

24. En este punto la terminología resulta algo compleja. Incluido en los *droits de l'homme* se encuentra el concepto complementario de *libertés publiques*. Ver Denis SERRIGNY. *Traité du droit public des français...* [23] y Jean-Luc AUBERT. *Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil*. Paris: Armand Colin, 2002, section 56. De ahí que los «derechos del hombre» puedan incluir los «derechos públicos», o el derecho al disfrute de las «libertades públicas».

25. Sobre Francia y las Antillas, ver Laurent DUBOIS. *Les esclaves de la République: L'histoire oubliée de la première émancipation. 1789-1794*. Paris: Calman-Lévy, 1998 y su libro de próxima aparición sobre la revolución haitiana. Sobre Nueva Orleans, ver Caryn COSSÉ BELL. *Revolution, romanticism, and the Afro-Creole protest tradition in Louisiana, 1718-1868*. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1997. Rodolphe Desdunes, de padre haitiano y madre cubana, fue uno de los pensadores criollos de Nueva Orleans del periodo posterior a la Guerra Civil que insistió en una lectura lata de dichos derechos públicos y, en sus escritos en el *Crusader*, apeló repetidamente al ejemplo haitiano. Ver Joseph LOGSDON; Lawrence POWELL. «Rodolphe Lucien Desdunes: forgotten organizer of the Plessy protest». En: Samuel C. Hyde, Jr. (ed.). *Sunbelt revolution: the historical progression of the civil rights struggle in the Gulf South, 1866-2000*. Gainesville: University Press of Florida, 2003, p. 42-70; y la carpeta de recortes del *Crusader* en XAVIER UNIVERSITY LIBRARY (Nueva Orleans), Desdunes Family Collection, Special Collections.

26. El artículo III estipula lo siguiente:

«Los habitantes del territorio cedido se incorporarán a la Unión de los Estados Unidos y serán admitidos, tan pronto como resulte posible, y de acuerdo con los principios de la Constitución Federal, al disfrute de todos los derechos, ventajas e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos, y, hasta que eso ocurra, se les garantizará y se protegerá el libre disfrute de su libertad, sus propiedades y la religión que profesan».

El texto del Tratado está recogido en *Louisiana: Report of the Secretary of State to his Excellency W.W. Heard, Governor of the State of Louisiana, May 12th, 1902*, p. 45-48.

milicias. No obstante, años más tarde, el Tribunal Supremo de Luisiana dictaminó que «mediante el tratado por el cual se adquirió Luisiana, los habitantes de color libres de Luisiana fueron admitidos a la condición de ciudadanos de los Estados Unidos». Lo que estaba en juego en este último caso era el «derecho privado» de un hombre de color libre, en la época previa a la Guerra, a ser propietario de tierras, y no sus «derechos públicos». Pero la sentencia reflejaba la creencia de vieja data de los criollos de color libres de que se les habían prometido los derechos de los ciudadanos desde el momento mismo de la adquisición de Luisiana²⁷. Presentes, por así decirlo, desde el origen mismo, las personas de color podían reclamar que se les considerara miembros plenos de la sociedad civil y la esfera pública. Otros con más poder podían oponérseles con éxito, pero el alegato histórico en pro de ser tenidos por ciudadanos de la nación resonaba en varias generaciones de personas de color libres del estado, desde mucho antes de la redacción o ratificación de la Decimocuarta Enmienda²⁸.

Para los hombres y mujeres de color, que continuaron siguiendo los asuntos franceses al tiempo que luchaban por sus derechos en Luisiana, resultaba alentador que Francia hubiera retornado a la cuestión de la ciudadanía durante la Revolución de 1848. La



La naturaleza (1794).

República recién instalada, que redescubrió los Derechos del Hombre, abolió por segunda vez la esclavitud y extendió los derechos implícitos en la ciudadanía a los hombres, tanto en Francia como en las colonias, con independencia del color de su piel. Los sucesos de 1848 fueron festejados en Nueva Orleans, y varios europeos *quarante-huitards*

27. Caryn COSSÉ BELL. *Revolution, romanticism...* [26], p. 30-32. En *William Walsh v. Charles Lallande*, el Tribunal Supremo de Luisiana dictaminaba sobre el reclamo retrospectivo de ciudadanía de Charles Lallande, quien había perdido la posesión de unas propiedades en 1860 cuando un funcionario del catastro juzgó que en tanto «negro libre» no tenía derecho a ser propietario de terrenos afectados por las *pre-emption laws* de 1841. Ver no. 4526, *William Walsh v. Charles Lallande*, en *Reports of Cases Argued and Determined in the Supreme Court of Louisiana* 25. Nueva Orleans: Printed at the Republican Office, 1873, p. 188-189. El lenguaje en que está formulado el caso es, entre otras cosas, una deliciosa refutación técnica del dictamen del jefe del Tribunal Supremo Taney en el fallo de Dred Scott de que los individuos de color nunca habían sido acreedores a la condición de ciudadanos de la nación en la era de los padres fundadores.

28. Ver Caryn COSSÉ BELL. *Revolution, romanticism...* [26]. Sobre las instituciones educacionales que contribuyeron a alimentar esos reclamos de derechos, ver Mary Niall MITCHELL. «A good and delicious country': free children of color and how they learned to imagine the Atlantic world in nineteenth-century Louisiana». *History of Education Quarterly* (New York). 4/2 (2000), p. 123-144.

exiliados se asentaron posteriormente en esa ciudad, entre ellos el notable Jean Charles Houzeau, de Bélgica²⁹. Para esos revolucionarios conscientes de serlo y sus aliados locales, invocar la igualdad de «derechos civiles, políticos y públicos» era algo natural. Por el contrario, se percataban fácilmente de que la expresión «igualdad social» era una especie de jergonza, una maniobra diversionista creada por sus enemigos con el propósito de fusionar la vida pública con la intimidad privada³⁰.

Por otra parte, el concepto de la igualdad de derechos públicos no era meramente una importación de Francia y el Caribe. Contaba con una robusta tradición en el derecho consuetudinario anglo-norteamericano, en la idea del «deber de servir» implícita en la prestación de un servicio al público. De esta forma, por ejemplo, en los caminos reales no se podía negar un servicio a los súbditos del rey que pasaran por allí. Bajo esa forma, el «deber de servir» se preservó en la legislación que regulaba los ferrocarriles y los servicios públicos, y en la tradición del derecho consuetudinario que reglamentaba el funcionamiento de las posadas³¹. No obstante, guardaba ciertas diferencias

con la idea de «libertades públicas» del léxico francés. La variante anglo-norteamericana del derecho consuetudinario se expresaba como un «deber» de quien prestaba el servicio, al que hacía vulnerable a una acusación de «perjuicio privado» y a un juicio por daños si no lo cumplía. Aunque estaba implícita la ofensa al honor manifiesta en la negación a prestar el servicio, la transacción misma no estaba construida en términos de una «igualdad de derechos» de los individuos, inherente a la dignidad humana de los ciudadanos. Pero la convergencia en la práctica de los dos conceptos significaba que para la coalición multi-racial francófona/anglófona que se reunió para redactar la Constitución de Luisiana de 1868, un concepto de ciudadanía en el cual cada ciudadano tenía los mismos «derechos públicos» era a la vez inteligible y coherente. La nueva Constitución apuntaba a eliminar las denigrantes diferencias establecidas sobre la base del color de la piel que habían plagado el Código Civil y la legislación subsiguiente; era una herramienta para alcanzar ese fin.

Por tanto, ubicar los «derechos públicos» en el mismo centro de la Declaración de

29. Sobre la ideología de 1848, ver Maurice AGULHON. *Les Quarante-Huitards*. Paris: Gallimard, 1992. Cuando las fuerzas del Ejército de la Unión ocuparon Nueva Orleans durante la Guerra Civil, Houzeau se unió a un grupo muy politizado de hombres de color para editar el *Tribune* de Nueva Orleans. Sobre Houzeau, ver Caryn COSSE BELL. *Revolution, romanticism...* [26], p. 227; y Jean Charles HOUZEAU. *My passage at the New Orleans Tribune: a memoir of the Civil War era*. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1984.

30. No obstante, los activistas de Nueva Orleans fueron uno de los grupos relativamente escasos que se negaron a dejarse intimidar por los sentidos alusivos a la sexualidad de la frase «igualdad social». Argumentaron que allí donde las relaciones sexuales entre individuos de diferentes colores eran una realidad, el matrimonio resultaba esencial para que las mujeres integrantes de esas uniones no se vieran automáticamente privadas de honra y herencia. Ver Rodolphe DESDUNES. *Nos hommes...* [22], p. 168, 189-90.

31. La formulación clásica se encuentra en el capítulo 9, libro 3, de los *Commentaries* de Blackstone: «si un posadero u otro hostelero cuelga un reclamo y abre su casa a los viajeros, adquiere el compromiso implícito de acoger a todos los que pasen por el lugar...». Véase William BLACKSTONE. *Commentaries on the laws of England*. Dublin: Printed for John Exshaw, Henry Saunders, Samuel Watson, and James Williams, 1766-1770. Ver también Barbara Young WELKE. *Recasting American liberty: gender, race, law, and the railroad revolution, 1865-1920*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, cap. 9. Le agradezco a Sallyanne Payton haber subrayado la importancia del «deber de servir». Ver Sallyanne PAYTON. «The duty of a public utility to serve in the presence of new competition». En: Werner Sichel; Thomas G. Gies. *Applications of economic principles in public utility industries*. Ann Arbor: Division of Research, Graduate School of Business Administration, The University of Michigan, 1981.

Derechos de Luisiana de 1868 amplió su resonancia más allá de la tradición del derecho consuetudinario y le brindó una garantía estatal al pasajero o cliente potencial. Además, en el contexto del muy serio esfuerzo llevado a cabo por los partidarios de la supremacía blanca para volver a imponer restricciones que la guerra y el fin de la esclavitud habían relajado, esa Declaración de Derechos cumplía el propósito de ratificar una porción clave del legado «emancipador» de la Guerra Civil³². Y también completaba la idea de la igualdad de derechos como parte de la ciudadanía *estatal*, algo de suma importancia dada la definición ambigua e insuficiente de la ciudadanía nacional recogida en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución federal (1868)³³.

El contenido preciso de esos «derechos y privilegios públicos» no se especificaba. Pero el artículo XIII de la Constitución de Luisiana de 1868 contribuía a aclarar una de las dimensiones de los mismos al estipular que todas las personas «disfrutarán de derechos y privilegios iguales en cualquier prestación de carácter público». Y seguía especificando que «todos los lugares dedicados a los negocios o a la recreación pública, o para los cuales se requiere una licencia de las autoridades del Estado, la demarcación o el municipio, se considerarán lugares de carácter público, y cualquier persona, sin distinción o discriminación por motivos de raza o color de la piel, podrá asistir a ellos o ser cliente de los mismos»³⁴. El concepto medular, por tanto, parece claro: ni el Estado ni los poseedores de



Sois libres y ciudadanos. Grabado de P. Rouvier en *La Cause des Nègres* (1788).

licencias especiales concedidas por él establecerían diferencias por motivos de raza en la prestación de servicios al público.

Durante la década siguiente, el Tribunal Supremo de Luisiana falló repetidamente a favor de querellantes que promovieron juicios a causa de que se les negaran servicios o fueran enviados a lugares reservados para «personas de color». Entre esos casos estuvieron los de una mujer a quien se le impidió el

32. Un rastreo reciente y detallado del hilo «emancipador» que recorre el pensamiento posterior a la Guerra Civil es el de David BLIGHT. *Race and reunion...* [13].

33. Sobre las vicisitudes para la formulación de la Decimocuarta Enmienda, ver William E. NELSON. *The fourteenth amendment...* [8], cap. 3.

34. *Official Journal...* [17], p. 294.

acceso igual al camarote de un vapor, y el de un alguacil negro a quien se le negó el servicio en una taberna de Nueva Orleans. Por lo general, los querellantes enfatizaban el aspecto de la dignidad contenido en el ejercicio de los derechos públicos, al referirse a la vergüenza que les ocasionara la negativa, o a la «indignidad» de que se les rehusara públicamente la prestación de un servicio por motivo del color de su piel³⁵.

Sin embargo, esa década de jurisprudencia favorable llegó a un fin abrupto en 1877, con la retirada del gobierno federal de la Reconstrucción. Los partidarios de la supremacía blanca de Luisiana asumieron el control del Estado por intermedio del Partido Demócrata y se deshicieron de los magistrados que hasta ese momento se habían desempeñado en el Tribunal Supremo. Se redactó y ratificó una nueva constitución, en la que la frase «derechos civiles, políticos y públicos» ya no aparecía. No obstante, la Constitución de 1879 aún mantenía la neutralidad formal en lo relativo a la raza, y en principio no negaba el principio de la igualdad de derechos públicos, aunque el principio de la segregación racial en las escuelas había hecho una discreta aparición vía la

asignación de fondos para una universidad exclusiva para negros³⁶.

En la práctica, se multiplicaron las arremetidas contra los hombres y las mujeres de color en la esfera pública, y los tribunales del Estado se negaban ahora a conceder apelaciones en demanda de reparaciones o de indemnizaciones por daños. Aun así, la lucha en pro de una voz pública continuó, tanto en la ciudad como en el campo. La retirada del apoyo federal a los republicanos y a los ciudadanos de color de Luisiana no significó que éstos dejaran de manifestar sus opiniones, y la negativa de los tribunales a apoyar sus derechos públicos no les impidió actuar en público como portadores de dichos derechos. Lo cierto es que algunos ejercieron los derechos de expresión y asociación pública con renovado vigor. Activistas de la localidad como el herrero Pierre Carmouche, de Donaldsonville, y el maestro Junius Bailey, de Thibodaux, volcaron sus capacidades hacia tareas organizativas de los Caballeros del Trabajo (Knights of Labor) y la redacción de comunicados colectivos dirigidos a la organización de los plantadores de azúcar. A fines de noviembre de 1887, una enorme huelga sacudió los campos de caña de azúcar. El

35. Ver *DeCuir v. Benson*, 27 La. Ann. 1 (1875) (ratificando la decisión de un tribunal de distrito de concederle una indemnización por daños a una mujer a quien se le negara el acceso a un camarote y al comedor «sólo para blancos» tras abordar un vapor); *Sauvinet v. Walker*, 27 La. Ann. 14 (1875) (ratificando la concesión hecha por un tribunal distrital de una indemnización por daños al alguacil civil de la demarcación de Orleans a quien se le negara la prestación de servicios en una cafetería); y *Peter Joseph v. Daniel Bidwell*, 28 La. Ann. 382 (ratificando el fallo de conceder una indemnización por daños a un hombre a quien se le negara la entrada a un teatro). Irónicamente, *DeCuir v. Benson* fue revocado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en *Hall v. DeCuir* 95 US 485 (1878), sobre la base de que se trataba de intercambio interestatal, un asunto de la Constitución Federal, con lo que se invalidó un estatuto de Luisiana que establecía que en los transportes colectivos no se podía discriminar por motivos de raza. Ver Owen Fiss. *Troubled beginnings...* [7], p. 354-6, para el papel que más tarde desempeñó la fundamentación del intercambio interestatal en lo referido a la Separate Car Act.

36. Ver *Constitution of the state of Louisiana adopted in convention at the city of New Orleans the twenty-third day of July A.D. 1879*. Baton Rouge: The Advocate, 1894. Rodolphe Desdunes se sintió indignado de que los pocos legisladores negros que aún restaban hubieran aceptado el ofrecimiento de una universidad aparte: «C'était la fin. L'homme de couleur avait accepté la subordination légale, c'est-à-dire l'idée d'être traité *conventionnellement* et non *constitutionnellement*.» Rodolphe DESDUNES. *Nos hommes...* [22], p. 181.

gobernador la aplastó movilizándolo a las milicias —ahora integradas exclusivamente por blancos— para obligar a los trabajadores a salir de sus hogares, y se organizaron grupos de vigilantes voluntarios para enfrentarlos cuando se refugiaban en los pueblos³⁷.

La delegación de la escritura

Fue en medio de ese tenso clima posterior a la Reconstrucción que Louis Martinet, hijo de una ex esclava, abrió su notaría pública en Exchange Alley, en el distrito comercial de Nueva Orleans. Los sistemas legales de Francia y España le habían atribuido desde largo tiempo atrás un papel central en el derecho privado al practicante de la ley conocido como *notaire* (escribano, en español), y el estado de Louisiana había preservado la mayoría de los aspectos de ese papel incluso después de alcanzada la condición de estado. Encargado de formalizar y registrar los arreglos consensuales, el notario era una figura clave en la rama del derecho privado calificada de «no contenciosa», ya que autentificaba textos y confería fuerza de ley a sus estipulaciones, sin necesidad de que actuara un tribunal. También se podía apelar a las actas notariales en los tribunales, si el asunto en cuestión se desplazaba al terreno de lo «contencioso»³⁸.

Para nuestros propósitos, es el carácter plural y público de la notaría lo que le confiere una particular importancia. El fin de la esclavitud y la ratificación de la Decimotercera y la Decimocuarta Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos dejaron en claro que los ex esclavos, sus descendientes y

otras personas de ascendencia africana tendrían ahora, inequívocamente, una personalidad jurídica, al convertirse en sujetos de derecho y dejar de ser objetos en las transacciones sobre propiedad. Pero en la década de 1880, la restauración de la supremacía blanca en Luisiana avanzaba a pasos agigantados. Si en teoría la capacidad jurídica de las personas de color era igual a la de los demás ciudadanos, en la práctica los primeros a menudo enfrentaban una gran hostilidad en los tribunales. Sin embargo, la notaría seguía siendo un lugar donde se podía invocar algunos de los beneficios de la ley, lejos de las miradas de los jurados y la magistratura.

Cuando en 1864 el jefe militar de la Unión que ocupara la ciudad de Nueva Orleans proclamó que todas las leyes relativas a la esclavitud en Luisiana eran, a partir de ese momento, «nulas y sin efecto», Louis A. Martinet tenía quince años de edad. Como joven activista republicano durante el periodo de la Reconstrucción, representó a la demarcación de St. Martin en la Cámara de Representantes del estado de Luisiana desde 1872 hasta el 20 de abril de 1875. Tras asistir a la facultad de derecho de Straight University, en Nueva Orleans, fue aceptado en el foro el 18 de diciembre de 1875 y comenzó a la practicar la profesión en el Tribunal del Distrito Este de los Estados Unidos. Pero el derrumbe de la Reconstrucción fue un duro golpe para sus ambiciones políticas, y se vio obligado a batallar en busca de una estrategia política y profesional que le garantizara el futuro. Para su posterior sonrojo, renunció por un breve periodo de tiempo al Partido Republicano y

37. Ver Rebecca J. SCOTT «Stubborn and Disposed to Stand their Ground': Black Militia, Sugar Workers, and the Dynamics of Collective Action in the Louisiana Sugar Bowl, 1863-1887». *Slavery and Abolition* (Londres). 20 (1999), p. 103-126.

38. Jean-Luc AUBERT. *Introduction au droit...* [26], sección 179, sobre el notario como funcionario público.



Los mortales son iguales, es la virtud la que hace la diferencia (1791). Biblioteca Nacional de Francia.

aceptó editar un periódico demócrata, con la idea de fortalecer el ala moderada de ese partido. Pero cuando el partido se lanzó a una campaña abierta en pro de la supremacía blanca, sufrió un revés personal y político. Amargado, se apresuró a regresar junto a los republicanos, y en febrero de 1889 fundó el semanario *The Crusader*³⁹.

Abrir su notaría en 1888 le permitía a Martinet ganarse la vida y participar en la formalización de muchas de las iniciativas

individuales y colectivas que surgían en la compleja comunidad de las personas de color de Nueva Orleans. De hecho, el alcance de su actividad se extendía desde el centro de la ciudad de Nueva Orleans hasta la vivaz comunidad multirracial de Faubourg Tremé, donde residían sus colegas, el zapatero Homère Plessy, y el maestro y vendedor de cigarros Rodolphe Desdunes⁴⁰. Y también llegaba al campo. Tradicionalmente, los habitantes de las zonas rurales que poseían

39. Su admisión en el foro está registrada en el Libro de Actas (Minute Book), vol. XXI, p. 407. Le agradezco esta información a Marie Windell, del Archivo del Tribunal Supremo de Luisiana. Los demás datos biográficos son de Keith Weldon MEDLEY. *We as Freeman...* [18]; y de la carta de Martinet a Albion Tourgée, del 5 de octubre de 1891, citada en Otto H. OLSEN (ed.). *The thin disguise...* [4], p. 55-60.

40. Ver Keith Weldon MEDLEY. *We as Freeman...* [18], p. 33, 159, sobre los lugares de residencia de Plessy y Desdunes.

propiedades y prestigio habían llevado buena parte de sus asuntos notariales a Nueva Orleans. Ahora, algunos de los que sólo recientemente habían accedido al disfrute de sus derechos harían lo mismo.

El uso del notario no requería saber leer y escribir. La costumbre dictaba que la función del notario era precisamente proveer la palabra escrita y formalizar lo que previamente fueran arreglos orales. Como ha expresado Kathryn Burns, el notario vierte significado en los moldes que proporcionan la ley, el precedente y los manuales, redactando así textos que satisfacen las necesidades de sus clientes⁴¹. Para los clientes de Martinet, esas necesidades incluían los familiares documentos formales que oficializaban las transacciones sobre propiedades, establecían y cancelaban hipotecas y otros préstamos, y disponían de herencias por testamento. El notario era también la persona que formalizaba una «reunión familiar» y emitía un poder. No obstante, uno de los documentos más frecuentes y reveladores era el acta de constitución de sociedades de ayuda mutua. Esos elaborados textos hacían formal reconocimiento de la existencia de diversas instancias de solidaridad horizontal, incluidas las que vinculaban a ex esclavos y personas de color que fueran previamente libres.

El 3 de octubre de 1890, tres meses después de la aprobación de la Separate Car Act, un grupo integrado por ocho mujeres se presentó ante Martinet para certificar un

documento ante notario. Sus apellidos eran Lanabère, Frédéric, Carme, Diard, García y Caivou, y querían que el documento se redactara en francés. Deseaban constituirse legalmente como sociedad de ayuda mutua con el nombre de «La Dignité». Se comprometían a prestarles asistencia médica a los miembros, y cuando ello fuera necesario, proveer los funerales y el entierro. Cada una de las ocho mujeres firmó con su nombre. El reglamento era de rutina: estipulaba los requisitos para la convocatoria a reuniones y la elección de funcionarios. Lo que más llama la atención es la imagen de su emblema de cobre, que utilizarían para estampar en todos sus documentos subsiguientes la palabra «Dignité»⁴². La palabra misma revela una preocupación por la dignidad propia en la presencia pública, al igual que en la enfermedad y la muerte. Resuena también con los ecos de una de las palabras claves de la revolución de 1848 en Francia⁴³.

Al año siguiente, de modo similar, siete hombres constituyeron la «Determination Protective Association». Los objetivos eran los clásicos: «llevar a cabo actos y obras de ayuda mutua, caridad y beneficencia». En esta ocasión el idioma era el inglés, y cuatro de los siete hombres estamparon una «X» y no su firma. También en este caso resalta el nombre del grupo, ya que eligieron «La Determinación» como su cualidad distintiva⁴⁴. La «Milneburg Benevolent Association», de nombre más sencillo, revelaba la canalización de las energías organizativas hacia estas asociaciones de

41. Ver Kathryn Burns, «Notaries, Truth, and Consequences», de próxima aparición.

42. NOTARIAL ARCHIVES RESEARCH CENTER (Nueva Orleans), Notarial Acts of Louis Martinet, Acta no. 6, 3 de octubre de 1890: «Société d'Assistance Mutuelle, Charte, «La Dignité»».

43. Un texto didáctico de 1848 en Francia subrayaba que «une République est l'état qui concilie le mieux les intérêts et la dignité de chacun avec les intérêts et la dignité de tout le monde.» Ver Charles RENOUVIER. *Manuel Républicain de l'homme et du citoyen. 1848*. Paris: Éditions Garnier Frères, 1981, p. 93, introducción de Maurice Agulhon.

44. NOTARIAL ARCHIVES RESEARCH CENTER (Nueva Orleans), Notarial Acts of Louis Martinet, Acta nº. 20, 10 de octubre de 1891: «Act of Incorporation of the Determination Protective Association».



Escuela para los ex-esclavos en Mississippi, *Harper's Weekly* (1866).

ayuda mutua, ya que contaba entre sus miembros con el activista laboral y médico George H. Nelson, junto al analfabeto March Rambert y su esposa Alexzina Belfield. Como testigo del documento fungió Anatole Panalle, quien veinte años antes fuera oficial de las milicias negras en las demarcaciones azucareras⁴⁵.

Los servicios notariales de Louis Martinet les brindaban a los hombres y mujeres de color, tanto analfabetos como alfabetizados, un medio para transformar los acuerdos informales en compromisos formales, cuando se

reunían oficialmente para certificar en un documento su intención de «adquirir y disfrutar los derechos y ventajas de una Asociación u órgano público legal». Al reconocer el compromiso que unía a sus miembros, al tiempo que invocaban conceptos como los de «Dignidad» y «Determinación», esta red de amigos y vecinos expresaba su sentido de los derechos y reclamos que les eran inherentes, y su capacidad para reivindicar los derechos y privilegios otorgados por las leyes del estado de Luisiana a las organizaciones de caridad. Y lo hacían enfáticamente en público: cada una de las palabras, reglamentaciones y «marcas personales» quedaban escritas con tinta en el volumen que se conservaría en la notaría de Martinet como registro permanente.

La cultura pública transracial encarnada en la práctica notarial de Martinet y en la propia vida pública de este notario, equivalía a un baluarte contra los fines exclusivistas del sector más agresivo de los partidarios de la supremacía blanca agrupados en el Partido Demócrata de Luisiana. Merced a un complejo conjunto de maniobras, esos demócratas propusieron y lograron que la legislatura de Luisiana aprobara el 10 de julio de 1890 la Separate Car Act que hacía obligatoria la separación de los pasajeros de los ferrocarriles según el color de su piel, y que preveía sanciones penales para quienes se negaran a cumplir las órdenes de los conductores. En septiembre de 1891, la comunidad de activistas que se nucleaba en torno a

45. NOTARIAL ARCHIVES RESEARCH CENTER (Nueva Orleans), Notarial Acts of Louis Martinet, 21 de julio de 1896: «Act of Incorporation of the Milneburg Benevolent Association». Con poquísimas excepciones, Martinet y sus clientes se abstendían de hacer referencia al color de la piel en estas actas notariales, lo que era coherente con su intransigente rechazo a los sistemas de castas. Nelson se identifica como médico en documentos posteriores, y prestó servicios en una unidad integrada por afronorteamericanos que participó en la ocupación militar de Cuba después de la guerra de los Estados Unidos contra España. Ver Rebecca SCOTT. «Reclamar la ciudadanía imponiendo el imperio: La misión ambigua de los voluntarios negros del Noveno Regimiento de Infantería estadounidense en San Luis, Santiago de Cuba, 1898-99». *Del Caribe* (Santiago de Cuba). 37 (2002), p. 22-27. Sobre Panalle y la milicia, ver Rebecca J. SCOTT «Stubborn and Disposed...» [38].

Martinet y Desdunes llamó a la creación de un Comité de Ciudadanos para la Anulación de la... Ley de Carros Segregados, y eligió como su presidente al fabricante de velas Arthur Esteves. A nombre del Comité, Martinet se dirigió al distinguido abogado del norte Albion Tourgée para preparar una primera batalla legal contra esa ley.

Por un acuerdo tomado previamente, el 24 de febrero de 1892 Daniel Desdunes, hijo de Rodolphe Desdunes, intentó ocupar un asiento en un vagón «sólo para blancos» del ferrocarril, con la intención de viajar de Nueva Orleans a Mobile, Alabama, esto es, realizar un viaje interestatal. Fue arrestado, conducido a la comisaría y acusado. A continuación, el 7 de junio, para comprobar las dimensiones intraestatales de la acción, Homère Plessy se dispuso a viajar de Nueva Orleans a Covington, ambos en Luisiana. El también resultó arrestado, conducido a la comisaría y acusado⁴⁶. En cada una de las etapas, Martinet y su colega Rodolphe Desdunes apelaron a sus capacidades legales, de oratoria y de redacción, y explicaron sus acciones en el *Crusader*. A los pocos meses, el comité ganó el caso inicial cuando el Tribunal Supremo de Luisiana invalidó la ley en lo relativo a los viajes interestatales, citando el monopolio federal del derecho a regular el intercambio interestatal⁴⁷. El Comité entonces se aprestó a enfrentar obstáculos mayores en el caso Plessy.

Vistos a esta luz, los clientes de la notaría de Martinet se nos presentan como la amplia base de un proceso de establecimiento de

reclamos del cual la batalla legal de Plessy formaba parte integral, pero que abarcaba un rango mucho mayor de acciones públicas. El mero hecho de acudir al notario constituía un ejercicio de libertad cívica, que encarnaba tanto la igualdad formal ante la ley como el reclamo implícito de honra que se derivaba de transformar los acuerdos orales en textos legalmente vinculantes. Este empeño, que se desplegaba desde Nueva Orleans hacia los campos circundantes, con ocasionales incursiones al otro lado de los mares, estaba encaminado a garantizar que no se perdiera la presencia digna de las personas de color en el espacio público y en la «ciudad letrada»⁴⁸.

Las redes y grupos solidarios así registrados subyacerían y reforzarían la propia batalla legal de Plessy. Muchas de esas organizaciones y sus contrapartes en el campo realizaron contribuciones a lo que se llamó «la alcancía del señor Desdunes» (Mr. Desdunes' stocking), esto es, los fondos destinados a sostener *The Crusader* y el proceso legal. La maestra Alice E. Hampton, que enseñaba en la Donaldsonville Academy, ubicada río arriba, en la demarcación de Ascension, donó 50 centavos en julio de 1895, que se sumaron a las monedas de 10 y 25 centavos recogidas entre docenas de mujeres jóvenes, a pesar de que «hacía tanto calor al ir y venir de la escuela cada día», que le había resultado difícil cumplir «su deber a cabalidad». Su vecino Pierre Carmouche, el herrero y antiguo organizador de los Caballeros del Trabajo, hizo lo mismo, y recogió donaciones

46. La reconstrucción más completa de estos sucesos se encuentra en Keith Weldon MEDLEY. *We as Freeman...* [18].

47. El fallo del Tribunal Supremo se produjo en un caso promovido por las compañías ferrocarrileras, *State ex. rel. Abbot v. Hicks*, Judge, et al. La. Ann. 770, que el magistrado Ferguson aplicó entonces al caso Desdunes.

48. La expresión, muy conocida, es de Ángel RAMA. Ver análisis de variantes, traducciones y sentidos alusivos de la misma en la introducción a Ángel RAMA. *The lettered city*. Durham: Duke University Press, 1996 p. VII. Traducción John Charles Chasteen.

de sus colegas de la sociedad de ayuda mutua «True Friends»⁴⁹.

Ganar y perder el derecho a tener derechos

La historia del final del caso *Plessy* en 1896 ha sido contada muchas veces. El abogado principal del Comité, Albion Tourgée, redactó una defensa comprensiva en la que desarrollaba múltiples argumentos, desde la alegación, al amparo de la Decimotercera Enmienda, de que al invocar el color de la piel la Separate Car Act imponía un inaceptable «estigma» esclavista, hasta la ingeniosa afirmación de que al hacer juicios rápidos sobre la raza de los pasajeros, los conductores de los ferrocarriles podían privar a algunos de ellos, sin el debido proceso, del legítimo interés que les representaba su reputación de blancos⁵⁰. No obstante, el otorgamiento de ciudadanía contenido en la Decimocuarta Enmienda era el centro del caso, y Tourgée alegó que los derechos en cuestión eran parte integrante de dicha ciudadanía: «La esencia fundamental de toda ciudadanía es la *igualdad* del derecho personal y el *libre* y seguro disfrute de todos los privilegios públicos. Ésa es la esencia misma de la ciudadanía en todos los gobiernos libres»⁵¹.

Tourgée también tocó el espectro de las castas, que había inquietado a Desdunes y Martinet desde el mismo principio. Lejos de reclamar privilegios especiales como ochavones o descendientes de familias de color



Celebración de la abolición de la esclavitud, *Harper's Weekly* (1866).

libres desde la época de preguerra, los activistas del caso *Plessy* se plantaron en el terreno de la igualdad: «Una ley que discrimine entre los ciudadanos de un estado en lo relativo al disfrute de un privilegio público sobre la base de la raza resulta ofensiva para el espíritu de las instituciones republicanas, porque constituye una legalización de las castas. La esclavitud era la esencia misma de las castas; el clímax de la desigualdad de condiciones.» Nadando vigorosamente a contracorriente de una serie de fallos del tribunal

49. Ver los recortes del *Crusader* en XAVIER UNIVERSITY LIBRARY (Nueva Orleans), Desdunes Family Collection, Special Collections Carpeta 1/38, ca. 12-20 de julio de 1895; y el número fechado el 22 de junio de 189. Ver también el análisis en Keith Weldon MEDLEY. *We as Freemen...* [18], p. 130-131.

50. Un análisis reciente y persuasivo de la defensa de Tourgée es el de Mark ELLIOT. «Race, color blindness, and the democratic public: Albion W. Tourgée's radical principles in *Plessy v. Ferguson*». *The Journal of Southern History* (Baton Rouge). 67 (2001), p. 287-330.

51. Philip B. KURLAND; Gerhard CASPER (eds.). *Landmark briefs and arguments of the Supreme Court of the United States: Constitutional Law*. Arlington, Virginia: University Publications of America, 1975, vol. 13, p. 41.

que habían interpretado como privadas diversas acciones discriminatorias, los querellantes llamaron la atención sobre el «insulto» y la indignidad intencionados y sancionados por el estado que suponía la Separate Car Act. El prejuicio privado era una cosa; esta ley era otra: «no le compete a un estatuto darle fuerza de ley a meras desigualdades sociales sustentadas en el color de la piel»⁵².

En la resonante explicación de su voto particular, el magistrado Harlan comenzó por señalar que el ferrocarril es una vía pública, y que la compañía ferroviaria realiza, por necesidad, «funciones públicas». Sin emplear el lenguaje de los «derechos públicos», Harlan habló de la «igualdad de derechos inherente a la ciudadanía», y la «libertad personal de la que todos disfrutaban en los Estados Unidos». Haciendo mofa de la equidad formal de los carros «iguales pero separados», Harlan consideró la Separate Car Act como un intento de estigmatizar a las personas de color al considerarlas inadecuadas para permanecer en compañía de los blancos salvo cuando se desempeñaban como sirvientes⁵³.

Para llegar a su arrollador fallo final, la mayoría de los magistrados del Tribunal pasó por alto buena parte de la defensa de Tourgée y las clarísimas advertencias del magistrado Harlan. A la luz de la tesis desarrollada en el presente trabajo, las partes más conocidas del fallo de la mayoría resultan escalofriantes, no sólo por la decisión que racionalizan, sino también por las categorías que emplean: «Si los derechos civiles y políticos de ambas razas son iguales, una no puede ser inferior a la otra desde el punto de vista

civil o político. Si una raza es inferior a la otra socialmente, la constitución de los Estados Unidos no puede ubicarlas en el mismo plano»⁵⁴. En la decisión escrita por el primer magistrado Henry Billings Brown, el Tribunal interpretó el reclamo a la igualdad de acceso como un reclamo de elevación social con asistencia del Estado. Fue así que el asunto de la igualdad de derechos públicos y dignidad cívica como cuestión de ciudadanía se disolvió en una afirmación de desigualdad casi inalterable de la práctica social.

Aunque resulta muy artificial imaginar que los derechos se disponen a lo largo de un continuo, podríamos apelar por un momento a esa metáfora para aclarar el punto. Imaginemos una línea dividida en cuatro segmentos en la que los derechos van de lo político, a lo civil, a lo público y a lo social. La batalla legal librada por el Comité des Citoyens se proponía mantener un espacio abierto y reconocido de «derechos públicos», definidos como los derechos de las personas naturales en la esfera pública, cuya base era la sólida convicción en la dignidad igual de los ciudadanos. Ese terreno de los derechos públicos se modelaba a partir de las estipulaciones explícitas de la Constitución de Luisiana de 1868, aunque se remontaba a 1848, 1803, e incluso antes. Los partidarios de la supremacía blanca que se le oponían se propusieron condenar al silencio la categoría misma de los derechos públicos, empujando sus contenidos previos hacia el territorio de lo «social», en el que los reclamos de igualdad no contaban con garantías estatales o federales. Lo que ambas partes sabían en Luisiana era

52. Philip B. KURLAND; Gerhard CASPER (eds.). *Landmark briefs...*[52], p. 11 y 9.

53. *Plessy v. Ferguson* 163 US 537, p. 553-55, 560.

54. *Plessy v. Ferguson* 163 US 537, p. 551-52.

que una vez que se borrara el espacio de los «derechos públicos», otros derechos antes considerados civiles y políticos también resultarían vulnerables.

Por supuesto, las categorías no se alinean en realidad de forma tan nítida, ni los reclamos encajan de manera precisa en las categorías. Pero las diferentes formulaciones de los derechos mismos tenían implicaciones jurídicas muy diferentes. Y los términos del voto del magistrado Brown han gozado de una permanencia sorprendente en los análisis. Calificar de «social» un terreno que también podía interpretarse como «público» tuvo enormes consecuencias. Constituyó una señal para los partidarios de la supremacía blanca de que podían proceder a legislar con impunidad en la zona de lo que a partir de ese momento se consideró «social». Además, dio paso a la posibilidad de hacer retroceder también los límites de lo civil y lo político, bien calificando parte de esos terrenos como «sociales», bien igualando reclamos en las esferas civil y política a pretensiones en la esfera social.

Sólo unas pocas semanas después de la decisión del Tribunal Supremo en *Plessy*, un grupo de vecinos blancos le ordenó a Paul Bonseigneur, miembro del Comité y hombre de color culto y próspero, que abandonara la casa de veraneo de su familia, junto al lago del pueblo de Mandeville, en Luisiana. Doce signatarios de una nota amenazadora le advertían a Bonseigneur que «su presencia en nuestra vecindad y en la Playa nos resultaría muy desagradable a nosotros y a nuestras familias». Se le tildaba así de molestia pública

en tanto hombre de color que hacía uso de su propiedad privada. Todavía capaces de reunir a sus seguidores, Martinet y Desdunes convocaron a una reunión en Friends of Hope Hall para protestar «ante la arremetida contra la libertad y los derechos del ciudadano» que suponía el ataque a Bonseigneur. Una serie de oradores subrayaron, algunos en francés y otros en inglés, la importancia de la igualdad de derechos, y vincularon la defensa de Bonseigneur a «la lucha por la libertad y los derechos humanos» librada durante los últimos treinta años. Ramón Pagés, un español que era presidente del sindicato de los tabaqueros, retomó la expresión «derechos públicos», afirmó que tenía sus raíces en el derecho natural, y llevó el alegato un exuberante paso más allá: «El sol no dividió una porción de sus rayos para una clase y otra porción para otra, una parte para los blancos y otra parte para los negros, sino que brilló igual para todos. La totalidad de lo que crecía en la tierra y vivía en los mares era propiedad compartida de la humanidad, y a todos se les dotó de los mismos órganos, todos tenían las mismas necesidades y todos requerían por igual de alimentación y sustento. Por tanto, todos los derechos públicos eran comunes...»⁵⁵. Este planteamiento iba más lejos de lo que el Comité estaba dispuesto a llegar, pero es una indicación de la insistente resonancia del término derechos públicos, y de su atractivo para un organizador obrero blanco dispuesto a luchar junto a activistas de color.

Los vigilantes voluntarios que intentaron intimidar a Bonseigneur pusieron en evidencia

55. La expresión «libertad y derechos humanos» es del general H.N. Frisbie, quien fuera coronel en el 92 regimiento de tropas de color de los Estados Unidos durante la Guerra Civil. La reseña de la reunión es de Louis A. MARTINET (ed.). *The violation of a constitutional right. Published by authority of the Citizens' Committee*. Nueva Orleans: By the Crusader Print, 117 Exchange Alley, agosto de 1896.

cuán importante les resultaba a los partidarios de la supremacía blanca eliminar el ejercicio público de una presencia digna de los hombres y mujeres de color. Hasta el uso pacífico de propiedades privadas se había convertido ya en parte de una pugna en torno a la honra pública y el espacio público que los partidarios de la supremacía blanca no estaban dispuestos a perder. Pronto se sucedería una avalancha de nuevas restricciones. En un lapso de dos años, una convención constituyente del Estado redactó un texto que explícita e intencionalmente excluía prácticamente a todas las personas de color del derecho al voto. La legislatura del Estado la promulgó como la Constitución de Luisiana de 1898, sin esperar por su ratificación. Un nuevo comité de activistas de Nueva Orleans intentó impugnarla, pero las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en *Giles v. Harris* y *Giles v. Teasley* hicieron que esas restricciones impuestas al sufragio resultaran casi inexpugnables. El Tribunal Supremo de Luisiana desestimó de un plumazo la impugnación a la limitación de derechos electorales, en *Ryanes v. Gleason*⁵⁶. Los derechos políticos corrían rápidamente la misma suerte que los derechos públicos.

Conclusiones

Podríamos terminar con dos observaciones, una sobre el concepto de derechos públicos, y otra acerca del derecho y la dinámica del cambio histórico. La primera es ya obvia: el derecho que Homère Plessy y sus aliados



W. H. Robinson, First Lieutenant, Co. F,

William H. Robinson, Primer Teniente en el Ninth US Volunteer Infantry, destacado en San Luis, al este de Cuba, en 1898-1899, en W. H. Coston, *The Spanish-American War Volunteer* (1899).

intentaron defender y para poner en evidencia el cual estructuraron cuidadosamente el caso legal, era el derecho al respeto formal en la esfera pública. No pedían respeto como individuos de méritos reconocidos —aunque estaban orgullosos de sus méritos como artesanos, activistas y hombres de letras—, sino simplemente como ciudadanos.⁵⁷ Para sus antagonistas, los partidarios de la supremacía blanca, acusarlos de aspirar a la «igualdad social» suponía desplazar el terreno del debate, al implicar que la igualdad de honra social era un prerrequisito para el ejercicio de los

56. State ex rel. *Ryanes v. Gleason*, Supervisor, 112 La. 612. Para un análisis detallado del alegato, la defensa y el fallo de *Ryanes v. Gleason*, ver el cap. 7 de Rebecca Scott. *Degrees of Freedom: Louisiana and Cuba after Slavery* [de próxima aparición].

57. Kant desarrolla la distinción entre el respeto subjetivo, que no puede ser impuesto, y el respeto fundamental a la dignidad humana, que es un requerimiento moral. Ver Immanuel KANT. *Practical Philosophy*. Cambridge, Eng.: Cambridge University Press, 1996, p. 531, 557-558. Traducción y edición de Mary J. Gregor.

derechos públicos. Según esa lógica, si por «costumbre» se les negaba a los hombres de color esa honra social, sus derechos tampoco se sostenían en pie. Esa supresión tuvo enormes consecuencias, porque hizo retroceder las cuestiones relativas a la igualdad en la esfera pública a la mal definida zona de las costumbres, las normas sociales y las supuestas maneras regionales de ser. Persuadir a los tribunales (y a posteriores analistas) de debatir sobre las costumbres sociales y no sobre los derechos públicos representó una victoria para los ideólogos de la supremacía blanca.

El segundo punto tiene que ver con la construcción del contexto histórico y la importancia de las cronologías precisas y de examinar los entendidos vernáculos. Vista a una gran distancia y según el prisma de la prensa mayoritaria, «la década de 1890» parece, sin duda, una época de terribles «relaciones raciales» y de «endurecimiento de las actitudes raciales», para decirlo con las imperfectas formulaciones de muchos libros de texto y resúmenes apretados. De ahí que pueda parecer hasta cierto punto natural que juicios como el de Homère Plessy fracasaran, y que la Separate Car Act, así como la Constitución de 1898, que privaba a muchos de sus derechos, se vieran coronadas por el éxito. Pero vista más de cerca, desde la notaría de Louis Martinet en Exchange Alley, la década de 1890 es un momento en el que podía y debía conformarse una alianza multirracial que, animada por principios, defendiera la igualdad de derechos públicos; en 1892, en el caso de Daniel Desdunes, el Comité derrota la Ley de Carros Segregados con el argumento del intercambio interestatal; y en 1896 es derrotado cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hace suyo el punto de vista

de los partidarios de la supremacía blanca de que el caso se refería a la «igualdad social». Lo que intento no es meramente enfatizar que la historia es compleja y está sujeta a contingencias, y que el quid de la cuestión está en los detalles. (A los historiadores les encanta repetir ese mantra, y los estudiosos del derecho deben estar cansados de oírlo. Saben, por su parte, que la doctrina judicial también es compleja, también está sujeta a contingencias y también está plagada de detalles que tienen que ver con su quid, y que sus colegas historiadores raras veces quieren acompañarlos a recorrer *ese* camino.) El punto que quiero dejar claro, mediante su demostración en un caso crucial, es el de que el «contexto» es un proceso con muchas piezas móviles, en el que el planteamiento de demandas y el razonamiento legal vernáculo interactúan con prácticas legales cotidianas. Lo que unifica ese campo en la Nueva Orleans de la década de 1890 es una firme y duradera insistencia de las personas de color en tener una presencia digna en la esfera pública, presencia ya manifiesta en miles de acciones cotidianas, incluida la transcripción de documentos ante notario.

La formulación del fallo en el caso *Plessy* contenía una terrible ironía final. En lo que parece una negativa casi premeditada a ver el punto de los derechos públicos, el magistrado Brown escribió que ser destinado a un vagón aparte no implicaba falta de respeto alguna para una persona de color, a menos que dicha persona quisiera interpretarlo de esa manera. (Charles Chesnutt observó después con amargura que suponía que «dejarse ahorcar podía llegar a resultar agradable, siempre que el ahorcado se convenciera de que ello no era ni doloroso ni afrentoso, ni de que pondría fin a su estancia en este



Esclavos obteniendo la libertad, ilustración de Robert Smirke en James Montgomery, *The West Indies, a Poem in Four Parts* (1809).

mundo)⁵⁸. El fallo del magistrado Brown quería decir que con una pequeña cuota de respeto a sí mismo, un hombre podía comportarse dignamente fueran cuales fuesen las reglas del juego. Pero era precisamente mediante el ejercicio de la igualdad de diversos derechos públicos que las personas de color de Luisiana habían hecho manifiesta su dignidad. Y esos derechos públicos, junto a sus derechos políticos, eran esenciales para desplazarse por la ciudad y el estado a trabajar, escribir, organizar y defenderse contra las afrentas en otras esferas.

Lo que tanto los querellantes como los acusados del caso *Plessy* sabían, y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se negó a

reconocer, era que el propósito subyacente de la Separate Car Act era tratar de coartar ese ejercicio público de la igualdad civil. No obstante, al cabo de unos pocos años ese propósito estaba a la vista de todos. En su discurso de toma de posesión en 1904, el gobernador de Luisiana Newton Blanchard se hizo eco del lenguaje empleado en *Plessy*, pero le dio una nueva vuelta de tuerca que resultaría crucial: «En Luisiana nunca se tolerará un avance hacia la igualdad social o el *reconocimiento social*. Se hará obligatorio el establecimiento de escuelas separadas, iglesias separadas, carros separados, lugares de entretenimiento separados. La diferencia y la integridad raciales deben ser preservadas»⁵⁹. La expresión «reconocimiento social» revelaba las intenciones ocultas. La segregación por ley *tenía el propósito* de negarles el reconocimiento social a las personas de color al prenderles al pecho la insignia de la servidumbre. El magistrado Brown lo había entendido todo al revés. Un pasajero de color que *no* considerara la exclusión como una afrenta no había comprendido el orden legal en el que ahora vivía.

Hay pocos lugares en los cuales encontrar aliento en medio de la devastación que siguió a *Plessy*. La observación usual de que el elocuente voto particular del magistrado Harlan sirvió de inspiración a futuras generaciones es cierta, pero no constituye mucho consuelo si nos preocupan los que promovieron la batalla legal y después tuvieron que vivir con las consecuencias de la derrota. Quizás, sin embargo, valga la pena abrir una última vez los registros notariales de Louis

58. Charles W. CHESNUTT. «The courts and the Negro (ca. 1911)». En: Brook THOMAS (ed.). *Plessy v. Ferguson. A brief history...*[14], p. 149-160.

59. Sidney J. ROMERO, «*My fellow citizens...*»: *the inaugural addresses of Louisiana's Governors*. Lafayette, La.: Center for Louisiana Studies, University of Southwestern Louisiana, 1980, p. 245-6. El énfasis es mío.

Martinet y revisar los años 1897, 1898 y 1899. Allí veremos que en 1898, durante la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana, Louis Martinet se trasladó a un campamento militar en las afueras de Nueva Orleans para redactar poderes y documentos sobre custodia de menores solicitados por soldados negros del Noveno de Voluntarios de Infantería de los Estados Unidos que se aprestaban a embarcar hacia Cuba. Los miembros de ese regimiento habían encontrado una vía para realizar servicios públicos en una esfera pública, al brindarse como voluntarios para el servicio militar federal. Ahora hacían uso de la condición de notario público de Louis Martinet para garantizar el bienestar de sus familias durante su ausencia. El médico George H. Nelson está de nuevo allí, ahora como oficial. Pierre Carmouche también se ha enrolado, y ha convencido a docenas de hombres de las plantaciones cercanas a Donaldsonville a que se le unan⁶⁰. También nos topamos con Martinet certificando las actas de constitución de «The Hopeful Land Company», para que sus clientes, los optimistas Henry C. Green, Henry Green y Samuel Green puedan dedicarse al negocio de bienes raíces⁶¹.

Pero el documento que más curiosidad despierta es el acta de constitución del «Ex-Slave Mutual Relief Bounty and Pension Association of Louisiana», de junio de 1899. La relación de los signatarios evoca las alianzas multirraciales que habían estado forjándose en la notaría de Martinet con el paso de los años: J. T. Jones y E. Burton estampan su rúbrica con mano firme;

Lottie Boyd, Henry Boyd y Marcellin Zepherin firman con sus marcas personales. Los fines de su asociación tenían que ver con la usual prestación de asistencia mutua. Pero, lo que es más importante, se proponían conseguir el apoyo de ancianos ex esclavos, sus viudas y huérfanos, no sólo mediante los esfuerzos filantrópicos de sus miembros, sino empeñándose en que se aprobara la Propuesta de Ley No. 4718 del Senado federal, conocida como la Propuesta Mason. En otras palabras, sin derecho al voto, y sin gozar de derechos políticos o públicos efectivos en el estado de Luisiana, los miembros de la asociación se proponían cabildar en el Congreso de la nación para lograr que se aprobara una ley que encarnaba el sentido que le atribuían a la relación de la nación con su pasado esclavista⁶².

De ponerse en vigor, la Propuesta Mason habría hecho que se asignaran recursos públicos para honrar la deuda con quienes habían sido esclavos:

«...cualquier persona que haya sido sometida a la esclavitud o a prestar servicios no voluntarios en razón de cualquier ley de los Estados Unidos, o de cualquiera de los estados [...] y que en la fecha de aprobación de esta Ley haya llegado a la edad de setenta años, tendrá derecho a recibir y recibirá del Tesoro de los Estados Unidos la suma de quinientos dólares [...] y la suma de quince dólares al mes durante el resto de su vida natural».

La ley se aplicaría a hombres y mujeres, y a los sobrevivientes más jóvenes se les asignarían sumas menores⁶³.

60. Ver, entre otros, NOTARIAL ARCHIVES RESEARCH CENTER (Nueva Orleans), Notarial Acts of Louis Martinet, Acta 8, 2 de junio de 1898: «George H. Nelson, Procuration to I.H. Hall». Sobre los voluntarios, ver Rebecca SCOTT. «Reclamar la ciudadanía...» [46].

61. NOTARIAL ARCHIVES RESEARCH CENTER (Nueva Orleans), Notarial Acts of Louis Martinet, Acta 39, 23 de noviembre de 1899: «Act of Incorporation of the Hopeful Land Company».

62. NOTARIAL ARCHIVES RESEARCH CENTER (Nueva Orleans), Notarial Acts of Louis Martinet, Acta 20, 22 de junio de 1899: «Act of Incorporation of the Ex-Slave Mutual Relief Bounty and Pension Association of Louisiana».

63. S. 4718, Congreso 55, 2da. sesión (6 de junio de 1898).

De nuevo, una visita a la notaría de Louis A. Martinet era el preludio de la promoción de un reclamo moral de carácter público. Este esfuerzo también fracasaría. La Propuesta Mason nunca fue aprobada, y los ancianos a los que estaba encaminada a prestar ayuda murieron sin recibir las reparaciones que les habría otorgado. De hecho, es un episodio prácticamente olvidado, que no forma parte del «contexto histórico» en cuyo seno solemos pensar acerca de la década de 1890. Pero cuando Louis Martinet certificó el documento fundacional de la rama de Luisiana de la asociación, y cuando sus miembros se reunieron

para dar inicio a sus acciones de cabildeo, estaban haciendo uso de su voz pública, con independencia de si Washington optaba por escucharlos o por hacerse de oídos sordos. Volviendo a la frase de Rodolphe Desdunes que inicia este trabajo, estaban expresando su convicción de que «es bueno que el pueblo conozca sus derechos aun si se le niegan». Y al regresar a la notaría después de haber perdido en el caso *Plessy*, encarnaban su observación de que «es conveniente y sabio que las personas ejerzan dichos derechos con la mayor inteligencia posible, aun si se les despoja de sus beneficios»⁶⁴.

64. XAVIER UNIVERSITY LIBRARY (Nueva Orleans), Desdunes Family Collection, Special Collections, Recorte en Carpeta 1/32, ca. 5-11 de junio de 1895.

Epílogo.

La esclavitud y la ley: algunas perspectivas y líneas de investigación.

Debate y perspectivas

ALEJANDRO DE LA FUENTE*

Nuestro volumen comienza con la historia de ocho esclavos en un ingenio azucarero cubano de mediados del siglo XIX que intentaron utilizar los limitados recursos legales a su alcance para mejorar sus vidas y condiciones de trabajo. No se trata de un ejemplo único. Casos similares, en los que esclavos y ex esclavos intentan hacer uso de la ley para reclamar derechos establecidos con más o menos claridad en los textos legales, aparecen prácticamente en todos los trabajos reproducidos aquí. Tomados en conjunto, nuestros trabajos ofrecen una visión de la relación entre esclavitud y la ley que privilegia las iniciativas y aspiraciones de los esclavos y sus descendientes. Esta visión, sin embargo, no desconoce la importancia crucial de los textos legales, ni los intereses de los otros actores que intervenían en las relaciones entre los esclavos y la ley, como los funcionarios estatales y los mediadores legales.

Esta visión tiene un mérito importante y es que nos permite trascender las viejas discusiones acerca del «cumplimiento» de la ley y de su impacto social. Como sugiere un estudio de la ley en Norteamérica, donde esta literatura ha avanzado significativamente, para estudiar «la ley en acción» es necesario incorporar al análisis factores sociales que en muchos casos no inciden en el contenido de la misma, pero sí en la forma en que la misma es invocada y aplicada. Es crucial, por ejemplo, establecer quienes eran los actores sociales involucrados, qué hacían y cuáles eran sus expectativas y aspiraciones¹. Desde luego, esto no es siempre fácil de lograr. Particularmente en el caso de los esclavos, que apenas dejaron testimonios escritos y cuyas actividades rara vez aparecen registradas en la esfera pública, la reconstrucción de historias de vida es particularmente difícil. Éste es uno de los retos fundamentales de la nueva historiografía legal. Se trata de un reto con importantes implicaciones metodológicas: cómo combinar con éxito los métodos de la microhistoria con el estudio de la esclavitud atlántica como sistema. Como ha expresado Rebecca Scott en otra ocasión, el problema de cómo incorporar la iniciativa o la capacidad que los

* El autor agradece a Richard Turits sus comentarios a una versión inicial de este trabajo.

1. MORRIS S. ARNOLD. «Comment on Hans Baade's the gens de couleur de Louisiana: comparative slave Law in microcosm». *Cardozo Law Review* (New York). 18 (1996), p. 587-590.

esclavos tenían de transformar su realidad social en un análisis sistémico de la esclavitud es particularmente complejo y continúa aún sin solución².

Tampoco sabemos mucho de los intermediarios legales cuyo trabajo era invocar, aplicar e interpretar la ley. Esta categoría incluía funcionarios y personas de muy diverso carácter: alguaciles de tribunales, pueblos y ciudades que ejecutaban órdenes judiciales; procuradores o abogados que por oficio representaban a terceros ante los tribunales; pedáneos y alcaldes que dispensaban justicia en los poblados y ciudades; escribanos y notarios; letrados de audiencias y otras cortes superiores. Funcionarios como éstos aparecen una y otra vez en el volumen, aunque a excepción de los escribanos y notarios, sus actividades reciben poca atención específica. Tomemos, por ejemplo, el caso del «procurador de miserables» mencionado por Blumenthal en su trabajo. Entre otras obligaciones, este funcionario municipal hacía las veces de defensor de oficio, representando a los esclavos y a otros individuos de los grupos más pobres de Valencia ante los tribunales. Sus funciones eran similares a la de los síndicos procuradores en Cuba o a la de los llamados «defensores de los pobres» en otras ciudades de Hispanoamérica, como Buenos Aires: personas nombradas por los ayuntamientos para velar por el bien general y por los intereses del público. Entre esas funciones estaba la de representar a los esclavos ante las autoridades, además de mediar entre los esclavos y sus dueños en casos de conflicto³. Dicha representación, desde luego, no siempre se realizaba a satisfacción de los esclavos, quienes a veces se quejaban ante las autoridades por la falta de gestión de los síndicos procuradores. En ocasiones, sin embargo, eran las autoridades quienes protestaban por el empeño con que algunos síndicos representaban los intereses de los esclavos⁴.

No es posible, ni probablemente deseable, hacer generalizaciones sobre la actuación de estos mediadores legales pero nuestros trabajos sugieren varios puntos de interés. En primer lugar, la limitada evidencia disponible pone de manifiesto que los esclavos que lograban presentar sus demandas ante los tribunales tenían al menos algunas probabilidades de que sus casos recibieran un veredicto favorable. Tanto en Valencia en el siglo XV, como en la Habana en el siglo XVII, como en Río de Janeiro en el siglo XIX la proporción de fallos favorables a los esclavos en pleitos de libertad no era despreciable. En Río, incluso, la Corte de Apelaciones tendía a modificar las sentencias de los tribunales inferiores favoreciendo la libertad. En segundo lugar, Grinberg también sugiere que tanto los abogados como los jueces que participaban en estos procesos actuaban «profesionalmente», aunque nuestros conocimientos sobre las actividades de

2. Rebecca J. SCOTT. «Small-scale dynamics of large-scale processes», *American Historical Review* (Washington) 105/2 (2000), p. 472-79.

3. Por «procurador», las leyes castellanas entendían no sólo aquellos que representaba los intereses de un tercero en procesos judiciales o extrajudiciales, sino también los representantes de pueblos y ciudades, que realizaban gestiones en su nombre ante las autoridades. Las actividades de los procuradores ordinarios están reguladas en el libro XXVIII, Libro II de la Recopilación de Leyes de Indias. Sobre los síndicos procuradores en Cuba (de los cuales se sabe muy poco), ver Fernando ORTIZ. *Los negros esclavos*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1975, p. 369. Sobre los defensores de los pobres en Buenos Aires, ver Carmen BERNAND. *Negros esclavos y libres en las ciudades hispanoamericanas*. Madrid: Fundación Histórica Tavera, 2001, p. 113-115.

4. Para ejemplos de ambos casos, ver ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Gobierno Superior Civil, leg. 944, nº 33306: «Expediente sobre la queja del negro José Casanova, 1846». ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Miscelánea de Expedientes, leg. 4105, nº Ñ: «Expediente promovido por el moreno libre Felipe Herrera pidiendo la libertad de dos hijos, 1864».

éstos y otros intermediarios legales —como los procuradores antes mencionados, o los escribanos y notarios— siguen siendo muy fragmentarios.

Por otra parte, estos mismos ejemplos sugieren la necesidad de considerar seriamente la existencia de ciertas líneas de continuidad en la historia legal de la esclavitud atlántica. No parece casual que los esclavos en lugares tan disímiles como Valencia, la Habana, o Río de Janeiro y en momentos tan distantes como los siglos XV y XIX se dirigieran a los tribunales para reclamar derechos similares. Uno no tiene necesariamente que coincidir con la tesis de Alan Watson de que la cultura y tradiciones legales pueden explicar por sí mismas las características fundamentales de un sistema legal para aceptar la noción de que muchas de las instituciones jurídicas iberoamericanas tenían su origen del otro lado del Atlántico⁵. El estudio de estas continuidades puede verse como parte del debate más general acerca de los orígenes de la esclavitud atlántica y de los vínculos entre las esclavitudes del Mediterráneo y Nuevo Mundo⁶.

Cualquiera que sea la posición que uno adopte en esa discusión, sin embargo, es posible establecer al menos algunos puntos importantes. El primero, quizás, es que, como ha señalado William Phillips, a través de los códigos medievales europeos se puede rastrear el origen romano de muchas de las leyes que regulaban la esclavitud en las colonias ibéricas⁷. Por ejemplo, la práctica de establecer reclamaciones ante las autoridades por falta de alimentación tiene raíces romanas. Una de las funciones del prefecto era atender, precisamente, las quejas de los esclavos en esta materia. La caracterización de la esclavitud como una institución del *ius gentium* o derecho de gentes, no del derecho natural, recogida en las Partidas y en otras regulaciones posteriores, fue elaborada por algunos juristas romanos y recogida en el Corpus de Justiniano, a través del cual pasó a formar parte de la jurisprudencia occidental. El principio legal de favorecer la libertad, *favor libertatis*, establecido por la legislación española, también tiene un origen romano. El ejemplo más gráfico de estas continuidades está en la fórmulas legales utilizadas para la venta de esclavos. Desde los tiempos de Roma hasta el siglo XIX en Cuba, Puerto Rico, o Brasil, los elementos constitutivos y el lenguaje utilizado en los contratos de compraventa de esclavos eran muy similares, incluyendo referencias a la edad, la salud, el sexo y las «achas» o defectos del esclavo o esclava. El vendedor carecía del beneficio de *caveat emptor*, es decir, estaba obligado a declarar los defectos y problemas del esclavo⁸. Algunas de las expresiones utilizadas

5. Alan WATSON. *Slave law in the Americas*. Athens: University of Georgia Press, 1989, p. XIV y 1-21.

6. Sobre este debate ver David Brion DAVIS. «Looking at slavery from broader perspectives». *American Historical Review* (Washington). 105/2 (2000), p. 452-66; Robin BLACKBURN. *The making of New World slavery: from the Baroque to the Modern, 1492-1800*. London: Verso, 1997, p. 31-93; Philip D. CURTIN. *The rise and fall of the plantation complex: essays in Atlantic history*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p. 3-28. William D. PHILLIPS. *Slavery from Roman times to the early transatlantic trade*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1985; Charles VERLINDEN. *The beginnings of modern colonization*. Ithaca: Cornell University Press, 1970.

7. William PHILLIPS. *Slavery from Roman Times...* [6], p. 216.

8. Para éstos y otros aspectos de la esclavitud romana, ver la síntesis de Keith BRADLEY. *Slavery and society at Rome*. Nueva York: Cambridge University Press, 1994. Para un análisis de la influencia romana en la ley castellana sobre la esclavitud, ver Alan WATSON. *Slave law in the Americas...* [5], p. 40-47. Sobre el principio de *caveat emptor*, ver Mark TUSHNET. «New histories of the private law of slavery». *Cardozo Law Review* (New York). 18 (1996), p. 301-307. Para una discusión sobre la importancia del derecho romano como fuente de derecho en Estados Unidos, ver Thomas MORRIS. *Southern slavery and the law, 1619-1860*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1996, p. 37-57.

en los contratos de venta, como «saco de huesos» o «huesos en costal,» aparecen lo mismo en escrituras otorgadas en Cuba o Nueva Granada (actual Colombia) durante el periodo colonial que en Génova durante el siglo XIII⁹.

Además, es posible establecer empíricamente que al menos algunos de los códigos del derecho tradicional castellano, como las Siete Partidas (siglo XIII) o las Leyes de Toro (siglo XVI), eran invocados en la colonias siglos más tarde. La persistencia de la cultura jurídica ibérica en el Nuevo Mundo no debe sorprender demasiado. Muchos de los inmigrantes en las colonias españolas y portuguesas procedían de regiones en el mediterráneo donde la esclavitud era no sólo conocida, sino en algunos casos incluso floreciente. Entre esas regiones se encontraban las áreas emisoras principales de emigrantes a América, como Andalucía en España, el Algarve en Portugal y más tarde, también, las Islas Canarias, donde la esclavitud floreció entre los siglos XV y XVII¹⁰. Para los pobladores de estas regiones la esclavitud era una institución familiar en la que las expectativas y actitudes de los amos y esclavos estaban mediadas por una serie de principios éticos y legales que formaban parte de su universo cultural.

Uno de los aspectos en los que se detecta una continuidad jurídica importante es el relativo a la manumisión de esclavos. Este tema ha suscitado el interés de muchos estudiosos de la esclavitud, que ven la manumisión —su frecuencia, aceptación y facilidad— como un elemento fundamental en la evaluación de cualquier régimen esclavista. Es de notar que, aún en las sociedades en las que la esclavitud alcanzó un mayor grado de desarrollo en América Latina, como en los casos de Brasil y Cuba, el acceso de los esclavos a la libertad no fue restringido legalmente. Tampoco fue restringido, como ocurrió en varios estados en Norteamérica, el derecho de los amos a liberar a sus esclavos. En Cuba, por el contrario, se produjo una ampliación del derecho de los esclavos a exigir su libertad, pues el Reglamento de Esclavos de 1842 estableció que ningún amo podía «resistirse» a coartar a sus esclavos siempre que los mismos exhibieran cincuenta pesos por cuenta de su precio. Es, decir, los esclavos tenían el derecho de comprar su libertad aun contra la voluntad de su amo. Aunque probablemente esta costumbre había sido observada en la isla por mucho tiempo, llama la atención que lo que antes había sido una práctica consuetudinaria se plasmara por escrito en la ley justo cuando, debido al desarrollo de la

9. Para un ejemplo en Cuba, ver el caso mencionado en la introducción, nota 4. Para Colombia, Carlos E. VALENCIA VILLA. *Alma en boca y huesos en costal: una aproximación a los contrastes socio-económicos de la esclavitud*. Santafé, Mariquita y Mompox 1610-1660. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2003, p. 35. Para Génova, ver Steven EPSTEIN. *Speaking of slavery: color, ethnicity, and human bondage in Italy*. Ithaca: Cornell University Press, 2001, p. 67.

10. Existe una literatura creciente sobre la esclavitud en estas regiones, incluyendo algunos estudios excelentes. Ver, por ejemplo, los siguientes: Jacques HEERS. *Esclaves et domestiques au Moyen-Age dans le monde méditerranéen*. Paris: Fayard, 1981; Alessandro STELLA. «L'esclavage en Andalousie à l'époque moderne». *Annales Économies Sociétés Civilisations* (Paris). 47/1 (enero-febrero 1992), p. 35-63; Alessandro STELLA. *Histoires d'esclaves dans la péninsule Ibérique*. Paris: Editions de L'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2000; Jesús M. GARCÍA AÑOVEROS. *El pensamiento y los argumentos sobre la esclavitud en Europa en el siglo XVI y su aplicación a los indios americanos y a los negros africanos*. Madrid: CSIC, 2000; José L. CORTÉS LÓPEZ. *La esclavitud negra en la España peninsular del siglo XVI*. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1989; Alfonso FRANCO SILVA. *La esclavitud en Sevilla y su tierra a fines de la edad media*. Sevilla: Diputación Provincial, 1979; A. C. de C. M. SAUNDERS. *A social history of black slaves and freedmen in Portugal, 1441-1555*. New York: Cambridge University Press, 1982; Manuel LOBO CABRERA. *La esclavitud en las Canarias Orientales en el siglo XVI: negros, moros y moriscos*. Santa Cruz de Tenerife: Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1982; Fernando BRUQUETAS DE CASTRO. *La esclavitud en Lanzarote 1618-1650*. Madrid: Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1995. Para una síntesis útil, ver William D. PHILLIPS. *Historia de la esclavitud en España*. Madrid: Playor, 1990.

esclavitud de plantación en Cuba, las condiciones parecían menos propicias para ello. En este aspecto, la tesis de Watson sobre la persistencia de la cultura y tradiciones jurídicas parece ser corroborada.

El interés por las manumisiones está basado además en que permite estudiar las motivaciones de los amos y sus ideas sobre la esclavitud. En general, los historiadores coinciden en que las manumisiones representaban, como ha dicho Robert Fogel, un instrumento para asegurar la cooperación y docilidad de los esclavos y por lo tanto para su control más efectivo¹¹. Varios de los autores en este volumen coinciden con esta posición. Los historiadores de la esclavitud también han notado, sin embargo, que la manumisión era un acto piadoso y que el peso de los imperativos religiosos no debe ser subestimado¹². La posible heredera de un esclavo al que le habían prometido la libertad en Santiago de Cuba en 1829 se refirió al tema cuando dijo que no podía revocar esa gracia «porque siendo una mujer de sentimientos bien cristianos jamás podría ni aun imaginarlo»¹³. En realidad, ambas interpretaciones son compatibles: los amos utilizaban la posibilidad de la libertad como un medio de estimular el trabajo y la dedicación en sus esclavos, al tiempo que hacían —y dejaban ver que hacían— un servicio a Dios.

Establecer la influencia que las ideas religiosas hayan podido tener en los dueños y en sus interacciones con los esclavos es difícil. Es posible que algunos dueños, por ejemplo, hayan obstaculizado los matrimonios entre sus esclavos porque el derecho canónico y la doctrina de la iglesia limitaban su poder sobre dichas familias y porque temían que su aprobación pudiera ser invocada posteriormente por el esclavo para exigir su libertad. Similares ambivalencias existían en el caso del bautismo¹⁴. Tampoco sabemos mucho sobre la observancia de

11. Robert W. FOGEL. *Without consent or contract: the rise and fall of American slavery*. Nueva York: Norton, 1989, p. 194. Esta posición es compartida por estudiosos de la esclavitud en lugares y épocas muy diversas. Por ejemplo, Keith BRADLEY. *Slavery and society at Rome...* [8], p. 155-63, quien cita a Fogel; Steven EPSTEIN. *Speaking of Slavery...* [9], p. 172; Kátia M. de Queirós MATTOSO. *To be a slave in Brazil, 1550-1888*. New Brunswick: Rutgers University Press, 1986, p. 145-49; Stuart B. SCHWARTZ. *Sugar plantations and the formation of Brazilian society: Bahia, 1550-1835*. New York: Cambridge University Press, 1985, p. 157. Sin embargo, A. J. R. RUSSELL-WOOD. *The black man in slavery and freedom in colonial Brazil*. New York: St. Martin's Press, 1978, p. 44-46, apunta que las manumisiones de esclavos generaron una oposición importante por parte de ciudadanos, funcionarios y ayuntamientos en el Brasil colonial. Estos sujetos, obviamente, no veían la manumisión como un mecanismo eficiente de control, sino como un problema económico y social. Es también notable, como apunta Turits en su trabajo, que los autores del Código Negro Carolino intentaron establecer limitaciones a la manumisión.
12. A. C. de C. M. SAUNDERS. *Social history of black slaves...* [10], p. 138; Steven EPSTEIN. *Speaking of slavery...* [9], p. 170-78. En este sentido es ilustrativo el caso de un vecino de Lanzarote, en las Canarias, quien en su testamento (1649) dejó una suma para comprar la libertad de un esclavo. El sujeto había prometido a Dios «en una enfermedad que tuvo, de dar libertad, en amor suyo, a un esclavo de esta isla». El caso es mencionado por Fernando BRUQUETAS DE CASTRO. *La esclavitud en Lanzarote...* [10], p. 130. Stuart B. SCHWARTZ. *Sugar plantations...* [11], p. 257, menciona que en las manumisiones podían coexistir el paternalismo y el ánimo de lucro.
13. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CUBA, Juzgado de Primera Instancia, leg. 379, nº 3: «El Síndico Procurador General reclama la libertad del negro Nicolás, 1829».
14. James SWEET. *Recreating Africa: culture, kingship, and religion in the African-Portuguese world, 1441-1770*. Chapel Hill: UNC Press, 2003, p. 39; Stuart B. SCHWARTZ. *Sugar plantations...* [11], p. 387; Steven EPSTEIN. *Speaking of slavery...* [9], p. 97; Robin BLACKBURN. *The making of New World slavery...* [6], p. 50; A. C. de C. M. SAUNDERS. *Social history of black slaves...* [10], p. 104. Morris menciona ambivalencias similares en Virginia durante el periodo colonial temprano. Véase Thomas MORRIS. *Southern slavery and the law...* [8], p. 393. Para ejemplos concretos de procesos en los que el amo se niega a autorizar el matrimonio de uno de sus esclavos con un individuo libre, ver ARCHIVO NACIONAL DE CUBA, Miscelánea de Expedientes, leg. 4134, nº L: «La morena María de Regla López sobre su libertad y matrimonio, 1811»; ARCHIVO NACIONAL DE

los días de descanso y de las fiestas religiosas. La representatividad de las pocas referencias disponibles es cuestionable, pues proceden de unidades propiedad de órdenes religiosas¹⁵.

Hacer un análisis similar sobre el impacto de la religión cristiana y de las instituciones religiosas en los esclavos es casi imposible. Para empezar, la intensidad y extensión del proceso de adaptación cultural por parte de los esclavos es objeto de debate. Algunos autores aseguran que los esclavos, aun los africanos, asimilaban con facilidad la doctrina cristiana, debido a la afinidad de las cosmologías respectivas y a las ventajas sociales que la misma ofrecía. Otros autores, en cambio, hacen énfasis en las diferencias culturales entre los africanos y los europeos y sostienen que los primeros rechazaron el catolicismo y crearon un sistema religioso paralelo¹⁶.

En esto, como en muchos temas relativos a la esclavitud, las generalizaciones son de poca utilidad. No obstante, parece claro que muchos esclavos comprendieron que la religión podía ser utilizada como un camino de integración y ascenso, que utilizaron algunas instituciones religiosas como las cofradías para mantener una semblanza de vida comunitaria y que los curas podían ser aliados y mediadores culturales importantes. El caso de Liberata, que se dirige inicialmente al párroco local en busca de ayuda, seguramente no es excepcional. En el mundo atlántico existen referencias fragmentarias de cómo los esclavos intentaron utilizar la religión y las instituciones religiosas en su provecho para reclamar, por ejemplo, que el domingo era día de descanso o que ante Dios todos los humanos eran iguales. Los esclavos de un propietario portugués se negaron en 1541 a trabajar los domingos alegando que «hoy es el día del Señor, no tenemos que trabajar»¹⁷. La creencia de que los esclavos merecían un día semanal de descanso formaba parte, además, del universo cultural de muchos esclavos africanos¹⁸. Un esclavo de Buenos Aires fue más lejos aún en 1777 cuando, en el pleito sobre su libertad, identificó abolicionismo y religión, al considerar que «todos deben conspirar a abolir la esclavitud como repugnante a nuestra religión»¹⁹.

CUBA, Miscelánea de Expedientes, leg. 3957, nº Az: «Expediente promovido por Bonifacio Hernández que pretende casarse con la parda esclava Gertrudis, 1880». En el último caso se argumenta que los dueños no están obligados a consentir las uniones con personas libres porque «tales enlaces llevan consigo el derecho de libertad de los esclavos de acuerdo con las leyes 5, 6 y 7, título 22, Partida 4».

15. En su estudio del ciclo productivo del ingenio Sergipe de los Jesuitas en Bahía, Stuart B. SCHWARTZ. *Sugar plantations...* [11], p. 103-106, encontró que en una zafra de 270-300 días, el ingenio dejó de moler como promedio 35 domingos y 26 días por fiestas religiosas. El autor por lo tanto concluye que el calendario católico puede haber mitigado los rigores de la esclavitud.
16. Entre los primeros, ver John THORNTON. *Africa and africans in the making of the Atlantic world, 1400-1800*. Nueva York: Cambridge University Press, 1998, p. 235-68 (2ª edición); A. C. de C. M. SAUNDERS. *Social history of black slaves...* [10], p. 165; Ruth PIKE. *Aristocrats and traders: Sevillian society in the sixteenth century*. Ithaca: Cornell University Press, 1972, p. 188-191; William D. PHILLIPS. *Historia de la esclavitud en España...* [10], p. 167-68. Entre los segundos, James SWEET. *Recreating Africa...* [14], p. 110-13 y Kátia M. de Queirós MATTOSO. *To be a slave in Brazil...* [11], p. 125-27.
17. A. C. de C. M. SAUNDERS. *Social history of black slaves...* [10], p. 68. Los miembros de la Cofradía Nuestra Señora del Rosario en Luanda, por su parte, basaron su petición de reconocimiento en 1658 en el principio de que «en el servicio de Dios todos debemos ser iguales». Richard GRAY. «The papacy and the Atlantic slave trade: Lourenço da Silva, the Capuchins and the decisions of the holy office». *Past and Present* (Oxford) 115 (1987), p. 52-68.
18. John THORNTON. *Africa and the Africans...* [16], p. 88.
19. Es difícil saber, sin embargo, si estas palabras reflejan las ideas del esclavo o de su representante legal. Ver la referencia al caso en Carmen BERNARD. *Negros esclavos y libres...* [3], p. 115.

Las cofradías religiosas eran no sólo espacios sociales de asistencia mutua y vida comunitaria, sino que fueron utilizadas como plataformas para negociar con las autoridades. Los casos de Lorenzo da Silva de Mendoza y Paschoal Dias son excepcionales, pero de todos modos ilustrativos. Silva llegó a la curia papal en Roma alrededor de 1682 para denunciar como muchos cristianos, hijos de esclavos, eran esclavizados en el Nuevo Mundo. Entre sus credenciales estaba la representación de varias cofradías importantes, como la de Nuestra Señora del Rosario de Lisboa y la Confraternidad Nuestra Señora Estrella de los Negros, de Madrid. Dias, un negro libre, también visitó la curia papal como representante de la Cofradía Nuestra Señora del Rosario de Bahía, Brasil, en 1686²⁰. Además de articular una interpretación popular del cristianismo, las cofradías probablemente facilitaron la socialización de los esclavos africanos en otras costumbres europeas, incluyendo elementos de la cultura jurídica. Es conocido, por ejemplo, que algunas cofradías prestaban asistencia a esclavos que intentaban obtener su libertad, aunque éste es un tema en el que nuestros conocimientos son aún muy limitados²¹. Y es también conocido que, a largo plazo, organizaciones e instituciones similares jugaron un papel crucial en la articulación de demandas de las poblaciones afroamericanas, no sólo bajo la esclavitud, sino también después de la emancipación. El caso de la Asociación Metodista Episcopal Africana, mencionado por Scott en su trabajo, no es para nada excepcional.

Es difícil exagerar la importancia de estas líneas de continuidad en la historia legal de la esclavitud, pero desde luego la creación del sistema esclavista atlántico moderno tenía sus propios requerimientos legales. Tanto Turits como La Rosa Corzo investigan algunos de estos cambios, el primero a través de la creación del influyente Código Negro Carolino en Santo Domingo, el segundo a través de la legislación aprobada por las autoridades cubanas para reprimir a los cimarrones durante el siglo XIX. Generalmente más duras que las disposiciones legales emanadas de las coronas de España o Portugal, las regulaciones aprobadas por los órganos locales de poder necesitan ser incorporadas a la nueva historia legal de la esclavitud²². Estas disposiciones constituían una fuente de derecho en el mundo iberoamericano y su creación reflejaba no sólo las condiciones locales, sino la experiencia acumulada en materias similares en otros territorios del Nuevo Mundo. En muchos casos, los creadores de estas disposiciones habían acumulado un amplio conocimiento sobre la esclavitud y sus regulaciones en varios puntos del mundo atlántico, desde la península Ibérica o las islas del Atlántico africano, hasta las colonias europeas en América. Se fue creando así una cultura jurídica verdaderamente atlántica que necesitamos estudiar con más cuidado²³. Turits apunta, por ejemplo, que las limitaciones que el

20. Sobre estas visitas, ver Richard GRAY. «The Papacy...» [17]. Sobre las actividades de estas cofradías, ver A. C. de C. M. SAUNDERS. *Social history of black slaves...* [10], p. 150-56; Alfonso FRANCO SILVA. *La esclavitud en Sevilla...* [10], p. 222-23; William D. PHILLIPS. *Historia de la esclavitud en España...* [10], p. 168; Patricia MULVEY. «Black brothers and sisters: membership in black brotherhoods in colonial Brazil». *Luso-Brazilian Review* (Madison). 17/2 (1980), p. 253-279; A. J. R. RUSSELL-WOOD. *The black man in slavery and freedom...* [11], p. 128-60.

21. A. C. de C. M. SAUNDERS. *Social history of black slaves...* [10], p. 155.

22. Para un análisis de las dificultades que presenta el estudio de lo que algunos estudiosos llaman el «derecho indiano criollo», ver Ismael SÁNCHEZ BELLA. *Nuevos estudios de derecho indiano*. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 1995, p. 65-100.

23. Uno pudiera aplicar aquí el concepto de «criollos atlánticos» utilizado por Ira Berlin para describir a individuos familiarizados con la esclavitud atlántica y sus culturas. Véase, Ira BERLIN. *Generations of captivity: a history of African-American slaves*. Cambridge: Belknap Press, 2003, p. 23-31.

Código Negro Carolino intentó introducir en materia de manumisión en Santo Domingo —limitaciones que violaban algunos de los principios básicos de la tradición jurídica castellana en esta materia— habían sido inspiradas por el *Code Noir* francés de 1685.

Aunque el énfasis de nuestros trabajos está en el uso o los usos que los esclavos hicieron de la ley para mejorar sus condiciones de vida u obtener la libertad, es quizás conveniente recordar lo obvio. La interacción más frecuente entre los esclavos y la ley se producía no cuando los mismos intentaban utilizarla a su favor, sino como objetos del derecho de propiedad. Como ha dicho Thomas Morris, los historiadores han estudiado las leyes que regulaban las actividades de los esclavos con gran cuidado, pero han dedicado menos atención al derecho de propiedad, a pesar de que por definición el esclavo era objeto de la potestad o dominio de otro²⁴. Se trataba, sin embargo, de una forma peculiar de propiedad, una posesión que podía crear o destruir, amar o matar. El derecho intentó regular lo que en la práctica era una contradicción insalvable, entre el esclavo en tanto cosa sin autonomía, voluntad o conciencia, y como ser humano dotado precisamente de todos esos atributos²⁵. Junto a otros factores, esa contradicción creó ambigüedades y espacios que muchos esclavos, a veces con éxito, intentaron utilizar a su favor.

24. Thomas MORRIS. *Southern slavery and the law...* [8], p. 2 y 42.

25. Sobre la importancia de esta contradicción, ver David Brion DAVIS. *The problem of slavery in Western culture*. Ithaca: Cornell University Press, 1966, p. 62. Sobre sus implicaciones legales, ver Thomas MORRIS. *Southern slavery and the law...* [8], quien utiliza la dicotomía entre el esclavo como «cosa» y como ser humano como un principio organizativo básico en su libro. Para un estudio acerca de los problemas que esta dualidad creó para un abogado genovés del siglo XV, ver Steven EPSTEIN. «A late medieval lawyer confronts slavery: the cases of Batolomeo de Bosco». *Slavery and Abolition* (London). 20/3 (1999), p. 49-68.

Bibliografía

- ABBOT, Abiel. *Cartas desde Cuba*. La Habana: Ediciones del Consejo Nacional de Cultura, 1965.
- ACOSTA SAIGNES, Miguel. *Vida de los esclavos negros en Venezuela*. Caracas: Hespérides, 1967.
- ACTAS Capitulares del Ayuntamiento de la Habana, 1550-1578. La Habana: Municipio de La Habana, 1937-1946. 4 v.
- AGUIRRE, Carlos. «Agentes de su propia emancipación: manumisión de esclavos en Lima, Perú, 1821-1854». *América Negra* (Bogotá). 4 (Diciembre de 1992), p. 101-134.
- AGUIRRE, Carlos. *Agentes de su propia libertad: los esclavos de Lima y la desintegración de la esclavitud 1821-1854*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1993.
- AGUIRRE, Sergio. *Historia de Cuba*. La Habana: Editorial Nacional, 1966. 3 v.
- AGULHON, Maurice. *Les Quarante-Huitards*. Paris: Gallimard, 1992.
- AIMES, Hubert H. S. «Coartación: a Spanish institution for the advancement of slaves into freedom». *Yale Review* (New Haven). 17 (1909), p. 412-431.
- AIMES, Hubert. *A history of slavery in Cuba, 1511 to 1868*. New York: Putman's Sons, 1907.
- ALANYA, Luis (ed.). *Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie: Valencia 1515*. Valencia: [Anubar], 1972.
- ANDIOC TORRES, Sophie. «Cartas para la historia de Cuba». En: Domingo del Monte. *Centón Epistolario*. La Habana: Imagen Contemporánea, 2002, I, p. 1-44.
- ANDREWS, George Reid. *Blacks and whites in São Paulo, Brazil, 1888-1988*. Madison: Wisconsin University Press, 1991.
- ARNALTE, Arturo. *Los últimos esclavos de Cuba. Los niños cautivos de la goleta Batans*. Madrid: Alianza Editorial, 2001.
- ARNOLD, Morris S. «Comment on Hans Baade's the gens de couleur de Louisiana: comparative slave Law in microcosm». *Cardozo Law Review* (New York). 18 (1996), p. 587-590.
- ARRATE, José Martín Félix de. *Llave del Nuevo Mundo*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1949.
- AUBERT, Jean-Luc. *Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil*. Paris: Armand Colin, 2002.
- AYLLON, C. *Reglamento sobre el gobierno interior de las fincas rurales*. Matanzas: 1825.

- AZEVEDO, Elciene. *Entre escravos e doutores: a trajetória de Luiz Gama na imperial cidade de São Paulo*. Campinas: UNICAMP, 1997.
- AZOY, Antonio Andrés. *Colección de causas criminales*. Matanzas: Imprenta El Ferrocarril, 1868. 2 v.
- BAADE, Hans W. «The law of slavery in Spanish Louisiana, 1769-1803». En: Edward F. Haas (ed.). *Louisiana's legal heritage*. Pensacola: The Perdido Bay Press, 1983, p. 43-86.
- BACARDÍ y MOREAU, Emilio. *Crónicas de Santiago de Cuba*. Madrid: 1973. 10 v.
- BARCIA, María del Carmen. *Burguesía esclavista y abolición*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1987.
- BARICKMAN, B. J. *A Bahian counterpoint: sugar, tobacco, cassava, and slavery in the Recôncavo, 1780-1860*. Stanford: Stanford University Press, 1998.
- BARNET, Miguel. *Biografía de un cimarrón*. La Habana: Instituto de Etnología y Folklore, 1966.
- BARNET, Miguel. *Cimarrón*. La Habana: Gente Nueva, 1967.
- BARNET, Miguel. *Biography of a runaway slave*. Willimantic: Curbstone Press, 1994.
- BATRELL OVIEDO, Ricardo. *Para la historia. Guerra de independencia en la provincia de Matanzas*. La Habana: Seoane y Álvarez Impresores, 1912.
- BECKLES, Hilary McD. «Social and political control in the slave society». En: Franklin Knight (ed.). *The slave societies of the Caribbean*. London: UNESCO, 1997, p. 201, p. 194-221.. (*General History of the Caribbean*; 3).
- BELL, Caryn COSSÉ. *Revolution, romanticism, and the Afro-Creole protest tradition in Louisiana, 1718-1868*. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1997.
- BERGAD, Laird W.; Fe IGLESIAS GARCÍA y María del Carmen BARCIA. *The Cuban slave market, 1790-1880*. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1995.
- BERLIN, Ira. *Slaves without masters: the free Negro in the antebellum South*. New York: Pantheon Books, 1974.
- BERLIN, Ira. *Many thousands gone: the first two centuries of slavery in North America*. Cambridge: Harvard University Press, 1998.
- BERLIN, Ira. *Generations of captivity: a history of African-American slaves*. Cambridge: Belknap Press, 2003.
- BERNAND, Carmen. *Negros esclavos y libres en las ciudades hispanoamericanas*. Madrid: Fundación Histórica Tavera, 2001.
- BLACKBURN, Robin. *The making of New World slavery: from the Baroque to the Modern, 1492-1800*. London: Verso, 1997.
- BLIGHT, David. *Race and reunion: the Civil War in American memory*. Cambridge: Harvard University Press, 2001, p. 295.
- BOUREAU, Alain. «Droit naturel et Abstracion Judiciaire. Hypothèses sur la natural du droit medieval». *Annales* (Paris). 57 (2002), p. 1.463-1.488.
- BOWSER, Frederick P. «Colonial Spanish America». En: David W. Cohen; Jack P. Greene (eds.). *Neither slave nor free: the freedmen of African descent in the slave societies of the New World*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1974, p. 19-58.

- BOWSER, Frederick P. «The free person of color in Mexico City and Lima: manumission and opportunity, 1580-1650». En: Stanley L. Engerman; Eugene D. Genovese (eds.). *Race and slavery in the Western Hemisphere: quantitative studies*. Princeton: Princeton University Press, 1975, p. 331-368.
- BRADLEY, Keith. *Slavery and society at Rome*. Nueva York: Cambridge University Press, 1994.
- BREMER, Fredrika. *Cartas desde Cuba*. La Habana: Fundación Fernando Ortiz, 2002.
- BROOK, Thomas (ed.). Plessy v. Ferguson. *A Brief History with Documents*. Nueva York: Bedford Books, 1997.
- BROWN, Jonathan. *The history and present condition of St. Domingo*. London: Frank Cass & Co., 1971. 2 v.
- BRUQUETAS DE CASTRO, Fernando. *La esclavitud en Lanzarote 1618-1650*. Madrid: Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1995.
- CABLE, George Washington. «The silent South». En: Arlin Turner (ed.). *The Negro question: a selection of writings on civil rights in the South by George W. Cable*. Nueva York: W. W. Norton, 1958, p. 83-131. (Publicado originalmente en 1885).
- CABRERA, Olga. *Alfredo López. Maestro del proletariado cubano*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1985.
- CABRERA, Raimundo. *Cuba y sus jueces*. Filadelfia: Impresores y grabadores, 1891.
- CALDERÓN GONZÁLEZ, Jorge. *Amparo: millo y azucenas*. La Habana: Casa de las Américas, 1970.
- CANO, Bienvenido; Federico de ZALBA. *Libro de los síndicos de ayuntamiento y juntas protectoras de libertos*. La Habana: Imprenta del Gobierno, 1875.
- CARDOSO, Ciro Flamarion S. (ed.). *Escravidão e Abolição no Brasil - novas perspectivas*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1988.
- CARDOSO, Fernando Henrique. *Capitalismo e escravidão no Brasil meridional: o negro na sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul*. São Paulo: DIFEL, 1962.
- CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. «Sobre os silêncios da lei: lei costumeira e positiva nas alforrias de escravos no Brasil do século XIX». En: *Antropologia do Brasil: mito, história, etnicidade*. São Paulo: Brasiliense/EDUSP, 1986, p. 123-144.
- CARRERRES I DE CALATAYUD, F. «El Procurador dels Miserables: notes per a la seva història». *Anales del Centro de Cultura Valenciana* (Valencia). IV (1931), p. 41-53.
- CASANOVAS CODINA, Joan. «Slavery, the labour movement and Spanish colonialism in Cuba (1850-1898)». En: Tom Brass; Marcel van der Linden (eds.). *Free and unfree labour: the debate continues*. Verna: Peter Lang Verlag, 1997, p. 249-264.
- CASSÁ, Roberto. *Historia social y económica de la República Dominicana*. Santo Domingo: Alfa y Omega, 1992. 2 v.
- CASSÁ, Roberto; Genaro RODRÍGUEZ MOREL. «Consideraciones alternativas acerca de las rebeliones de esclavos en Santo Domingo». *Ecos* (Santo Domingo). 2/3 (1994), p. 155-191.
- CASTAÑEDA, Digna. «The female slave in Cuba during the first half of the Nineteenth Century». En: Verene Shepherd; Bridget Brereton; Barbara Bailey (eds.). *Engendering history: Caribbean women in historical perspective*. New York: St. Martin's Press, 1995, p. 141-154.

- CASTILLO MELÉNDEZ, Francisco. «Un año en la vida de un ingenio cubano (1655-1656)». *Anuario de Estudios Americanos* (Sevilla). 39 (1982), p. 449-463.
- CASTILLO MELÉNDEZ, Francisco. *La defensa de la isla de Cuba en la segunda mitad del siglo XVII*. Sevilla: Diputación Provincial, 1986.
- CAULFIELD, Sueann. *In defense of honor: sexual morality, modernity, and nation in early twentieth-century Brazil*. Durham: Duke University Press, 2000.
- CELL, John W. *The highest stage of white supremacy: the origins of segregation in South Africa and the American South*. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
- CHALOUH, Sidney. «Slaves, freemen, and the politics of freedom in Brazil». *Slavery and Abolition* (London). 10/3 (1989), p. 64-84.
- CHALHOUB, Sidney. *Visões da liberdade: as últimas décadas da escravidão na Corte*. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
- CHAUNU, Pierre. *Sevilla y América siglos XVI y XVII*. Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1983.
- CHESNUTT, Charles W. «The courts and the Negro (ca. 1911)». En: Thomas Brook, (ed.). Plessy v. Ferguson. *A brief history with documents*. Nueva York: Bedford Books, 1997 p. 149-160.
- COLEÇÃO das Leis do Império do Brasil. Rio de Janeiro: 1831.
- COLÓN, Germá; Aracadi GARCÍA (eds.). *Furs de València*. Barcelona: Barcino, 1990. 9 v.
- COMISIÓN DE LA JUNTA DE HACENDADOS DE SANTIAGO DE CUBA. *Arreglo de las partidas para la persecución de negros cimarrones en este territorio*. Santiago de Cuba: Imprenta del Colegio Seminario, 1832.
- CONSTITUTION of the state of Louisiana adopted in convention at the city of New Orleans the twenty-third day of July A.D. 1879. Baton Rouge: The Advocate, 1894.
- COOPER, Frederick; Thomas C. HOLT; Rebecca J. SCOTT. *Beyond slavery: explorations of race, labor, and citizenship in postemancipation societies*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2000.
- CORTÉS ALONSO, Vicenta. «La conquista de las islas Canarias a través de las ventas de esclavos en Valencia». *Anuario de Estudios Atlánticos* (Madrid). 1 (1955), 479-547.
- CORTÉS ALONSO, Vicenta. *La esclavitud en Valencia durante el reinado de los Reyes Católicos (1479-1516)*. Valencia: Ayuntamiento de Valencia, 1964.
- CORTÉS ALONSO, Vicenta. «Los pasajes de esclavos en Valencia en tiempos de Alfonso V». *Anuario de Estudios Medievales* (Barcelona). X (1980), p. 791-819.
- CORTÉS ALONSO, Vicenta. «La manumisión y la sociedad hispanoamericana». Francisco de Solano; Agustín Guimerá (eds.). *Esclavitud y derechos humanos. La lucha por la libertad del negro en el siglo XIX*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990, p. 33-4
- CORTÉS LÓPEZ, José L. *La esclavitud negra en la España peninsular del siglo XVI*. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1989.
- COSTA, Emilia Viotti da. «Commentary». *Luso-Brazilian Review* (Madison). 29/2 (1992), p. 145-150.
- COTTROL, Robert J. «The long lingering shadow: Law, liberalism, and cultures of racial hierarchy and identity in the Americas». *Tulane Law Review* (New Orleans). 76/1 (2001), p. 11-79.

- CUNHA, Manuela Carneiro da. «Silences of the law: customary law and positive law on the manumission of slaves in 19th Century Brazil». *History and Anthropology* (Chur). 1 (1985), p. 427-443.
- CURTIN, Philip D. *The rise and fall of the plantation complex: essays in Atlantic history*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- DAINOW, Joseph (ed.). *Civil code of Louisiana. Revision of 1870 with amendments to 1947*. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1947.
- DAVIDSON, David M. «Negro slave control and resistance in colonial Mexico, 1519-1650». En: Richard Price (ed.). *Maroon societies: rebel slave communities in the Americas*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1979, p. 82-104
- DAVIS, David Brion. *The problem of slavery in Western culture*. Ithaca: Cornell University Press, 1966.
- DAVIS, David Brion. «Looking at slavery from broader perspectives». *American Historical Review* (Washington). 105/2 (2000), p. 452-66.
- DEAN, Warren. *Rio Claro: A Brazilian plantation system, 1820-1920*. Stanford: Stanford University Press, 1976.
- DEGLER, Carl N. *Neither white nor black: slavery and race relations in Brazil and the United States*. Madison: The University of Wisconsin Press, 1971.
- DEIVE, Carlos. «El prejuicio racial en el folklore dominicano». *Boletín del Museo del Hombre Dominicano* (Santo Domingo). 4/8 (1977), p. 75-96.
- DEIVE, Carlos E. *La esclavitud del negro en Santo Domingo, 1492-1844*. Santo Domingo: Museo del Hombre Dominicano, 1980. 2 v.
- DEIVE, Carlos Esteban. *Los guerrilleros negros: esclavos fugitivos y cimarrones en Santo Domingo*. Santo Domingo: Fundación Cultural Dominicana, 1989.
- DEIVE, Carlos Esteban. *La Española y la esclavitud del indio*. Santo Domingo: Fundación García Arévalo, 1995
- DESCHAMPS CHAPEAUX, Pedro. *El negro en la economía habanera del siglo XIX*. La Habana: UNEAC, 1971.
- DESCHAMPS CHAPEAUX, Pedro. *Los batallones de pardos y morenos libres*. La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1976.
- DESDUNES, Rodolphe. *Nos hommes et notre histoire*. Montreal : Arbour & Dupont, 1911.
- DÍAZ DÍAZ, Rafael Antonio. «La manumisión de los esclavos o la parodia de la libertad. Santafé de Bogotá, 1700-1750». *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura* (Bogotá). 223 (1996), p. 49-72.
- DÍAZ SOLER, Luis M. *Historia de la esclavitud negra en Puerto Rico (1493-1890)*. Madrid: Revista de Occidente, 1953.
- DÍAZ, María E. *The Virgin, the king, and the royal slaves of El Cobre: negotiating freedom in colonial Cuba, 1670-1780*. Stanford: Stanford University Press, 2000.
- DICCIONARIO de la lengua castellana*. Madrid: Imprenta de la Real Academia Española, 1732.
- DIN, Gilbert C. *Spaniards, planters, and slaves: the Spanish regulation of slavery in Louisiana, 1763-1803*. College Station: Texas A & M University Press, 1999.

- DUBOIS, Laurent. *Les esclaves de la République: L'histoire oubliée de la première emancipation. 1789-1794*. Paris: Calman-Lévy, 1998.
- DUHARTE, Rafael. «Cimarrones urbanos en Santiago de Cuba». *Del Caribe* (Santiago de Cuba). 2/5 (1985), p. 11-21.
- DUHARTE, Rafael. *El negro en la sociedad colonial*. Santiago de Cuba: Editorial Oriente, 1988.
- EDER, Donald G. «Time under the Southern cross: the Tannenbaum thesis reappraised». *Agricultural History* (Berkeley). 50/4 (1976), p. 600-614.
- EDO y LLOP, Enrique. *Memoria histórica de la villa de Cienfuegos y su jurisdicción*. Cienfuegos: Imprenta El Telégrafo, 1861.
- EISENBERG, Peter. *Modernização sem mudança: a indústria açucareira em Pernambuco, 1840-1910*. Rio de Janeiro, Campinas: Paz e Terra, Editora da Unicamp, 1977.
- ELKINS, Stanley M. *Slavery: a problem in American institutional and intellectual life*. Chicago: University of Chicago Press, 1968.
- ELLIOTM, Mark. «Race, color blindness, and the democratic public: Albion W. Tourgée's radical principles in *Plessy v. Ferguson*». *The Journal of Southern History* (Baton Rouge). 67 (2001), p. 287-330.
- ELTIS, David [et al]. *The Trans-Atlantic slave trade: a database on CD-Rom*. New York: Cambridge University Press, 1999.
- EPSTEIN, Steven. «A late medieval lawyer confronts slavery: the cases of Batolomeo de Bosco». *Slavery and Abolition* (London). 20/3 (1999), p. 49-68.
- EPSTEIN, Steven. *Speaking of slavery: color, ethnicity, and human bondage in Italy*. Ithaca: Cornell University Press, 2001.
- ESSAH, Patience. *A house divided: slavery and emancipation in Delaware, 1638-1865*. Charlottesville, Londres: University Press of Virginia, 1996.
- FERMOSELLE, Rafael. *Política y color en Cuba. La Guerrita de 1912*. Montevideo: Ediciones Gémis, 1974. (2ª edición: Madrid: Editorial Colibrí, 1998).
- FERRER DE COUTO, José. *Los negros en sus diversos estados y condiciones; tales como son, como se supone que son y como deben ser*. Nueva York: Imprenta de Hallet, 1864.
- FERRER, Ada. «The silence of patriots: race and nationalism in Martí's Cuba». En: Jeffrey Belnap; Raúl Fernández (eds.). *José Martí's 'Our America': from national to hemispheric cultural studies*. Durham, N.C.: Duke University Press 1998, p. 228-249.
- FERRER, Ada. *Insurgent Cuba. Race, nation, and revolution, 1868-1898*, Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1999.
- FIEHRER, Thomas M. «The African presence in colonial Louisiana: an essay on the continuity of Caribbean culture». En: Robert R. Macdonald; John R. Kemp; Edward F. Haas (eds.). *Louisiana's black heritage*. New Orleans: Louisiana State Museum, 1979, p. 3-31.
- FIEHRER, Thomas. «Slaves and freedmen in colonial Central America: rediscovering a forgotten black past». *Journal of Negro History* (New York). 64/1 (1979), p. 39-57.

- FINKELMAN, Paul (ed.). *Slavery and the law*. Madison: Madison House, 1977.
- FISS, Owen M. *Troubled beginnings of the modern state, 1888-1910*. Nueva York: Macmillan Publishing Company, 1993.
- FOGEL, Robert W. *Without consent or contract: the rise and fall of American slavery*. Nueva York: Norton, 1989.
- FORBATH, William E. «The ambiguities of free labor: labor and the law in the gilded age». *Wisconsin Law Review* (Madison). (1985), p. 767-817.
- FRANCO, José Luciano. *Las minas de Santiago del Prado y la rebelión de los cobreros, 1530-1800*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1975.
- FRANCO, José Luciano. *Comercio clandestino de esclavos*, La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1980.
- FRANCO, José Luciano. *Apuntes para una historia de la legislación y administración colonial en Cuba 1511-1800*. La Habana: Editorial de Ciencias sociales, 1985
- FRANCO SILVA, Alfonso. *La esclavitud en Sevilla y su tierra a fines de la edad media*. Sevilla: Diputación Provincial, 1979.
- FRIEDLAENDER, H. E. *Historia económica de Cuba*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1978.
- FUENTE, Alejandro de la. «Rebeldía esclava y represión esclavista. Cuba: siglos XVI y XVII». *Alcance a la Revista de la biblioteca Nacional José Martí*. (La Habana). 2/2 (1988), p. 3-33.
- FUENTE, Alejandro de la. «A alforria de escravos em Havana, 1601-1610: primeiras conclusões». *Estudos Econômicos* (São Paulo). 20/1 (1990), p. 139-59.
- FUENTE, Alejandro de la. «Los matrimonios de esclavos en La Habana, 1585-1645». *Ibero-Americana Archiv* (Berlin). 16/4 (1990), p. 507-28.
- FUENTE, Alejandro de la. «Los ingenios de azúcar en La Habana del siglo XVII: estructura y mano de obra». *Revista de Historia Económica* (Madrid). 9/1 (1991), p. 35-67.
- FUENTE, Alejandro de la; César GARCÍA DEL PINO; Bernardo IGLESIAS DELGADO. «Havana and the fleet system: trade and growth in the periphery of the Spanish empire, 1550-1610». *Colonial Latin American Review* (Albuquerque). 5/1 (1996), p. 95-115.
- FUENTE, Alejandro de la. *A nation for all: race, inequality, and politics in Twentieth-Century Cuba*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2001.
- GALVIS NOYES, Antonio José. «La abolición de la esclavitud en la Nueva Granada, 1820-1832». *Boletín de Historia y Antigüedades* (Bogotá). 67/730 (1980), p. 469-572.
- GARCÍA AÑOVEROS, Jesús M. *El pensamiento y los argumentos sobre la esclavitud en Europa en el siglo XVI y su aplicación a los indios americanos y a los negros africanos*. Madrid: CSIC, 2000.
- GARCÍA DE PALACIOS, Juan. *Sínodo Diocesano que de orden de S. M. celebró el Ilmo. Sr. D. Juan García de Palacios, Obispo de Cuba en Junio de [1684]*. La Habana: Oficina de Aroz-za y Soler, 1814.
- GARCÍA RODRÍGUEZ, Gloria. *La esclavitud desde la esclavitud. La visión de los siervos*. México: Centro de Investigación Científica Ing. Jorge I. Tamayo, 1996.
- GARCÍA RODRÍGUEZ, Mercedes. «Ingenios habaneros del siglo XVIII». *Arbor* (Madrid). 547-548 (1991), p. 113-38. (*Raíces históricas del pueblo cubano, I*).

- GARCÍA RODRÍGUEZ, Mercedes. *Misticismo y capitales. La Compañía de Jesús en la economía del siglo XVIII*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2000.
- GARCZYNSKI, Rodolphe. «Life in Santo Domingo City». *Appletons' Journal* (New York). 9/ 223, (1873), p. 839-842.
- GENOVESE, Eugene D. «Slavery in the legal history of the South and the nation». *The Journal of Southern History* (Baton Rouge). 59 (1981), p. 969-998.
- GENOVESE, Eugene D. «The treatment of slaves in different countries: problems in the application of the comparative method». En Laura Foner; Eugene D. Genovese (eds.). *Slavery in the New World: a reader in comparative perspective*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1969, p. 202-210.
- GENOVESE, Eugene D. «Materialism and idealism in the history of Negro slavery in the Americas». *Slavery in the New World: a reader in comparative perspective*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1969, p. 238-255.
- GÓMEZ, Juan Manuel. *Camajuaní: la plantación azucarera en el siglo XIX*. Santa Clara: Editorial Capiro, 2001.
- GONZÁLEZ, Margarita. «El proceso de manumisión en Colombia». En: *Ensayos de historia colonial colombiana*. Bogotá: El Ancora, 1984.
- GONZÁLEZ, Raymundo. «Autonomía de la vida rural fue una característica de evolución de sociedad dominicana en el siglo XVIII». *El Caribe* (Santo Domingo). 10 de agosto de 1991.
- GONZÁLEZ, Raymundo. «Frontera ganadera y dispersión rural caracterizan siglo XVIII dominicano». *El Caribe* (Santo Domingo). 24 de agosto de 1991.
- GONZÁLEZ, Raymundo. «Libertos en la sociedad esclavista». *El Caribe* (Santo Domingo). 30 de noviembre de 1991.
- GONZÁLEZ, Raymundo. «Esclavos reclamaron su libertad en los tribunales de justicia». *El Caribe* (Santo Domingo). 14 de diciembre de 1991.
- GONZÁLEZ, Raymundo. «Esclavos 'ocultos' fueron fuente de conflicto durante la colonia». *El Caribe* (Santo Domingo). 1 de mayo de 1993.
- GONZÁLEZ, Raymundo. «Ideología del progreso y campesinado en el siglo diecinueve». *Ecos* (Santo Domingo). 1/2 (1993), p. 25-43.
- GORDON, Robert. «Critical legal histories». *Stanford Law Review* (Stanford). 36 (1984), p. 57-125.
- GORENDER, Jacob. *O escravismo colonial*. São Paulo, Ática, 1971.
- GRAULLERA SANZ, Vicente. *La esclavitud en Valencia en los siglos XVI y XVII*. Valencia: Instituto Valenciano de Estudios Históricos, 1978.
- GRAY, Richard. «The papacy and the Atlantic slave trade: Lourenço da Silva, the Capuchins and the decisions of the holy office». *Past and Present* (Oxford) 115 (1987), p. 52-68.
- GRINBERG, Keila. *Liberata a lei de ambigüidade. As ações de liberdade da Corte de Apelação do Rio de Janeiro no século XIX*. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994.
- GRINBERG, Keila. *Código civil e cidadania*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
- GRINBERG, Keila. *O fiador dos brasileiros: cidadania, escravidão e direito civil no tempo de Antonio Pereira Rebouças*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
- GROSS, Ariela J. *Double character: slavery and mastery in the antebellum southern courtroom*. Princeton: Princeton University Press, 2000.

- GUANCHE, Jesús. *Procesos etnoculturales de Cuba*. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1983.
- GUIRAL-HADZIOSSIF, Jacqueline. «Course et piraterie à Valence de 1410 à 1430». *Anuario de Estudios Medievales* (Barcelona). X (1980), p. 759-765.
- GUIRAL-HADZIOSSIF, Jacqueline. *Valencia, puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1525)*. Valencia: Edicions Alfons el Magnànim, 1989.
- HAIR, P. E. H. «Black African slaves at Valencia, 1482-1516: an onomastic inquiry». *History in Africa: a Journal of Method* (Waltham). 7 (1980), p. 119-131.
- HALL, Gwendolyn Midlo. *Social control in slave plantation societies: a comparison of St. Domingue and Cuba*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1971. (2ª ed. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1996).
- HANGER, Kimberley. *Bounded lives, bounded places: free black society in colonial New Orleans, 1769-1803*. Durham: Duke University Press, 1997.
- HARRIS, Marvin. *Patterns of race in the Americas*. New York: Walker and Co., 1964.
- HARTH-TERRE, Emilio. *Negros e indios. Un estamento social ignorado del Perú colonial*. Lima: Librería-Editorial Juan Mejía Baca, 1973.
- HEERS, Jacques. *Esclaves et domestiques au Moyen-Age dans le monde méditerranéen*. Paris: Fayard, 1981.
- HELG, Aline. «The limits of equality: free people of colour and slaves during the first independence of Cartagena, Colombia, 1810-15». *Slavery and Abolition* (London). 20/2 (1999), p. 1-30.
- HERRERA, José I. [Mangoché]. *Impresiones de la guerra de independencia*. La Habana: Editorial Nuevos Rumbos, 1948.
- HERZOG, Don. *Poisoning the minds of the lower orders*. Princeton: Princeton University Press, 1998.
- HESPANHA, Antonio Manuel. *História das Instituições: épocas medieval e moderna*. Coimbra: Almedina, 1982.
- HESPANHA, Antonio Manuel. *As vésperas do Leviathan. Instituições e poder político - Portugal séc. XVII*. Lisboa: 1986. 2 v.
- HEVIA LANIER, Oilda. *El Directorio Central de las Sociedades Negras de Cuba, 1886-1894*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1996.
- HIGGINS, Kathleen. «Licentious liberty» in a Brazilian gold-mining region: slavery, gender, and social control in Eighteenth-Century Sabará, Minas Gerais. University Park: Pennsylvania State University Press, 1999.
- HINOJOSA MONTALVO, José. «Piratas y corsarios en la Valencia de principios del siglo XV (1400-1499)». *Cuadernos de Historia* (Madrid). 5 (1975), p. 100-114.
- HOETINK, Harry. *Caribbean race relations. A study of two variants*. Nueva York: Oxford University Press, 1971.
- HOETINK, Harry. *The Dominican People, 1850-1900: notes for a historical sociology*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1982.
- HOETINK, Harry. «Race» and color in the Caribbean». En Sidney Mintz; Sally Price. *Caribbean contours*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1985, p. 55-84.

- HORREGO ESTUCH, Leopoldo. *Martín Morúa Delgado. Vida y Mensaje*. La Habana: Ed. Sánchez, S. A., 1957.
- HOUSSEAU, Jean Charles. *My passage at the New Orleans Tribune: a memoir of the Civil War era*. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1984.
- HOWINGTON, Arthur. «A property of special and peculiar value': the Tennessee Supreme Court and the law of manumission». En: Paul Finkelman (ed.). *Law, the Constitution, and slavery*. Nueva York: Garland, 1989, p. 210-23.
- HÜNEFELDT, Christine. *Paying the price of freedom: family and labor among Lima's slaves 1800-1854*. Berkeley: University of California Press, 1994.
- HURLBUT, William H. *Pictures of Cuba*. London: Longman, 1855.
- IBARRA, Jorge. «Regionalismo y esclavitud patriarcal en los departamentos oriental y central de Cuba». *Anales del Caribe* (La Habana). 6 (1986), p. 22-52.
- IGLESIAS GARCÍA, Fe. «La estructura agraria de La Habana, 1700-1775». *Arbor* (Madrid). 547-548 (1991), p. 91-112. (*Raíces históricas del pueblo cubano, I*).
- INGERSOLL, Thomas N. *Mammon and Manon in early New Orleans: the first slave society in the deep South, 1718-1819*. Knoxville: The University of Tennessee Press, 1999.
- JEREZ DE VILLAREAL, Juan. *Oriente. Biografía de una provincia*. La Habana: Imprenta El Siglo XX. 1960.
- JOHNSON, Lyman L. «Manumission in colonial Buenos Aires, 1776-1810». *Hispanic American Historical Review* (Durham). 59/2 (1979), p.258-79.
- JOHNSON, Lyman L. «Manumission in colonial Buenos Aires, 1776-1810». *Hispanic American Historical Review* (Durham). 59/2 (1979), p. 258-279.
- JOHNSON, Walter. *Soul by soul. Life inside the antebellum slave market*. Cambridge: Harvard University Press, 2000.
- JORDAN, Winthrop D. *White over black: American attitudes toward the Negro, 1550-1812*. New York: W. W. Norton, 1977.
- KANT, Immanuel. *Practical Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. (Traducción y edición de Mary J. Gregor).
- KIPLE, Kenneth. *Blacks in colonial Cuba 1774-1899*. Gainesville: The University Presses of Florida, 1976.
- KLARMAN, Michael. «The Plessy era». En Hutchinson, Dennis J.; David A. Strauss; Geoffrey R. Stone (eds.). *The Supreme Court Review 1998*. Chicago: University of Chicago Press Journals Division, 1999, p. 303-414.
- KLEIN, Herbert S. *Slavery in the Americas: a comparative study of Virginia and Cuba*. Chicago: Elephant Paperbacks, 1989. (1ª ed. 1967).
- KLEIN, Herbert. «Nineteenth-Century Brazil». En: David Cohen; Jack Greene (eds.). *Neither slave nor free: the freedmen of African descent in the slave societies of the New World*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1972, p. 309-334.

- KNIGHT, Franklin. *Slave society in Cuba during the Nineteenth Century*. Madison: Wisconsin University Press, 1970.
- KNIGHT, Franklin. «Cuba». En: David Cohen; Jack Greene (eds.). *Neither slave nor free: the freedmen of African descent in the slave societies of the New World*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1972, p. 278-308.
- KONETZKE, Richard. *Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica 1493-1810*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Jaime Balmes, 1953-1962. 5 v.
- KURLAND, Philip B.; Gerhard CASPER (eds.). *Landmark briefs and arguments of the Supreme Court of the United States: Constitutional Law*. Arlington, Virginia: University Publications of America, 1975.
- LA ROSA, Gabino. *Los cimarrones de Cuba*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1988.
- LA ROSA, Gabino. *Los palenques del oriente de Cuba: resistencia y acoso*. La Habana: Editorial Academia, 1991.
- LANDERS, Jane. *Black society in Spanish Florida*. Urbana: University of Illinois Press, 1999.
- LARA, Silvia H. (ed.). *Escravidão*. São Paulo: 1988. (*Revista Brasileira de História*; 8/16 [1988]).
- LARA, Silvia H. *Campos da violência: escravos e senhores na Capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.
- LARRAZÁBAL BLANCO, Carlos. *Los negros y la esclavitud en Santo Domingo*. Santo Domingo: J. D. Postigo, 1967. (2ª ed. 1975).
- LAVIÑA, Javier (ed.). *Doctrina para negros*. Barcelona: Sendai Ed., 1989.
- LE RIVEREND, Julio. *Selección de lecturas de historia de Cuba*. La Habana: Editora Política, 1984;
- LEMONIER DELAFOSSE, J.B. *Segunda campaña de Santo Domingo: Guerra dominico-francesa de 1808*. Santiago, R.D.: Editorial El Diario, 1946, p. 151.
- LIENHARD, Martin. *Le discours des esclaves de l'Afrique à l'Amérique latine (Kongo, Angola, Brésil, Caraïbes)*. Paris: L'Harmattan, 2001.
- LIENHARD, Martin. *La voz y su huella*. México: Ediciones Casa Juan Pablos, 2003.
- LIRIANO, Alejandra. *El papel de la mujer de origen africano en el Santo Domingo colonial, siglos XVI-XVII*. Santo Domingo: Centro de Investigación para la Acción Femenina, 1992.
- LOBO CABRERA, Manuel. *La esclavitud en las Canarias Orientales en el siglo XVI: negros, moros y moriscos*. Santa Cruz de Tenerife: Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1982.
- LOFGREN, Charles A. *The Plessy case: a legal-historical interpretation*. Nueva York: Oxford University Press, 1987.
- LOGSDON, Joseph; Lawrence POWELL. «Rodolphe Lucien Desdunes: forgotten organizer of the Plessy protest». En: Samuel C. Hyde, Jr. (ed.). *Sunbelt revolution: the historical progression of the civil rights struggle in the Gulf South, 1866-2000*. Gainesville: University Press of Florida, 2003, p. 42-70.
- LÓPEZ Y SEBASTIÁN, Lorenzo; Justo del RÍO MORENO. «Comercio y transporte en la economía del azúcar antillano durante el siglo XVI». *Anuario de Estudios Americanos* (Sevilla). 49 (1992), p. 55-87.

- Los CÓDIGOS españoles concordados y anotados*. Madrid: La Publicidad, 1847-1851. 12 v.
- LUCENA SALMORAL, Manuel. *Sangre sobre piel negra: la esclavitud quiteña en el contexto del reformismo borbónico*. Quito: Ediciones Abya-Yala, 1994.
- LUCENA SALMORAL, Manuel. *Los códigos negros de la América española*. Madrid: Ediciones UNESCO, 1996.
- LUCENA SALMORAL, Manuel. «El derecho de coartación del esclavo en la América Española». *Revista de Indias* (Madrid). LIX/216 (1999), p. 357-374.
- LUCENA SALMORAL, Manuel. *La esclavitud en la América española*. Varsovia: Universidad de Varsovia, Centro de Estudios Latinoamericanos, 2002.
- LUIÁN MUÑOZ, Jorge. «La literatura notarial en España e Hispanoamérica 1500-1820». *Anuario de Estudios Americanos* (Sevilla). 38 (1981), p. 101-116.
- LYONNET, C. «Estadística de la parte española de Santo Domingo, 1800». En: Emilio Rodríguez Demorizi (ed.). *La era de Francia en Santo Domingo: contribución a su estudio*. Ciudad Trujillo: Editora del Caribe, 1955.
- MACÍAS, Isabelo. *Cuba en la primera mitad del siglo XVII*. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1978.
- MADDEN, Richard R. *La isla de Cuba. Sus recuerdos, progresos y perspectivas*. La Habana: Editorial Consejo Nacional de Cultura, 1964.
- MALAGÓN BARCELÓ, Javier. *Código Negro Carolino (1784)*. Santo Domingo: Editora Taller, 1974.
- MARRERO, Leví. *Los esclavos y la virgen del Cobre*. Miami: Ediciones Universal, 1980.
- MARRERO, Leví. *Cuba: economía y sociedad*. Madrid: Editorial Playor, 1975-1992. 15 v.
- MARTINET, Louis A. (ed.). *The violation of a constitutional right. Published by authority of the Citizens' Committee*. Nueva Orleans: By the Crusader Print, 1896.
- MARTÍNEZ HEREDIA, Fernando. «Ricardo Batrell empuña la pluma». En: Fernando Martínez Heredia; Rebecca Scott; Orlando García Martínez. *Espacios, silencios y los sentidos de la libertad: Cuba entre 1878 y 1912*. La Habana: Unión, 2001, p. 295-313.
- MARTÍNEZ HEREDIA, Fernando; Rebecca J. SCOTT; Orlando F. GARCÍA MARTÍNEZ (eds.). *Espacios, silencios y los sentidos de la libertad: Cuba entre 1878 y 1912*. La Habana: Unión, 2001.
- MARTÍNEZ-ALIER, Verena. *Marriage, class, and colour in Nineteenth-Century Cuba: a study of racial attitudes and sexual values in a slave society*. London, New York: Cambridge University Press, 1974.
- MASÓ VELÁZQUEZ, Calixto. *Historia de Cuba*. Miami: Ediciones Universal, 1976.
- MATTOS, Hebe. *Das cores do silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista – Brasil século XIX*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.
- MATTOSO, Kátia Maria de Queirós. *To be a slave in Brazil, 1550-1888*. New Brunswick: Rutgers University Press, 1986.
- MATTOSO, Kátia Maria de Queirós. *Bahia, século XIX: uma província no Império*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992.
- MAZA MIQUEL, Manuel. «Clero católico y esclavitud en Cuba en los siglos XVI al XIX. Ensayo de síntesis». *Estudios Sociales* (Santo Domingo). 79-80, (1990), p. 17-61.

- MEDLEY, Keith Weldon. *We as freemen: Plessy vs. Ferguson*. Gretna, Louisiana: Pelican Publishing Company, 2003.
- MEIKLEJOHN, Norman A. «The implementation of slave legislation in Eighteenth-Century New Granada». En: Robert Brent Toplin (ed.). *Slavery and race relations in Latin America*. Westport: Greenwood Press, 1974, p. 176-203.
- MELLAFE, Rolando. *Breve historia de la esclavitud en América Latina*. México D.F.: Secretaría de Educación, 1973.
- MEMORIA leída por el director de la Sociedad La Providencia en la Junta General de 16 de mayo de 1857*. La Habana: Imprenta Spencer y Compañía, 1857.
- MESA RODRÍGUEZ, Manuel I. (ed.). *Centón epistolario de Domingo del Monte*. La Habana: Impr. «El Siglo XX», 1957. 7 v.
- MEYERSON, Mark D. «Slavery and solidarity: Mudejars and foreign Muslim captives in the kingdom of Valencia». *Medieval Encounters* (Nueva York). 2/3 (1996), p. 286-343.
- MEYERSON, Mark D. *The Muslims of Valencia in the age of Fernando and Isabel: between coexistence and crusade*. Berkeley: University of California Press, 1991.
- MEYERSON, Mark D. «Slavery and the social order: Mudejars and Christians in the kingdom of Valencia». *Medieval Encounters* (Nueva York). 1/1 (1995), p. 144-173.
- MINTZ, Sidney. «Slavery and emergent capitalisms». En: Laura Foner; Eugene Genovese (eds). *Slavery in the New World: a reader in comparative perspective*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1969, p. 27-37.
- MINTZ, Sidney. *Caribbean transformations*. Chicago: Aldine Publishing, 1974.
- MITCHELL, Mary Niall. «A good and delicious country': free children of color and how they learned to imagine the Atlantic world in nineteenth-century Louisiana». *History of Education Quarterly* (New York). 4/2 (2000), p. 123-144.
- MONTEIRO, John. *Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo*. [São Paulo]: Companhia das Letras, 1995.
- MOREAU DE SAINT-MÉRY, M.L.E.. *Descripción de la parte española de Santo Domingo*. Ciudad Trujillo: Editora Montalvo, 1944.
- MORENO FRAGINALS, Manuel. *El Ingenio. Complejo económico social cubano del azúcar*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1978. 3 v. (1ª Ed. 1964).
- MORENO FRAGINALS, Manuel. «Peculiaridades de la esclavitud en Cuba». *Del Caribe* (Santiago de Cuba). 4/8 (1987), p. 4-10.
- MORENO FRAGINALS, Manuel; Herbert KLEIN; Stanley ENGERMAN. «Nivel y estructura de los precios de esclavos de las plantaciones cubanas a mediados del siglo XIX: algunas perspectivas comparativas». *Santiago* (Santiago de Cuba). 63 (1986), p. 97-126.
- MORRIS, Thomas D. *Southern slavery and the law, 1619-1860*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1996.
- MOYA PONS, Frank. *El pasado dominicano*. Santo Domingo: Fundación J. A. Caro Álvarez, 1986.
- MOYA PONS, Frank. «Dominican national identity: a historical perspective». *Punto 7 Review: a journal of marginal discourse* (New York). 3/1 (1996). p. 14-25.
- MULVEY, Patricia. «Black brothers and sisters: membership in black brotherhoods in colonial Brazil». *Luso-Brazilian Review* (Madison). 17/2 (1980), p. 253-279.

- MURRAY, David R. *Odious commerce: Britain, Spain and the abolition of the Cuban slave trade*. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.
- NAVARRO AZCUE, Concepción. *La abolición de la esclavitud negra en la legislación española, 1870-1886*. Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica, 1987.
- NAVEDA CHÁVEZ-HITA, Adriana. «Denominaciones raciales en archivos locales». En: *Pardos, mulatos y libertos. Sexto encuentro de afromexicanistas*. Xalapa: Universidad Veracruzana, 2001, p. 195-205.
- NELSON, William E. *The fourteenth amendment: from political principle to judicial doctrine*. Cambridge: Harvard University Press, 1988.
- NEQUETE, Lenine. *O Escravo na jurisprudência brasileira: magistratura e ideologia no Segundo Reinado*. Porto Alegre: Revista dos Tribunais, 1988.
- NISTAL MORET, Benjamín. *Esclavos prófugos y cimarrones: Puerto Rico 1770-1870*. Río Piedras: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1984.
- NOTÍCIAS estadísticas de la Isla de Cuba en 1861-1862. La Habana: Imprenta del Gobierno, Capitanía General y Real Hacienda, 1862.
- OBERST, Paul. «The strange career of Plessy v. Ferguson». *Arizona Law Review* (Tucson). 15 (1973-1974), p. 389-418.
- OFFICIAL *Journal of the Proceedings of the Convention for Framing a Constitution for the State of Louisiana*. Nueva Orleans: J.B. Roudanez and Co., 1867-68.
- OLSEN, Otto H. (ed.). *The thin disguise: turning point in negro history, Plessy v. Ferguson. A documentary presentation (1864-1896)*. Nueva York: Humanities Press, 1967.
- ORTIZ, Fernando. *Los negros esclavos*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1975 (primera edición 1916).
- PAIVA, Eduardo França. *Escravos e libertos em Minas Gerais: estratégias de resistência através de testamentos*. São Paulo: Annablume, 1995.
- PALMIÉ, Stephan. *Wizards and scientists: explorations in Afro-Cuban modernity and tradition*. Durham: Duke University Press, 2002.
- PAQUETTE, Robert. *Sugar is made with blood: the conspiracy of La Escalera and the conflict between empires over slavery in Cuba*. Middletown: Wesleyan University Press, 1988.
- PAYTON, Sallyanne. «The duty of a public utility to serve in the presence of new competition». En: Werner Sichel; Thomas G. Gies. *Applications of economic principles in public utility industries*. Ann Arbor: Division of Research, Graduate School of Business Administration, The University of Michigan, 1981, p. 121-152.
- PENA, Eduardo Spiller. «Resenha de Liberata: a lei da ambiguidade». *Afro-Ásia: Revista do Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia* (Salvador). 17 (1996), p. 237-243.

- PENA, Eduardo Spiller. *Pajens da Casa Imperial: jurisconsultos e escravidão no Brasil Imperial*. Campinas: UNICAMP, 2001.
- PEÑA PÉREZ, Frank. «Despoblación y miseria en Santo Domingo en el siglo diecisiete». *Investigación y Ciencia* (Santo Domingo). 1/1 (1986), p. 83-92.
- PEREDA VALDÉS, Idelfonso. *El negro en el Uruguay, pasado y presente*. Montevideo: Revista del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, 1965.
- PEREIRA DAS NEVES, Lúcia M.B. *Corcundas, constitucionais, pés-de-chumbo: a cultura política da Independência (1820-1822)*. Rio de Janeiro: FAPERJ, Revan, 2003.
- PÉREZ DE LA RIVA, Juan. *El Barracón y otros ensayos*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1975.
- PÉREZ DE LA RIVA, Juan. *¿Cuántos africanos fueron traídos a Cuba?* La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1977.
- PÉREZ DE LA RIVA, Juan. *El monto de la inmigración forzada en le siglo XIX*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 1979, p. 41.
- PÉREZ DE LA RIVA, Juan. *Los Culies chinos en cuba (1847-1880)*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2000.
- PÉREZ, Louis A., *Slaves, sugar, and colonial society: travel accounts of Cuba, 1801-1899*. Wilmington: SR Books, 1992.
- PÉREZ-CISNEROS, Enrique. *La abolición de la esclavitud en Cuba*. Costa Rica: Litografía e Imprenta LIL, S. A., 1987.
- PETRUCCI, Armando. «Escribir para otros». En: *Alfabetismo, escritura, sociedad*. Barcelona: Gedisa, 1999, p. 105-116.
- PETRUCCI, Armando. *Alfabetismo, escritura, sociedad*. Barcelona: Gedisa, 1999.
- PHILLIPS, William D. *Historia de la esclavitud en España*. Madrid: Playor, 1990.
- PHILLIPS, William D. *Slavery from Roman times to the early transatlantic trade*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1985.
- PICHARDO, Hortensia (ed.). *Documentos para la historia de Cuba*, La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1973. 5 v. (1ª Ed. 1965).
- PIKE, Ruth. *Aristocrats and traders: Sevillian society in the sixteenth century*. Ithaca: Cornell University Press, 1972.
- PILDES, Richard H. «Democracy, anti-Democracy, and the canon». *Constitutional Commentary* (Twin Cities). 17 (2000), p. 295-319.
- PIMENTEL, Maria do Rosário. *Viagem ao fundo das consciências: a escravatura na época moderna*. Lisboa: Colibri, 1995.
- PORTUONDO ZÚÑIGA, Olga. «Marcos Maceo, el Santiaguero». En: *Visión Multiple de Antonio Maceo*. Santiago de Cuba: Editorial Oriente, 1998, p. 19-37.
- PORTUONDO ZÚÑIGA, Olga; Manuel FERNÁNDEZ CARCASSÉS. «Ascensio Asencio, un padrino común». En: *Visión Multiple de Antonio Maceo*. Santiago de Cuba: Editorial Oriente, 1998, p. 38-59.
- PORTUONDO ZÚÑIGA, Olga. «Ascendencia paterna de Antonio Maceo». *Del Caribe* (Santiago). 35 (2001), p. 88-94.
- POSTEMA, Gerald. «The sins of segregation». *Law and Philosophy* (Dordrecht, Boston). 16 (1997), p. 221-244.

- PRICE-MARS, Jean. *La República de Haití y la República Dominicana: diversos aspectos de un problema histórico, geográfico y etnológico Desde el origen de la población de la isla antillana en 1492 hasta la evolución de los dos Estados que comparten la soberanía de la misma en 1953*. Madrid: 1958.
- PRIMUS, Richard. *The American language of rights*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- PUTNAM, Lara. *The company they kept: migrants and the politics of gender in Caribbean Costa Rica, 1870-1960*. Chapel Hill: UNC Press, 2002.
- RAMA, Ángel. *The lettered city*. Durham: Duke University Press, 1996
- RANKIN, David C. «The Tannenbaum Thesis Reconsidered: slavery and race relations in antebellum Louisiana». *Southern Studies* (Natchitoches). 18/1 (1979), p. 5-31.
- RATEKIN, Mervyn. «The Early Sugar Industry in Española». *Hispanic American Historical Review* (Durham). 34/1 (1954), p. 1-19.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. *Diccionario de la Lengua Castellana*. Madrid: Imprenta de Francisco del Hierro, 1729.
- REAL CONSULADO Y JUNTA DE FOMENTO. *Nuevo Reglamento y Arancel que debe gobernar en la captura de los esclavos cimarrones*. La Habana: Imprenta del Gobierno, 1796.
- RECOPILACIÓN de leyes de los reinos de las Indias. Madrid: 1681
- RENOUVIER, Charles. *Manuel Républicain de l'homme et du citoyen. 1848*. Paris: Éditions Garnier Frères, 1981.
- REVEL, Jaques. «Microanalysis and the construction of the social». En Jaques Revel; Lynn Hunt (eds.). *Histoires. French constructions of the past*. Nueva York: The New Press, 1995, p. 492-502.
- REVEL, Jaques (dir). *Jeux d'échelles: La micro-analyse à l'expérience*. Paris: Seuil, Gallimard, 1996.
- RIBEIRO, Gladys S. *A liberdade em construção: identidade nacional e conflitos antilusitanos no Primeiro Reinado*. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002.
- RÍO MORENO, Justo del; Lorenzo LÓPEZ Y SEBASTIÁN. «El comercio azucarero de La Española en el siglo XVI. Presión monopolística y alternativas locales». *Revista Complutense de Historia de América* (Madrid). 17 (1991), p. 39-78.
- RODRÍGUEZ ARRIETA, Marisol. «La ley sobre aprendizaje de manumisos en la provincia de Maracaibo y sus efectos en el proceso de manumisión (1840-1848)». *Tierra Firme* (Caracas). 17/67 (1999), p. 403-414.
- RODRÍGUEZ ARRIETA, Marisol. *Manumisión y abolición en la provincia de Maracaibo (1810-1864)*. Maracaibo: Gobernación del Estado Zulia, Acervo Histórico del Estado Zulia, 2001.
- RODRÍGUEZ DEMORIZI, Emilio. *La era de Francia en Santo Domingo: contribución a su estudio*. Ciudad Trujillo: Editora del Caribe, 1955.
- RODRÍGUEZ DEMORIZI, Emilio. *Milicias de Santo Domingo, 1786-1821*. Santo Domingo: Editora del Caribe, 1978.
- RODRÍGUEZ MOREL, Genaro. «Esclavitud y vida rural en las plantaciones azucareras de Santo Domingo. Siglo XVI». *Anuario de Estudios Americanos* (Sevilla). 49 (1992), p. 89-117.

- ROJAS, María T. de. *Índice y extractos del Archivo de Protocolos de la Habana, 1578-1585*. La Habana: 1947-1957. 3 v.
- ROLDÁN DE MONTAUD, Inés. «Origen, evolución y supresión del grupo de negros 'emancipados' en Cuba 1817-1870». *Revista de Indias* (Madrid). XLII/169-170 (1982), p. 559-641.
- ROLOFF Y MIALOFSKY, Carlos. *Índice alfabético y defunciones del Ejército Libertador de Cuba*. Habana: Imprenta de Rambla y Bouza, 1901.
- ROMERO, Leandro S. «Fichero ilustrado». *Revolución y Cultura* (La Habana). 36 (1975), p. 78-82.
- ROMERO, Leandro S. «Orfebrería habanera en las islas Canarias». *Universidad de La Habana* (La Habana). 222 (1984), p. 390-407.
- ROMERO, Sidney J. *«My fellow citizens...»: the inaugural addresses of Louisiana's Governors*. Lafayette, La.: Center for Louisiana Studies, University of Southwestern Louisiana, 1980.
- ROUT, Leslie, Jr. *The African Experience in Spanish America: 1502 to the present day*. New York: Cambridge University Press, 1976.
- RUBIERA CASTILLO, Daisy (ed.). *Reyita, sencillamente. (Testimonio de una negra cubana nonagenaria)*. La Habana: Instituto Cubano del Libro, World Data Research Center, 1997.
- RUÍZ GÓMEZ, Eugenio. *Novísima legislación orgánica del notariado de las islas de Cuba y Puerto-Rico*. Málaga: Imp. Viuda de Gil de Montes, 1874.
- RUSSELL-WOOD, A. J. R. *The black man in slavery and freedom in colonial Brazil*. New York: St. Martin's Press, 1978.
- RUSSELL-WOOD, A.J.R. *Black Man in Slavery and Freedom in Colonial Brazil*. London: Macmillan and St. Anthony's College, 1982.
- SAGÁS, Ernesto. *Race and politics in the Dominican Republic*. Gainesville: University Press of Florida, 2000.
- SAID, Edward. *Orientalism. Western Conceptions of the Orient*. New York: Penguin, 1995.
- SALA-MOLINS, Louis. *L'Afrique aux Amériques: Le Code Noir espagnol*. Paris: Presses Universitaires de France, 1992.
- SÁNCHEZ BELLA, Ismael. *Nuevos estudios de derecho indiano*. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 1995.
- SÁNCHEZ VALVERDE, Antonio. *Idea del valor de la isla española*. Santo Domingo: Editora Nacional, 1971. (1ª Ed. 1785).
- SARTORIUS, David «Conucos y subsistencia: el caso del ingenio Santa Rosalía». En: Fernando Martínez Heredia; Rebecca Scott; Orlando García Martínez (eds.). *Espacios, silencios y los sentidos de la libertad: Cuba entre 1878 y 1912*. La Habana: Unión, 2001, p. 108-127.
- SAUNDERS, A. C. de C. M. *A social history of black slaves and freedmen in Portugal, 1441-1555*. New York: Cambridge University Press, 1982.
- SCHAFER, Judith K. *Slavery, the civil Law, and the Supreme Court of Louisiana*. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1994.
- SCHWARTZ, Stuart B. «The manumission of slaves in colonial Brazil: Bahia, 1684-1745». *Hispanic American Historical Review* (Durham). 54/4 (1974), p. 603-635.
- SCHWARTZ, Stuart B. *Sugar plantations and the formation of Brazilian society: Bahia, 1550-1835*. New York: Cambridge University Press, 1985.

- SCHWARTZ, Stuart. *Slaves, peasants, and rebels: reconsidering Brazilian slavery*. Urbana: University of Illinois Press, 1992.
- SCOTT, Rebecca J. *Slave emancipation in Cuba: the transition to free labor, 1860-1899*. Princeton: Princeton University Press, 1985. (2ª Ed.: Pittsburgh: The University of Pittsburgh Press, 2000).
- SCOTT, Rebecca J. «Stubborn and Disposed to Stand their Ground': Black Militia, Sugar Workers, and the Dynamics of Collective Action in the Louisiana Sugar Bowl, 1863-1887». *Slavery and Abolition* (Londres). 20 (1999), p. 103-126.
- SCOTT, Rebecca J. «Small-scale dynamics of large-scale processes». *American Historical Review* (Washington) 105/2 (2000), p. 472-79.
- SCOTT, Rebecca J. «Reclaiming Gregoria's mule: the meanings of freedom in the Arimao and Caonao valleys, Cienfuegos, Cuba, 1880-1899». *Past and Present* (Oxford). 170 (2001), p. 181-217.
- SCOTT, Rebecca J. «Reclamando la mula de Gregoria Quesada: el significado de la libertad en los valles del Arimao y del Caonao, Cienfuegos, Cuba (1880-1899)». En: Fernando Martínez Heredia; Rebecca Scott; Orlando García Martínez (eds.). *Espacios, silencios y los sentidos de la libertad: Cuba entre 1878 y 1912*. La Habana: Unión, 2001, p. 23-52.
- SCOTT, Rebecca J. *La emancipación de los esclavos en Cuba. La transición al trabajo libre 1860-1899*. La Habana: Editorial Caminos, 2001.
- SCOTT, Rebecca J. «Reclamar la ciudadanía imponiendo el imperio: La misión ambigua de los voluntarios negros del Noveno Regimiento de Infantería estadounidense en San Luis, Santiago de Cuba, 1898-99». *Del Caribe* (Santiago de Cuba). 37 (2002), p. 22-27.
- SCOTT, Rebecca J. «The provincial archive as a place of memory: confronting oral and written sources on the role of former slaves in the Cuban War of Independence (1895-98)». *New West Indian Guide* ('s-Gravenhage). 76/3-4 (2002), p. 191-209.
- SCOTT, Rebecca J.; Michael ZEUSKE. «Property in writing, property on the ground: pigs, horses, land, and citizenship in the aftermath of slavery, Cuba, 1880-1909». *Comparative Studies in Society and History* (London, New York). 44 (2002), p. 669-699.
- SCOTT, Rebecca J.; Michael ZEUSKE. «The right to have rights: the Symbolic and juridical power of the oral and the written in the claims-making of former slaves, Cuba 1872-1907». *Comparative Studies in Society and History* (London; New York). 44/4 (2002), p. 669-699.
- SCOTT, Rebecca J.; Michael ZEUSKE. «Le ,droit d'avoir des droits'. Les revendications des ex-esclaves à Cuba (1872-1909)». *Annales. Histoire Sciences Sociales* (Paris). 59/3 (2004), p. 521-545.
- SERRIGNY, Denis. *Traité du droit public des français, précédé d'une introduction sur les fondements des sociétés politiques*. Paris: Joubert, 1846. 2 v.
- SIO, Arnold A. «Interpretations of slavery: the slave status in the Americas». *Comparative Studies in Society and History* (London, New York). 7/3 (1965), p. 289-308.
- SKIDMORE, Thomas. «Race and class in Brazil: historical perspectives». En: Pierre-Michel Fontaine, (ed.). *Race, class and power in Brazil*. Los Angeles: CAAS, 1985, p. 11-24.
- SOULASTRE, Dorvo. *Voyage par terre de Santo-Domingo, Capitale de la Partie Espagnole de Saint-Domingue, au Cap-François, Capitale de la Partie Française de la même isle*. Paris: Chauverot, 1809.

- STAVIG, Ward. *The world of Tupac Amaru: conflict, community, and identity in colonial Peru*. Lincoln: University of Nebraska Press, 1999.
- STELLA, Alessandro. «L'esclavage en Andalousie à l'époque moderne». *Annales Économies Sociétés Civilisations* (Paris). 47/1 (enero-febrero 1992), p. 35-63.
- STELLA, Alessandro. *Histories d'esclaves dans la péninsule Ibérique*. Paris: Editions de L'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2000.
- STERN, Steve J. *Peru's Indian peoples and the challenge of Spanish conquest. Huamanga to 1640*. Madison: University of Wisconsin Press, 1982.
- STERN, Steve. *The secret history of gender: women, men, and power in late colonial Mexico*. Chapel Hill: UNC Press, 1995.
- STUYCK Y REIG, Juan. *Legislación hipotecaria y del notariado de las provincias de Cuba y Puerto-Rico*. Madrid: [s.n.], 1880. 2 v.
- SUED BADILLO, Jalil. «The Island Caribs: new approaches to the question of ethnicity in the early colonial Caribbean». En: Neil Whitehead (ed.). *Wolves from the sea: readings in the anthropology of the native Caribbean*. Leiden: KITLV Press, 1995, p. 61-89.
- SWEET, James. «The Iberian roots of American racist thought». *The William and Mary Quarterly* (Williamsburg). 44/1 (1997), p. 143-166.
- SWEET, James. *Recreating Africa: culture, kingship, and religion in the African-Portuguese world, 1441-1770*. Chapel Hill: UNC Press, 2003.
- SWEET, James. *Recreating Africa: Culture, kingship, and religión in the African-Portuguese World, 1441-1770*. Chapel Hill: UNC Press, 2003.
- TANNENBAUM, Frank. *Slave and citizen*. Boston: Beacon Press, 1992. (1ª ed. 1946).
- TARDIEU, Jean-Pierre. «Morir o dominar». *En torno al reglamento de esclavos en Cuba (1841-1866)*. Madrid: Iberoamericana, 2003.
- THORNTON, John. *Africa and africans in the making of the Atlantic world, 1400-1800*. Nueva York: Cambridge University Press, 1998, p. 235-68 (2ª edición).
- THORNTON, John K. «Religious and ceremonial life in the Kongo and Mbundu Areas, 1500-1700». En: Linda Heywood (ed.). *Central Africans and cultural transformations in the American diaspora*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p. 71-90.
- TORRES-CUEVAS, Eduardo; Eusebio REYES. *Esclavitud y sociedad: notas y documentos para la historia de la esclavitud negra en Cuba*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1986.
- TORRES-SELLANT, Silvio. «Creoleness or blackness: a Dominican dilemma». *Plantation Society of the Americas* (Fiehrer). 5/1 (1998), p. 29-40.
- TORRES-SELLANT, Silvio. «Tribulations of Blackness: Stages in Dominican Racial Identity». *Latin American Perspectives* (Thousand Oaks). 25/3 (1998), p. 126-146.
- TURITS, Richard. «A world destroyed, a nation imposed: the 1937 Haitian massacre in the Dominican Republic». *Hispanic American Historical Review* (Durham). 82/3 (2002), p. 589-635.
- TURITS, Richard. *Foundations of despotism: peasants, the Trujillo regime, and modernity in Dominican history*. Stanford: Stanford University Press, 2003.

- TUSHNET, Mark V. *The American law of slavery 1810-1860*. Princeton: Princeton University Press, 1981.
- TUSHNET, Mark V. «The politics of equality in constitutional law: The equal protection clause, Dr. Du Bois, and Charles Hamilton Houston». *The Journal of American History* (Bloomington). 74 (1987), p. 884-903.
- TUSHNET, Mark V. «New histories of the private law of slavery». *Cardozo Law Review* (New York). 18 (1996), p. 301-307.
- TWINAM, Ann. *Public lives, private secrets: gender, honor, sexuality, and illegitimacy in colonial Spanish America*. Stanford: Stanford University Press, 1999.
- UBALDO GÓMEZ, M. «El color de los dominicanos». *Bahoruco* (Bahoruco). 3/106 (1932), p. 18-20.
- VALENCIA VILLA, Carlos E. *Alma en boca y huesos en costal: una aproximación a los contrastes socio-económicos de la esclavitud. Santafé, Mariquita y Mompo 1610-1660*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2003.
- VERLINDEN, Charles. «Orthodoxie et Esclavage au bas Moyen Age». *Mélanges Eugène Tisserand* (Ciudad Vaticano). V. (1964), p. 427-456.
- VERLINDEN, Charles. *The beginnings of modern colonization*. Ithaca: Cornell University Press, 1970.
- VERLINDEN, Charles. *L'esclavage dans l'Europe médiévale 2, Italie, colonies italiennes du Levant, Levant latin, Empire byzantin*. Brugge; Gent: De Tempel, Rijksuniversiteit te Gent, 1977.
- WATSON, Alan. *Slave law in the Americas*. Athens: The University of Georgia Press, 1989.
- WEHLING, Arno; Maria José WEHLING. «Cultura jurídica e julgados do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro: a invocação da boa razão e o uso da doutrina: uma amostragem». En: Maria Beatriz NIZZA DA SILVA (org.). *Cultura Portuguesa na Terra de Santa Cruz*. Lisboa: Editorial Estampa, 1995, p. 235-248.
- WELKE, Barbara Young. *Recasting American liberty: gender, race, law, and the railroad revolution, 1865-1920*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- WHITMAN, Stephen T. *The price of freedom: slavery and manumission in Baltimore and early national Maryland*. Kentucky: University Press of Kentucky, 1997.
- WILLIAM, Luis. *Literary bondage: slavery in Cuban narrative*. Austin: The University of Texas Press 1990.
- WITT, John Fabian. *The accidental republic: crippled workingmen, destitute widows, and the remaking of American law*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004.
- ZEUSKE, Michael. «El «Cimarrón» y las consecuencias de la guerra del 95. Un repaso de la biografía de Esteban Montejo». *Revista de Indias* (Madrid). LVIII/212 (1998), p. 65-84.

- ZEUSKE, Michael. «Novedades de Esteban Montejo». *Revista de Indias* (Madrid). LIX/216 (1999), p. 521-525.
- ZEUSKE, Michael. «Schwarze Erzähler – weiße Literaten. Erinnerungen an die Sklaverei, Mimesis und Kubanertum». En: Daisy Rubiera Castillo (ed.). *Ich, Reyita. Ein kubanisches Leben*. Zürich: Rotpunktverlag, 2000, p. 211-262.
- ZEUSKE, Michael. «Hidden markers, open secrets. On naming, race marking and race making in Cuba». *New West Indian Guide* ('s-Gravenhage). 76/3-4 (2002), p. 235-266.
- ZEUSKE, Michael. *Schwarze Karibik. Sklaven, Sklavereikulturen und Emanzipationen*. Zürich: Rotpunktverlag, 2004.

Su «único derecho»: los esclavos y la ley

Alejandro de la Fuente

Partiendo de un estudio de caso, en el que ocho esclavos de un ingenio azucarero en el occidente de Cuba se dirigieron a un magistrado local para reclamar justicia contra los abusos a que eran sometidos, este trabajo introductorio discute algunas de las circunstancias en las que los esclavos podían utilizar la ley en su favor. La historiografía de la esclavitud ha estudiado cuidadosamente la legislación relativa a los esclavos. Pero los trabajos del monográfico toman a éstos y sus descendientes como el punto de partida para la historia legal de la esclavitud. Era mediante el uso de reclamaciones y la presentación de demanda ante las autoridades que los esclavos y sus descendientes ejercieron y conquistaron ciertos «derechos». La ley constituía un camino de actuación social, pero era un camino que tenía que ser transitado para tener efectos concretos. Las fuentes legales permiten, además, un acercamiento (mediado y problemático) a la subjetividad de los esclavos.

Demandes de libertat: demandas de esclavos en el medievo tardío valenciano

Debra Blumenthal

Este trabajo estudia la esclavitud en Valencia durante el periodo inmediatamente anterior a la conquista y colonización de América. En contraste con estudios anteriores que privilegian el análisis de la legislación sustantiva castellana (como las Siete Partidas), el trabajo aborda las prácticas jurídicas de los esclavos a partir de ochenta y seis casos tramitados en las cortes municipales y reales de Valencia entre 1450 y 1500. El análisis de estos procesos judiciales sugiere que en la época de la conquista de América existía en Valencia una compleja cultura jurídica que a la vez que ofrecía oportunidades para que los esclavos más emprendedores pudieran reclamar su libertad u otros beneficios, permitía a los dueños mantener el control sobre sus siervos bajo un aura de justicia y legalidad.

La esclavitud, la ley, y la reclamación de derechos en Cuba: Repensando el debate de Tannenbaum *Alejandro de la Fuente*

Este trabajo analiza como los esclavos utilizaron el derecho histórico castellano para reclamar derechos ante los tribunales y autoridades. Utilizando a Cuba como un caso de estudio, se argumenta que aquellos esclavos que se familiarizaron con la cultura dominante, frecuentemente a través de su participación en intercambios mercantiles, aprendieron a utilizar legislación española en su favor. Los precedentes legales castellanos continuaban siendo utilizados por los tribunales de justicia en Cuba aún durante el siglo XIX, cuando la esclavitud de plantación se había extendido por la isla, afectando de manera radical la composición racial de la población y las relaciones sociales. La importancia de los precedentes legales castellanos fue destacada por Frank Tannenbaum en su influyente libro *Slave and Citizen* [*Esclavo y Ciudadano*]. Aunque es difícil exagerar el impacto que la economía azucarera de plantación tuvo sobre la esclavitud, en el caso cubano el nuevo orden tuvo que ser impuesto y en alguna medida reconciliado con las prácticas jurídicas tradicionales.

Raza, esclavitud y libertad en Santo Domingo *Richard Turits*

El trabajo analiza diversos aspectos relacionados con la esclavitud, la población libre de color y la estructura racial del Santo Domingo colonial. Tras el declive de la economía azucarera del siglo XVI, las plantaciones desaparecieron y la población libre de color, dado su acceso relativamente fácil a la manumisión y la fuga, se convirtió en el grupo demográfico mayoritario. El aislamiento de la colonia y su estancamiento comercial crearon espacios para un campesinado libre de color autónomo. A manera de hipótesis, el artículo plantea que estas condiciones, similares a las de otras áreas del Caribe español, disminuyeron la asociación que las normas coloniales establecían entre negro y esclavitud, por una parte y entre blanco y libertad, por otra. Esto debilitó el poder de la raza como símbolo de otras divisiones sociales, un legado colonial que ayuda a explicar la ausencia aparente de comunidades imaginadas sobre la base del color en la República Dominicana.

Manumisión, el género y la ley en el Brasil del siglo XIX: el proceso legal de liberata por su libertad *Keila Grinberg*

Este trabajo estudia el caso de Liberata, una esclava mulata en el sur de Brasil que concurrió a su párroco primero y al tribunal municipal después para demandar a su amo, con quien había tenido dos hijos. El caso es estudiado en un contexto más amplio, basado en el análisis de 380 procesos de reclamación de libertad presentados ante el Tribunal de Apelaciones de Río de Janeiro entre 1808 y 1888. En muchos de estos casos los esclavos apelantes tenían que movilizar redes de apoyo social para proveer la información requerida a los tribunales. Por ejemplo, aquellos que reclamaban haber sido sujetos injustamente a cautiverio tenían que fabricar una genealogía convincente con la participación de testigos, esclavos y libres. Los esclavos tenían el

«derecho» a apelar a los órganos judiciales y a ser representados por un abogado o procurador —similar a los procuradores síndicos de las colonias españolas— designado por el Estado.

Cimarronaje y represión esclavista. Cuba, 1800-1880

Gabino La Rosa Corzo

Este artículo analiza el endurecimiento que sufrieron las regulaciones existentes para perseguir el cimarronaje en Cuba durante el siglo XIX, es decir, durante el periodo de florecimiento del modelo de plantación. La introducción masiva de africanos durante este periodo creó nuevas necesidades de control y policía que fueron satisfechas con la creación de nuevos instrumentos jurídicos de represión y con el probable incremento de los castigos extra-legales también. Sin embargo, aún en esta área el gobierno colonial mostró cierta preocupación por observar las formas legales y por dotar al aparato represivo de un fundamento legal que garantizara su legitimidad y efectividad social.

Notarios y esclavos en Cuba (siglo XIX)

Michael Zeuske

Orlando García Martínez

Este artículo ofrece una tipología de los textos escritos utilizados tanto para «inscribir» legalmente a los esclavos, como para inscribir legalmente la libertad de los mismos. Entre los primeros se hallaban no sólo los contratos de compraventa, sino también aquellos registros que, como los registros bautismales, servían para registrar y dar fe legal del estatus social del individuo. Entre los segundos, además de las cartas de libertad o manumisión, los autores estudian documentos de libertos en los que los mismos utilizan cualquier transacción para inscribir su apellido —y por lo tanto para establecer una nueva «identidad»— en los registros de un notario. El proceso, sin embargo, podía ser utilizado por el funcionario para recrear el estigma social de la esclavitud al notar que el otorgante carecía de segundo apellido. En estos casos, el notario o funcionario anotaba, a continuación del nombre del otorgante, la sigla «soa», sin otro apellido. La escritura, pues, podía ser movilizada con propósitos emancipadores por un otorgante negro y ser utilizada al mismo tiempo para reforzar su condición social subordinada.

Derechos y honra públicos: Louis Martinet, Plessy contra Ferguson y el acceso a la ley en Luisiana, 1888-1917

Rebecca J. Scott

¿Cómo se vincularon la lucha contra la segregación racial y los usos cotidianos de la ley en Luisiana durante el siglo XIX? El artículo estudia estos vínculos a partir de la figura de Louis A. Martinet, uno de los organizadores del famoso caso que condujo al fallo de Plessy contra Ferguson en la Corte Suprema de los Estados Unidos. El trabajo argumenta que el papel de Martinet como notario público refleja la importancia que el rango social y los documentos escritos tenían para la comunidad afro-descendiente de Luisiana. A partir de un análisis del caso, el artículo demuestra que existía una distinción clara entre los conceptos de «libertades» o «bienes públicos» y el de «igualdad social», tal como era utilizado en los Estados Unidos en el siglo XIX.

Abstracts

Their 'only right': slaves and the law

Alejandro de la Fuente

Using a case study in which eight slaves walked out of a sugar mill in Cuba to demand justice from the local judge, this introductory article discusses some of the circumstances that allowed slaves to use the law for their own benefit. The study of positive laws concerning slaves has been part of the historiography of slavery for quite some time. The articles included in this volume, however, argue that the initiatives and activities of the slaves and their descendants are crucial to understand the legal history of slavery. It was by making claims and demands that slaves created «rights.» The law created potential social opportunities, but they only materialized if slaves tried to seize them. Furthermore, legal sources allow us to get closer (although in a mediated and problematic way) to the subjectivities of the slaves.

Freedom claims: slaves' legal claims-making in late medieval Valencia

Debra Blumenthal

This article studies slavery in Valencia during the years prior to the conquest and colonization of the New World. Unlike previous studies about slavery and the law that have emphasized the importance of positive laws (such as the famous *Siete Partidas*), this article analyzes the slaves' own legal practices. This analysis is based on eighty six cases registered with the municipal and royal courts of Valencia between 1450 and 1500. The study of these cases suggests that at the time of the colonization of the Americas there existed a complex legal culture in Valencia. While this culture allowed enterprising slaves to claim their freedom and other benefits, owners were able to legitimize their control over slaves under a mantle of legality and justice.

Slave law and claims-making in Cuba. Reassessing the Tannenbaum debate

Alejandro de la Fuente

This paper analyzes how slaves used traditional Spanish law and legal customs to claim rights before authorities and the courts. Using Cuba as a case study, the paper argues that those slaves who became familiar with the dominant culture—typically through their participation in urban market relations—learned to use Spanish law to their advantage. Even in the 19th century, when Cuba became a prosperous slave-based plantation society and a leading producer of sugar, urban slaves continued to invoke these laws to ameliorate their position. The article notes the persistent relevance of the traditional statutes of Castile in the colonies, one of the central points of Frank Tannenbaum's influential essay *Slave and Citizen*. Although it is hard to exaggerate the impact of the plantation economy on slavery, in the Cuban case the new order had to be imposed on and reconciled with long-standing legal practices.

Race, slavery, and freedom in Santo Domingo

Richard Turits

This essay explores slavery, free people of color, and racial formation in colonial Santo Domingo. Following the decline of a prosperous sixteenth century sugar economy, plantations became glaring by their absence and free people of color—through relative ease of manumission and escape from slavery—came to comprise the overwhelming majority of society centuries before the abolition of slavery. Colonial neglect and commercial stagnation over the next three hundred years opened up the space for a large, autonomous free peasantry of color. I hypothesize that such conditions—ones with analogies throughout the early Spanish Caribbean—disrupted colonial norms that associated blackness with slavery and whiteness with liberty and mastery; thus the power of race as a symbol for other fundamental social divisions was weakened. This colonial legacy helps explain the seeming absence of imagined communities based on color—paradoxically coupled with a preoccupation with color gradations—up to the present day in the Dominican Republic.

Manumission, gender, and the law in nineteenth century Brazil: the demand of freedom of Liberata

Keila Grinberg

This article studies the case of Liberata, a mulatto slave in southern Brazil who sued her master, with whom she had had two children. The case is analyzed within the larger context of three hundred and eighty cases registered with the Court of Appeals of Rio de Janeiro between 1808 and 1888. In many of these cases slaves had to mobilize social networks of support to provide the courts with the information they requested. For instance, those who claimed to have been enslaved illegally were forced to construct a convincing genealogy with the participation of several witnesses, enslaved and free. Slaves had the «right» to appeal to the courts and to be represented by a lawyer designed by the state, similar to the «procuradores sindicados» of the Spanish colonies.

Maroonage and slave repression in Cuba, 1800-1880*Gabino La Rosa Corzo*

This article studies the repressive regulations used to persecute runaway slaves in Cuba during the growth of the slave-based sugar plantation economy in the 19th century. The massive introduction of African slaves during the early eighteenth century created new problems of control and the need to police a growing slave population. These needs were addressed with the creation of increasingly repressive legal institutions and probably with more frequent extra-legal punishments as well. However, even in this area the colonial state displayed some concern for legal forms and sought to create a legal system that guaranteed the legitimacy and social effectiveness of repression.

Writing slavery, writing freedom: documents of slaves and former slaves in Cienfuegos, Cuba 1819-1890*Michael Zeuske**Orlando García Martínez*

This article offers a typology of the written documents used to «inscribe» slaves as legal subordinates as well as to document their legal freedom. Among the former there were not only sale contracts but also those that noted the social status of the individual, such as baptism records. Among the latter, in addition to freedom letters, there were documents that freedmen and women used to establish a new «identity,» usually by inscribing their last name before a public notary. In the process, however, public officials could recreate the stigma of slavery, noting that the parties lacked a second last name. In these cases, the notary wrote an acronym by the last name of the party to note his or her condition. Writing was therefore a contested social practice: blacks could use it for liberating purposes, but it could be used also to reinforce their social subordination.

Public rights and public standing: Louis Martinet, Plessy v. Ferguson and the access to the law in Louisiana, 1888-1917»*Rebecca J. Scott*

This article explores the links between the fight against compulsory racial segregation and the day-to-day operation of the law in nineteenth century Louisiana. Using the figure of Louis A. Martinet, one of the organizers of the test case that yielded the U.S. Supreme Court decision Plessy vs. Ferguson, the essay argues that Martinet's role as notary reflects the central importance to the community of color of questions of public standing and written records. The article also identifies the concepts of «public goods» and «public liberties» as key to the case itself, distinguishing these from the nineteenth-century U.S. construct of «social equality».

Presentación de los autores

Alejandro de la Fuente

Profesor de historia latinoamericana y del Caribe en University of Pittsburg (fuentes2@pitt.edu). Entre sus publicaciones se encuentran las siguientes: "Sugar and slavery in early colonial Cuba". En: Stuart B. Schwartz (ed.). *Tropical Babels: sugar and the making of the Atlantic world, 1450-1680*, (Chapel Hill: UNC Press, en prensa); "Slavery and claims-making in Cuba: the Tannenbaum debate revisited". *Law and History Review* (Ithaca). 22/2 (mayo 2004); *A nation for all: race, inequality, and politics in Twentieth-Century Cuba* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001) (traducido al español y publicado por Editorial Colibrí, Madrid, en 2001 bajo el título *Una nación para todos: raza, desigualdad y política en Cuba. 1900-2000*); "Race, ideology, and culture in Cuba: recent scholarship," *Latin American Research Review* (Austin). 35/3 (2002); "Myths of racial democracy: Cuba, 1900-1912," *Latin American Research Review* (Austin). 34/3 (Fall 1999).

Debra Blumenthal

Profesora de historia medieval en University of California, Santa Barbara (blumenthal@history.ucsb.edu). Entre sus publicaciones se encuentran las siguientes: "Defending their masters honour: the participation of slaves in feuds between households". En: Mark Meyerson; Oren Falk; Daniel Thierry (eds.). *A great effusion of blood: interpreting medieval violence* (Toronto: University of Toronto Press, 2003); "The price of freedom in late medieval Valencia". En: Rosemary Brana-Shute; Randy J. Sparks (eds.). *From slavery to freedom: manumission in the Atlantic world* (Charleston, SC: University of South Carolina Press, en prensa); "Black African solidarity in late-medieval Valencia". En: Kate Lowe; Thomas Earle (eds.). *Black Africans in Renaissance Europe* (Cambridge: Cambridge University Press, en prensa); "*Sclaves molt fortes, senyors invals*: sex, lies, and paternity suits in late medieval Spain". En: Marta Vicente; Luis Corteguera (eds.). *Women, text, and authority in early modern Spain* (Burlington: Ashgate Press, 2003).

Richard Lee Turits

Profesor de historia del Caribe y latinoamericana en University of Michigan (rturits@umich.edu). Entre sus publicaciones se encuentran las siguientes: *Foundations of despotism: peasants, the Trujillo regime, and modernity in Dominican History* (Stanford: Stanford University Press, 2003); "A world destroyed, a nation imposed: the 1937 Haitian massacre in the Dominican Republic" *Hispanic American Historical Review* (Durham) 82/3 (2002); "Dominican-Haitian relations". En: Kwame Anthony Appiah; Henry Louis Gates, Jr. (eds.). *Africana: the encyclopedia of the African and African American experience*. (Redmond: Basic Civitas, 1999); "The foundations of despotism: agrarian reform, rural transformation, and peasant-state compromise in Trujillo's Dominican Republic, 1930-1944". En: Aviva Chomsky; Aldo Lauria-Santiago (eds.). *Identity and struggle at the margins of the nation-state: the laboring peoples of Central America and the Hispanic Caribbean*. Durham: Duke University Press, 1998.

Keila Grinberg

Profesora de historia de Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) y Coordinadora del Area de Historia, Instituto de Humanidades, Universidade Candido Mendes (UCAM), Rio de Janeiro, Brasil (keka@pobox.com). Entre sus publicaciones se encuentran las siguientes: *O fiador dos brasileiros: cidadania, escravidão e direito civil no tempo de Antonio Pereira Rebouças*. (Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2002); *Liberata - a lei da ambiguidade: as ações de liberdade da Corte de Apelação do Rio de Janeiro no século XIX*. (Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994); "Freedom suits and civil law in Brazil and the United States". *Slavery & Abolition* (London). 22/3 (2001); *Código civil e cidadania*. (Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001).

Gabino La Rosa Corzo

Investigador titular, Centro de Antropología de Cuba, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y Sección de Historia, UNEAC, La Habana. Entre sus publicaciones se encuentran las siguientes: *Los cimarrones de Cuba* (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1988) (traducido al inglés y publicado por University of North Carolina Press en 2003 bajo el título *Runaway slave settlements in Cuba: resistance and repression*); *Los palenques del oriente de Cuba: resistencia y acoso* (La Habana: Editorial Academia, 1991); "Apuntes sobre el hospital de cimarrones de la Habana". *Estudios de Historia Social* (Madrid). 44 (1988); *Arqueología en sitios de contrabandistas* (La Habana: Editorial Academia, 1995).

Michael Zeuske

Profesor de historia latinoamericana e Ibérica en Iberische und Lateinamerikanische Abteilung des Historischen Seminars, Universität zu Köln, Alemania (mzeus@web.de). Entre sus publicaciones se encuentran las siguientes: *Insel der Extreme. Kuba im 20. Jahrhundert* [Isla de los extremos: Cuba en el siglo XX] (Zurich: Rotpunktverlag, 2003); "Hidden Markers, Open Secrets. On Naming, Race Marking and Race Making in Cuba", *New West Indian*

Guide / Nieuwe West-Indische Gids ('s-Gravenhage). 76/3-4 (2002); con Rebecca J. Scott, "Property in Writing, Property on the Ground: Pigs, Horses, Land, and Citizenship in the Aftermath of Slavery, Cuba, 1880-1909" *Comparative Studies in Society and History* (London, New York). 44/4 (2002); "El cimarrón y las consecuencias de la guerra del 95. Un repaso de la biografía de Esteban Montejo". *Revista de Indias* (Madrid) LVIII/212 (1998).

Orlando García Martínez

Presidente del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Cienfuegos e investigador del Archivo Histórico Provincial de Cienfuegos (orlando@azurina.cult.cu). Entre sus publicaciones se encuentran las siguientes: co-editor con Fernando Martínez y Rebecca Scott, de *Espacios, silencios y los sentidos de la libertad* (La Habana: Ediciones Unión, 2001), volumen en el que aparece su estudio "La Brigada de Cienfuegos: un análisis social de su formación"; *Biografía del Brigadier José González Guerra* (La Habana: Editora Nuevo Milenio, 2001); coautor (con Alina Puig Yantá), *José Gregorio Martínez Medina, el Yanqui: un luchador clandestino* (Habana: Editora Política, 1982); "Estudio de la economía cienfueguera desde la fundación de la fundación de la colonia Fernandina de Jagua hasta mediados del siglo XIX" *Islas* (Santa Clara) 55-56 (septiembre 1976-abril 1977).

Rebecca J. Scott

Es profesora distinguida Charles Gibson de historia y de derecho en University of Michigan y miembro del American Academy of Arts and Sciences (rjscott@umich.edu). Entre sus publicaciones se encuentran las siguientes: *Slave emancipation in Cuba: the Transition to Free Labor, 1860-1899* (Princeton: Princeton University Press, 1985) (reeditado por University of Pittsburgh Press, 2000 y traducido al español —Fondo de Cultura Económica, México 1989 y Editorial Caminos, La Habana, 2002— y al portugués Paz e Terra/ Editora UNICAMP, Brazil, en 1991); co-editora con Fernando Martínez Heredia y Orlando García Martínez, de *Espacios, silencios, y los sentidos de la libertad: Cuba, 1878-1912* (La Habana: Editorial Unión, 2001); coautora, con Frederick Cooper y Thomas Holt, *Beyond Slavery: Explorations of Race, Labor and Citizenship* (Chapel Hill: UNC Press, 2000); co-editora, con Thomas Holt, Frederick Cooper y Aims McGuinness. *Societies after slavery: a select annotated bibliography of printed sources on Cuba, Brazil, British Colonial Africa, South Africa, and the British West Indies* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2002).

